

**DECRETO por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.**

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009

PROCESO LEGISLATIVO	
01	<p><b>A.</b> 18-09-2008 Cámara de Diputados. <b>INICIATIVA</b> con proyecto de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Presentada por el Dip. Andrés Lozano Lozano, del Grupo Parlamentario del PRD. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Gaceta Parlamentaria, 18 de septiembre de 2008.</p> <p><b>B.</b> 02-10-2008 Cámara de Diputados. <b>INICIATIVA</b> con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Presentada por el Ejecutivo Federal. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Gaceta Parlamentaria, 02 de octubre de 2008.</p>
02	<p>04-12-2008 Cámara de Diputados. <b>DICTAMEN</b> de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. <b>Aprobado</b> con 335 votos en pro, 39 en contra y 13 abstenciones. Se turnó a la Cámara de Senadores. Gaceta Parlamentaria, 04 de diciembre de 2008. Discusión y votación, 04 de diciembre de 2008.</p>
03	<p>04-12-2008 Cámara de Senadores. <b>MINUTA</b> proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera. Gaceta Parlamentaria, 04 de diciembre de 2008.</p>
04	<p>09-12-2008 Cámara de Senadores. <b>DICTAMEN</b> de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. <b>Aprobado</b> con 94 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. <b>Devuelto</b> a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. Gaceta Parlamentaria, 09 de diciembre de 2008. Discusión y votación, 09 de diciembre de 2008.</p>
05	<p>10-12-2008 Cámara de Diputados. <b>MINUTA</b> proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. Gaceta Parlamentaria, 10 de diciembre de 2008.</p>
06	<p>11-12-2008 Cámara de Diputados. <b>DICTAMEN</b> de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. <b>Aprobado</b> con 221 votos en pro, 104 en contra y 1 abstención. Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, 11 de diciembre de 2008. Discusión y votación, 11 de diciembre de 2008.</p>
07	<p>02-01-2009. Ejecutivo Federal. <b>DECRETO</b> por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2009.</p>

**A.**

18-09-2008

Cámara de Diputados.

**INICIATIVA** con proyecto de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Presentada por el Dip. Andrés Lozano Lozano, del Grupo Parlamentario del PRD.

Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Gaceta Parlamentaria, 18 de septiembre de 2008.

## **DE LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD**

Los que suscriben, diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 73, fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente

### **Exposición de Motivos**

La seguridad, además de ser un derecho humano, es una garantía individual consagrada por la Constitución y, por tanto, es responsabilidad del Estado garantizarla. Esta es una verdad que, en los últimos tiempos, ha sido imposible hacer realidad y cuya explosión en el ámbito de la vida pública nacional ha rebasado a todas las instituciones del Estado. Los estándares de violencia en algunos lugares de la República Mexicana no sólo son comparables a los escenarios de guerra que se viven en otros países del orbe son, incluso, mayores. Esto ha generado una reacción desconcertada y desarticulada del gobierno federal, cuya única respuesta ha sido enviar militares, recluir y detener policías y restringir, de manera tácita y por demás ilegal, las garantías individuales de los ciudadanos; todo lo anterior sin ningún resultado real y contundente más allá del incremento en los índices de la violencia. Es por ello que los reclamos sociales para abatir la inseguridad no sólo son justificados por la realidad sino que tienen su fundamento en los instrumentos jurídicos internacionales que México ha suscrito y que, por mandato constitucional, forman parte del marco normativo que nos rige, así como en el texto de nuestra Carta Magna, documento fundacional del Estado Mexicano, en donde se hacen explícitos los derechos fundamentales de todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional. No obstante y pese a que muchas voces se han alzado en favor de elevar las medidas coercitivas para el combate a la delincuencia, hemos olvidado que, la base de una efectiva lucha en contra de este fenómeno no se encuentra en la reclusión y exclusión social de los delincuentes, sino en una política fincada en la justicia social que se traduzca en la elevación efectiva de los niveles de vida de la población. Sólo el desarrollo integral puede darnos las herramientas básicas indispensables para el abatimiento de los índices delictivos.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha señalado, en múltiples ocasiones, la urgencia de una nueva concepción de la seguridad pública, tal que respete no sólo los derechos humanos de la población sino que dignifique las labores policíacas y que genere nuevas condiciones de convivencia para regenerar el tejido social. Estamos convencidos de que, en el marco de la construcción de un Estado Democrático Social y de Derecho, la militarización de las policías y el aumento de las medidas coercitivas en contra de quienes se ven obligados a transgredir el marco jurídico por las condiciones de exclusión social en que se encuentran, no solucionan el origen del problema. Esta es la razón fundamental de que, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática haya impulsado, en diversos momentos, reformas legislativas tendientes a garantizar la vigencia de los derechos humanos como baluarte de la Justicia Social. Refrendamos nuestro compromiso con la sociedad, específicamente con los grupos más desprotegidos ya que, sin Justicia Social, la seguridad pública seguirá siendo no más que un discurso hueco. No soslayamos, sin embargo, la actuación de nuestras Fuerzas Armadas, que se han constituido como la única institución pilar del Estado Mexicano, en la búsqueda de la tan esquiva seguridad. No obstante, sostenemos con plena conciencia que el Ejército y la Armada están capacitados para la defensa nacional y no para las labores de seguridad pública; inmiscuirlos en ellas representa no sólo un riesgo para la población, sino un peligro para la soberanía nacional.

Es por ello que resulta imprescindible la reformulación del marco jurídico que rige a las instituciones de seguridad pública, pero más importante es construir una nueva concepción de la Seguridad Pública, sus

políticas y sus instrumentos, tales que nos permitan edificar un nuevo paradigma de colaboración entre la sociedad y el Estado. Un gran paso se dio cuando, durante el año de 2007, el Congreso mexicano examinó el texto de la Constitución Política y decidió reformarlo para poder brindar los instrumentos jurídicos necesarios que se requieren para hacer frente a una nueva situación mundial y proteger, de esta manera, los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional.

El dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados, en lo que se refiere a la seguridad pública, señalaba que:

"En la redacción que se propone para el artículo 21, se considera procedente la existencia de una nueva regulación nacional y general de bases de coordinación de los elementos que componen el Sistema Nacional de Seguridad Pública; donde expresamente se contemple la coordinación del ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr la integración nacional de los esfuerzos de seguridad pública pero siempre en el marco del respeto al federalismo.

"Así, la ley que se emita en la materia, donde se sienten las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá establecer específicamente, cuando menos, varios elementos. El primero deberá regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. El segundo, deberá establecer, como elemento básico, la carrera policial a nivel nacional con carácter homogéneo. Así también, se deberá regular específicamente la certificación de los elementos de policías y agentes del ministerio público, que no implica solamente su registro en el sistema para evitar que ingresen aquellos que hayan cometido delitos o formen parte de las organizaciones ilícitas; sino también, y fundamentalmente, que existan certificaciones para que los elementos policíacos tengan los conocimientos y habilidades necesarias para realizar su función, siempre en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos. Así, por ejemplo, para que un elemento de policía municipal, estatal o federal, que no esté adscrito a las agencias estatales o federal de investigaciones, pueda realizar funciones de investigación preventiva o coadyuvar con el ministerio público, deberá estar plenamente certificado que cuenta con los conocimientos jurídicos y de respeto a los derechos humanos, así como con las habilidades y destrezas que le permitirán hacer efectivamente sus trabajos.

"Esto significa que, en el espíritu federalista que inspira a esta reforma, las leyes generales establecidas por el Congreso de la Unión, deberán ser adecuadas y adaptadas a cada uno de las realidades y situaciones de la geografía nacional mediante leyes que los órganos legislativos de los estados harán en los términos del sistema..."

El texto constitucional del artículo 21 reformado, en sus párrafos noveno y décimo, quedó redactado en los siguientes términos:

"La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

"Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines..."

La reforma constitucional se concretó cuando fue publicada, el día 18 de junio, en el Diario Oficial de la Federación. En el caso del párrafo noveno del vigente artículo 21 constitucional, se establece que la seguridad pública debe ser concebida como una política de Estado, lo que implica la obligación de asumir corresponsablemente la implantación de los preceptos allí vertidos. Esto es, las políticas de seguridad pública deben transitar verticalmente entre los tres ámbitos de gobierno y, transversalmente, entre los tres poderes de la Unión. Se establece también el señalamiento explícito de que las políticas de seguridad pública deben comprender la prevención y la sanción de los delitos y faltas, superando la concepción actual de las políticas hasta hoy implantadas de manera focal en la persecución coercitiva del delito. Asimismo, instituye los principios fundamentales que deben regir la actuación de los integrantes e instituciones de seguridad pública: **legalidad**, entendida como "la sujeción de todos los órganos estatales al derecho... (esto es), que debe tener su apoyo estricto en una norma legal..."<sup>1</sup>; **objetividad**, definida como la conducta seguida "con independencia de la propia manera de pensar o de sentir"<sup>2</sup>; **eficiencia**, puntualizada como la optimización de los recursos disponibles para "conseguir un efecto determinado"<sup>3</sup>; **profesionalismo**, definido como el ejercicio de sus funciones con "relevante capacidad y aplicación"<sup>4</sup>; **honradez**, entendida como la actuación "decente, decorosa, recatada, pundonorosa, proba, recta, honorable"<sup>5</sup> y **respeto a los derechos humanos**, como una obligación explícitamente determinada para las instituciones de seguridad pública.

El párrafo décimo del propio artículo 21, establece que las instituciones de seguridad pública deberán tener un carácter civil excluyendo, de manera clara, la participación de las instituciones de seguridad nacional en acciones encaminadas a la preservación de la seguridad pública. Esto es, constitucionalmente se encuentra consignado el ámbito de acción de las fuerzas armadas nacionales y de nuestras policías, lo cual abonará al respeto irrestricto de los derechos humanos en nuestro país, a una equilibrada división de poderes y a la construcción de una cogobernabilidad responsable. Adicionalmente, en este párrafo podemos observar cómo el Ministerio Público, institución que por su propia naturaleza corresponde al ámbito de la procuración de justicia ahora, y debido a la importancia que sus funciones tienen para la conservación del orden público, es considerada como una institución de seguridad pública y conformará, junto con las instituciones policiales de los tres ámbitos de gobierno, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, instrumento fundamental para la implementación coordinada, coherente y uniforme de las políticas de seguridad pública. Este nuevo órgano, deberá avocarse a la regulación de los procedimientos de selección, ingreso, permanencia y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, esto es, deberá dictar las normas mínimas para la permanencia y promoción de los integrantes de las policías en sus cuerpos, pero también del Ministerio Público, en las Procuradurías de Justicia. Se prevé la conformación de una base nacional de datos que permita el seguimiento de las carreras policiales y ministeriales así como de aquellas personas que, por cualquier causa, han transgredido el marco legal. De manera especial, se introduce la prevención como una de las políticas fundamentales de la seguridad pública y, como instrumento adyacente y plenamente imbricado, la participación de la sociedad civil organizada y de la comunidad, jugando un papel de agentes coadyuvantes en la evaluación de las políticas de seguridad pública.

Los artículos transitorios de esta reforma mandatan que, en el transcurso de los siguientes ocho años, se pongan en práctica las medidas allí establecidas. En el caso de la seguridad pública, el artículo quinto transitorio señala que, en un lapso de seis meses, el Congreso de la Unión deberá expedir la nueva legislación. Es por ello que, comprometidos con la ciudadanía, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que comprende las medidas mínimas indispensables para la consecución de los fines de la seguridad pública: **la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas así como la preservación de las libertades y el orden público.**



La iniciativa de Ley que hoy presentamos, tiene por fundamento el respeto al pacto federal, la división de poderes y, de manera primordial, se basa en la implementación de políticas preventivas y en la institucionalización de una serie de mecanismos que permitirán el control de las instituciones de seguridad pública y privada así como de todos sus miembros. Para tal efecto, se divide en dos grandes partes. La primera, dedicada al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se establecen los mecanismos de coordinación, cooperación y dirección de las políticas de seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno. La segunda, enfocada al establecimiento de los principios generales que deben regir las políticas de seguridad pública y los instrumentos institucionales mínimamente requeridos para conseguir sus fines.

Ya desde el artículo segundo, esta Iniciativa establece que la seguridad pública comprende "la prevención de los delitos, su investigación y persecución para hacerla efectiva así como la sanción de las infracciones administrativas" y coloca "la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas así como la preservación de las libertades y el orden público" como sus fines. El artículo 3 define a la prevención como la base de las políticas de seguridad pública, que deberán tener como objeto la inhibición de la comisión de conductas ilícitas a través de la erradicación de los factores de riesgo que causan la delincuencia así como también establece, como parte integral de este fenómeno, la atención de las víctimas y la reinserción social de los transgresores. Estamos convencidos que "para disminuir los índices delictivos es necesario invertir en la atención de los factores de riesgo causantes de la delincuencia"<sup>6</sup>. Estas políticas, desde nuestro punto de vista, deben ser concebidas como políticas de Estado y es por ello que su transversalidad resulta imprescindible.

El artículo 4 establece las características de las instituciones de seguridad pública: civiles, disciplinadas y profesionales y hace explícita la obligatoriedad de la rendición de cuentas, el respeto a la participación ciudadana y la equidad como base fundamental del desempeño de sus funciones. El artículo 6 indica cuales son los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siguiendo lo dispuesto por el artículo 21 constitucional: los poderes Ejecutivos, el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres ámbitos de gobierno. El artículo 8 establece, como columna vertebral del Sistema Nacional, los principios de actuación de sus integrantes: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El capítulo I del Título Segundo instituye las competencias del Sistema Nacional, para determinar las políticas a seguir en materia de **prevención; atención integral a víctimas; participación ciudadana; procedimientos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, certificación, promoción y retiro de los miembros de las instituciones de seguridad pública; los sistemas de estímulos y recompensas así como los disciplinarios y, de manera imprescindible, el suministro y sistematización de la información a la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública**. Se determina, de la misma manera, que será el Sistema Nacional –y no la Secretaría de Seguridad Pública federal como ocurre en la actualidad y que ha quedado bastante evidenciado no resulta funcional–, la que administre esta Base Nacional, la regulación de los servicios privados de seguridad y el seguimiento de los instrumentos de ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad pública. Esta situación fortalecerá el pacto federal en materia de seguridad pública ya que no determina la subordinación de ninguna institución local o municipal a las entidades federales de la administración pública y, al mismo tiempo, garantiza la vinculación de las decisiones tomadas al seno del Sistema Nacional en los tres ámbitos de gobierno, ya que son sus titulares quienes participan de manera activa en la toma de estas decisiones.

El capítulo II crea un nuevo Consejo Nacional de Seguridad Pública, concebido anteriormente como el órgano superior del Sistema Nacional, y que ahora se convierte en el órgano deliberativo y ejecutor del Sistema, con carácter colegiado y paritario, conformado por los titulares de los poderes Ejecutivos, los procuradores de justicia y los secretarios de seguridad pública o sus equivalentes, en los ámbitos federal y locales. Resguardando el hábito del respeto al pacto federal y retomando el espíritu de la reforma constitucional, el Poder Ejecutivo federal se encuentra representado en las mismas circunstancias que los Poderes Ejecutivos locales y se excluye, de manera clara, a las fuerzas armadas nacionales del Consejo, aunque se abre la posibilidad de que sus titulares puedan ser invitados, consultados y escuchados en las reuniones de trabajo del Consejo. Por otro lado, y como venía ocurriendo hasta el momento, se podrán instaurar las conferencias de trabajo que se requieran para alcanzar un estudio especializado de las diferentes materias y problemáticas de la seguridad pública.

Asimismo, en el capítulo III se crea la figura del Secretario Técnico, cuyas funciones serán exclusivamente de auxilio administrativo al Consejo Nacional para dar seguimiento a sus acuerdos y resoluciones, publicar sus informes y realizar estudios especializados en la materia; no formará parte del órgano deliberativo y será nombrado por el propio Consejo a propuesta del Presidente de la República. En el capítulo IV, se establecen

las bases para que, con absoluto respeto a las atribuciones constitucionales de cada ámbito de gobierno, se instauren Consejos de Seguridad Pública en cada una de las entidades federativas, municipios u Órganos Políticos Administrativos, para dar seguimiento a la implantación de las políticas, acuerdos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional. Asimismo, se abre la posibilidad de establecer instancias regionales o intermunicipales de coordinación para atender problemáticas específicas, las cuales deberán apegarse al marco normativo local y tendrán la posibilidad de proponer, al Consejo Nacional, acuerdos, programas y convenios para alcanzar los fines de la seguridad pública en sus ámbitos específicos.

La Parte Segunda de esta iniciativa está enfocada a las políticas e instrumentos de la seguridad pública. El Título Tercero consigna los lineamientos generales de las políticas en materia de prevención, atención a víctimas y participación ciudadana. En el artículo 24 del capítulo I se establece que la seguridad pública es un derecho fundamental de los habitantes del territorio nacional que debe ser garantizado por el Estado a través del diseño e implantación de políticas transversales de prevención, situadas como instrumento fundamental y base de las políticas de la seguridad pública, tales que permitan identificar los factores de riesgo que dan origen a la delincuencia. Nos encontramos plenamente convencidos de que "aumentar los presupuestos, incluso con grandes sumas para pagar a más policías, (no repercutirá) en una diferencia sustancial en los niveles de criminalidad"<sup>7</sup>, lo cual no significa que no deban destinarse recursos públicos al efecto, sino que éstos sean utilizados de manera eficiente en el combate de los factores de riesgo y no únicamente para la implementación de medidas de coerción. Resulta indispensable, entonces, "equilibrar un sistema modernizado de imposición de la ley y de justicia penal, que privilegie la inteligencia en la lucha contra los factores del delito que ponen en riesgo a las personas"<sup>8</sup>.

Las estrategias de una prevención integral deben comprender, sin ninguna duda, al menos:

1. "Una inversión temprana en los niños, cuidado pre y posnatal, así como asistencia nutricional para la madre y el niño;
2. "los jóvenes deberían estar incluidos en el desarrollo de las políticas de la prevención del delito, en particular las relacionadas con la salud, recreación, capacitación y empleo;
3. "los empleadores deben ofrecer oportunidades de trabajo y evitar las deserciones;
4. "los municipios y otras entidades de gobierno deben combatir la violencia familiar, los ataques sexuales y los abusos a mujeres y niños, y
5. "la policía, los jueces, trabajadores sociales, doctores y maestros deben ser capacitados en escenarios interactivos para promover la prevención interorganizacional"<sup>9</sup>.

Lo anterior fue confirmado, ya desde 1991, por la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad Urbana, Drogas y Prevención del Delito, efectuada en París. La declaración de esta conferencia indicaba que:

- A. "Los municipios están estratégicamente basados en la reunión de aquellos que pueden cambiar las condiciones que general delitos, pero otros niveles de gobierno deben proporcionar apoyo financiero y técnico;
- B. "La prevención total del delito debe dar prioridad a organismos que encuentren mejores respuestas a los problemas de pobreza infantil, jóvenes, escuelas, viviendas, policía y justicia, y
- C. "La prevención del delito debe incluir acciones a largo plazo acordes a necesidades de corto plazo."<sup>10</sup>

Es por todo lo anterior que, en el capítulo I del Título Tercero hemos establecido que todas las entidades de la administración pública y los tres poderes en los tres ámbitos de gobierno deberán implementar acciones preventivas para el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes, pueblos indígenas, adultos mayores y de cualquier grupo que se encuentre en situación de desventaja por alguna circunstancia específica; entendido el desarrollo integral como **"el proceso sistémico económico, social, cultural y político, que garantice el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan"**<sup>11</sup>. Asimismo, estas acciones

de prevención tenderán a elevar los niveles de educación y abatimiento del analfabetismo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud, la promoción del empleo productivo, la disminución de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, la promoción de la cultura de la paz y de una vida libre de violencia así como de la cultura de la legalidad.

Por otro lado, complementariamente, las Procuradurías de Justicia y las Secretarías de Seguridad Pública o sus equivalentes, en los tres ámbitos de gobierno, estarán obligadas, además, a implantar acciones y programas para prevenir la delincuencia infantil y juvenil, erradicar la violencia, especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas y adultos mayores así como aquella que se genera a partir del uso de armas, drogas y alcohol. Todos estos programas y acciones conformarán el **Programa Permanente de Prevención Integral**, el cual tendrá carácter estratégico y, para lo cual, las entidades de la administración pública federal deberán destinar, al menos, 2 por ciento de sus recursos presupuestales cada año, con excepción de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, las cuales estarán obligadas a destinar a programas preventivos, al menos, el 10 por ciento de su presupuesto anual. Estas acciones deberán ser replicadas en los ámbitos locales y municipales, respetando lo establecido en el artículo 116 constitucional. Con el objeto de hacer visibles estas acciones, hemos propuesto que se establezca un anexo específico, dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que, para cada año fiscal, aprueba la Cámara de Diputados.

El capítulo II de este Título se enfoca en las políticas de atención a víctimas, definidas como una obligación del Estado tendientes a custodiar el "libre ejercicio de sus derechos desde todos los ámbitos de la acción social y tendrán como objetivo impedir y erradicar cualquier práctica que tenga como fin dilatar, obstaculizar o imposibilitar el goce y ejercicio de los mismos"<sup>12</sup>. Concebimos la atención a la víctima como parte del fenómeno de la delincuencia ya que "el delito no es sólo una violación de las leyes, sino también de las personas, situación que el sistema de imposición de la ley [ha] olvidado"<sup>13</sup>, de tal manera que éstas regresen al estado en que se encontraban antes de la comisión del delito. Como base para la redacción de este capítulo hemos tomado la **Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del poder**, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas desde 1985.

El capítulo III se encuentra dedicado a las formas de participación ciudadana y de la comunidad para la Seguridad Pública, establecida en dos niveles fundamentales: el de la comunidad, tenga o no estructura organizativa, y el de la sociedad civil organizada. La comunidad debe participar, con la autoridad más cercana a ella, es decir la municipal o de la demarcación territorial, para determinar el diseño de las políticas de seguridad pública a implementarse en su entorno inmediato, para lo cual deberán integrarse a dos representantes en los Consejos Municipales o de las demarcaciones territoriales de Seguridad Pública, previa elección de su comunidad.

Las organizaciones de la sociedad civil deberán estar representadas en los Consejos Nacional, estatales y del Distrito Federal, en igualdad de circunstancias que sus demás integrantes, para lo cual los poderes Ejecutivos deberán emitir la convocatoria correspondiente. Adicionalmente, podrán participar en la implantación de las políticas de seguridad en los tres ámbitos de gobierno y, junto con las instituciones de educación superior, en la evaluación del diseño, implementación e impacto de las políticas de seguridad pública así como de las propias instituciones. El proceso de evaluación de las políticas públicas implementada por las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior deberán contemplar los programas y la actuación de las propias organizaciones así como de las instituciones de seguridad pública en la implementación de las políticas así como su impacto, validarán los indicadores de gestión, publicarán sus resultados y podrán proponer, en su caso, el rediseño o redireccionamiento de las políticas.

En cuanto a la evaluación realizada por las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil de las instituciones de seguridad pública, deberán contemplar la evaluación del desempeño, la validación de las currículas para los programas de capacitación y profesionalización, las evaluaciones técnico-jurídicas y técnico-operativas de su actuación así como la evaluación del servicio prestado.

El Título Cuarto de esta iniciativa se encuentra dedicado a la regulación del Servicio Civil de Carrera en las Instituciones de Seguridad Pública, para lo cual se establecen, en el artículo 39, las obligaciones mínimas que deben cumplir, el beneficio de la objeción de conciencia y las garantías mínimas para el desarrollo de sus funciones. Se institucionaliza al Servicio Civil de Carrera, obligatorio y permanente, como la base de la formación de las instituciones de seguridad pública –a saber: instituciones policiales y del Ministerio Público–, y se establecen los requisitos mínimos para participar en el proceso de selección para ingresar en ellas.

Ninguna persona que no cumpla con los requisitos de selección, ingreso, permanencia y certificación podrá pertenecer o permanecer en las instituciones de seguridad pública.

Asimismo, se establecen los requisitos mínimos para ingresar como agente de policía preventivo, agente de policía de reacción, agente de la policía de investigación y como agente del Ministerio Público. De la misma forma, se establece que los procedimientos de certificación policial y ministerial deberán incluir la validación de la currícula de los programas de capacitación, actualización y profesionalización, las materias mínimas de estos programas, la aplicación de exámenes de conocimiento, la aplicación de exámenes de control de confianza, un estudio de evolución patrimonial, la verificación de la autenticidad de los documentos oficiales presentados y la verificación de los antecedentes penales del aspirante. Entre los requisitos mínimos para que un agente de las instituciones de seguridad pública permanezca en ellas, se establece que deberán aprobar evaluaciones permanentes y periódicas de control de confianza, deberán acreditar semestralmente al menos un curso de actualización profesional, deberán presentar declaración de modificación profesional y aprobar bianualmente los procesos de certificación antes descritos. Asimismo, se establecen los requisitos mínimos para la obtención de promociones en estas instituciones. Estas propuestas superan con mucho, las evaluaciones y exámenes de control de confianza aplicados en la actualidad y que han demostrado que resultan insuficientes y limitados.

El Sistema Nacional será el encargado de llevar a cabo los procedimientos de certificación de las instituciones de seguridad pública y de sus integrantes.

El Título Quinto de esta Iniciativa se encuentra dedicado a la integración de la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública, conformada a partir de los datos criminalísticos y de personal de las instituciones de seguridad pública, aportados por los municipios o demarcaciones territoriales, los estados, el Distrito Federal y la Federación, gestionada y administrada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta Base Nacional tendrá tres Registros:

- a) El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, que contendrá la información relativa a los integrantes de las instituciones de seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno así como el personal de las empresas privadas de seguridad que operen en territorio nacional;
- b) El Registro Nacional de Armamento y Equipo de las Instituciones de Seguridad Pública, que contendrá la información relativa a los vehículos, armas y municiones que hayan sido autorizados por las instancias correspondientes;
- c) La Estadística de Seguridad Pública, que contendrá los datos necesarios para el análisis de la incidencia criminológica, delictiva y de la problemática de seguridad pública, en general;
- d) La Información de Apoyo a la Procuración de Justicia, en donde se integrarán los datos sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, tales que permitan identificar sus medios y modos de operación.

Se establecen, en este mismo capítulo, las reglas generales para la consulta de esta Base Nacional, niveles y tipos de acceso a la Base así como la determinación de principios generales para su consulta por la población en general.

Por último, pero no por ello menos importante, se establecen los principios generales para la regulación de los servicios privados de seguridad en el Título Sexto. Entre los requisitos para el desarrollo de este tipo de actividades se incluyen la obligación de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la ley Federal de Seguridad Privada y contar con las licencias correspondientes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Dirección General del Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, inscribir a todos sus integrantes en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y notificar cualquier cambio en su estatus laboral, inscribir su armamento y equipo en el Registro Nacional, obtener los permisos administrativos correspondientes en cada una de las entidades en que presten sus servicios y, en el caso de que éstos lo sean en dos o más entidades, además deberán contar con la autorización correspondiente de la Secretaría de Seguridad Pública federal, deberán contar con capital social mayoritariamente mexicano.

Es por todo lo anterior, plenamente convencidos de que el paradigma de la seguridad pública debe ser modificado, ampliamente comprometidos con el libre goce de los derechos humanos y las garantías individuales de los habitantes del territorio nacional y especialmente imbricados en la construcción de un Estado democrático social y de derecho que responda, de frente a la ciudadanía, para garantizar el derecho a la Seguridad como parte fundamental del desarrollo humano, que sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente

## **Iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo Único.** Se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos siguientes:

### **Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

#### **Parte Primera**

#### **Del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

#### **Título Primero**

#### **Disposiciones generales**

**Artículo 1.** La presente ley **es reglamentaria de los párrafos noveno y décimo del artículo 21 constitucional** y tiene por objeto establecer **el Sistema Nacional de Seguridad Pública**, las bases **generales para el desarrollo de la función de seguridad pública así como los mecanismos de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.** Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

**Artículo 2.** La seguridad pública comprende la prevención de los delitos, su investigación y persecución para hacerla efectiva así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley de la materia. Los fines de la seguridad pública son la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas así como la preservación de las libertades y el orden público.

**Artículo 3.** La prevención del delito es la base de la seguridad pública, entendida como el conjunto transversal de políticas públicas que hagan posible inhibir la comisión de conductas ilícitas, cuyo enfoque debe dirigirse a identificar y erradicar los factores de riesgo que causan la delincuencia, a garantizar la atención integral de las víctimas desde todas las perspectivas de la acción social y crear mecanismos de reinserción social de los transgresores.

**Artículo 4.** Las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Asimismo, estarán obligadas a la rendición de cuentas, al respeto de la participación ciudadana y la equidad en el desempeño de sus funciones.

**Artículo 5.** Se entiende por:

I. Sistema Nacional al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en términos de lo establecido en el Título Segundo de esta Ley;

II. Consejo Nacional, al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en términos de lo establecido en el artículo 13 de esta Ley;

III. Instituciones de seguridad pública, al Ministerio Público y a las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, en términos de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución;

IV. Servicio Civil de Carrera, al desarrollo profesional de los miembros de las instituciones de seguridad pública, según lo establecido en el Título Cuarto de esta Ley;

V. Políticas de prevención, aquellas acciones y programas implementadas por los tres ámbitos de gobierno y por los tres poderes de la Unión, en los términos del artículo 3 y Título Tercero de esta Ley;

VI. Participación ciudadana, la acción de la sociedad civil organizada y de la comunidad en la seguridad pública, según lo establecido en el Título Tercero esta Ley;

VII. Políticas de atención a víctimas, aquellas acciones y programas implementados por los tres ámbitos de gobierno y por los tres poderes de la Unión encaminadas a restituir en el goce y ejercicio de sus derechos a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños de cualquier tipo;

VIII. Desarrollo integral, el proceso sistémico económico, social, cultural y político, que garantiza el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan.

**Artículo 6.** El Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra por el Presidente de la República, los gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Procuradores de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal o sus similares y los Secretarios de Seguridad Pública de los tres ámbitos de gobierno o sus similares, de conformidad por lo ordenado por el artículo 21 constitucional y la presente ley, para cumplir con los objetivos y fines de la seguridad pública.

**Artículo 7.** La aplicación de esta Ley y las acciones de coordinación que de ella se deriven, se hará con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las instituciones y autoridades que intervienen en el Sistema Nacional.

Las acciones de coordinación podrán establecerse entre los diversos órganos de las instituciones de seguridad pública. **En el convenio de colaboración deberá especificarse si se trata de acciones operativas o ministeriales.**

**Artículo 8.** La actuación de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, **objetividad**, eficiencia, profesionalismo, honradez y **respeto a los derechos humanos**. Las autoridades, **en el ámbito de sus respectivas competencias**, establecerán instrumentos de formación que garanticen el cumplimiento de estos principios, **con base en lo establecido por esta ley**.

## **Título Segundo**

### **Del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

#### **Capítulo I**

#### **Del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 9.** El presidente de la república, los gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los procuradores de Justicia y los secretarios de Seguridad Pública de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, **integrarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para implantar, en los términos de esta ley y de la leyes locales, los procesos para:**

**I. La formulación de políticas públicas de prevención del delito;**

**II. La formulación de políticas públicas de atención a víctimas;**

**III. La selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública;**

**IV. El establecimiento de las bases de datos criminalísticos, de personal y equipamiento para las instituciones de seguridad pública;**

**V. La participación de la comunidad y de las organizaciones de la sociedad civil para el diseño e implementación de las políticas de prevención del delito;**

**VI. La participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones de educación superior en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública, para lo cual los integrantes del Sistema Nacional deberán entregar la información que se requiera para el cumplimiento de esta fracción, en los términos que establece esta Ley;**

**VII. Los mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;**

**VIII. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública;**

**IX. Proponer acciones para el Programa Nacional de Seguridad Pública, su implantación y evaluación;** y

**X. Realizar acciones y operativos conjuntos.**

**Artículo 10. El Sistema Nacional será competente para la determinación de las políticas, en los términos que señala esta ley, en las materias siguientes:**

**I. Prevención del delito;**

**II. Atención integral a víctimas;**

**III. Participación ciudadana;**

**IV. Procedimientos e instrumentos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, certificación, promoción y retiro de los miembros de las instituciones de seguridad pública;**

**V. Sistemas de estímulos y recompensas así como de los disciplinarios en las instituciones de seguridad pública;**

**VI. Organización, administración, operación y modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública;**

**VII. Las propuestas de aplicación de recursos para la seguridad pública, incluido el financiamiento conjunto;**

**VIII. Suministro y sistematización de la información para la integración de la base nacional de información sobre seguridad pública;**

**IX. Acciones conjuntas, en los términos de esta ley;**

**X. Regulación y control de los servicios privados de seguridad y otros auxiliares; y**

**XI. Las demás que sean necesarias para alcanzar los fines de la seguridad pública.**

**Artículo 11. El Sistema Nacional deberá contar con la estructura necesaria para la administración de la base nacional de información sobre seguridad pública, para la regulación y control de los servicios privados de seguridad y otros auxiliares así como el seguimiento de los instrumentos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, certificación, promoción y retiro de los miembros de las instituciones de seguridad pública y las demás atribuciones que le confiere esta Ley. Los recursos presupuestales serán suministrados a través del Consejo Nacional.**

**Artículo 12.** Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional, **los Consejos Estatales, el del Distrito Federal, o los municipales** y en las demás instancias de coordinación, **de acuerdo a sus respectivas competencias y de conformidad con lo siguiente:**

**I. Las solicitudes de información respecto de la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública deberán ser dirigidas a ésta y serán resueltas en un término no mayor de 24 horas;**

**II. En el caso de tratarse de solicitudes de localización de probables responsables, éstas deberán ser dirigidas a la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública para su consulta. Las solicitudes deberán ser suscritas por autoridad competente y el Sistema Nacional deberá solventar esta información en un plazo no mayor a las 72 horas.**

## **Capítulo II**

### **Del Consejo Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 13.** El Consejo Nacional será **el órgano deliberativo y ejecutor** del Sistema Nacional, **tendrá carácter colegiado y paritario**, y estará integrado por:

**I. El presidente de la república;**

**II. Los gobernadores de los estados;**

**III. El jefe del Gobierno del Distrito Federal;**

**IV. El procurador general de la República;**

**V. Los procuradores generales de Justicia de las entidades federativas o sus similares;**

**VI. El procurador general de Justicia del Distrito Federal;**

**VII. El secretario de Seguridad Pública federal;**

**VIII. Los secretarios de Seguridad Pública de cada entidad federativa; y**

**IX. El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.**

**El presidente del Consejo Nacional será elegido de entre sus miembros y durará en su encargo un año pudiendo ser reelecto por una sola ocasión. La reunión de instalación del Consejo Nacional será presidida por el titular del Poder Ejecutivo federal.**

**Los acuerdos del Consejo Nacional se tomarán por mayoría de votos de los presentes; para este efecto, cada entidad federativa y la Federación podrán emitir únicamente un voto de sus representantes. Todos los miembros del Consejo Nacional podrán someter a la aprobación del pleno del Consejo, acuerdos, propuestas, lineamientos y los demás temas que consideren necesarios para alcanzar los objetivos de la seguridad pública.**

**El Consejo Nacional contará con un Secretario Técnico, que será nombrado por mayoría de votos en el Consejo Nacional, de una terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal y podrá ser removido únicamente por acuerdo del Consejo Nacional. Éste no será integrante del Consejo Nacional y contará con los recursos financieros suficientes para el cumplimiento de sus funciones, asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Consejo Nacional. El Secretario Técnico durará en su encargo tres años y podrá ser reelecto.**

**Artículo 14.** Para las distintas materias a que se refiere esta ley, el Sistema Nacional contará con las conferencias **de trabajo de titulares de los poderes Ejecutivos, procuradores de Justicia o equivalentes, secretarios de Seguridad Pública o equivalentes y presidentes municipales.** También podrá formar las comisiones necesarias para las diferentes áreas de la materia y en particular, para el estudio especializado de la **problemática de seguridad pública;** en ellas podrán participar las dependencias y entidades de la federación, **los estados,** el Distrito Federal y los municipios, **y los órganos políticos administrativos del Distrito Federal** que, por razón de su competencia, tengan relación con el Sistema Nacional.



Con la misma finalidad, se invitará a expertos, instituciones académicas, de investigación y agrupaciones **sociales** relacionadas con la materia.

**Artículo 15.** El Consejo **Nacional acordará sobre** los asuntos **sometidos a su consideración por sus integrantes, en relación con las materias siguientes:**

**I. Políticas de prevención;**

**II. Políticas de atención a víctimas;**

**III. Políticas de participación ciudadana;**

**IV. Mecanismos de coordinación de las instancias que integran el Sistema Nacional;**

**V. Propuestas para el Programa Nacional de Seguridad Pública, así como su evaluación y otros relacionados.**

**VI. Determinación de medidas para vincular el Sistema Nacional con otros nacionales, regionales o locales;**

**VII. Emisión de bases y reglas para la realización de operativos conjuntos entre corporaciones policiales o ministeriales federales, estatales, las del Distrito Federal y municipales;**

**VIII. Realización de programas de cooperación internacional sobre seguridad pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;**

**IX. Elaboración de propuestas de reformas a leyes y reglamentos en materia de seguridad pública;**

**X. Análisis de proyectos y estudios que se sometan a su consideración por conducto del secretario técnico;**

**XI. Expedición de reglas para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional;**

**XII. Los demás que sean necesarios para cumplir los objetivos de esta ley.**

**Artículo 16.** El Consejo **Nacional** se reunirá, cuando menos, cada tres meses a convocatoria **del presidente en turno**, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.

**Artículo 17.** El Consejo Nacional **podrá asesorarse de las instituciones de educación superior y organismos de la sociedad civil, para el cumplimiento de la presente ley.**

### **Capítulo III**

#### **Del Secretario Técnico**

**Artículo 18.** Para ser secretario técnico del Consejo Nacional se requiere:

**I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;**

**II. Tener al menos 30 años de edad;**

**III. Contar con título profesional debidamente registrado;**

**IV. No haber sido sancionado por delito doloso o inhabilitado como servidor público y contar con experiencia en áreas de seguridad pública.**

**Artículo 19.** El secretario técnico del Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones:

**I. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevando su archivo y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo;**

- II. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional;
- III. Elaborar y publicar los informes de actividades del Consejo Nacional;
- IV. Elaborar las propuestas de contenido del Programa Nacional de Seguridad Pública y someterlas a la aprobación del Consejo Nacional;
- V. Proponer al Consejo Nacional, para su aprobación, políticas, lineamientos y acciones para el buen desempeño de las instituciones de seguridad pública del país;
- VI. Rendir, una vez al año, informe de sus actividades, al Consejo Nacional; y
- VII. Realizar estudios especializados sobre las materias de seguridad pública.

#### Capítulo IV

#### De los Consejos Estatales, Municipales y de los Órganos Políticos Administrativos del Distrito Federal de Seguridad Pública

**Artículo 20.** En las entidades federativas, en el Distrito Federal, en los municipios y en los órganos políticos administrativos del Distrito Federal se establecerán consejos encargados de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema Nacional. Asimismo serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de gobierno, en materia de:

- I. Prevención;
- II. Atención a víctimas;
- III. Participación ciudadana;
- IV. Procedimientos e instrumentos de **selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, certificación**, promoción y retiro de los miembros de las instituciones de seguridad pública;
- V. Sistemas **de estímulos y recompensas así como los disciplinarios para las instituciones de seguridad pública**;
- VI. Organización, administración, operación y modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública;
- VII. Las propuestas de aplicación de recursos para la seguridad pública, incluido el financiamiento conjunto;
- VIII. Suministro de **la información para la integración de la base nacional de información sobre seguridad pública**;
- IX. Acciones conjuntas, en los términos de esta ley;
- X. Las **demás** que sean necesarias para alcanzar los fines de la seguridad pública.

En el caso de los consejos estatales y del Consejo del Distrito Federal, participarán los municipios o los órganos políticos administrativos, respectivamente, atendiendo a las características regionales y demográficas de cada entidad federativa.

**Artículo 21.** Los consejos estatales, el del Distrito Federal, los municipales o de los órganos políticos administrativos y las instancias regionales o intermunicipales de coordinación se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la

coordinación y los fines de la seguridad pública, en sus ámbitos de competencia **y deberán integrar, ineludiblemente, a representantes de la comunidad, en igualdad de circunstancias que los demás miembros del Consejo, según lo establecido en esta ley.**

## **Capítulo V**

### **De las instancias regionales e intermunicipales de coordinación**

Artículo 22. Cuando para el cumplimiento de la función de seguridad pública sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas **o del Distrito Federal**, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente.

Cuando se requiera la participación de dos o más municipios u **órganos políticos administrativos**, ya sea de una misma o de diferentes entidades federativas, podrán también establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos **locales** correspondientes.

**Artículo 23.** Los consejos estatales, **el del Distrito Federal, los consejos municipales o los órganos políticos administrativos** y las instancias regionales **o intermunicipales de coordinación** podrán proponer al Consejo Nacional acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.

## **Parte Segunda**

### **De las Políticas e Instrumentos de la Seguridad Pública**

## **Título Tercero**

### **De las políticas de prevención, atención a víctimas y participación ciudadana**

## **Capítulo I**

### **De la prevención**

Artículo 24. El Estado garantizará la seguridad pública a través del diseño transversal de políticas de prevención y su implantación efectiva, que permita identificar los factores de riesgo que originan la delincuencia para erradicarlos así como participar en la creación de mecanismos para la reinserción social de los transgresores.

Artículo 25. Todas las entidades de la administración pública y los tres Poderes en los tres ámbitos de gobierno estarán obligados a implementar acciones y programas en materia de prevención, en la esfera de sus respectivas competencias, los que deberán estar enfocados, cuando menos, a lo siguiente:

I. Desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes;

II. Desarrollo integral de las mujeres;

III. Desarrollo integral de las personas con capacidades diferentes;

IV. Desarrollo integral de los pueblos indígenas;

V. Acceso a una vida digna para los adultos mayores;

VI. Desarrollo integral de cualquier grupo social que se encuentre en situación de desventaja por su orientación sexual, origen étnico o racial, nivel socioeconómico, edad o cualquier otra circunstancia;

VII. Educación de calidad al alcance de todos y abatimiento del analfabetismo;

VIII. Ejercicio efectivo del derecho a la salud;

**IX: Promoción del empleo productivo, disminución de la pobreza y erradicación de la pobreza extrema;**

**X. Promoción de la cultura de la paz y de una vida libre de violencia; y**

**XI. Promoción de la cultura de la legalidad.**

**Artículo 26. Las Procuradurías de Justicia y las Secretarías de Seguridad Pública o equivalentes, en los tres ámbitos de gobierno, estarán obligadas, además de lo señalado en el artículo anterior, a implementar acciones y programas para:**

**I. Prevenir la delincuencia infantil y juvenil;**

**II. Erradicar la violencia, especialmente la ejercida en contra de niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas y adultos mayores;**

**III. Prevenir la violencia generada por el uso de armas, drogas y alcohol.**

**Artículo 27. Las acciones y programas contemplados en los artículos 25 y 26 tendrán el carácter de permanentes y estratégicos y conformarán el Programa Permanente de Prevención Integral, el cual estará sujeto a la evaluación de la sociedad civil, en términos de lo establecido en esta Ley.**

**Artículo 28. Todas las entidades de la Administración Pública Federal deberán destinar, al menos el 2 por ciento de los recursos presupuestales anuales a la implementación de programas integrales de prevención, con excepción de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, las cuales, al menos, deberán destinar el 10 por ciento de su presupuesto anual para tales efectos.**

**El seguimiento al Presupuesto de Prevención deberá ser especificado en un anexo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente aprueba la Cámara de Diputados.**

**Los congresos locales proveerán lo necesario para el cumplimiento de lo establecido en este capítulo, en los términos del artículo 116 constitucional.**

## **Capítulo II**

### **De la atención a víctimas**

**Artículo 29. El Estado garantizará la atención a las víctimas, a través del diseño e implementación de políticas que custodien el libre ejercicio de sus derechos desde todos los ámbitos de la acción social y tendrán como objetivo impedir y erradicar cualquier práctica que tenga como fin dilatar, obstaculizar o imposibilitar el goce y ejercicio de los mismos.**

**Artículo 30. Las políticas de atención a las víctimas deberán contemplar, al menos:**

**I. Atención inmediata de las instituciones de seguridad pública a la denuncia;**

**II. Atención inmediata para que reciban servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos;**

**III. La implantación de medidas de protección del interés superior de la víctima;**

**IV. La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que ocasionen la violación de los derechos de las víctimas o, en su caso, la impunidad de los responsables.**

**V. La reparación, que debe incluir:**

- a) la aceptación del Estado de su responsabilidad y su compromiso de repararlo, cuando el daño sea causado o agravado a consecuencia de la actuación de alguno o algunos de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; y

### **Capítulo III**

#### **De la participación ciudadana y de la comunidad para la Seguridad Pública**

**Artículo 31.** La participación de los habitantes del territorio nacional en la Seguridad Pública tendrá como objetivo establecer mecanismos de cogobernabilidad y corresponsabilidad con las autoridades y podrá realizarse a través de:

**I.** La comunidad, tengan o no estructura organizativa;

**II.** La sociedad civil organizada.

**Artículo 32.** Los Consejos Nacional, Estatales y del Distrito federal deberán contar con, al menos dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Para el efecto, los titulares de los Ejecutivos en los tres ámbitos de gobierno emitirán la convocatoria correspondiente para que las organizaciones civiles elijan a sus representantes.

Los Consejos Municipales y los de los órganos políticos administrativos deberán contar, al menos, con dos representantes de la comunidad elegidos para el efecto, previa convocatoria de la autoridad correspondiente, quienes participarán en el diseño de las políticas de seguridad pública.

**Artículo 33.** Las organizaciones de la sociedad civil podrán participar en la implantación de políticas de seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno.

**Artículos 34.** Las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil podrán participar en la evaluación del diseño, implementación e impacto de las políticas de seguridad pública así como de las instituciones de seguridad pública.

**Artículo 35.** Las organizaciones de la sociedad civil que participen en la implantación de las políticas de seguridad pública, no podrán intervenir en su diseño ni evaluación; aquellas que evalúen, no podrán participar en la implantación; y aquellas que participen en el diseño, no podrán intervenir en su implantación ni evaluación.

**Artículo 36.** Las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior que participen en el proceso de evaluación de las políticas públicas, podrán:

**I.** Evaluar los programas implementados por las instituciones de seguridad pública y las organizaciones de la sociedad civil así como su reglamentación;

**II.** Validar los indicadores de gestión en esta materia;

**III.** Evaluar el impacto de las políticas públicas en la materia;

**IV.** Publicar los resultados; y

**V.** En su caso, proponer el rediseño o redireccionamiento de la política de que se trate para elevar su efectividad.

Estos informes deberán ser entregados a los Consejos Nacional, Estatales, del Distrito Federal y Municipales y los de los Órganos Políticos Administrativos, los cuales estarán obligados a tomar en consideración esta información para el rediseño o redireccionamiento de las políticas públicas en la materia.

**Artículo 37. Las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil que participen en el proceso de evaluación de las instituciones de seguridad pública, podrán:**

- I. Evaluar el desempeño de todos sus integrantes;**
- II. Participar en la validación de la currícula para los programas de capacitación y profesionalización;**
- III. Realizar evaluación técnico-operativa de su actuación;**
- IV. Realizar evaluación técnico-jurídica de su actuación; y**
- V. Evaluar la calidad del servicio prestado.**

**Artículo 38. Las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil que realicen funciones de evaluación, podrán acceder a toda la información necesaria para la realización de estos trabajos. Cuando se trate de información reservada, la institución de seguridad pública establecerá los mecanismos para su consulta.**

**El mal uso de la información reservada que hagan los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil o de las instituciones de educación superior, será sancionada en los términos de la legislación penal correspondiente.**

#### **Título Cuarto**

#### **Del Servicio Civil de Carrera en las Instituciones de Seguridad Pública**

**Artículo 39. Para que la actuación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública se apegue a los principios establecidos en el artículo 21 de la Constitución y en el artículo 8 de esta ley, las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, en la esfera de sus respectivas competencias garantizarán, que en las normas aplicables se prevean, como mínimo, las obligaciones siguientes:**

- I. Conducirse siempre con apego al orden jurídico, profesionalmente y de manera eficaz, garantizando el respeto a los derechos humanos;**
- II. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus **derechos y bienes**. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;**
- III. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su **edad**, raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo;**
- IV. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;**
- V. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico, realice la población;**
- VI. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción;**
- VII. Abstenerse de realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;**

**VIII.** Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se ponen a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente;

**IX.** Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

**X.** Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho; y

**XI.** Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, con las excepciones que determinen las leyes.

**El incumplimiento de lo establecido en cualquiera de las fracciones de este artículo, será causa de responsabilidad administrativa, civil y/o penal, de acuerdo con las leyes en la materia. No serán sancionados los integrantes de las instituciones de seguridad pública que se nieguen a cumplir órdenes ilegales, pero sí lo será el mando que las haya emitido de manera verbal o escrita.**

**Artículo 40. El Ministerio Público, además de lo establecido en el artículo anterior:**

**I.** Contará con la garantía para ejercer sus funciones sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole;

**II.** Al igual que los demás ciudadanos, gozarán de libertad de expresión;

**III.** Deberá cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar, proteger y defender los derechos humanos;

**IV.** Protegerá el interés público, actuará con objetividad, tendrá debidamente en cuenta la situación del imputado y de la víctima y prestará atención a todas las circunstancias pertinentes prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el imputado; y

**V.** Prestará la debida atención al enjuiciamiento de los funcionarios públicos que hayan cometido delitos, especialmente en los casos de corrupción, abuso de autoridad, violaciones de derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

**Artículo 41. El Servicio Civil de Carrera es la base de la formación de los integrantes de las instituciones policiales y del Ministerio Público, a fin de cumplir con los principios de actuación y desempeño consignados en la Constitución Política y en esta ley. Comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación y certificación así como mecanismos de promoción y separación del servicio.**

**Artículo 42. Serán requisitos mínimos para participar en el proceso de selección para el ingreso a las instituciones de Seguridad Pública:**

**I.** Ser mexicano por nacimiento;

**II.** Tener 18 años de edad y haber cumplido con el Servicio Militar Nacional;

**III.** No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso; ni estar sujeto a un proceso penal;

**IV.** No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;

**V. No haber sido dado de baja de una institución de Seguridad Pública Nacional, estatal, municipal o del Distrito Federal;**

**VI. Haber aprobado todos los exámenes de control de confianza aplicados por las instituciones competentes.**

**Artículo 43. Para ingresar como policía preventivo o de tránsito en las instituciones de Seguridad Pública se requiere, al menos:**

**I. Ser mexicano por nacimiento;**

**II. No ser mayor de 28 años de edad; y haber cumplido con el Servicio Militar Nacional;**

**III. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso; ni estar sujeto a un proceso penal;**

**IV. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;**

**V. No haber sido dado de baja de una institución de Seguridad Pública Nacional, estatal, municipal o del Distrito Federal;**

**VI. Haber aprobado todos los exámenes de control de confianza aplicados por las instituciones competentes.**

**VII. Acreditar el proceso de selección;**

**VIII. Presentar declaración patrimonial inicial ante los órganos correspondientes;**

**IX. Aprobar la certificación policial en los términos que señala esta Ley;**

**X. Contar con certificado de secundaria expedido por las autoridades competentes; y**

**XI. Acreditar el curso básico de capacitación;**

**Artículo 44. Para ingresar como policía de reacción en las instituciones de Seguridad Pública se requiere, al menos:**

**I. Ser mexicano por nacimiento;**

**II. No ser mayor de 28 años de edad y haber cumplido con el Servicio Militar Nacional;**

**III. . No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso; ni estar sujeto a un proceso penal**

**IV. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;**

**V. No haber sido dado de baja de una institución de Seguridad Pública Nacional, estatal, municipal o del Distrito Federal;**

**VI. Haber aprobado todos los exámenes de control de confianza aplicados por las instituciones competentes.**

**VII. Acreditar el proceso de selección;**



- VIII. Presentar declaración patrimonial inicial ante los órganos correspondientes;**
- IX. Aprobar la certificación policial en los términos que señala esta Ley;**
- X. Contar con certificado de bachillerato expedido por las autoridades competentes; y**
- XI. Acreditar los cursos de capacitación básica y de especialización correspondientes.**

**Artículo 45. Para ingresar como agente de la policía de investigación en las instituciones de Seguridad Pública se requiere, al menos:**

- I. Ser mexicano por nacimiento;**
- II. No ser mayor de 35 años de edad y haber cumplido con el Servicio Militar Nacional;**
- III. . No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso; ni estar sujeto a un proceso penal**
- IV. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;**
- V. No haber sido dado de baja de una institución de Seguridad Pública Nacional, estatal, municipal o del Distrito Federal;**
- VI. Haber aprobado todos los exámenes de control de confianza aplicados por las instituciones competentes.**
- VII. Acreditar el proceso de selección;**
- VIII. Presentar declaración patrimonial inicial ante los órganos correspondientes;**
- IX. Aprobar la certificación policial en los términos que señala esta Ley;**
- X. Contar con título de licenciatura debidamente registrado ante las autoridades competentes;**
- XI. Acreditar los cursos de capacitación básica y de especialización correspondientes; y**
- XII. Someterse y aprobar los exámenes psicológicos, físicos, médicos y toxicológicos correspondientes.**

**Artículo 46. El proceso de certificación policial contará, al menos, con los siguientes elementos:**

- I. Validación de la currícula de los programas de capacitación, actualización y profesionalización policiales. Los programas básicos curriculares deberán contemplar, ineludiblemente, contenidos relacionados con el respeto a los derechos humanos, uso legítimo de la fuerza, prevención del delito, convivencia con la comunidad, primeros auxilios así como el conocimiento básico del marco constitucional, legal y reglamentario de las instituciones de seguridad pública. Para el diseño del contenido de los programas curriculares de los cursos de especialización y actualización profesional, las instituciones de seguridad pública deberán acudir a la asesoría de las instituciones públicas de educación superior;**
- II. Aplicación y aprobación a los aspirantes de exámenes de conocimientos y habilidades adquiridos en los programas de capacitación, actualización y profesionalización policiales;**
- III. Aplicación y aprobación de exámenes de control de confianza a los aspirantes, los cuales deberán al menos consistir en evaluación psicológica, médica, poligráfica y de situación patrimonial;**

IV. Aplicación y aprobación de exámenes de Psicológicos, Físico, Médico y Toxicológico correspondientes.

V. Estudio de evolución patrimonial que deberá incluir, al menos, los resultados de las consultas a los registros públicos de propiedad, comercio;

VI. Verificación de la autenticidad de los documentos oficiales presentados por los aspirantes;

VII. Verificación de antecedentes penales, profesionales y de carrera policial de los aspirantes.

**Artículo 47. Serán requisitos mínimos para la permanencia en las instituciones de Seguridad Pública:**

I. Aprobar las evaluaciones periódicas de control de confianza;

II. Acreditar, semestralmente, al menos un curso de actualización profesional;

III. Presentar, anualmente, declaración de modificación patrimonial ante los órganos correspondientes;

IV. Aprobar cada dos años el proceso de certificación, en los términos que señala esta ley; y

V. Aprobar los exámenes de Psicológicos, Físico, Médico y Toxicológico correspondientes.

**Artículo 48. Serán requisitos para la obtención de promociones en las instituciones de Seguridad Pública:**

I. Haber cumplido, al menos, tres años en el grado jerárquico inmediato inferior;

II. Cumplir con los requisitos de formación y capacitación señalados para cada grado jerárquico por las instituciones de seguridad pública;

III. Aprobar el proceso de certificación, en los términos que señala esta Ley;

IV. Aprobar los exámenes de Psicológicos, Físico, Médico y Toxicológico correspondientes.

**Artículo 49. El Servicio Civil de Carrera**, en sus diferentes niveles, se establecerá con carácter de obligatorio y permanente. Deberá instrumentarse por la federación, **las entidades federativas**, el Distrito Federal y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia **con base en lo dispuesto por esta ley, las políticas generales emitidas por el Sistema Nacional y lo que dispongan las leyes locales de la materia**, de manera coordinada. **Los Consejos estatales, el del Distrito Federal y los consejos municipales o de los órgano político administrativo serán los encargados de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo Nacional en esta materia, para lograr la homologación de procedimientos y la equivalencia** de contenidos mínimos de planes y programas para la formación de los integrantes de las instituciones policiales. Para lo anterior, contarán con el apoyo del Sistema Nacional.

**Artículo 50. Será motivo de baja de las instituciones de Seguridad Pública:**

I. No presentarse a cualquiera de los exámenes de certificación y/o permanencia;

II. Hacer uso de sustancias psicotrópicas;

III. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso; ni estar sujeto a un proceso; y

IV. Incumplimiento de sentencia judicial, civil o administrativa que así lo ordene.

Los miembros de las instituciones de seguridad pública a que se refiere este capítulo podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que señala esta Ley o removidos por

responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación del servicio fue injustificada, la autoridad responsable sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho sin que, en ningún caso, proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

**Artículo 51.** En las instituciones de seguridad pública, el retiro obligatorio por edad avanzada se establecerá a la edad de 65 años.

## **Título Quinto**

### **De la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública**

**Artículo 52.** La base nacional de información sobre seguridad pública se conformará a partir de los datos criminalísticos y de personal de las instituciones de seguridad pública, los cuales deberán ser aportados por los municipios o demarcaciones territoriales, estados, el Distrito Federal y la Federación. El Sistema Nacional será el responsable de su sistematización, administración y gestión. El incumplimiento de lo anterior será causa de responsabilidad para el servidor público encargado de proporcionarlos a la Base, de acuerdo a las leyes de la materia.

La base nacional de información sobre seguridad pública contendrá un Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, un Registro Nacional de Armamento y Equipo de las Instituciones de Seguridad Pública, las Estadísticas de Seguridad Pública y la Información de Apoyo a la Procuración de Justicia

Las reglas para determinar los niveles de acceso a la Base serán establecidas por acuerdo del Consejo Nacional, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

**Artículo 53.** Es obligación de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios proporcionar al Sistema Nacional, los datos criminalísticos y de personal que labora en las instituciones de seguridad pública, necesarios para integrar la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública.

**Artículo 54.-** El Consejo Nacional determinará las bases para incorporar otros servicios o instrumentos que tiendan a integrar la información sobre seguridad pública y los mecanismos modernos que den agilidad y rapidez a su acceso.

También determinará las condiciones de **relativas a los niveles de seguridad sobre manejo y acceso a la información. El Consejo Nacional establecerá los mecanismos para la inscripción y modificación de datos en la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública, tales que garanticen la integridad de los datos allí contenidos y deberá llevar un registro de los servidores públicos que realicen consultas y la información a la que tuvieron acceso.**

## **Capítulo I**

### **Del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública**

**Artículo 55.** El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública contendrá la información relativa a los integrantes de las instituciones de la Federación, **las entidades federativas**, el Distrito Federal y los municipios.

**Artículo 56.** El Registro **deberá** contener:

**I.** Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes laborales.

**II.** Resultados en los procesos de selección e ingreso;

**III.** Desarrollo en el Servicio Civil de Carrera y trayectoria en los servicios de seguridad pública;

#### **IV. Resultados en los procesos de evaluación en el desempeño de sus funciones;**

**V.** Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor en el servicio público;

**VI.** Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron; y

#### **VII. Resultados en los procesos de certificación.**

Cuando a los integrantes de las instituciones de seguridad pública **sean dados de baja**, se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, **de manera inmediata, se asentarán en el Registro.**

Las órdenes de **suspensión de actividades**, de detención o aprehensión se notificarán **de manera inmediata. Las órdenes de detención o aprehensión lo serán únicamente** cuando no pongan en riesgo la investigación o la causa procesal.

**Artículo 57.** Las autoridades competentes de la federación, **las entidades federativas**, el Distrito Federal y los municipios **tendrán la obligación de actualizar los datos relativos a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública y proporcionarlos de manera inmediata al Sistema Nacional, en términos de lo dispuesto en esta ley.** Se consideran miembros de las instituciones de seguridad pública **a todos aquellos servidores públicos que formen parte de ellas por haber concluido exitosamente los procesos de selección e ingreso, encontrarse dentro del Servicio Civil de Carrera y hayan aprobado los procedimientos de evaluación, permanencia y de certificación, establecidos por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en esta ley.**

**El Consejo Nacional establecerá los mecanismos por los cuales las empresas privadas de seguridad entregarán al Sistema Nacional los datos relativos a sus empleados y personal.**

**Artículo 58.** Los integrantes de las instituciones de seguridad pública ostentarán una identificación que incluya fotografía, nombre, nombramiento y clave de inscripción en el Registro.

**Artículo 59.** La consulta del registro será obligatoria y previa al ingreso de toda persona a cualquier institución **de seguridad pública**, incluyendo las de formación. Con los resultados de la consulta la autoridad procederá de conformidad con las normas conducentes. **Cuando un servidor público de las instituciones de seguridad pública no se encuentre registrado debidamente, será motivo de su separación inmediata del servicio.**

**Artículo 60.** Las disposiciones previstas en esta sección no serán aplicables a los servidores públicos del poder judicial de la Federación, **las entidades federativas y el Distrito Federal que realicen funciones distintas a las de seguridad pública.**

## **Capítulo II**

### **Del Registro Nacional de Armamento y Equipo de las Instituciones de Seguridad Pública**

**Artículo 61.** Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios u órganos políticos administrativos manifestarán al Registro Nacional de Armamento y Equipo:

I. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo; y

II. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.

**Artículo 62. Los miembros de las instituciones de seguridad pública sólo podrán** portar las armas de cargo que les hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se les hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la institución de seguridad pública a que pertenezcan, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

**Artículo 63. Los miembros de las instituciones de seguridad pública sólo podrán portar armas** durante el tiempo del ejercicio de funciones, o para un horario, misión o comisión determinados, de acuerdo con los ordenamientos de cada institución.

**Artículo 64.** En el caso de que los elementos de seguridad pública aseguren armas y/o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Nacional de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

**Artículo 65.** El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 64 al 66 de esta ley dará lugar a que la portación de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.

**Artículo 66.** Las disposiciones previstas en esta sección no serán aplicables a los servidores públicos del Poder judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, **que realicen funciones distintas a las de seguridad pública.**

### **Capítulo III**

#### **De la Estadística de Seguridad Pública**

**Artículo 67. El Consejo Nacional determinará** los instrumentos de acopio de datos que permitan analizar la incidencia criminológica, **delictiva** y, en general, la problemática de seguridad pública en los ámbitos de la federación, **las entidades federativas**, el Distrito Federal y los municipios, con el propósito de planear las estrategias de las políticas tendentes **al cumplimiento de la función de la seguridad pública.** Para este efecto, **el Consejo Nacional** dispondrá los mecanismos que permitan la evaluación y reorientación, en su caso, de las políticas de seguridad pública, **con base en lo establecido en esta ley.**

**Artículo 68.** Las normas generales para la recepción de la información serán establecidas **por el Consejo Nacional, de conformidad con la ley de la materia. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios u órganos políticos administrativos estarán obligados a proporcionar los datos correspondientes y el incumplimiento será causa de responsabilidad, de acuerdo a las leyes de la materia.**

**Artículo 69.** La estadística de seguridad pública **formará parte de la base nacional de información sobre seguridad pública, la cual** sistematizará los datos y cifras relevantes sobre servicios de seguridad preventiva, procuración y administración de justicia, sistemas de prisión preventiva, de ejecución de sentencias y de tratamiento de menores, y los factores asociados a la problemática de seguridad pública.

### **Capítulo IV**

#### **De la Información de Apoyo a la Procuración de Justicia**

**Artículo 70. La federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, suministrarán, intercambiarán y sistematizarán la información sobre seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los usuarios que se refiere esta ley.**

**Se integrará una base nacional de datos sobre personas probables responsables de delitos, indiciadas, procesadas o sentenciadas, de consulta obligatoria en las actividades de seguridad pública, donde se incluyan sus características criminales, medios de identificación, recursos y modos de operación. Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que aporten las instituciones de prevención, procuración y administración de justicia, readaptación social y en general, todas las instituciones que deban contribuir a la seguridad pública, relativa a las investigaciones, averiguaciones previas, órdenes de detención y aprehensión, sentencias o ejecución de penas.**

Esta información servirá para lograr los propósitos que refiere el artículo 67 y para instruir la mejor detección y persecución de los delitos.

Dicha información se dará de baja de esta base de datos, por resoluciones de libertad por desvanecimiento de datos o falta de elementos para procesar, así como por sentencias absolutorias.

**Artículo 71.** La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios u órganos políticos administrativos estarán obligados a proporcionar los datos correspondientes y el incumplimiento será causa de responsabilidad, de acuerdo a las leyes de la materia. La institución del Ministerio Público sólo podrá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, pero la proporcionará inmediatamente después que deje de existir tal condición.

## **Capítulo V**

### **De las Reglas Generales sobre Acceso a la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública**

**Artículo 72.** Existirá una base nacional de información sobre seguridad pública, la cual contendrá la información relativa a los integrantes de las instituciones de seguridad pública de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

**El Registro contendrá, por lo menos:**

- I.** Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes laborales, así como su trayectoria en los servicios de seguridad pública;
- II.** Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público; y
- III.** Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron.

Cuando a los integrantes de las instituciones de seguridad pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al registro.

Las órdenes de detención o aprehensión se notificarán cuando no pongan en riesgo la investigación o la causa procesal.

Para la consulta de la base nacional de información sobre seguridad pública, deberán establecerse los diferentes niveles de acceso, con base en los criterios de orden de gobierno, función y cargo del servidor público. El Consejo Nacional determinará los mecanismos para la clasificación de los niveles o tipo de acceso a la información de la base nacional de información sobre seguridad pública. Asimismo determinará los criterios de publicidad de la información contenida en la base nacional.

**Artículo 73.** La información será manejada bajo los principios de confidencialidad y reserva. No se proporcionará al público la información que ponga en riesgo la seguridad pública o atente contra el honor de las personas. El incumplimiento de esta obligación se equiparará al delito de revelación de secretos, sin perjuicio de responsabilidades de otra naturaleza.

**Artículo 74.** Cualquier interesado que estime falsa o errónea alguna información, podrá solicitar la investigación correspondiente con el objeto de que, en su caso, se anote la corrección que proceda, conforme al procedimiento que establezca el Consejo Nacional.

## **Capítulo VI**

### **De los servicios de atención a la población**

Artículo 75. El Consejo Nacional impulsará las acciones necesarias para que la federación, **las entidades federativas**, el Distrito Federal y los Municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes.

**Artículo 76.** El Consejo Nacional promoverá que la federación, **las entidades federativas**, el Distrito Federal y los municipios **o demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias**, establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

El servicio tendrá comunicación directa con las instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.

## **Título Sexto**

### **De los servicios privados de seguridad**

Artículo 77. Además de cumplir con las disposiciones de la **Ley Federal de Seguridad Privada**; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.

**Artículo 78.** Las empresas privadas que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado, deberán:

**I. Cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley Federal de Seguridad Privada, así como contar con las licencias y los permisos correspondientes de la Secretaría de la Defensa Nacional.**

**II. Inscribir a todos sus integrantes y personal contratado en la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y notificar cualquier cambio en su status laboral.**

**III. Inscribir, en el Registro Nacional de Armamento y equipo, los vehículos que posean así como las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional o en su caso la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. De la misma manera, deberán registrar los servicios de radio y telecomunicaciones, audiovisuales, cibernéticos y otros que sean utilizados para el desempeño de sus funciones.**

**IV. En el caso de que los servicios prestados por la empresa privada de seguridad lo sean en dos o más entidades federativas, además deberán contar con la autorización de la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.**

**V. Deberán contar con capital social mayoritariamente mexicano, en términos de la legislación en la materia, lo cual deberán acreditar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta Secretaría extenderá constancia de lo anterior así como del cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes.**

**VI. En ningún caso podrán contratar personal extranjero para fines de entrenamiento, adiestramiento o capacitación.**

**VII. Únicamente podrán contratar personal que haya sido debidamente certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos que establece esta Ley.**

**El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones será motivo de revocación de los permisos y/o la autorización concedida a la empresa privada de seguridad, la cual será ordenada por la instancia correspondiente. En el caso de la fracción V de este artículo, la instancia competente lo será la Secretaría de Seguridad Pública Federal.**

**Artículo 79.** Los servicios privados de seguridad son **auxiliares en** la función de seguridad pública. Sus integrantes **colaborarán** con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la federación, **las entidades federativas**, el Distrito Federal y los municipios **o demarcaciones territoriales**, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.

**El Consejo Nacional dictará los lineamientos generales por los cuales se podrán establecer estos mecanismos de colaboración.**

Los particulares que presten este servicio estarán impedidos para ejercer las funciones que corresponden a las autoridades de seguridad pública.

**Artículo 80.** Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que **contraten**, se registrarán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables establecen para las instituciones de seguridad pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Sistema Nacional.

#### **Transitorios**

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se abroga la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995.

**Segundo.** Conforme a las disposiciones legales aplicables, el Ejecutivo Federal realizará las transferencias presupuestarias necesarias, a efecto de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública y las instancias, los instrumentos, mecanismos y programas que lo conformen, puedan establecerse y desarrollar las funciones ordenadas en la presente ley. **Estas medidas deberán ser incluidas en los subsecuentes Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación, para su aprobación por la Cámara de Diputados.**

**Tercero.** El Consejo Nacional de Seguridad Pública se instalará dentro del plazo de **30 días naturales** contados a partir de la publicación de la presente ley. **Los consejos estatales y del Distrito Federal deberán quedar instalados en el plazo de 45 días naturales contados a partir de la publicación de la presente ley. Los consejos municipales y de las demarcaciones territoriales deberán quedar instalados en el plazo de 60 días naturales contados de la misma manera.**

**Cuarto.** El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su primera sesión, determinará los procedimientos y los plazos máximos, para que se instalen las instancias de coordinación y se establezcan los instrumentos y servicios que prevé esta ley.

**Quinto.** Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido por la presente ley.

#### **Notas**

1. Instituto de Investigaciones Jurídicas, *Enciclopedia Jurídica Mexicana*, Tomo V, p. 774, México, 2002.
2. Real Academia de la Lengua Española, *Diccionario de la Lengua Española*, Tomo 7, p. 1087, España, 2002.
3. Ídem, Tomo 4, p. 586.
4. Ídem, Tomo 8, p. 1249.
5. Ídem, Tomo 6, p. 830.
6. Waller, Irvin, *Menos represión, más seguridad. Verdades y mentiras acerca de la lucha contra la delincuencia*, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, México, 2007, p. 22.
7. Ídem, p. 117.
8. Ídem, p. 139.
9. Ídem, p. 142.
10. Ídem.



11. Artículo 5 fracción VIII de la presente Iniciativa.
12. Artículo 29 de esta Iniciativa.
13. Waller, Irvin, *op.cit.*, p. 121.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.

**Diputados:** Andrés Lozano Lozano, Ruth Zavaleta Salgado, Celso David Pulido Santiago, Ana Yurixi Leyva Piñón, Raymundo Cárdenas Hernández, Aurora Cervantes Rodríguez, Claudia Lilia Cruz Santiago, Javier González Garza, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Antonio Ortega Martínez, Concepción Ojeda Hernández, Eva Angelina Sánchez Valdéz, Valentina Valia Batres Guadarrama, Francisco Martínez Martínez, Moisés Félix Dagdug Lützow, Sergio Hernández Hernández, Juan Dario Arreola Calderón, Santiago López Becerra, José Jacques y Medina, Irene Aragón Castillo, Daniel Dehesa Mora, Octavio Adolfo Klimek Alcaráz, Jesús Ricardo Morales Manzo, Josefina Salinas Pérez, Alberto Amaro Corona, Alejandro Martínez Hernández, Martín Zepeda Hernández, David Sánchez Camacho, Mónica Fernández Balboa, Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Carlos Orsoe Morales Vázquez, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbricas).

**B.**

02-10-2008

Cámara de Diputados.

**INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Presentada por el Ejecutivo Federal.

Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Gaceta Parlamentaria, 02 de octubre de 2008.

## **INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

México, DF, a 30 de septiembre de 2008.

### **Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Presentes**

Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir la iniciativa de **Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública**, documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Órgano Legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)

Subsecretario de Enlace Legislativo

### **Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Presente**

Las sociedades evolucionan cuando su régimen jurídico responde a las necesidades primordiales de los ciudadanos y los gobiernos son capaces de dar respuesta a las demandas de los gobernados; así, un Estado cuyas Instituciones corresponden a un tiempo pretérito, pierden credibilidad ante aquellos a quienes debe servir en el presente.

El Estado mexicano heredero de una larga tradición jurídica de protección a los ciudadanos, ha incoado la actualización de su régimen normativo en diversas etapas de su historia, las cuales han obedecido a la dinámica social que exige soluciones permanentes y creíbles, a todas las necesidades que van surgiendo en el acontecer social.

El Constituyente Permanente legitima su encomienda al analizar y debatir con seriedad las ideas para la construcción constante de nuestra Nación. Esta generación, no es ajena al reclamo social que exige el cumplimiento pleno de todas las garantías y derechos que plasmaron los formadores de nuestra República.

El Poder Ejecutivo Federal, al cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, ha escuchado el reclamo social que le recuerda que nuestro sistema jurídico y nuestras Instituciones son perfectibles, y que existen temas fundamentales en la agenda nacional que urge atender con soluciones convincentes a los ojos de quienes padecen el problema. Uno de ellos es la inseguridad pública.

La consolidación democrática de un pueblo sólo puede darse cuando sus ciudadanos, confiados en las instituciones de seguridad pública, pueden disfrutar de una vida familiar sin temor a sufrir algún menoscabo en su integridad personal o en su patrimonio a mano de los grupos delictivos; por ende, la dimensión de esta responsabilidad es mayúscula en tanto que la seguridad pública es la primera garantía que se debe brindar para asegurar una vida digna.

No atender a fondo el problema, a pesar de sus consecuencias conllevaría a una falta de credibilidad en quienes tenemos la encomienda pública y el compromiso social de preservar la vida, libertad, integridad, los bienes y derechos de los gobernados.

Los esfuerzos realizados hasta el momento no han logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una estrategia nacional, la cual ha sido una misión largamente postergada y sustituida en ocasiones por el discurso.

La contundencia en el actuar policial no ha sido constante ni homogénea. Hoy mas que nunca, la sociedad reclama una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, organizada a partir de una perspectiva del sistema federal y traducida en una eficiente convergencia de competencias corresponsables.

En este contexto se ubica, en las últimas dos décadas, la labor de los tres poderes de la Unión a fin de dar respuesta a la inseguridad, la cual generó la reforma constitucional de 1994, que modificó los artículos 21 y 73 de nuestra Ley Fundamental, dando sustento jurídico a la coordinación en materia de seguridad pública y ordenando la ley que estableció las bases sobre las cuales pudieran actuar los tres órdenes de gobierno.

A través de esta reforma, se establecieron las bases jurídicas de una política en materia de seguridad pública; con ella, se habló por primera vez de un esfuerzo sistematizado a nivel nacional para combatir la delincuencia.

La reforma constitucional de 1994 en materia de seguridad pública fue parte de la última etapa del desarrollo jurídico-social de nuestro país en el siglo XX, satisfizo parcialmente las necesidades para las cuales fue legislada y cumplió en su momento con sus planteamientos; sin embargo, a catorce años de distancia, nadie puede negar que la realidad de nuestro país es otra, el constante desenvolvimiento de las fuerzas sociales y los cambios vertiginosos a nivel mundial han generado que nuestro país en menos de tres lustros viva otros escenarios en el ámbito de la seguridad pública.

La reforma constitucional aprobada el 18 de junio del presente año, primera de diversas que habrá a lo largo del siglo XXI, es sintomática porque marca el inicio de una nueva etapa en nuestro Estado de Derecho, respecto de la coordinación de todos los órdenes de gobierno para la atención de la seguridad pública, la cual constituye una de las principales preocupaciones de la sociedad.

Así, los instrumentos jurídicos que se derivan de la reciente reforma constitucional, tienden a perfeccionar aquellos que, derivados de la reforma de 1994, han sido rebasados por los cambios sociales o carecieron de plenitud en su aplicación.

En la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada el 11 de diciembre de 1995, se había pretendido alcanzar la seguridad que demandan los mexicanos, al sentar las bases legales para un sistema nacional de seguridad pública que facilitase la coordinación de acciones entre los distintos niveles de gobierno.

En dicha ley se estableció el servicio civil como eje rector del desarrollo de las corporaciones de seguridad pública y como obligatoria la carrera policial en todas las policías del país, de conformidad con las fórmulas de coordinación intergubernamental que el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública contempló. No obstante, los objetivos de la ley citada no alcanzaron su realización y la idea de que la federación, los estados y los municipios garantizaran una política coherente en la materia se vio frustrada.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública debe complementar su tarea de provisión de lineamientos para las políticas públicas en la materia, y de este modo constituir un verdadero eje de concertación para el desarrollo institucional de las policías.

Ante el predominio de esta situación, las corporaciones de seguridad pública se atienen a reglamentos interiores que no tienen la plenitud de una norma exclusiva como lo consigna el artículo 123 Constitucional, en su apartado B, fracción XIII, al referirse a los derechos de los miembros de las corporaciones de seguridad pública.

Por otra parte, el escaso interés de fortalecer a las instituciones policiales, más allá de lo que permiten los recursos del Fondo para la Seguridad Pública consignado en la Ley de Coordinación Fiscal y que es fuente

principal del sostenimiento de las corporaciones en todo el país, ha generado un notable descuido en la preparación, equipamiento y capacidad institucional de sus elementos.

En el año de 1999 se creó la Policía Federal Preventiva y su organización quedó instituida en la ley y reglamento de dicha corporación; su profesionalización fue estipulada a partir de una serie de normas compiladas en los códigos de ética de la misma Institución; sin embargo, tras diversos intentos de instituir una norma con un enfoque claramente orientado hacia el servicio policial de carrera, no se logró establecer a plenitud un sistema que pudiera fungir como modelo de organización y gestión para todas las policías del país.

Simultáneamente en las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se legisló para crear leyes de seguridad pública locales cuyo principal elemento consistió en la organización de los propios sistemas estatales de seguridad pública, relegando a disposiciones reglamentarias la definición de las reglas de ingreso, de asignación de grados, de promociones, ascensos, capacitación, desarrollo y baja de sus integrantes.

En este vacío legislativo, las corporaciones de seguridad pública de los estados y de los municipios en muy contadas ocasiones han definido con precisión las pautas de un sistema de carrera policial, por lo cual las viejas prácticas de la lealtad, el mérito calificado únicamente por los jefes, los sistemas de prebenda y otros medios de apropiación de las corporaciones, continúan lamentablemente siendo una práctica reiterada.

A pesar de esta tendencia, también se debe reconocer que las policías federales han mejorado sus sistemas de reclutamiento y selección, y han instituido importantes centros de formación policial; todo esto no podrá rendir los frutos esperados si no existe en el plano legislativo una norma que comprometa en forma eficiente y bajo un sistema de consecuencias a las autoridades que deben regir el desarrollo policial. Por otra parte, si este tema no es atendido en la agenda legislativa con la importancia que merece, las actuales políticas de combate al crimen no tendrán la contundencia y efectos esperados, al no poder sostener únicamente a las fuerzas armadas en el terreno del combate al delito sin un fuerte componente de prevención.

Ante este panorama, el proyecto de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es no solamente factible, sino inaplazable en cuanto a su expedición y puesta en operación, como un instrumento acorde con los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 31 de mayo de 2007.

En este contexto, si bien es cierto que el marco de las atribuciones de las entidades federativas y el sistema de distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno, se funda en el respeto a las autonomías, también se debe reconocer que la seguridad pública ha quedado definida como una función de Estado y que deberá proveerse de manera concurrente y coordinada por la Federación, entidades federativas y municipios.

El criterio referido ha sido adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al advertir que la seguridad pública es una materia concurrente, en la que se pueden configurar las competencias en una ley marco o general.

En efecto, los artículos 40 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio fundamental de organización social, política y jurídica del Estado Mexicano; asimismo, el preceptivo 133 de la misma carta magna establece el principio de la supremacía constitucional. No obstante, respecto del régimen federal y de supremacía constitucional, el alto tribunal de la Nación ha definido que las leyes del Congreso emanadas directamente de la Constitución son precisamente las leyes generales cuya jerarquía normativa es de orden constitucional, lo que significa que, en aquellos casos en que el legislador constitucional dispuso que determinada materia o facultad habría de normarse por una ley emanada de la Constitución, significa que dicha ley integra una porción de normatividad constitucional; en palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Nuestro lenguaje constitucional llama concurrencia legislativa a las que derivan de la atribución combinada, segmentaria y hasta compartida que efectúa el constituyente en favor de los distintos órdenes de gobierno, en relación con una materia competencial específica, a través de la distribución que se establece en una ley del Congreso de la Unión, llamada Ley General.

Estas leyes generales o marco distribuyen las competencias entre la Federación y los Estados, otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales correlativas, desconstitucionalizando la atribución de competencias entre los dos órdenes de gobierno, dejando la función de reparto en el Congreso Federal.

Ahora bien, la coexistencia de un criterio constitucional de distribución de competencias cooperativo junto con (sic) el criterio federalista dual, produce una alteración en las relaciones entre las leyes, en tanto la Constitución no atribuye las competencias en las materias concurrentes, sino que remite a otras leyes federales para ello. De esta forma, la constitucionalidad de una ley federal o local, en las materias concurrentes depende tanto de la Constitución como de la ley marco.

En efecto, si únicamente operara una configuración competencial federal, la validez de una ley en atención al órgano que la emitió exclusivamente estaría condicionado a determinar si la Constitución otorgó a cierto nivel de gobierno la facultad para expedir determinada ley en determinada materia. Sin embargo, en tanto que normas de igual rango pueden distribuir competencias, la validez de una norma no depende sólo de la Constitución, sino de otra ley, en las materias concurrentes.

Así la constitucionalidad de una ley puede depender no solo de la infracción a la Constitución Federal, sino también de la contravención de lo que en otras jurisdicciones se ha denominado bloque de constitucionalidad, es decir, de las normas que no forman parte de la Constitución y que tienen un rango inferior a ella, pero que por disposición constitucional deben ser utilizadas como parámetros de validez respecto de las leyes de la misma jerarquía cuya contravención provoca la inconstitucionalidad de éstas."<sup>1</sup>

Ahora bien, en el tema de la seguridad pública, lejos de una conjunción de soberanías o autonomías o simple suma de proyectos, las reformas constitucionales tienden a la integración de capacidades y esfuerzos, a la interacción de los órdenes de gobierno en el diseño de una estrategia para la seguridad pública integral para la Nación; la operatividad y alcance de cada uno de los órganos ha sido y es aún diferenciado, ya se trate de la competencia federal, ya del actuar local o municipal, pero la exigencia social, el proyecto y la responsabilidad es compartida y única ante la Nación.

Así, las bases de coordinación y colaboración deben ir más allá de un simple reparto de funciones; más bien se deben fijar con toda claridad los parámetros generales sobre los temas específicos, de manera que integrados en la Federación, en cada uno de sus ámbitos competenciales, constituyan una fuerza sólidamente unida, y no dispersa o difusa, en la atención a la seguridad pública.

La coordinación en el régimen federal no significa la simple distribución material o matemática de competencias o atribuciones de los órganos de gobierno; por ejemplo, el régimen de coordinación fiscal, no tiene parámetros numéricos iguales entre la Federación y un estado, o entre los estados en sí; o las aportaciones y participaciones de recursos a los municipios resultan con iguales números; pero si constituyen parámetros equitativos y efectivos de coordinación o cooperación federalizada, precisamente, son parámetros reales y eficaces del actuar de cada uno de los órdenes de gobierno, con el respeto a su ámbito de funciones y operatividad, ni subordinación ni suprasubordinación, soberanos en sí, unidos en un proyecto nacional: el combate a la delincuencia.

A ese respecto, se han identificado diversas materias de facultades concurrentes, que imponen al Congreso General el establecimiento de leyes generales que fijen las normas, mecanismos y alcances de la participación de los entes estaduales; materia sobre la cual el máximo intérprete constitucional ha determinado que: "Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general."<sup>2</sup>

Cierto es que la participación de los diversos órdenes de gobierno: Federación, Distrito Federal, estados y municipios es un presupuesto de la operatividad de las directrices y los programas de seguridad pública, empero, ello no puede quedar sujeto a los tiempos e inercias políticas, sino debe estar atento al Estado de Derecho y a la definición normativa a través de la ley.

Por ello, las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el presente año, ordenan la constitución de un Sistema Nacional de Seguridad Pública sujeto a las bases mínimas siguientes:

"[...]

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones;

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema;

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos;

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública; y

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines".

Sin lugar a dudas hay mucho por hacer en la agenda del desarrollo policial; se debe promover que la retribución esté a la altura de las exigencias del desarrollo integral de sus elementos y sea compensatorio de las funciones que desempeñan en beneficio de la población a costa de su propio riesgo.

El ingreso a la policía debe dejar de concebirse como un recurso inmediato para tener empleo, por tanto, se precisa de la formación de una verdadera doctrina de servicio público, respaldada por un adecuado sistema de formación, desarrollo, empleo y retiro, es decir, todas las fases de un sistema de carrera que se encuadre en todas las corporaciones locales y federales en las mismas reglas de pertenencia, desarrollo y crecimiento institucional, y profesional de sus elementos que en verdad constituya una opción de vida y desarrollo.

Adicionalmente, se requiere que las instituciones de seguridad pública cuenten con personal certificado por una instancia que brinde certeza en la prestación del servicio público encomendado. De singular relevancia resulta esta disposición, en tanto tiende a combatir factores de riesgo para la corrupción al garantizar que quienes forman parte de las Instituciones de seguridad pública sean sometidos a rigurosos exámenes de control de confianza, que abarquen desde la ausencia de adicciones toxicológicas, hasta un adecuado desarrollo patrimonial, pasando por la verificación de la inexistencia de vínculos con la delincuencia, o aspectos personales que los hagan proclives a desviaciones del poder.

Esa fue la intención del Constituyente permanente al reformar el artículo 21 Constitucional, ya que determinó como requisito para que los agentes de policía puedan realizar sus funciones de prevención e investigación del delito, que se sometan a un proceso de certificación, cuyas directrices deberán establecerse en las leyes federales e incorporadas en las legislaciones locales.

La reforma constitucional trascendió también a la estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia, ordenando una alineación de las capacidades del Estado Mexicano contra el crimen organizado; en este respecto, reconoció las facultades de investigación para el combate y prevención del delito a las instituciones policiales, mismas que en el ejercicio de aquella función actuarán bajo la conducción del Ministerio Público, pero sin que ello implique forzosamente una supeditación orgánica a la estructura ministerial.

La asignación de facultades para la investigación y prevención de los delitos a la policía, hace necesaria la creación o fortalecimiento de áreas especializadas en las diferentes actividades de las instituciones policiales; por ello, la presente iniciativa propone que las corporaciones de los tres órdenes de gobierno cuenten al menos con las áreas de investigación, prevención y reacción, a efecto de atender de manera eficaz y eficiente las demandas de la población en esta materia.

El paradigma policial que existe actualmente sufre severos cuestionamientos, los cuales obedecen fundamentalmente a la falta de capacidad de transmitir los resultados obtenidos en la lucha contra la delincuencia y en la prevención del crimen, así como en el alcance y sostenimiento de una situación que proteja los valores y bienes jurídicamente tutelados de la sociedad.

En este escenario, no se debe soslayar que la seguridad pública, en su acepción funcional, no sólo comprende la investigación de las conductas ilícitas cometidas, sino además, implica las más amplias tareas de prevención y, en general, preservación de los bienes y derechos de los gobernados.

En efecto, tradicionalmente, el enfoque policial implica operar reactivamente, a la espera de que un delito haya sido cometido o se esté cometiendo, para posteriormente intentar solucionarlo y detener a los responsables.

Esta no es una visión aceptable para las amenazas nacionales e internacionales que actualmente conlleva el fenómeno delictivo, es necesario evitar la comisión de delitos, en lugar de investigarlos una vez ocurridos. Además, la experiencia nos ha enseñado que el narcotráfico es, frecuentemente, parte de las operaciones de las empresas criminales, por lo que en muchos de los casos, el arresto de los perpetradores de un solo crimen, puede no tener gran impacto sobre la asociación delictiva, pues inclusive podría tratarse de un costo aceptable para los jefes de dichas organizaciones.

Por ello, es indispensable adoptar un enfoque de inteligencia para este tipo de actividades; así, en lugar de esperar que ocurra una actividad criminal, la policía debe reunir información permanentemente sobre diversos grupos e individuos, sus motivaciones, recursos, interconexiones, intenciones, entre otras cosas, con la finalidad de prevenir delitos.

Considerando lo anterior, debemos aceptar que la seguridad pública tiene diferentes ámbitos, sin embargo, es pertinente hacer la aclaración que esa especialización no implica necesariamente la pulverización de las capacidades del Estado.

La ruta tradicionalmente adoptada por las corporaciones policiales, en lo relativo a la especialización de las áreas encargadas respectivamente de la pluralidad de temas inherentes a la seguridad pública, ha derivado en una errónea fragmentación del mando policial.

Tal circunstancia ha generado, además de una división orgánica de los cuerpos policiales, falta de coordinación entre las mismas, e incluso, una lógica rivalidad entre las distintas agencias, que llega al extremo de no compartir la información de inteligencia para el combate al crimen; circunstancias que se traducen finalmente en la desorganización de las capacidades del Estado para hacer frente al fenómeno delictivo y el fortalecimiento del flagelo criminal.

Esa dispersión orgánica implica duplicidad de funciones y dualidad de gasto, sin mencionar la pérdida gradual de la capacidad de garantizar un adecuado esquema de control de confianza, así como una total carencia de coordinación, congruencia y homogeneidad de protocolos, sistemas, formas de organización, grados y atribuciones policiales.

Esa situación, puede entenderse en el contexto de las múltiples autonomías en los niveles municipal, estatal y federal; por lo que se hace necesaria la determinación de disposiciones generales que conlleven a la homogeneidad de grados, perfiles, procedimientos y esquemas de organización en las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno.

Por otra parte, la viabilidad de un Sistema Nacional de Seguridad Pública eficaz en las tareas propias de la función pública, hace imprescindible la operación e instrumentación de sistemas que garanticen el adecuado

intercambio de información en materia de seguridad pública y que generen inteligencia apta para el ejercicio de las atribuciones de los órganos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

En este contexto y ante la crisis de inseguridad que vive el país, existe la imperiosa necesidad de desarrollar sistemas informáticos de vanguardia que proporcionen información de inteligencia idónea y oportuna para el combate de la delincuencia. Así, Plataforma México se constituye en un novedoso instrumento de la más avanzada tecnología que hace frente al desarrollo tecnológico de la delincuencia y concentra la información que es necesaria en la planeación de las operaciones policiales. Nunca antes un programa informático había llegado a tener tal importancia en la función policial, debido a la utilidad que representa y que puede potenciar.

La regulación para el suministro, sistematización y acceso a la información que generen los órganos de seguridad pública en el país constituye una garantía para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, y para preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Del mismo modo, a efecto de brindar seguridad pública con respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, la Ley propuesta plantea la regulación del uso de la fuerza que ejercen los cuerpos de seguridad pública en cumplimiento de sus funciones.

La función policial es sin duda la responsabilidad más delicada del Estado en tiempos de paz. A la policía se le ordena cumplir y hacer cumplir la ley por medio de poderes diversos, entre los cuales destacan el uso de la fuerza y en particular el empleo de las armas de fuego. Al aplicar estos medios, en aras de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, la policía se convierte en el instrumento que pone en riesgo y violenta tales derechos, precisamente por la enorme dificultad que supone controlar en todo momento el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas a las corporaciones.

Las instituciones de seguridad pública han desempeñado distintas misiones dentro de sus rutinas y servicios que proveen a la ciudadanía. Si bien puede reconocerse que en la mayoría de los casos los elementos de las instituciones de seguridad pública cumplen con su deber, es también visible el cúmulo de situaciones en los que el uso de la fuerza pública excede los límites de una coerción que se limite a controlar conductas ilícitas o infractoras de normas de policía, por ello es inaplazable iniciar una profunda reforma a la doctrina, las políticas, las normas, los procedimientos y las formas de gestión y control de las corporaciones policiales.

Sin lugar a dudas, los puntos de contacto entre las policías con los sujetos que cometen faltas administrativas o delitos, tienen diferentes aristas en las que el principio de legalidad debe hacerse valer, así como también el principio de la debida diligencia, que sustituye al viejo concepto del cumplimiento del deber hasta la última de sus consecuencias y por todos los medios posibles, hecho que ha propiciado el surgimiento de incentivos y márgenes de acción, sobre la base de reglas informales o formales, a la conducta ilegítima y el abuso de la fuerza.

En la actualidad las policías preventivas modernas tienen normas que regulan todos y cada uno de sus procedimientos para el uso de la fuerza necesaria y el cumplimiento de distintas operaciones; no obstante, en la medida que dichas normas prevean situaciones generales y específicas uniformes y delimiten el tipo de intervención policial, tanto los sujetos obligados como los integrantes de las corporaciones de seguridad pública tendrán un lineamiento objetivo que les asegure un ejercicio correcto de la autoridad.

La actuación de la policía debe contar con un marco normativo que le brinde seguridad jurídica; al mismo tiempo que la ciudadanía debe conocer y saber cuáles son los límites del uso de la fuerza pública en los procedimientos policiales. Ambos aspectos, hasta hoy, no han sido establecidos o definidos en una ley federal, por tanto, se siguen presentando controversias sobre el grado de apego que tiene diversos procedimientos policiales con respeto a los Derechos Humanos de los sujetos que debido a las circunstancias delictivas, son sometidos por los policías. No hay policía democrática cuando ésta no regulariza la relación armónica con los derechos humanos, cuando sus miembros no son reconocidos como autoridad con plenos derechos y obligaciones, y cuando el uso de la fuerza no es sujeto de control que garantice, al mismo tiempo, su eficacia y uso legítimo.

La importancia de una ley que precise este marco de actuación es sustantiva, ya que es necesario contar con una policía profesional al pleno servicio de la ciudadanía; haciendo eco de que la mejor policía es la que interactúa de manera proactiva con las comunidades y la que reacciona con métodos, prudencia y firmeza



ante cualquier violación a los derechos e integridad de las personas y las normas que sustenta el Estado de Derecho.

Desde esta perspectiva, la Iniciativa que se presenta, permite dar respaldo firme para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la medida que, por primera vez, desde una norma general, es posible inducir criterios técnicos, operativos, de procedimiento y de responsabilidad policial, con una mayor claridad que la que se consigue a través de manuales, códigos de ética y otros instrumentos de normas secundarias vigentes.

Ante la necesidad de combatir el crimen, pero sin exceder los límites del uso de la fuerza necesaria, la ley en proyecto atiende dos puntos: en primer lugar facilita el trabajo de las policías, aun y cuando recurran al uso de dicha fuerza; y segundo, se asegura que éstas no se desborden, por tanto, se trata de una ley que provee garantías complementarias al respeto de los Derechos Humanos en nuestro país.

La inclusión de la regulación de los procedimientos policiales en la Ley General que se propone, abre la posibilidad de que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, establezcan, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las normas de actuación en los distintos procedimientos al tenor de principios generales que garanticen un desempeño uniforme de la función de la seguridad pública en las corporaciones policiales.

Tal regulación se torna obligatoria si se toma en consideración que la Organización de las Naciones Unidas, de la cual México forma parte, ha emitido instrumentos internacionales en sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Específicamente es oportuno precisar los PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

Así, con la Ley General que ahora se propone, se pretende dar precisión a lo que no está regulado y se busca dar respuesta a las principales demandas en torno a la organización y actuación de los cuerpos de policía, pues en efecto, la falta de profesionalización y la improvisación del policía en México, constituyen un paradigma que prevalece en el ideario colectivo de nuestra sociedad, que a pesar de los recientes esfuerzos, no ha podido ser desterrado.

Bajo el entendido que la calidad de vida pasa por las condiciones de seguridad pública en las que un ciudadano desarrolla sus actividades cotidianas, la sociedad demanda con urgencia, como no lo había hecho antes, eficacia plena en la lucha contra la delincuencia organizada, la cual sólo se puede dar a través de una completa profesionalización policial.

La ciudadanía ha hecho énfasis en múltiples aspectos que abarcan: la falta de ética, programas, métodos de prevención, técnicas de investigación, sanciones eficaces y ejemplares para los servidores públicos que deben garantizar la seguridad pública en México y que se valen del cargo para delinquir; aunado a ello, una dolencia de la sociedad es una coordinación en ciernes entre los niveles de gobierno para resolver un problema que es común a todos, que más allá del protocolo, se traduzca en un sano entendimiento entre la federación, estados y municipios.

Por ello, en la presente iniciativa, se propone reformar el sistema de seguridad pública, y atacar el problema estructuralmente a través de un sistema integral que contemple la prevención, investigación y persecución de las conductas antisociales.

La Ley General que se somete a consideración de esa Honorable Soberanía, presenta el siguiente perfil de su estructura y contenido.

En el Título Primero, *Disposiciones Preliminares*, la Ley establece las disposiciones que orientan el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios a efecto de hacerlo efectivo, de igual forma define las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.

El Título Segundo *De las Instancias de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública*; prevé la creación del Consejo Nacional como máxima instancia de deliberación del Sistema; los Órganos e Instancias Auxiliares para el impulso y desarrollo de las distintas materias de coordinación a que se refiere la Ley, dentro de las cuales se plantean las conferencias de Secretarios de Seguridad Pública, la de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario, de Prevención del Delito, la de Participación Municipal y el establecimiento de los Consejos Regionales y Locales de Coordinación, encargados de la coordinación, planeación y supervisión del sistema en sus respectivos ámbitos de competencia.

Consciente de la fuerza que genera la sociedad civil en las tareas cotidianas de prevención de las conductas sociales, y de la importancia que tiene el núcleo familiar al ser generador y transmisor de valores ante la comunidad, la presente Ley regula el Consejo de Prevención del Delito, y le encomienda lo que antes fue una labor aislada en su actuar y al margen de las instituciones de seguridad pública, pero que en estos momentos se convierte en misión histórica: promover la cultura de prevención del delito, impulsar la coordinación entre las instancias educativas a fin de generar los lineamientos que orienten a los educandos, docentes y padres de familia, respecto al fenómeno delictivo; colaborar con las instituciones públicas y privadas para llevar a cabo programas en materia de prevención de adicciones y en sí, todo tipo de actividades encaminadas a la inhibición de las conductas delictivas y la preservación de la integridad de las familias mexicanas.

El Título Tercero, *De la Distribución de Competencias*, incluye la distribución de competencias entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, conceptualizando a la seguridad pública como una materia concurrente.

El Título Cuarto, *De la Coordinación de las Instituciones de Seguridad Pública*, comprende la coordinación entre el Ministerio Público de la Federación, del Distrito Federal y de los Estados, así como la coordinación del Ministerio Público con la Policía en los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar el cumplimiento de la presente Ley y hacer efectiva la coordinación del Sistema.

El Título Quinto, *Disposiciones comunes a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública*, el cual contempla el catálogo de deberes de los servidores públicos que integran las instituciones de seguridad pública, los sistemas complementarios de seguridad social, la identificación del personal de dichas Instituciones y el reconocimiento al personal.

El Título Sexto, *Del Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia*, el cual comprende los requisitos de ingreso al servicio de carrera de las Instituciones de procuración de justicia, así como el desarrollo y terminación del servicio de carrera, la profesionalización y certificación del personal en dichas instituciones.

El Título Séptimo, *Del Desarrollo Policial*, define el Desarrollo Policial como un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las Instituciones y tiene por objeto, garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio, y garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales.

Determina que su ámbito de aplicación sea general, es decir que es aplicable a los elementos de los tres órdenes de gobierno que desarrollen funciones de seguridad pública, incluidas las de investigación para la prevención y combate de los delitos; y establece las materias que son objeto de coordinación intergubernamental en materia del desarrollo de las policías, su servicio de carrera, así como las atribuciones que tienen la Federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios para llevar a cabo dicha coordinación.

La Ley propuesta establece que el Servicio Civil de Carrera Policial tendrá carácter obligatorio y permanente en las Instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lo cual se define un marco normativo general para prevenir que no ingresen a las corporaciones de seguridad pública personas cuyo perfil no sea el adecuado. El mismo Título define los subsistemas que forman parte de la estructura de la carrera policial: el ingreso y permanencia, la selección y sus criterios generales, la definición del personal que se considera activo en el servicio; la certificación de los elementos de las corporaciones de seguridad pública y sus mandos, los estímulos asignables a los elementos con trayectorias distinguidas, las reglas generales para las promociones y ascensos, las normas de conclusión del servicio de los elementos y las previsiones y normas que determinan cuándo podrá darse de baja a un elemento del servicio.

Lo anterior, bajo de la perspectiva de que la carrera policial es el elemento básico para la formación de los integrantes de las instituciones policiales, a fin de cumplir con los principios de actuación y desempeño.

No obstante y a efecto de que en las Instituciones estén los Integrantes con el más alto grado de compromiso y desempeño en el servicio público, se prevé un régimen disciplinario enfocado a asegurar que la actuación de los integrantes de las instituciones policiales esté regida por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, para lo cual establece los deberes mínimos que los elementos de las corporaciones de seguridad pública deberán cumplir, así como los procedimientos genéricos para calificar y aplicar las sanciones que correspondan a la inobservancia de las normas establecidas en la Ley y por las infracciones en que se incurra durante el desempeño dentro del servicio.

Asimismo, propone la constitución de órganos policiales que deberán erigirse en las diferentes corporaciones de seguridad pública para efectos de conducir los procesos de la carrera policial en sus diferentes etapas; los órganos que se instituyen en la Ley son los siguientes:

1. Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza, como órgano encargado de dirigir, coordinar y certificar los procesos de evaluación de los Integrantes de las Instituciones;
2. Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública, responsables de aplicar los procesos de evaluación sobre el cumplimiento de los perfiles definidos para los puestos policiales y los requisitos de ingreso y permanencia; así como certificar a los elementos que satisfagan tales requisitos y perfiles;
3. Academias de Formación, de Capacitación y Profesionalización Policial, organizadas por la Federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios, que serán responsables de aplicar los planes y programas de capacitación, adiestramiento, profesionalización y actualización de los aspirantes, candidatos e Integrantes de los cuerpos policiales, así como el cumplimiento de los perfiles genéricos;
4. Instancias colegiadas, establecidas por la Federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios, en los que participen representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las instituciones policiales, que serán las encargadas de conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite en relación con los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario.

La Ley define el perfil de las dos principales instancias reconociéndolas como las Comisiones de Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y Justicia. El establecimiento de estas instituciones constituye un avance considerable de la nueva ley propuesta, pues viene a subsanar un vacío de la anterior Ley de Bases, que no establecía los órganos encargados de desempeñar las tareas relativas al servicio profesional de carrera y el régimen disciplinario de las instituciones de Seguridad Pública.

Además, su integración colegiada y representativa de las diferentes divisiones en que se organizan las corporaciones policiales contribuirá a reducir los riesgos de corrupción y fortalecerá la legitimidad de sus resoluciones.

La integración y mando en las corporaciones policiales es un eje fundamental para su funcionamiento, por ello se determinan también las jerarquías y grados policiales que podrán obtenerse en la carrera policial, así como la identificación de los mandos en que se habrán de estructurar los puestos con autoridad y capacidad de dirección de las corporaciones, y el orden de la sucesión de mandos para determinar la responsabilidad que estos asumen en casos de suplencia o habilitación del ejercicio de autoridad de las corporaciones.

El Título Octavo, *Del Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza*, que comprende las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios, tendentes a cumplir con los objetivos de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

En la Ley se establece que corresponde al Centro Nacional de Evaluación y Confianza, proponer los criterios mínimos para la evaluación de los servidores públicos, tomando en consideración las propuestas de las

conferencias; se promueve a través de esta instancia la homologación, validación y actualización en todo el país, de los procedimientos y criterios de evaluación de los servidores públicos.

El Título Noveno, *De la Información sobre Seguridad Pública*, establece que la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, analizarán y actualizarán oportuna y diariamente, la información sobre seguridad pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos que la integran, a fin de garantizar la integración y operación de la información; de igual manera, prevé el Sistema Único de Información Criminal, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Armamento y Equipo, y la Estadística de Seguridad Pública como partes integrantes de Plataforma México, cual se conceptualiza como un sistema de interconexiones de voz, datos y video, que proporcione a las Instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, la información precisa y constante en materia de seguridad pública, que generen inteligencia apta para el ejercicio de las atribuciones que tienen encomendadas.

El Título Décimo, *De la Participación de la Comunidad*, prevé el establecimiento de mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la seguridad pública, privilegiando con ello la participación ciudadana, en la inteligencia de que sociedad y derecho constituyen un binomio indisoluble cuya dinámica debe estar encaminada a un mismo fin.

El Título Décimo Primero, *De las Responsabilidades de los Servidores Públicos*, tiene como finalidad asegurar el debido manejo o aplicación de los recursos de los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública; para ello tipifica los delitos en materia de seguridad pública, como delitos especiales.

El Título Décimo Segundo, *De las Instalaciones Estratégicas*, relativo a la protección, supervisión y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano en términos de la Ley de Seguridad Nacional.

El Título Décimo Tercero, *De los Servicios Privados de Seguridad*, dispone las facultades de la Federación y Entidades Federativas en la autorización de los servicios privados de seguridad, así como la participación de éstos en cuanto son auxiliares de la función de seguridad pública.

Por último, el Título Décimo Cuarto, *De los Procedimientos Policiales*, tiene como propósito regular de manera general el uso de la fuerza que ejercen los cuerpos de seguridad pública en cumplimiento de sus funciones para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Esta iniciativa contempla todos los supuestos que responden a los puntos que históricamente han vulnerado la confianza de la ciudadanía en sus policías:

Ante la impunidad policial, se propone un verdadero régimen disciplinario basado en un estricto sistema que le brinde al integrante la oportunidad de ser escuchado en su defensa.

Ante la corrupción, se propone el proceso de certificación del integrante para eliminar conductas de riesgo que afecten el desarrollo de la función de seguridad pública.

Ante la improvisación, se propone la profesionalización de los cuerpos policiales, de manera integral, desde su formación hasta la profesionalización propiamente dicha, pasando por la capacitación.

Ante la inestabilidad y falta de motivación profesional, se propone un verdadero servicio de carrera policial, a efecto de brindar una verdadera opción de vida a quienes tienen la vocación de velar por la seguridad de todos los mexicanos.

En suma, el nuevo modelo de seguridad pública que contempla la iniciativa que hoy se somete a consideración de esa Honorable Soberanía, pretende colmar la expectativa de ésta y las siguientes generaciones, porque representa la decidida voluntad del gobierno de la República por atender la

preocupación ciudadana y por formular un nuevo planteamiento, en la perenne edificación de una cultura de la legalidad y la seguridad pública.

Por las razones expuestas anteriormente, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esa Soberanía somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de

**DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se **EXPIDE** la **Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública**:

**LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**TÍTULO PRIMERO**  
**DISPOSICIONES PRELIMINARES**

**Artículo 1.** La presente ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a la distribución de competencias para la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

**Artículo 2.** La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación, la persecución, la aplicación y la ejecución de sanciones por delitos en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.

**Artículo 3.** La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de los tribunales, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, de las encargadas de la protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

**Artículo 4.** El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendentes a cumplir los fines de la Seguridad Pública.

**Artículo 5.** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

- I. Academias: a las Academias de Formación, de Capacitación y de Profesionalización Policial;
- II. Carrera Ministerial: al Servicio Profesional de Carrera Ministerial;
- III. Carrera Pericial: al Servicio Profesional de Carrera Pericial;
- IV. Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial;

- V. Capacitación:** el conjunto de procedimientos de formación y actualización de Servidores Públicos;
- VI. Centro Nacional:** al Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza;
- VII. Certificación:** el proceso mediante el cual se acredita que el servidor público es apto para ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública y, en su caso, que ha desarrollado y mantiene actualizado el perfil, habilidad y aptitudes requeridos para el desempeño de su cargo;
- VIII. Comisiones:** a las Comisiones del servicio profesional de carrera policial, de honor y justicia, o de desarrollo policial de las Instituciones Policiales;
- IX. Conferencias Nacionales:** a las Conferencias a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley;
- X. Consejo Nacional:** al Consejo Nacional de Seguridad Pública;
- XI. Evaluación:** el mecanismo para estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los aspirantes y servidores públicos;
- XII. Formación:** el proceso mediante el cual se desarrollan las capacidades, se amplían los conocimientos y las destrezas que el aspirante requiere para el ejercicio profesional en un área específica;
- XIII. Ingreso:** el acto mediante el cual se otorga el nombramiento como servidor público de alguna institución de Seguridad Pública;
- XIV. Instituciones de Seguridad Pública:** a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local o municipal;
- XV. Instituciones de Procuración de Justicia:** a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél;
- XVI. Instituciones Policiales:** a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;
- XVII. Institutos de Capacitación:** a las Direcciones, Coordinaciones e Institutos que a nivel Federal y de las Entidades Federativas se encargan de impartir la formación de aspirantes y servidores públicos de las funciones ministerial, pericial y de policía ministerial;
- XVIII. Permanencia:** el vínculo entre el servidor público y la Institución de Seguridad Pública, resultante del cumplimiento constante de los programas de capacitación y profesionalización, así como los procesos de evaluación y certificación establecidos en la normatividad aplicable;
- XIX. Profesionalización:** el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, capacitación, actualización, ascenso, y promoción, adiestramiento y especialización, y en su caso, alta dirección para desarrollar al máximo las competencias, capacidades, habilidades y destrezas de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública, que garantice el óptimo ejercicio de sus atribuciones;
- XX. Programa Rector:** a los Programas Rectores de profesionalización para Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia, respectivamente;
- XXI. Reconocimiento:** la distinción que se otorga a los servidores públicos que se hayan destacado en el desempeño de sus funciones;

**XXII.** Registro Nacional: el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública;

**XXIII.** Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal;

**XXIV.** Selección: el procedimiento que tendrá por objeto determinar, de entre los aspirantes que sean reclutados, a aquellos que cumplan con los requisitos previstos en esta Ley, así como en las demás disposiciones aplicables, para realizar los estudios de formación y capacitación iniciales respectivos;

**XXV.** Servidor Público: la persona física que desempeña un empleo, cargo o comisión en alguna de las Instituciones de Seguridad Pública, y

**XXVI.** Sistema: al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 6.** La actuación de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, disciplina y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 7.** Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

**I.** Integrar el Sistema;

**II.** Formular políticas y estrategias en materia de seguridad pública, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;

**III.** Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia;

**IV.** Asignar actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;

**V.** Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;

**VI.** Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;

**VII.** Determinar criterios uniformes para la organización, administración, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública;

**VIII.** Establecer bases de datos criminalísticos, así como del personal para las Instituciones de Seguridad Pública;

**IX.** Suministrar, intercambiar y sistematizar la información que genere el Sistema;

**X.** Establecer los lineamientos y niveles de acceso de las bases de datos del Sistema, así como regular el suministro, consulta, intercambio, sistematización y explotación de información sobre Seguridad Pública;

**XI.** Coordinar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;

**XII.** Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país;

**XIII.** Determinar la participación de la comunidad en la coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública;

**XIV.** Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y

**XV.** Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.

**Artículo 8.** La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con respeto de las atribuciones constitucionales que tengan las Instituciones y autoridades que conforman e intervengan en el Sistema.

Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines en términos de la Ley Coordinación Fiscal.

**Artículo 9.** La organización y ejecución de las acciones y materias previstas en esta Ley, se sujetará a las normas que a continuación se indican, de acuerdo con el siguiente orden jerárquico:

I. La presente Ley;

II. Las resoluciones y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional;

III. Las resoluciones y acuerdos que emitan las Conferencias Nacionales, en sus respectivos ámbitos de competencia, y

IV. Los convenios generales y específicos que al efecto se celebren.

El incumplimiento de las disposiciones antes señaladas será sancionado en los términos del presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables.

Los convenios generales y específicos que se celebren, establecerán esquemas que garanticen su debido cumplimiento y las consecuencias jurídicas resultantes en caso contrario.

## **TÍTULO SEGUNDO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

### **CAPÍTULO I De la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 10.** El Sistema se integrará por:

I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;

II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;

IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;

V. La Conferencia Nacional de Participación Municipal, y

VI. La Conferencia Nacional de Prevención del Delito.

La Conferencia Nacional de Presidentes de Tribunales participará en dicho Sistema.

**Artículo 11.** En la formulación y ejecución de programas, estrategias, acciones, políticas y servicios, las Conferencias Nacionales deberán coordinarse entre sí. El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Nacional.



El Secretariado Ejecutivo se coordinará con los Presidentes de las Conferencias Nacionales para dar seguimiento a las resoluciones que se adopten por el Consejo Nacional, en los términos de esta Ley.

## **CAPÍTULO II**

### **Del Consejo Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 12.** El Consejo Nacional estará integrado por:

- I.** El Secretario de Gobernación, quien lo presidirá;
- II.** El Secretario de Seguridad Pública;
- III.** El Procurador General de la República;
- IV.** Los Gobernadores de los Estados;
- V.** El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y
- VI.** El Secretario Ejecutivo del Sistema.

El Consejo Nacional designará, a propuesta del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien podrá ser removido libremente por dicho Secretario de Seguridad Pública.

**Artículo 13.** La Presidencia del Consejo Nacional, para el apoyo de sus funciones en el marco del Sistema, contará con una Secretaría Técnica, cuyo titular será nombrado y removido por el Presidente del Consejo Nacional y la cual tendrá las siguientes funciones:

- I.** Elaborar los proyectos de acuerdos y resoluciones generales que proponga el Presidente del Consejo Nacional para el funcionamiento del Sistema;
- II.** Sugerir al Presidente del Consejo Nacional mecanismos y estrategias que impulsen la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema;
- III.** Auxiliar al Presidente del Consejo en la formulación de propuestas para los programas de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;
- IV.** Preparar las propuestas que presente el Presidente del Consejo Nacional para la evaluación y cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- V.** Recomendar al Presidente del Consejo Nacional los mecanismos que proponga en el seno del Sistema, para el seguimiento de los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales;
- VI.** Proponer al Presidente del Consejo Nacional políticas para la participación de la comunidad;
- VII.** Elaborar los informes que resulten necesarios para el Presidente del Consejo Nacional;
- VIII.** Las demás que se establezcan en otras disposiciones, el Presidente del Consejo y las demás que sean necesarias para el funcionamiento de la Presidencia del Consejo Nacional.

El personal de confianza de las unidades administrativas de la Secretaría de Gobernación que preste asesoría en materia operativa, técnica y jurídica al Titular de dicha Dependencia como integrante del Consejo Nacional, así como de la Secretaría Técnica, será de libre designación y remoción. Para tal efecto el Secretario de Gobernación emitirá el Acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.

**Artículo 14.** El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

- I.** Impulsar los instrumentos y políticas públicas tendentes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública;
- II.** Emitir acuerdos y resoluciones generales que resulten necesarios para el funcionamiento del Sistema;
- III.** Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad Pública;
- IV.** Asegurar la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;
- V.** Promover la homologación de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública;
- VI.** Sugerir acciones de mejora para perfeccionar el Sistema;
- VII.** Verificar los avances del desarrollo ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública;
- VIII.** Vigilar que los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se observen en los términos de las disposiciones que resulten aplicables;
- IX.** Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación en el seguimiento de las observaciones y recomendaciones que ésta emita respecto del destino de los fondos de ayuda federal en materia de seguridad pública;
- X.** Formular propuestas para los programas de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;
- XI.** Formular propuestas para la evaluación y cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XII.** Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XIII.** Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de gobierno;
- XIV.** Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;
- XV.** Promover que las Instituciones de Seguridad Pública cuenten con una unidad de consulta y participación de la comunidad;
- XVI.** Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública, y
- XVII.** Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

**Artículo 15.** El Consejo Nacional se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.

Corresponderá al Presidente, además, la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema.

Los miembros del Consejo Nacional podrán proponer acuerdos y resoluciones, así como vigilar su cumplimiento.

**Artículo 16.** El Consejo Nacional podrá formar las comisiones y conferencias necesarias para las diferentes áreas de la materia y en particular, para el estudio especializado de las incidencias delictivas; en ellos podrán participar las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno.

Con la misma finalidad, se invitará a expertos, instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionadas con la materia.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 17.** El Secretario Ejecutivo del Sistema deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no tenga otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
- II. Tener más de treinta años de edad;
- III. Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado, y
- IV. Ser de reconocida capacidad y probidad, así como contar con experiencia en áreas de Seguridad Pública.

**Artículo 18.** Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:

- I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente;
- II. Proponer mejoras para administrar y sistematizar los instrumentos de información del Sistema, así como recabar todos los datos que se requieran;
- III. Realizar estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública, someterlos a consideración del Consejo Nacional y formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento;
- IV. Levantar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven;
- V. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;
- VI. Informar al Consejo Nacional sobre el incumplimiento a las disposiciones de esta Ley, a los convenios generales y específicos en la materia, o demás disposiciones normativas aplicables;
- VII. Hacer propuestas al Consejo Nacional y a las Conferencias Nacionales para la integración de los Programas Nacionales de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia, así como vigilar que en los mismos se prevean mecanismos y políticas de coordinación;
- VIII. Proponer al Consejo Nacional políticas, lineamientos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública;
- IX. Formular propuestas para que las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, desarrollen de manera más eficaz sus funciones;
- X. Promover la realización de acciones conjuntas, conforme a las bases y reglas que emita el Consejo Nacional;

**XI.** Vigilar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí;

**XII.** Solicitar informes a los Secretarios Técnicos de las Conferencias Nacionales, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas, e informar al Consejo Nacional;

**XIII.** Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional;

**XIV.** Apoyar a las Instituciones de seguridad pública en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial;

**XV.** Impulsar la integración de las bases de datos criminalísticos, así como la sistematización de la información, su uso y explotación por las Instituciones de Seguridad Pública, en sus respectivos ámbitos de competencia, y

**XVI.** Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Nacional.

#### **CAPÍTULO IV**

##### **De la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia**

**Artículo 19.** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estará integrada por los titulares de las Instituciones de Procuración de Justicia de la Federación, el Distrito Federal y los Estados, y será presidida por el Procurador General de la República.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

**Artículo 20.** El Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia podrá convocar a titulares de otras áreas diversas a la Seguridad Pública por razón de los asuntos a tratar.

El Procurador General de Justicia Militar será invitado permanente de esta Conferencia.

**Artículo 21.** Son atribuciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

**I.** Impulsar la integración del Sistema;

**II.** Determinar las políticas de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia;

**III.** Promover la coordinación entre las Instituciones de Procuración de Justicia y con las Instituciones Policiales;

**IV.** Formular propuestas para la integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia y demás instrumentos programáticos relacionados con el ámbito de su competencia, así como darles seguimiento;

**V.** Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia;

**VI.** Proponer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;

**VII.** Analizar los proyectos y estudios que sobre Seguridad Pública y Procuración de Justicia se sometan a su consideración;

**VIII.** Ordenar la instalación de Comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones, así como proponer a sus integrantes;

**IX.** Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación conjuntos;

**X.** Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

**XI.** Formular propuestas en materia del servicio profesional de carrera de la policía ministerial;

**XII.** Promover la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización;

**XIII.** Promover la homologación de los procedimientos de evaluaciones de control de confianza de los Integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia, de conformidad con las disposiciones aplicables;

**XIV.** Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de procuración de justicia, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes. Tratándose de policías ministeriales, se estará a lo dispuesto en esta ley para las instituciones policiales;

**XV.** Establecer mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos, con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;

**XVI.** Impulsar las acciones necesarias para promover la denuncia de los delitos y la participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia;

**XVII.** Determinar las políticas y lineamientos para que la información contenida en las averiguaciones previas, procesos penales y juicios de amparo, se integre a las bases de datos que establece el presente ordenamiento;

**XVIII.** Establecer políticas de enlace con el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas;

**XIX.** Fijar reglas de cooperación y coordinación para la entrega de indiciados, procesados y sentenciados; el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales; el aseguramiento de bienes instrumento, objeto o producto de delitos, y el desahogo de diligencias judiciales, ministeriales y periciales;

**XX.** Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

**XXI.** Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas, atención a víctimas y ofendidos de delitos y, en su caso, formular propuestas en materia de prevención del delito;

**XXII.** Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación internacional en materia de procuración de justicia;

**XXIII.** Establecer lineamientos de colaboración para el desahogo de procedimientos de extradición y asistencia jurídica, en términos de los instrumentos jurídicos internacionales de los que México sea parte;

**XXIV.** Definir criterios uniformes para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, y de los instrumentos, objetos o productos del delito;

**XXV.** Promover la uniformidad de criterios jurídicos, y

**XXVI.** Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 22.** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se reunirá cada seis meses de manera ordinaria. El Presidente de dicha Conferencia podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo estime necesario.

## **CAPÍTULO V**

### **De la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública**

**Artículo 23.** La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública estará integrada por los titulares de las Instituciones Policiales de la Federación, los Estados y el Distrito Federal y será presidida por el Secretario de Seguridad Pública Federal.

La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

Los titulares de las dependencias u órganos en que se integren los cuerpos de policía de los municipios, podrán participar en la Conferencia, de conformidad con las reglas que la misma establezca.

**Artículo 24.** El Presidente de la Conferencia podrá convocar a titulares de otras Instituciones públicas por razón de los asuntos a tratar.

**Artículo 25.** Son atribuciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

**I.** Garantizar la coordinación de las actuaciones de las Instituciones Policiales en los asuntos que afecten a la Seguridad Pública;

**II.** Promover e impulsar la coordinación de los tres niveles de gobierno a fin de instrumentar las políticas de Seguridad Pública;

**III.** Dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Rector de Profesionalización en las Instituciones Policiales;

**IV.** Elaborar propuestas de reformas a leyes y reglamentos en materia de Seguridad Pública;

**V.** Proponer las medidas para vincular el Sistema con otros nacionales, regionales o locales;

**VI.** Proponer programas de cooperación internacional sobre Seguridad Pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;

**VII.** Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación internacional en materia de Seguridad Pública;

**VIII.** Analizar los proyectos y estudios que en materia de Seguridad Pública se sometan a su consideración;

- IX.** Supervisar la aplicación y el funcionamiento del Sistema Integral de Desarrollo Policial en términos de la presente Ley;
- X.** Ordenar la instalación de los Comités que sean necesarios en la materia, así como proponer a sus integrantes;
- XI.** Desarrollar las especialidades policiales de alto desempeño para hacer frente a los delitos de impacto nacional e internacional;
- XII.** Emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo, entre corporaciones policiales federales, locales y municipales;
- XIII.** Impulsar las acciones necesarias para que los integrantes del Sistema establezcan un servicio para la localización de personas y bienes;
- XIV.** Promover el establecimiento de un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre emergencias, faltas y delitos de que tengan conocimiento;
- XV.** Garantizar que en las Instituciones Policiales se aplique homogénea y permanentemente, el protocolo de certificación correspondiente, aprobado por el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza;
- XVI.** Proponer los requisitos que debe contener el Certificado Único Policial;
- XVII.** Promover la aplicación homogénea de los criterios de recopilación de información en las Instituciones de Seguridad Pública;
- XVIII.** Garantizar el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en Plataforma México;
- XIX.** Establecer mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos, con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
- XX.** Proponer reglas generales para la vigilancia y acciones conjuntas necesarias a efecto de proteger las instalaciones estratégicas del país, y
- XXI.** Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

## **CAPÍTULO VI**

### **De la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario**

**Artículo 26.** La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, estará presidida por el funcionario que designe el titular de la Secretaría, se integrará por las autoridades de los tres órdenes de gobierno encargados de los sistemas penitenciarios y tendrán las siguientes funciones:

- I.** Impulsar la consolidación del Sistema Penitenciario Nacional;
- II.** Homologar los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de readaptación o reinserción social;
- III.** Proponer al Consejo Nacional políticas públicas en materia de readaptación y reinserción social;
- IV.** Proponer mecanismos para adoptar la educación y el deporte como medios de reinserción social;
- V.** Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción social en las legislaciones aplicables;

**VI.** Suministrar, sistematizar, consultar, actualizar e intercambiar información en las bases de datos del Sistema Único de Información Criminal, y

**VII.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.

## **CAPÍTULO VII**

### **De la Conferencia Nacional de Prevención del Delito**

**Artículo 27.** La Conferencia Nacional de Prevención del Delito, tendrá la integración que el Consejo Nacional determine.

**Artículo 28.** La Conferencia Nacional de Prevención del Delito, tendrá las siguientes atribuciones mínimas:

**I.** Impulsar entre la población la cultura de la legalidad y de prevención del delito.

**II.** Promover la realización de estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar las políticas criminal y de seguridad pública nacional;

**III.** Promover la realización de encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;

**IV.** Establecer los mecanismos para obtener, procesar e interpretar la información geodelictiva y de los factores que generan conductas antisociales, así como identificar las zonas, sectores y grupos de alto riesgo y sus correlativos factores de protección;

**V.** Impulsar la coordinación con las autoridades educativas a fin de orientar a las instituciones, alumnos, padres de familia y maestros acerca del fenómeno delictivo;

**VI.** Colaborar con las instituciones gubernamentales y civiles en la ejecución de programas tendentes a prevenir las adicciones;

**VII.** Promover la capacitación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública encargadas de la prevención del delito;

**VIII.** Elaborar programas cuyo objeto sea la preservación de la integridad de las familias, en tanto núcleos indispensables para la prevención de hechos delictivos;

**IX.** Impulsar políticas de prevención de violencia con perspectiva de género;

**X.** Proponer políticas para la ejecución de actividades culturales, deportivas o recreativas que sean útiles en la inhibición de conductas delictivas;

**XI.** Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención del delito, y

**XII.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales o el Consejo Nacional.

## **CAPÍTULO VIII**

### **De los Consejos Regionales y Locales de Coordinación**

**Artículo 29.** En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno.



En los consejos estatales participarán los municipios en los términos de la legislación de cada entidad federativa. En el caso del Distrito Federal, participarán las Delegaciones Políticas, de conformidad con la legislación aplicable.

**Artículo 30.** Los Consejos Locales se integrarán por las Instituciones de Seguridad Pública de la entidad de que se trate y de la Federación, en los términos del artículo 8.

Además, el Consejo podrá invitar a otras autoridades de cualquier orden de gobierno, según los temas a tratar.

**Artículo 31.** Cuando para el cumplimiento de la función de Seguridad Pública sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente, en las que participarán las Instituciones de Seguridad Pública correspondientes.

Del mismo modo podrán establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos estatales correspondientes. En el caso de las zonas conurbadas entre dos o más entidades federativas se podrán suscribir convenios e instalar instancias regionales con la participación de los municipios respectivos y de los órganos político administrativos, tratándose del Distrito Federal.

**Artículo 32.** Los consejos locales y las instancias regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines de la Seguridad Pública, en sus ámbitos de competencia.

**Artículo 33.** Los consejos locales y las instancias regionales podrán proponer al Consejo Nacional y a las Conferencias Nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.

### **TÍTULO TERCERO DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS**

**Artículo 34.** La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios quedará distribuida conforme a lo siguiente:

**A.** Corresponde a la Federación, por conducto de la Secretaría:

**I.** Proponer las acciones tendentes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios;

**II.** Coordinar el establecimiento del Modelo Policial;

**III.** Coordinar y supervisar el cumplimiento del Desarrollo Policial;

**1.** En materia de Carrera Policial, proponer al Consejo Nacional:

**a)** Las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos, promoción y reconocimiento de los Integrantes de las instituciones policiales;

**b)** Los lineamientos para los procedimientos de Carrera Policial que aplicarán el Consejo Federal y las Comisiones, y

**c)** Las normas en materia de previsión social;

**2.** En materia de Profesionalización:

**a)** Coordinar la integración del Programa Rector que contendrá los aspectos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización;

**b)** Proponer los procedimientos aplicables a la Profesionalización;

**c)** Proponer al Consejo Nacional los criterios para el establecimiento de las Academias e Institutos de Capacitación, y

**d)** Proponer al Consejo Nacional el desarrollo de los programas de investigación académica.

**3.** En materia de Régimen Disciplinario:

**a)** Proponer al Consejo Nacional los lineamientos para los procedimientos aplicables al Régimen Disciplinario.

**IV.** Formular propuestas al Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza, para mejorar los procedimientos y protocolos de evaluación a los integrantes de las Instituciones Policiales;

**V.** Integrar las propuestas del Programa Nacional de Seguridad Pública;

**VI.** Integrar las propuestas que formule la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y someterlas a aprobación del Consejo Nacional;

**VII.** Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones Policiales;

**VIII.** Proponer los criterios para la distribución de los recursos de los fondos en materia de seguridad pública;

**IX.** Celebrar los convenios que resulten necesarios para los fines del Sistema;

**X.** Proponer acciones para la vigilancia de las instalaciones estratégicas, y

**XI.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

**B.** Corresponde a los gobiernos del Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

**I.** Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que deriven de ésta;

**II.** Hacer efectiva la coordinación del Sistema;

**III.** Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario;

**IV.** Constituir y operar las Comisiones y las Academias a que se refiere esta Ley;

**V.** Asegurar su integración a la Plataforma México;

**VI.** Integrar y consultar en la Plataforma México, los expedientes de los aspirantes a ingresar en las Instituciones Policiales;

**VII.** Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan con el registro y certificación emitido por el centro de control de confianza respectivo;

**VIII.** Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo Policial, Ministerial y Pericial;

**IX.** Establecer centros estatales de control de confianza, conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza, así como garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable;

**X.** Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo Policial para el registro y seguimiento de indicadores en Plataforma México;

**XI.** Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las instalaciones estratégicas del país, y

**XII.** Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.

## **TÍTULO CUARTO DE LA COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

### **CAPÍTULO I**

#### **De la Coordinación entre el Ministerio Público de la Federación, del Distrito Federal y de los Estados**

**Artículo 35.** Cuando la investigación y persecución de los delitos tenga que realizarse en diversos ámbitos competencia de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, la coordinación y aplicación de esta ley, se hará con respeto irrestricto de las atribuciones constitucionales y legales del Ministerio Público.

En la función de investigación de los delitos, los cuerpos de policía de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, estarán sujetos a la conducción y mando del Ministerio Público.

**Artículo 36.** La coordinación entre los titulares del Ministerio Público de los ámbitos a que se refiere el artículo anterior, comprenderá las siguientes materias:

**I.** Investigación de delitos;

**II.** Intercambio de información;

**III.** Detención en flagrancia;

**IV.** Detención en caso urgente;

**V.** Investigaciones y operativos coordinados o conjuntos;

**VI.** Actualización del marco jurídico;

**VII.** Vinculación con los órganos jurisdiccionales;

**VIII.** Aseguramiento de instrumentos, objetos o productos del delito;

**IX.** Entrega de indiciados, procesados o sentenciados en cumplimiento de órdenes de aprehensión, comparecencia o reaprehensión y ejecución de órdenes ministeriales;

**X.** Criterios de oportunidad, beneficios legales y excluyentes del delito en el procedimiento penal;

**XI.** Extinción de dominio;

**XII.** Servicios periciales;

**XIII.** Combate a la corrupción;

**XIV.** Extradiciones y asistencia jurídica internacional, y

**XV.** Las demás necesarias para el perfeccionamiento de la averiguación previa y el proceso penal.

**Artículo 37.** Los anteriores mecanismos y acciones de coordinación se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales o específicos celebrados entre los titulares del Ministerio Público de los ámbitos competenciales a que se refiere este capítulo, sin perjuicio de la participación de otras Instituciones.

**Artículo 38.** Para la investigación y persecución de la delincuencia organizada, definida en los términos de la Ley de la materia, así como de delitos federales y del orden común, se celebrarán protocolos o procedimientos de colaboración que deberán contener reglas específicas de operación, entre otras disposiciones necesarias, a fin de garantizar el éxito de las averiguaciones previas.

**Artículo 39.** Tratándose de bases de datos nacionales, la institución del Ministerio Público se reservará la información que ponga en riesgo alguna investigación; misma que proporcionará al Sistema inmediatamente después que deje de existir tal circunstancia.

## **CAPÍTULO II**

### **De la Coordinación para la Investigación de los Delitos**

**Artículo 40.** Las facultades correspondientes al Ministerio Público y a la Policía en la investigación de los delitos se realizarán de manera coordinada, de acuerdo a los términos mínimos siguientes:

**I.** En la investigación de delitos:

- a)** Las Instituciones Policiales se sujetarán a la conducción y mando del Ministerio Público;
- b)** La investigación se realizará de conformidad con las disposiciones legales aplicables, los protocolos de actuación y las instrucciones que emita el Ministerio Público;
- c)** El Ministerio Público determinará la materia de investigación de forma clara y precisa y los agentes de Policía designados le informarán sobre los avances de la investigación para que éste indique si los elementos recabados son adecuados para la misma;
- d)** El Ministerio Público acordará las diligencias que le solicite la Policía para el perfeccionamiento de la investigación y solicitará los mandamientos judiciales que resulten necesarios para ello;
- e)** En caso de que el Ministerio Público considere que los elementos recabados no sean suficientes o adecuados, instruirá sobre las diligencias subsecuentes.

**II.** En los casos en los que las instituciones policiales tomen conocimiento de hechos probablemente delictivos darán aviso inmediato y por cualquier medio, al Ministerio Público competente;

**III.** Tratándose de delitos que sean cometidos o produzcan efectos en dos o más entidades federativas, además, se determinará al Ministerio Público competente, de conformidad con las disposiciones aplicables, así como las Instituciones Policiales que intervendrán en la investigación, de acuerdo con los instrumentos de coordinación que se hayan emitido al efecto;

**IV.** Determinar enlaces que darán servicio de manera permanente entre las Instituciones de Procuración de Justicia y de las Instituciones Policiales;

**V.** Preservar la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, y

**VI.** Cumplir con los mandamientos judiciales y ministeriales.

**Artículo 41.** Para la ejecución de investigaciones y operativos conjuntos, la coordinación entre el Ministerio Público y las policías se sujetará a las siguientes reglas:

- I.** Trabajo en equipo por casos, bajo la conducción y mando del Agente del Ministerio Público a cargo de la averiguación previa;
- II.** Selección para la integración de los equipos de trabajo siguiendo criterios previamente establecidos, y
- III.** Intercambio constante de información con sujeción a los principios de oportunidad, precisión y pertinencia.

## **TÍTULO QUINTO**

### **DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

## **CAPÍTULO I**

### **De los deberes y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública**

**Artículo 42.** Son deberes de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, de acuerdo con sus respectivas competencias, los siguientes:

- I.** Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;
- II.** Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan;
- III.** Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
- IV.** Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo;
- V.** Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;
- VI.** Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
- VII.** Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, denunciarlo;
- VIII.** Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
- IX.** Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
- X.** Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias;
- XI.** Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;
- XII.** Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
- XIII.** Preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
- XIV.** Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
- XV.** Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia;

**XVI.** Informar al superior jerárquico, a la brevedad posible, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;

**XVII.** Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;

**XVIII.** Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;

**XIX.** Inscribir las detenciones en el Registro Nacional de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables;

**XX.** Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las Instituciones;

**XXI.** Abstenerse de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;

**XXII.** Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área de las Instituciones que corresponda;

**XXIII.** Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;

**XXIV.** Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada y certificada por los servicios médicos de la Instituciones;

**XXV.** Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes;

**XXVI.** Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio;

**XXVII.** No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y

**XXVIII.** Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 43.** Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

**I.** Hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites que se marcan en los procedimientos establecidos en los manuales respectivos, con el fin de preservar la vida y la integridad de las personas, así como mantener y restablecer el orden y la paz públicos, evitando en la medida de lo posible el uso de la fuerza letal;

**II.** Registrar en los formatos oficiales todos los datos de importancia que incidan en las actividades, investigaciones o indagaciones que realice;

**III.** Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes;

**IV.** Apoyar, junto con el personal bajo su mando, a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;

**V.** Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales de los que tenga conocimiento con motivo de sus funciones;

**VI.** Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;

**VII.** Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho;

**VIII.** Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando la línea de mando;

**IX.** Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

**X.** Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio. El uso de las armas se reservará exclusivamente para actos del servicio que así lo demanden;

**XI.** Integrar el Informe Policial Homologado, debidamente requisitado;

**XII.** Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas y juegos, o prostíbulos u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y

**XIII.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 44.** Las legislaciones aplicables establecerán las infracciones consideradas como graves así como aquellas aplicables a los deberes previstos esta ley, las que serán al menos las siguientes:

- a) Amonestación;
- b) Suspensión, o
- c) Remoción.

## **CAPÍTULO II**

### **De los Sistemas Complementarios de Seguridad Social**

**Artículo 45.** Los Servidores Públicos de las Instituciones de Seguridad Pública gozarán, al menos, de las prestaciones de seguridad social que establecen, según el caso, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o las leyes locales en la materia.

**Artículo 46.** Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar medidas que contribuyan al fortalecimiento del sistema de seguridad social para sus integrantes y dependientes, para lo cual se instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social que podrán comprender los siguientes rubros:

- I. Fortalecimiento del Seguro de Vida e Incapacidad;
- II. Créditos hipotecarios y de corto plazo;

III. Sistemas de seguros educativos y similares para dependientes de los servidores públicos que fallezcan en cumplimiento de sus funciones;

IV. Servicio médico integral;

V. Servicios turísticos;

VI. Fondos de ahorro;

VII. Centros deportivos y de recreo;

VIII. Becas educativas, y

IX. Pagos de defunción y en su caso, ayuda económica a los dependientes de los caídos en servicio.

La Federación y las entidades federativas deberán regular la instrumentación de los sistemas complementarios de seguridad social de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

Las entidades federativas y los municipios garantizarán las medidas complementarias de seguridad social a los miembros de sus Instituciones, con cargo a sus respectivos presupuestos.

### **CAPÍTULO III**

#### **De la identificación del personal de las Instituciones de Seguridad Pública**

**Artículo 47.** El documento de identificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberá contener nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

El documento de identificación deberá contener medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.

Toda persona tiene derecho a exigirle al servidor público que se identifique, salvo los casos previstos en ley, a fin de cerciorarse de que cuente con el registro correspondiente.

### **CAPÍTULO IV**

#### **De los reconocimientos al personal de las Instituciones de Seguridad Pública**

**Artículo 48.** Los reconocimientos tienen por objeto premiar el cumplimiento sobresaliente en las funciones de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública y se asignarán en proporción a la categoría o nivel que ocupen. La Federación, las entidades federativas y los municipios podrán otorgar estímulos y recompensas, en sus ámbitos de competencia, a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a las disposiciones aplicables.

## **TÍTULO SEXTO**

### **DEL SERVICIO DE CARRERA EN LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA**

#### **Capítulo I**

##### **Disposiciones Generales**

**Artículo 49.** El Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia, comprenderá lo relativo al Ministerio Público y a los peritos.

Las Instituciones de Procuración de Justicia que cuenten en su estructura orgánica con policía ministerial para la investigación de los delitos, se sujetarán a lo dispuesto en esta ley para las Instituciones Policiales en materia de carrera policial.

Las reglas y procesos en materia de carrera policial y régimen disciplinario de la policía ministerial, serán aplicados, operados y supervisados por las Instituciones de Procuración de Justicia. Para tal efecto, establecerán las instancias a que se refiere la fracción VIII del artículo 5 de esta ley, las cuales contarán con las mismas facultades previstas para las comisiones de las instituciones policiales.



Los servidores públicos que tengan bajo su mando a agentes del Ministerio Público o peritos no formarán parte del Servicio de Carrera por ese hecho. Serán nombrados y removidos conforme a los ordenamientos legales aplicables; se considerarán trabajadores de confianza, y los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento.

**Artículo 50.** El Servicio de Carrera Ministerial y Pericial comprenderá las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, conforme a lo siguiente:

- I. El ingreso comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación, certificación iniciales, así como registro;
- II. El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada; de actualización; de evaluación para la permanencia; de evaluación del desempeño; de desarrollo y ascenso; de dotación de estímulos y reconocimientos, de reingreso y de certificación. De igual forma deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los miembros del Servicio de Carrera, y
- III. La terminación comprenderá las causas ordinarias y extraordinarias de separación del Servicio, así como los procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar, ajustándose a lo establecido por las leyes y disposiciones aplicables.

**Artículo 51.** El Servicio de Carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes:

- I. Tendrá carácter obligatorio y permanente; abarcará los planes, programas, cursos, evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas que comprende;
- II. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en tareas de Procuración de Justicia;
- III. El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación fomentará que los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos referidos y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades destrezas y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público;
- IV. Contará con un sistema de rotación del personal;
- V. Determinará los perfiles, niveles jerárquicos en la estructura y de rangos;
- VI. Buscará desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia, y,
- VII. Contendrá normas para el registro y el reconocimiento de los certificados del personal.

## **CAPÍTULO II**

### **Del Ingreso al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 52.** El ingreso al Servicio de Carrera se hará por convocatoria pública.

Los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán cumplir, cuando menos, con los requisitos siguientes:

#### **A. Ministerio Público.**

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos;

**II.** Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional;

**III.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;

**IV.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

**V.** No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

**VI.** No hacer uso de sustancias, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;

**VII.** Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan; y

**VIII.** Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las leyes o reglamentos correspondientes.

**B. Peritos.**

**I.** Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos;

**II.** Acreditar que ha concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente;

**III.** Tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;

**IV.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;

**V.** Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan;

**VI.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

**VII.** No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

**VIII.** No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y

**IX.** Preservar y aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezca la legislación federal y la de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 53.** Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos de formación inicial, deberán consultarse sus antecedentes en el Registro Nacional y, en su caso, en los registros estatales de Personal de las Instituciones de Procuración de Justicia.

**Artículo 54.** Los aspirantes a ingresar al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán cumplir con los estudios de formación inicial. Estos estudios serán obligatorios.

Corresponderá a las autoridades competentes regular en sus legislaciones los términos en que la formación inicial se llevará a cabo. La duración de los programas de formación inicial no podrá ser inferior a quinientas horas clase.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Desarrollo del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 55.** Son requisitos de permanencia del Ministerio Público y de los peritos, los siguientes:

- I. Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio;
- II. Cumplir con los programas de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables;
- III. Aprobar las evaluaciones que establezcan las disposiciones aplicables;
- IV. Contar con la certificación y registro actualizados a que se refiere esta Ley;
- V. Cumplir las órdenes de rotación;
- VI. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas, y
- VII. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezcan las autoridades competentes en sus respectivas legislaciones.

**Artículo 56.** Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable.

**Artículo 57.** Los resultados de los procesos de evaluación serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales.

Los expedientes conformados con las evaluaciones practicadas tendrán el carácter de confidencial y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables.

**Artículo 58.** Las solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su caso, concederán con arreglo a lo que establezcan las autoridades competentes en sus respectivas legislaciones, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento a los requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o penal, local o federal.

**Artículo 59.** Las autoridades competentes aplicarán las sanciones y correctivos disciplinarios que correspondan a los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia por el incumplimiento de sus deberes, en términos de las disposiciones aplicables.

### **CAPÍTULO IV**

#### **De la Terminación del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 60.** La terminación del Servicio de Carrera será:

- I. Ordinaria, que comprende:
  - a) Renuncia;
  - b) Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones;
  - c) Jubilación, y
  - d) Muerte.

**II. Extraordinaria, que comprende:**

- a)** Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, o
- b)** Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo.

**Artículo 61.** La Federación y las entidades federativas establecerán los procedimientos de separación y remoción aplicables a los Servidores Públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia.

**Artículo 62.** En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación o remoción es injustificada, la institución respectiva sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado S, fracción XIII, constitucional.

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente.

## **CAPÍTULO V**

### **De la Profesionalización**

**Artículo 63.** El Programa Rector de Profesionalización es el instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal de las Instituciones de Procuración de Justicia.

**Artículo 64.** Los planes de estudios se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolución de casos.

**Artículo 65.** En materia de programas de Profesionalización y planes de estudio, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:

- I.** Promover estrategias y políticas de profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- II.** Diseñar los modelos de profesionalización que correspondan para su concertación y en su caso, aplicación en las Instituciones de Procuración de Justicia;
- III.** Acordar los contenidos del Programa Rector de Profesionalización de los servidores públicos de las instituciones de Procuración de Justicia;
- IV.** Establecer criterios para supervisar que los servidores públicos se sujeten a los programas correspondientes en los Institutos de Capacitación;
- V.** Participar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes a las Instituciones de Procuración de Justicia y vigilar su aplicación;
- VI.** Establecer programas de investigación académica en las materias ministerial y pericial;
- VII.** Consensuar los criterios por los que se revalidarán equivalencias de estudios en el ámbito de su competencia, y
- VIII.** Las demás que le establezcan otras disposiciones legales.

**Artículo 66.** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia están obligados a participar en las actividades de profesionalización que determine la institución respectiva, los cuales deberán cubrir un mínimo de 60 horas clase anuales.

## **CAPÍTULO VI**

### **De la Certificación**

**Artículo 67.** Los aspirantes que ingresen a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán contar con la certificación y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por esta Ley.

Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia sin contar con el certificado y registro vigentes.

**Artículo 68.** Las Instituciones de Procuración de Justicia emitirán los certificados correspondientes a quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece esta Ley y el ordenamiento legal aplicable a la institución de que se trate.

De igual forma, dichas Instituciones podrán emitir certificaciones respecto de los conocimientos generales, técnicos y jurídicos, habilidades, destrezas y actitudes que los servidores públicos evaluados demuestren tener para desempeñar su función de forma eficiente, conforme a los estándares sectoriales establecidos por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

**Artículo 69.** La certificación a que se refiere el párrafo primero del artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresada en el Registro Nacional que para tal efecto se establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.

La certificación a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de evaluación, a efecto de que sea ingresada en el Registro Nacional que para tal efecto se establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de cinco años.

**Artículo 70.** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación correspondientes, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes. Dicha revalidación acreditará que el servidor público ha desarrollado y mantiene actualizado el perfil y aptitudes requeridos para el desempeño de su cargo, conforme a los principios de actuación que establece esta Ley.

La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 71.** La certificación que otorguen las Instituciones de Procuración de Justicia deberá contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional.

Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia que deseen prestar sus servicios en otra institución, ya sea en la Federación o en las Entidades Federativas, deberán presentar el certificado que les haya sido expedido previamente.

Las Instituciones de Procuración de Justicia reconocerán la vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados, en términos de los lineamientos que al efecto se establezcan, conforme a las disposiciones de esta Ley y demás aplicables. En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los procesos de evaluación.

En todos los casos, se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el Registro Nacional.

**Artículo 72.** La cancelación del certificado de los Servidores Públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia procederá:

- I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- II. Al ser removidos de su encargo;
- III. Por no obtener la revalidación de su certificado, y
- IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.

**Artículo 73.** La institución de Procuración de Justicia que cancele algún certificado deberá hacer la anotación respectiva en el Registro Nacional de Seguridad Pública.

## **CAPÍTULO**

**VII**

### **De las Academias e Institutos de Capacitación ministerial, pericial y policial**

**Artículo 74.** La Federación, el Distrito Federal y las entidades federativas establecerán y operarán las Academias e Institutos de Capacitación, que serán responsables de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización y los procesos de evaluación de los aspirantes y servidores públicos, así como el cumplimiento de los perfiles genéricos de puesto de las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, según corresponda.

**Artículo 75.** Las Academias e Institutos de Capacitación tendrán las siguientes atribuciones:

- I. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema;
- II. Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos;
- III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial, pericial y policial, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Profesionalización;
- V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;
- VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;
- VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores públicos;
- VIII. Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de Profesionalización;
- IX. Revalidar equivalencias de estudios de la Profesionalización;
- X. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación;
- XI. Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de los Servidores Públicos y proponer los cursos correspondientes;
- XII. Proponer las convocatorias para el ingreso a las Academias e Institutos de Capacitación;

**XIII.** Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio ante las autoridades competentes;

**XIV.** Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que impartan;

**XV.** Proponer la celebración de convenios con Instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores públicos, y

**XVI.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

## **TÍTULO SÉPTIMO DEL DESARROLLO POLICIAL**

### **CAPÍTULO I Disposiciones Generales**

**Artículo 76.** El desarrollo policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio, y garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos en el artículo 6 de la Ley.

**Artículo 77.** Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables.

**Artículo 78.** Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes, que en el momento de la separación, señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación y, en su caso, sólo procederá la indemnización.

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente.

**Artículo 79.** Los integrantes de las Instituciones Policiales en servicio activo son los que realizan sus funciones en las mismas, desempeñándose dentro del campo de su especialidad, incluyendo aquellos:

**I.** A disposición, en espera de órdenes;

**II.** En situación especial, comisionados en otras Instituciones o se encuentren realizando estudios en Instituciones nacionales o extranjeras, y

**III.** Con licencia, en términos de la normatividad aplicable.

**Artículo 80.** Se considerará como personal comisionado a aquellos integrantes de las Instituciones Policiales que, por orden de los titulares de las mismas se encuentren desarrollando actividades en apoyo a otras autoridades.

El personal comisionado estará obligado a sujetarse a los lineamientos disciplinarios de la Institución donde cumpla su comisión, sin que esto lo exima de cumplir con los deberes y normas inherentes a su grado y cargo dentro de la institución de origen.

**Artículo 81.** El personal desempeñará su comisión cumpliendo con las normas éticas y obligaciones de las instituciones, debiendo esforzarse en proyectar el profesionalismo y la excelencia de las mismas, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el interés superior de las víctimas del delito.

**Artículo 82.** El integrante que desempeñe una comisión podrá ser reasignado o retirado de la misma cuando lo determine el titular de la institución correspondiente y las Comisiones en los siguientes supuestos:

- I. Por necesidades del servicio,
- II. Cuando la causa que la motivó, se modifique o deje de existir, o
- III. Cuando la solicite la autoridad a la cual se encontraba comisionado.

**Artículo 83.** Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, establecerán, cuando menos, las siguientes áreas operativas:

- I. Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información;
- II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y
- III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.

**Artículo 84.** Las unidades de policía especializadas en la investigación científica de los delitos podrán ubicarse en la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, o bien, en las Instituciones Policiales, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones.

Las policías ministeriales ubicadas dentro de la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Título, quedando a cargo de dichas instituciones, la aplicación de las normas, supervisión y operación de los procedimientos relativos al desarrollo policial.

**Artículo 85.** Las unidades operativas de investigación realizarán, entre otras, las siguientes funciones:

- I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine;
- II. Deberán verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informará al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;
- III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;
- IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;



**VI.** Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;

**VII.** Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;

**VIII.** Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables.

**IX.** Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que solo pueda solicitar por conducto de éste;

**X.** Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;

**XI.** Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;

**XII.** Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:

**a)** Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

**b)** Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;

**c)** Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendentes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;

**d)** Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y

**e)** Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.

**XIII.** Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, y

**XIV.** Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

## **CAPÍTULO II**

### **De la Carrera Policial y de la Profesionalización**

**Artículo 86.** La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, certificación, selección, ingreso, permanencia, evaluación, promoción, y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales.

**Artículo 87.** Los fines de la Carrera Policial son:

I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales;

II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones;

III. Fomentar la vocación de servicio mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de los integrantes de las Instituciones Policiales;

IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y

V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley.

**Artículo 88.** La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan.

Las remuneraciones de los integrantes de las Instituciones Policiales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.

De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total y permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

Para tales efectos, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública deberá promover las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas, en los diferentes ámbitos de competencia.

**Artículo 89.** La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se registrará por las normas siguientes:

I. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas;

II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo;

III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema;

IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;

V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;

VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las Comisiones, encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia;

VII. Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;

**VIII.** Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales;

**IX.** Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;

**X.** El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por la Comisión correspondiente, y

**XI.** Las Comisiones establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial.

La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales. En ningún caso, los derechos adquiridos en la Carrera Policial implicarán inamovilidad en dichos cargos.

En términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las Instituciones Policiales podrán designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando su grado policial y derechos inherentes a la Carrera Policial.

**Artículo 90.** La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales.

Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las Comisiones sobre los aspirantes aceptados.

**Artículo 91.** El ingreso es el proceso de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en las Academias o Institutos de Capacitación Policial, el periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley.

**Artículo 92.** La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales.

**Artículo 93.** Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:

**A. De Ingreso:**

**I.** Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;

**II.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

**III.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;

**IV.** Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

- a)** En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
- b)** Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
- c)** En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;

**V.** Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;

**VI.** Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

**VII.** Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

**VIII.** Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

**IX.** No padecer alcoholismo;

**X.** Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

**XI.** No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;

**XII.** Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que deriven de la misma;

**XIII.** Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

**B. De Permanencia:**

**I.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;

**II.** Mantener actualizado su Certificado Único Policial;

**III.** No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;

**IV.** Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

**a)** En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;

**b)** Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;

**c)** En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;

**V.** Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;

**VI.** Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

**VII.** Aprobar las evaluaciones del desempeño;

**VIII.** Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;

**IX.** Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

**X.** No padecer alcoholismo;

**XI.** Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

**XII.** No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;

**XIII.** No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días; y

**XIV.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 94.** Las Comisiones fomentarán la vocación de servicio mediante la promoción y permanencia en las Instituciones Policiales para satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de sus integrantes.

**Artículo 95.** El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual las Instituciones Policiales otorgan el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.

Todo estímulo otorgado por las instituciones será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.

**Artículo 96.** La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.

Las promociones sólo podrán conferirse cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.

Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.

Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.

**Artículo 97.** Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los integrantes de las Instituciones Policiales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.

**Artículo 98.** La antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones Policiales, de la siguiente forma:

**I.** Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Policiales, y

**II.** Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente.

La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera Policial.

**Artículo 99.** La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

**I.** Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurren las siguientes circunstancias:

a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;

b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y

c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones para conservar su permanencia.

II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o

III. Baja, por:

a)		Renuncia;
b)	Muerte,	o
c)	Jubilación o retiro.	

Al concluir el servicio el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.

**Artículo 100.** Los integrantes de las Instituciones Policiales que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración de las Comisiones, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.

**Artículo 101.** La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

Las Instituciones Policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.

La presente disposición será aplicable también al personal de los servicios de migración.

**Artículo 102.** La certificación tiene por objeto identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las Instituciones Policiales:

I. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

II. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;

III. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;

V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y

## **VI. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta ley.**

**Artículo 103.** La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.

Los planes de estudio para la Profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje que estarán comprendidos en el programa rector que apruebe la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, a propuesta de su Presidente.

## **CAPÍTULO Del Régimen Disciplinario**

**III**

**Artículo 104.** La actuación de los Integrantes de las Instituciones Policiales se regirá por los principios de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de esta ley.

La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.

La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados.

**Artículo 105.** Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

**Artículo 106.** El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.

**Artículo 107.** Los integrantes de las Instituciones Policiales, observarán los deberes previstos en los artículos 42 y 43 de esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.

**Artículo 108.** Las sanciones que apliquen las Comisiones por infracciones a los deberes cometidas por los integrantes de las Instituciones Policiales serán:

- I.** Amonestación;
- II.** Suspensión, o
- III.** Remoción.

La aplicación de las sanciones se hará a juicio de las Comisiones, una vez acreditados los hechos y valorados, conforme a derecho, los medios probatorios aportados al procedimiento respectivo. En todo caso, deberá registrarse en el expediente personal del infractor la sanción que se le aplique.

La imposición de las sanciones que determinen las Comisiones se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación aplicable.

## **CAPÍTULO IV Del Procedimiento**

**Artículo 109.** El procedimiento ante las Comisiones iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos internos que corresponda, dirigida al presidente de la Comisión correspondiente, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor.

El presidente resolverá si existen elementos para iniciar procedimiento contra el presunto infractor, en caso contrario devolverá el expediente a la unidad remitente.

**Artículo 110.** La resolución que emita el presidente de la Comisión respecto a la no procedencia del inicio del procedimiento podrá ser impugnada por la unidad solicitante mediante el recurso de reclamación interpuesto ante el Pleno de la Comisión, dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación y recepción del expediente respectivo.

En la formulación del recurso de reclamación, la unidad promovente hará valer los argumentos de procedencia del procedimiento y las pruebas que lo acrediten. El Pleno de la Comisión resolverá en un término no mayor a cinco días.

**Artículo 111.** Resuelto el inicio del procedimiento, el secretario de la Comisión convocará a los miembros de ésta y citará al presunto infractor a una audiencia, haciéndole saber los hechos que se le imputan, el lugar, el día y la hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y formular alegatos, por sí o asistido de un defensor.

La audiencia se celebrará dentro de un plazo no menor de cinco ni mayor de veinte días naturales posteriores a la recepción del expediente por el presidente.

**Artículo 112.** La notificación se realizará en el domicilio oficial de la adscripción del presunto infractor, en el último que hubiera reportado, o en el lugar en que se encuentre físicamente y se le hará saber que queda a disposición de la unidad administrativa de Recursos Humanos correspondiente en tanto se dicte la resolución definitiva respectiva.

Asimismo, el infractor deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia de la Comisión que conozca del asunto, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se realizarán en un lugar visible al público dentro de las instalaciones que ocupe la Comisión; del mismo modo, en caso de no ofrecer pruebas y defensas, la imputación se tendrá por consentida y aceptada.

**Artículo 113.** El día y hora señalados para la comparecencia del presunto infractor, el presidente de la Comisión, declarará formalmente abierta la audiencia y enseguida el secretario tomará los generales de aquél y de su defensor, protestando al primero a conducirse con verdad y discerniéndole el cargo al segundo. Acto seguido procederá a dar lectura a las constancias relativas a la imputación y datos de cargo, con la finalidad de hacer saber al presunto infractor los hechos que se le atribuyen.

El presidente de la Comisión concederá el uso de la palabra al presunto infractor y a su defensor, los que expondrán en forma concreta y específica lo que a su derecho convenga; asimismo, conducirá la audiencia, moderará las intervenciones y preservará el orden de las mismas.

**Artículo 114.** Los miembros de la Comisión están facultados para cuestionar al compareciente, solicitar informes u otros elementos de prueba, por conducto del secretario, con la finalidad de allegarse de datos necesarios para el esclarecimiento del asunto.

**Artículo 115.** Las pruebas que sean presentadas por las partes serán debidamente analizadas y ponderadas, resolviendo cuáles se admiten y cuáles son desechadas dentro de la misma audiencia.

**Artículo 116.** Si el presidente lo considera necesario, por lo extenso o particular de las pruebas presentadas, cerrará la sesión, levantando el acta correspondiente, y establecerá un término probatorio de quince días para su desahogo. En caso contrario, se cerrará la audiencia y dentro del término de veinte días hábiles se procederá a dictar la resolución correspondiente.

**Artículo 117.** Una vez admitidas y desahogadas todas las pruebas y presentados los alegatos, el presidente de la Comisión cerrará la audiencia.

La Comisión tendrá veinte días hábiles contados a partir del cierre de la misma, para emitir la resolución que conforme a derecho corresponda.



La resolución se notificará personalmente al interesado por conducto de la unidad administrativa que dio inicio al procedimiento.

**Artículo 118.** La resolución que dicte el Pleno de la Comisión deberá estar debidamente fundada y motivada, contener una relación sucinta de los hechos y una valoración de las pruebas aportadas.

**Artículo 119.** Los acuerdos dictados durante el procedimiento serán firmados por el presidente de la Comisión y autenticados por el secretario de la misma.

**Artículo 120.** Para lo no previsto en el presente capítulo en cuanto al desahogo y la valoración de pruebas, se aplicará de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles vigente en la Federación, las Entidades Federativas y el Distrito Federal, según sea el caso.

## **CAPÍTULO V**

### **De los Órganos Policiales**

#### **SECCIÓN PRIMERA**

##### **De las Academias de Formación, de Capacitación y Profesionalización Policial**

**Artículo 121.** La Federación, el Distrito Federal y las entidades federativas establecerán y operarán Academias o Institutos de Formación o Capacitación Policial, según corresponda, que serán responsables de aplicar el Programa Rector que contendrá los aspectos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización de los aspirantes e integrantes de las Instituciones Policiales, así como el cumplimiento de los perfiles genéricos.

**Artículo 122.** El Programa Rector es el instrumento en el que se establecen los programas y contenidos mínimos de formación para cada uno de los niveles jerárquicos, unidades operativas y divisiones de las Instituciones Policiales.

**Artículo 123.** En materia de planes y programas de Profesionalización, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Proponer los contenidos básicos de los programas para la formación, capacitación y profesionalización de los mandos de las Instituciones policiales;
- II. Proponer los aspectos que contendrá el Programa Rector;
- III. Promover que los integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los programas correspondientes a las Academias y de estudios superiores policiales;
- IV. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales y vigilar su aplicación;
- V. Proponer a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, estrategias y políticas de desarrollo de formación de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- VI. Proponer los programas de investigación académica en materia policial;
- VII. Participar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales;
- VIII. Revalidar equivalencias de estudios de la Profesionalización en el ámbito de su competencia, y
- IX. Las demás que le establezcan otras disposiciones legales.

**Artículo 124.** Las Academias e Institutos de Formación o Capacitación Policial, según corresponda, tendrán las siguientes atribuciones:

- I. Aplicar los procedimientos homologados del desarrollo policial;
- II. Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de Profesionalización;
- III. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Profesionalización;
- IV. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas instituciones;
- VI. Revalidar equivalencias de estudios de la Profesionalización;
- VII. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación;
- VIII. Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de los Integrantes de las Instituciones Policiales y proponer los cursos correspondientes a las Comisiones;
- IX. Proponer a las Comisiones las convocatorias para el ingreso a las Academias o Institutos de Formación o Capacitación Policial;
- X. Desarrollar los programas de investigación académica en materia de desarrollo policial;
- XI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes e integrantes de las Instituciones Policiales;
- XII. Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio ante las autoridades competentes;
- XIII. Expedir constancias y certificados de la formación profesional que impartan;
- XIV. Proponer la celebración de convenios con instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con objeto de brindar formación académica de excelencia a los integrantes de las Instituciones Policiales;
- XV. Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los integrantes de las Instituciones Policiales;
- XVI. Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los manuales de las Academias, y
- XVII. Las demás que le establezcan las disposiciones legales aplicables y sus respectivas Comisiones.

## **SECCIÓN SEGUNDA**

### **De las Comisiones**

**Artículo 125.** La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios establecerán instancias colegiadas en las que participen representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las Instituciones Policiales, que serán las encargadas de conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario.

Para tal fin, las Instituciones Policiales constituirán sus respectivas Comisiones del servicio profesional de carrera policial y de honor y justicia, las que llevarán un registro de datos de los integrantes de sus instituciones. Dichos datos se incorporarán a Plataforma México.

En las Instituciones de Procuración de Justicia se integrarán comisiones equivalentes, en las que intervengan representantes de los policías ministeriales.

**Artículo 126.** Las Comisiones, conforme a lo dispuesto en esta Ley, realizarán y someterán a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión, actualización y fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.

**Artículo 127.** Las Comisiones y el Consejo Federal de Desarrollo Policial, se integrarán respectivamente de la siguiente manera:

- I. Un Presidente, que será designado por el titular de la Institución Policial de que se trate;
- II. Un Consejero por cada área o división operativa, y
- III. Un Secretario General de Acuerdos.

Los integrantes de las Instituciones Policiales a que se refieren las fracciones anteriores serán de carácter permanente y podrán designar a un suplente, de conformidad con las disposiciones aplicables.

En el caso de las policías ministeriales, al menos uno de los consejeros deberá ser miembro de la policía, designado por el director general de la policía o su equivalente.

**Artículo 128.** Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones:

- I. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones, los procedimientos de la Carrera Policial;
- II. Proponer las reformas necesarias a los ordenamientos jurídicos que regulan la Carrera Policial;
- III. Aplicar los lineamientos, mecanismos y procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, permanencia, evaluación y promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- IV. Elaborar y aplicar los lineamientos para el otorgamiento de estímulos y recompensas a los integrantes de las Instituciones Policiales;
- V. Establecer los lineamientos para las prestaciones sociales de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- VI. Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de Profesionalización de los Integrantes;
- VII. Expedir autorizaciones para que los integrantes de las instituciones que cuenten con bachillerato, puedan acceder a las divisiones de investigación, con base en su desempeño y sujetos a evaluación;
- VIII. Garantizar la observancia del régimen disciplinario establecido a los integrantes de las Instituciones Policiales;
- IX. Conocer y resolver respecto del incumplimiento de los requisitos de permanencia y de las infracciones al régimen disciplinario cometidas por los integrantes de las Instituciones Policiales;
- X. Determinar las sanciones por infracciones al régimen disciplinario, así como la conclusión del servicio por la actualización de los supuestos previstos en la Ley;

**XI.** Registrar en Plataforma México, los datos del personal sancionado, y

**XII.** Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

**Artículo 129.** En los procedimientos que instruyan las Comisiones y el Consejo Federal de Desarrollo Policial se salvaguardará en todo tiempo la garantía de audiencia.

## **CAPÍTULO VI**

### **De la Integración y Mando**

#### **SECCIÓN PRIMERA**

##### **De la Integración**

**Artículo 130.** Los integrantes de la Instituciones Policiales, de acuerdo a su jerarquía, se agrupan en las categorías siguientes:

**I.** Comisarios;

**II.** Inspectores;

**III.** Oficiales, y

**IV.** Escala Básica.

En las policías ministeriales se establecerán niveles jerárquicos equivalentes a las primeras dos fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al modelo policial previsto en esta Ley.

**Artículo 131.** Las categorías previstas en el artículo anterior tendrán las jerarquías siguientes:

**I.** Comisarios:

**a)** Comisario General;

**b)** Comisario Jefe, y

**c)** Comisario.

**II.** Inspectores:

**a)** Inspector General;

**b)** Inspector Jefe, y

**c)** Inspector.

**III.** Oficiales:

**a)** Subinspector;

**b)** Oficial, y

**c)** Suboficial.

**IV.** Escala Básica:

**a)** Policía Primero;

**b)** Policía Segundo;

**c)** Policía Tercero, y

**d)** Policía.

**Artículo 132.** Las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.

Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los titulares de las instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerarquía.

Las instituciones estatales y del Distrito Federal, deberán satisfacer, como mínimo, el mando correspondiente al octavo grado de organización jerárquica.

Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones.

**Artículo 133.** El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de la Instituciones con relación a las áreas operativas y de servicios será:

- I. Para las áreas operativas, de policía a Comisario General, y
- II. Para los servicios, de policía a Comisario Jefe.

## **SECCIÓN SEGUNDA**

### **Del Mando**

**Artículo 134.** Las Instituciones Policiales tienen a su cargo la operación de acciones para preservar la seguridad pública del país, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En las operaciones policiales conjuntas, se cumplirán sin excepción los requisitos previstos en las disposiciones constitucionales y legales aplicables, recayendo el mando operativo en la Policía Federal en los siguientes casos:

- I. En los asuntos que sean competencia del orden federal, o
- II. Exista petición expresa de la autoridad competente de los estados y municipios para la intervención de la Policía Federal.

En estos supuestos, las instrucciones se transmitirán a través de los mandos de las instituciones locales que participen en dichas operaciones.

**Artículo 135.** En las Instituciones Policiales se entenderá por mando, a la autoridad ejercida por un superior jerárquico en servicio activo, sobre sus subordinados o iguales en jerarquía, cuando éstos se encuentren adscritos a él en razón de su categoría, cargo o comisión.

**Artículo 136.** La implementación del perfil del mando según su competencia, los procedimientos homologados y la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de estudio, constituirán la base fundamental para la acción nacional unificada y coordinada de los integrantes de las Instituciones Policiales en la República.

Los perfiles de puesto de mando de los integrantes de las Instituciones Policiales, se determinarán con base en los modelos y lineamientos que al efecto emita la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.

**Artículo 137.** El mando podrá ser ejercido en las formas siguientes:

- I. Titular, que es el ejercido por medio de nombramiento oficial expedido por la superioridad correspondiente, y
- II. Circunstancial, en los casos siguientes:
  - a) Interino, el designado con ese carácter por la superioridad correspondiente hasta en tanto se nombra al titular;

**b)** Accidental, el que se ejerce por ausencia temporal del titular que le impida desempeñarlo, en caso de enfermedad, licencias, vacaciones, comisiones fuera de su adscripción u otros motivos, y

**c)** Incidental, el que se desempeña en casos imprevistos por ausencia momentánea del titular o de quien ejerza el mando.

En cualquier caso, sólo los integrantes de las Instituciones Policial es en servicio activo podrán ejercer el mando, salvo en aquellas situaciones especiales y con licencia, en cuyo caso no podrán ejercer el mando.

**Artículo 138.** En caso de ausencia temporal, impedimento, excusa u otros similares del mando titular, la orden y sucesión de mando se sujetará a lo siguiente: en ausencias del titular, el despacho y resolución de los asuntos correspondientes a la Instituciones Policiales, corresponderá al inferior jerárquico inmediato, sin mediar representantes de los mismos.

**Artículo 139.** Tratándose del ejercicio del mando en los cuerpos de policía ministerial y las Instituciones de Procuración de Justicia, en lo conducente, se aplicará lo dispuesto en esta sección.

## **TÍTULO OCTAVO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**

**Artículo 140.** El Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza, se conforma con las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendentes a cumplir los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

Integran este Sistema: el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza, así como los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales de la Federación y las entidades federativas.

**Artículo 141.** Corresponde a la Federación, por conducto del Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza:

**I.** Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las conferencias.

**II.** Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los Servidores Públicos;

**III.** Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

**IV.** Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

**V.** Evaluar y certificar los procesos de evaluación y Control de Confianza que en el ámbito de Seguridad Pública operen instituciones privadas que así lo soliciten;

**VI.** Verificar periódicamente que los Centros de referencia apliquen los procesos certificados, conforme a los lineamientos y estándares que el propio Centro Nacional establezca;

**VII.** Apoyar á los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

**VIII.** Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de Evaluación y Control de Confianza;

**IX.** Establecer los requisitos que deben contener los certificados Ministerial, Policial y Pericial y probar sus características, y

**X.** Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.

El Centro Nacional contará con un órgano de gobierno integrado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. El Ejecutivo Federal proveerá en la esfera administrativa a la organización y funcionamiento del Centro Nacional.

**Artículo 142.** Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la certificación vigente del Centro Nacional, en cuanto a sus procesos y su personal.

Cuando en los procesos de certificación a cargo de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la certificación vigente del Centro Nacional. En caso contrario, el proceso carecerá de validez.

**Artículo 143.** Las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación y entidades federativas, establecerán, en los términos de las disposiciones aplicables, Centros de Evaluación y Control de Confianza, encargados de operar y calificar los procesos de evaluación de los integrantes de dichas instituciones, así como comprobar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad de los mismos, para garantizar la calidad de sus servicios.

Dichos Centros funcionarán bajo las políticas, lineamientos y procedimientos establecidos por el Centro Nacional y deberán estar certificados por éste.

**Artículo 144.** Los Centros de Evaluación y Control de Confianza aplicarán las evaluaciones a que se refiere esta Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

**Artículo 145.** Los Centros de Evaluación y Control de Confianza tendrán las siguientes facultades:

**I.** Aplicar los procedimientos de Evaluación y de Control de Confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional;

**II.** Proponer lineamientos para la verificación y control de confianza de los Servidores Públicos;

**III.** Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos y socioeconómicos;

**IV.** Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la confidencialidad y resguardo de expedientes;

**V.** Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad;

**VI.** Comprobar los niveles de escolaridad de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;

**VII.** Aplicar el procedimiento de certificación de los Servidores Públicos, aprobado por el Centro Nacional;

**VIII.** Expedir y actualizar los Certificados conforme a los formatos autorizados por el Centro Nacional;

**IX.** Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados de las evaluaciones que practiquen;

**X.** Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus funciones;

**XI.** Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención que permitan solucionar la problemática identificada;

**XII.** Proporcionar a las Instituciones, la asesoría y apoyo técnico que requieran sobre información de su competencia;

**XIII.** Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y que se requieran en procesos administrativos o judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables;

**XIV.** Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública, y

**XV.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

## **TITULO NOVENO DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA**

### **CAPÍTULO I**

#### **Del Sistema de Información Plataforma México**

Artículo 146. Plataforma México es el sistema de interconexión de bases de datos, que proporciona a las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno información precisa y constante con el propósito de cumplir los fines de la Seguridad Pública.

**Artículo 147.** La Federación, estados, Distrito Federal y municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos que la integran, a fin de garantizar la integración y operación de la información.

El Consejo Nacional tomará las medidas necesarias, además de las ya previstas en la Ley, para preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de la información administrada y sistematizada mediante los instrumentos de información sobre Seguridad Pública de Plataforma México.

Las Instituciones de Procuración de Justicia tendrán acceso a la información contenida en Plataforma México, en el ámbito de su función de investigación y persecución de los delitos.

**Artículo 148.** Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, están obligados a alimentar, consultar, analizar y explotar la información sobre Seguridad Pública en Plataforma México, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.

La información proveniente de Plataforma México, se considerará documental pública ante las autoridades, siempre que esté debidamente certificada.

**Artículo 149.** Los estados y el Distrito Federal realizarán los trabajos y las migraciones de los servicios de telecomunicaciones de su Red Estatal de acuerdo a los lineamientos que se definan para asegurar su compatibilidad con Plataforma México, mediante el desarrollo e instrumentación de protocolos, metodologías, sistemas y productos tecnológicos que aseguren la operación y funcionamiento homologados de las redes y servicios.

El Servicio de Llamadas de Emergencia y el Servicio de Denuncia Anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Consejo Nacional adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios.



La Secretaría vigilará la permanencia y actualización de los equipos y sistemas que se instalen para el servicio de interconexión a Plataforma México.

Los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la interconexión de los municipios y demarcaciones territoriales al sistema Plataforma México.

**Artículo 150.** Los integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:

**I.** El área que lo emite;

**II.** El usuario capturista;

**III.** Los Datos Generales, mismos que deberán describir:

**a)** Folio;

**b)** Número de oficio;

**c)** Fecha y hora del informe;

**d)** Fecha y hora del evento;

**e)** Fecha y hora de la detención, en su caso;

**f)** Asunto;

**g)** La persona a quien va dirigido;

**h)** Oficiales que intervinieron, y

**i)** Oficial que elaboró el informe.

**IV.** Motivo, que se clasifica en;

**a)** Tipo de evento, y

**b)** Subtipo de evento.

**V.** La ubicación del evento, que contendrá:

**a)** Estado;

**b)** Municipio o Delegación;

**c)** Sector;

**d)** Comandancia;

**e)** Turno;

**f)** Colonia;

**g)** Calle y número;

**h)** Código Postal;

**i)** Calles de referencia;

**j)** Otras referencias de ubicación, y

**k)** Mapa para la ubicación del evento.

**VI.** En su caso, los caminos, en el que se considerará:

**a)** Tramos;

**b)** Kilómetros, y

**c)** Carretera

**VII.** La descripción de hechos, que deberá detallar:

- a) Modo;
- b) Tiempo;
- c) Lugar: descripción del sitio de los hechos, del lugar de la detención, de la ubicación de los hallazgos o de los sitios investigados;
- d) Circunstancias de ejecución;
- e) Personas involucradas: sospechosos, víctimas y testigos, y
- f) La descripción del estado en que se encuentren los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, conforme a las disposiciones aplicables.

#### **VIII. Entrevistas realizadas;**

#### **IX. En caso de detenciones:**

- a) Señalar los motivos de la detención;
- b) Descripción de la persona;
- c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
- d) Descripción de estado físico aparente;
- e) Objetos que le fueron encontrados;
- f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
- g) Lugar en el que fue puesto a disposición.

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

### **SECCIÓN PRIMERA**

#### **Del Registro Nacional de Detenciones**

Artículo 151. La detención por caso urgente y en flagrancia, así como en cumplimiento de mandamientos judiciales deberá ser registrada de inmediato por la autoridad que la practique en el Registro Nacional de Detenciones.

La autoridad que practique la detención o tenga conocimiento de la misma deberá registrar, de inmediato, al menos, los datos siguientes:

- I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
- II. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;
- III. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción, y
- IV. Lugar a donde será trasladado el detenido.

**Artículo 152.** El Ministerio Público, una vez que el detenido sea puesto a su disposición, recabará y registrará, en su caso, lo siguiente:

- I. Domicilio, fecha de nacimiento, edad, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión;
- II. Clave Única de Registro de Población;

III. Grupo étnico al que pertenezca;  
IV. Descripción del estado físico del detenido;

V. Huellas dactilares;  
VI. Identificación antropométrica, y

VII. Otros medios que permitan la identificación del individuo;

El Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite de la detención de una persona y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emitirá las disposiciones necesarias para regular los dispositivos tecnológicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información a que se refiere este artículo, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología.

**Artículo 153.** La información capturada en el Registro Nacional de Detenciones será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:

I. Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y

II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el Registro a terceros. El Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

**Artículo 154.** Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal aplicable.

## **SECCIÓN SEGUNDA**

### **Del Sistema Único de Información Criminal**

Artículo 155. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios serán responsables de integrar y actualizar el Sistema Único de Información Criminal, con la información que generen las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del adolescente en conflicto con la ley penal, misma que formará parte integral de la Plataforma México.

**Artículo 156.** Dentro del Sistema Único de Información Criminal se integrará una base nacional de datos de consulta obligatoria en las actividades de Seguridad Pública, sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de identificación, recursos y modos de operación.

Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que aporten las Instituciones de Seguridad Pública, relativa a las investigaciones, averiguaciones previas, órdenes de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de penas.

**Artículo 157.** Las Instituciones de Procuración de Justicia podrán reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, pero la proporcionarán al Sistema Único de Información Criminal inmediatamente después que deje de existir tal condición.

**Artículo 158.** El Sistema Nacional de Información Penitenciaria es la base de datos que, dentro del Sistema Único de Información Criminal, contiene, administra y controla los registros de la población penitenciaria de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 159.** La base de datos deberá contar, cuando menos, con el reporte de la ficha de identificación personal de cada interno con fotografía, estudios técnicos interdisciplinarios, procesos y demás información necesaria para la integración de dicho sistema.

## **SECCIÓN TERCERA**

### **Del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública**

Artículo 160. El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, formará parte integrante de Plataforma México y contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, la cual preverá entre otros datos, su ingreso, permanencia, desarrollo, evaluación, reconocimiento, certificación y retiro.

**Artículo 161.** El Registro contendrá, por lo menos:

- I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes laborales, así como su trayectoria en los servicios de Seguridad Pública;
- II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público, y
- III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron.

Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al Registro.

Las órdenes de detención o aprehensión se notificarán cuando no pongan en riesgo la investigación o la causa procesal.

**Artículo 162.** Las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios inscribirán y mantendrán actualizados permanentemente en el Registro los datos relativos a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de esta Ley.

Para efectos de esta Ley, se consideran miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente.

La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la presente Ley.

**Artículo 163.** Las disposiciones previstas en esta sección no serán aplicables a los servidores públicos de los poderes judiciales de la Federación, de los estados y del Distrito Federal.

## **SECCIÓN CUARTA**

### **Del Registro Nacional de Armamento y Equipo**

Artículo 164. Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios manifestarán y mantendrán

permanentemente actualizado en el Registro Nacional de Equipo y Armamento, integrante de Plataforma México, el cual incluirá:

I. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo, y

II. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.

**Artículo 165.** Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las instituciones de Seguridad Pública mantendrán un registro de los elementos de identificación de huella balística de las armas asignadas a los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública. Dicha huella deberá registrarse en una base de datos de carácter nacional.

**Artículo 166.** Las armas sólo podrán ser portadas durante el tiempo del ejercicio de funciones, o para un horario, misión o comisión determinados, de acuerdo con los ordenamientos de cada Institución.

**Artículo 167.** En el caso de que los integrantes aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Nacional de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones aplicables.

**Artículo 168.** El incumplimiento de las disposiciones de esta sección, dará lugar a que la portación de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.

## **SECCIÓN QUINTA**

### **De la Estadística de Seguridad Pública**

**Artículo 169.** Plataforma México contribuirá a la integración de la estadística nacional en materia de Seguridad Pública, y la analizará con el propósito de planear las estrategias de las políticas tendentes a la preservación del orden y la paz públicos.

**Artículo 170.** Las normas generales para la recepción de la información serán establecidas de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

**Artículo 171.** La estadística de Seguridad Pública sistematizará los datos y cifras relevantes sobre servicios de seguridad preventiva, procuración y administración de justicia, sistemas de prisión preventiva, de ejecución de sentencias y de tratamiento de menores, y los factores asociados a la problemática de Seguridad Pública.

## **SECCIÓN SEXTA**

### **De las Reglas Generales sobre la Información**

**Artículo 172.** El Consejo Nacional determinará las bases para incorporar otros servicios o instrumentos que tiendan a integrar la información sobre Seguridad Pública y los mecanismos que den agilidad y rapidez a su acceso.

También determinará las condiciones de seguridad sobre manejo y acceso a la información, la que tendrá siempre un responsable de inscripción. En los casos necesarios se asignará una clave confidencial a los responsables de inscribir y a las personas autorizadas para obtener la información en los sistemas, a fin de que quede la debida constancia de cualquier movimiento o consulta.

**Artículo 173.** Para el acceso a la información sobre Seguridad Pública, se establecerán diferentes niveles de consulta, atendiendo del tipo de información, se determinará el nivel en la clasificación que corresponda a cada Registro o información y, en su caso, se señalará la que podrá tener carácter público.

**Artículo 174.** Los datos contenidos en Plataforma México se considerarán reservados. El plazo para darlos a conocer se contará a partir de su última actualización.

**Artículo 175.** La información será manejada bajo los principios de confidencialidad y reserva. No se proporcionará al público la información que ponga en riesgo la Seguridad Pública, la privacidad de los datos personales o atente contra el honor de las personas. El incumplimiento de esta obligación se sancionará en términos de las disposiciones penales y administrativas aplicables.

## **TITULO DÉCIMO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD**

### **CAPITULO ÚNICO De los Servicios de Atención a la Población**

**Artículo 176.** El Consejo Nacional establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la Seguridad Pública, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.

**Artículo 177.** El Consejo Nacional impulsará las acciones necesarias para que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes.

**Artículo 178.** El Consejo Nacional promoverá que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.

**Artículo 179.** Las instancias de coordinación que prevé esta Ley promoverán la participación de la comunidad, para:

- I. Conocer y opinar sobre políticas y Seguridad Pública;
- II. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para mejorar esta función;
- III. Realizar labores de seguimiento;
- IV. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;
- V. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y
- VI. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.

**Artículo 180.** El Consejo Nacional promoverá que las Instituciones de Seguridad Pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad, para alcanzar los propósitos del artículo anterior.

## **TÍTULO UNDÉCIMO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**Artículo 181.** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, estatales y municipales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los fondos a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables y por las autoridades federales competentes.

**Artículo 182.** La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas y los municipios en materia de Seguridad Pública, en términos del Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

**Artículo 183.** El servidor público que indebidamente inscriba a una persona como integrante en una Institución, sin contar con el certificado correspondiente, se hará acreedor a una multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse la conducta descrita y destitución e inhabilitación de tres años a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, sin perjuicio de las penas establecidas en otras disposiciones.

Las Instituciones de Seguridad Pública impondrán las sanciones a que se refiere el presente artículo, en el ámbito de sus competencias.

## **TÍTULO DUODÉCIMO DE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS**

**Artículo 184.** Para efectos de esta Ley, se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.

**Artículo 185.** La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios serán los encargados de llevar a cabo la protección, supervisión y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de dichas instalaciones y para garantizar su integridad y operación.

**Artículo 186.** El resguardo de las instalaciones estratégicas queda a cargo de la Federación, que se coordinará con las Instituciones locales y municipales correspondientes por razón del territorio en el ejercicio de esta función, las cuales garantizarán la seguridad perimetral y el apoyo operativo en caso necesario.

Para tal efecto, las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina y Armada de México, Seguridad Pública constituirán un Grupo de Coordinación Interinstitucional para las Instalaciones Estratégicas, que expedirá, mediante acuerdos generales de observancia obligatoria, la normatividad aplicable en la materia.

**Artículo 187.** El Consejo Nacional establecerá los casos, condiciones y requisitos necesarios para el bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico para los fines de seguridad pública.

Las decisiones que en ese sentido emita el Consejo Nacional, deberán ser ejecutadas por las distintas Instituciones de Seguridad Pública que lo integran.

## **TÍTULO DÉCIMO TERCERO DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD**

**Artículo 188.** Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.

**Artículo 189.** Los servicios privados de seguridad son auxiliares a la función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.

**Artículo 190.** Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se registrarán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables establecen para las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia a la autoridad.

Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán la obligación de las empresas privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza.

## **TITULO DÉCIMO CUARTO DE LOS PROCEDIMIENTOS POLICIALES**

### **CAPÍTULO ÚNICO Del Uso de la Fuerza Pública**

**Artículo 191.** Las Instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y preservar el Estado de Derecho establecerán una serie de métodos lo más amplio posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego.

La fuerza pública es el instrumento legítimo mediante el cual los Integrantes hacen frente a las situaciones, actos y hechos que afectan o ponen en peligro la preservación de la libertad, el orden y la paz públicos, así como la integridad y derechos de las personas, a fin de mantener los conceptos de seguridad pública que aseguren la vigencia de la legalidad y el respeto de las garantías individuales.

El uso de la fuerza pública será ejercido contra individuos o grupos que sean sorprendidos violando la ley y que requieran acciones concretas de las Instituciones para detenerlos y presentarlos ante la autoridad correspondiente, con el fin primordial de garantizar la integridad de las personas, preservar el orden y la paz públicos.

**Artículo 192.** Los integrantes encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza pública sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

En el desempeño de sus funciones, los integrantes utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:

- a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;
- b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones, asimismo respetarán y protegerán la vida humana;
- c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas, y
- d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los familiares de las personas heridas o afectadas.



**Artículo 193.** Todo policía tiene derecho a la protección de su vida e integridad física, al respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y de la ciudadanía, por lo que podrá portar, mostrar y, en caso necesario, hacer uso de sus armas en forma racional y proporcional para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o de los propios.

**Artículo 194.** Las Instituciones Policiales desarrollarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los métodos para el empleo de la fuerza pública en las distintas áreas de investigación, prevención y reacción, en los términos del presente Título.

## **SECCIÓN PRIMERA**

### **De sus Objetivos**

Artículo 195. Los objetivos del uso de la fuerza pública son los siguientes:

- I. Hacer cumplir la Ley;
- II. Evitar la violación y garantizar el restablecimiento de derechos fundamentales de las personas;
- III. Mantener la vigencia del Estado de Derecho;
- IV. Salvaguardar el orden y la paz públicos;
- V. Evitar la toma, destrozo o incendio de la propiedad pública o privada y de instalaciones o infraestructura destinados a los servicios públicos;
- VI. Garantizar el normal funcionamiento de servicios públicos y el libre tránsito de personas y bienes, y
- VII. Disuadir a personas que participan de manera violenta en conflictos que comprometen el mantenimiento del orden público.

**Artículo 196.** En caso de agresión ilegítima actual o inminente, el derecho de legítima defensa faculta al personal de las Instituciones a hacer uso de fuerza proporcional a la amenaza, a adoptar medidas de protección activa o pasiva y defensa de sus personas o de la de otros, incluyendo el empleo de su armamento reglamentario.

**Artículo 197.** En el uso de la fuerza pública, los Integrantes deberán apegarse a los principios siguientes:

- I. Necesidad;
- II. Proporcionalidad;
- III. Racionalidad, y
- IV. Oportunidad.

**Artículo 198.** Sólo cuando sea estrictamente necesario, los integrantes emplearán la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para reestablecerlo.

**Artículo 199.** El uso de la fuerza será adecuado y en proporción a la resistencia del infractor o agresión recibida, atendiendo a su intensidad, duración y magnitud.

Este principio de proporcionalidad establece básicamente que no se debe actuar con todo el potencial de una unidad si las personas contra las que se usa la fuerza se encuentran en una situación cuantitativa y cualitativa inferior. En consecuencia, la fuerza empleada debe ser prudente y limitada, sólo para alcanzar la neutralización de la agresión.

El uso de la fuerza está en directa relación con los medios que emplean las personas que participan en la agresión, su número y grado de hostilidad.

**Artículo 200.** La racionalidad en el uso de la fuerza implica que ésta será empleada de acuerdo a la reflexión y lógica con relación a la situación hostil que se presenta, a efecto de valorar el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar como la de los propios Integrantes.

**Artículo 201.** La oportunidad en el uso de la fuerza pública tenderá a la actuación policial inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública.

**Artículo 202.** El empleo de armas de fuego sólo será justificable en situaciones de extrema necesidad y como último recurso cuando fracasen todos los medios de negociación y persuasión y se empleará sólo en las situaciones siguientes:

- I. En defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves;
- II. Para detener a una persona plenamente identificada que represente peligro y oponga resistencia o para impedir su fuga;
- III. Para impedir la toma de instalaciones militares y civiles que se encuentren bajo custodia;
- IV. Para evitar ser desarmados o impedir la captura del armamento, y
- V. Para impedir que personas, con su accionar, traten de dificultar o evitar a las unidades cumplir su misión constitucional.

## **SECCIÓN SEGUNDA**

### **Procedimiento Sistemático Operativo del empleo de la Fuerza Pública**

Artículo 203. Para el empleo de las armas de fuego, el personal de la Instituciones Policiales deberá observar, conforme a las circunstancias de cada caso, lo siguiente:

- I. Planificación, preparación y movilización para el empleo de medios humanos, materiales y técnicos, en directa relación con el principio de proporcionalidad, identificándose como personal de instituciones policiales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta;
- II. El empleo de las armas debe ser ordenado y controlado por el comandante de la unidad empleada, con autorización del superior inmediato;
- III. Ejecución de disparos al aire con munición de fogueo;
- IV. Ejecución de disparos al suelo con munición de guerra o munición no letal;
- V. Si la amenaza continúa, ejecución de disparos con munición no letal en caso de contar con ella, en zonas no vitales;
- VI. Se deben tomar todas las precauciones para evitar daños a personas no comprometidas en el conflicto o a las propiedades adyacentes al área donde se desarrolla el hecho delictivo, y
- VII. En todo caso se tendrá en cuenta que el empleo de armas de fuego debe basarse en el mínimo necesario, dirigido y controlado.

**Artículo 204.** En términos del artículo anterior, después de haberse efectuado disparos deben adoptarse las siguientes medidas:

I. Médicas. Todas las personas heridas deben recibir los primeros auxilios en el menor tiempo posible, siempre que dicha asistencia no ponga en peligro la vida de los socorristas, y

II. Informes. El informe de la relación de los hechos, elaborado a la brevedad posible, que incluya los siguientes aspectos:

a) Fecha, hora y lugar donde se efectuaron los disparos.

b) Unidad que participa;

c) Causas de la acción;

d) Motivo por el cual el personal abrió fuego;

e) Tipo de armas empleadas y cantidad de cartuchos disparados;

f) Las consecuencias aparentes de los disparos, y

g) Un diagrama de la escena del incidente.

**Artículo 205.** El personal de las Instituciones Policiales recibirá la capacitación y adiestramientos necesarios para el empleo de armas de fuego en los supuestos legalmente previstos.

Una vez que haya recibido el adiestramiento, el personal de las Instituciones Policiales será examinado conforme al protocolo de evaluación y control de confianza correspondiente. El personal que deba portar arma de fuego deberá estar autorizado para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo.

En la capacitación del personal encargado de hacer cumplir la ley, se prestará especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego.

### **SECCIÓN TERCERA**

#### **De la Responsabilidad del Uso Ilícito de la Fuerza Pública**

Artículo 206. En caso de que el personal haya recurrido al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso, serán acreedores, de acuerdo a su participación, a la responsabilidad a que diere lugar, sea administrativa, civil o penal.

**Artículo 207.** El personal no podrá alegar obediencia de órdenes superiores si tenía conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y tuvo una oportunidad razonable de negarse a cumplirla.

También serán responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Se **ADICIONAN** los artículos 223 párrafo quinto; 211 bis-2 párrafo cuarto; 211 bis-3 párrafo tercero; 250 bis, 250 bis-1 y 250 bis-2 del **Código Penal Federal**; para quedar como sigue:

**Artículo 223. ...**

I a IV

...

...

...

Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores.

#### **Artículo 211 bis-2. ...**

...

...

A quien indebidamente conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en Plataforma México o en cualquier sistema informático de Seguridad Pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público, se impondrá además, inhabilitación de cinco a diez años para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública vinculados con la Seguridad Pública.

#### **Artículo 211 bis-3. ...**

...

A quien estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática en materia de Seguridad Pública, indebidamente obtenga, copie o utilice información que contengan, se le impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público, se impondrá además, una mitad más de la pena impuesta e inhabilitación por un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública vinculados con la Seguridad Pública.

**Artículo 250 bis.** Al que cometa el delito de falsificación de uniformes y divisas de cualquier corporación policial, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa.

Comete el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas, corporaciones policiales o de cualquier institución de seguridad pública o procuración de justicia, el que sin autorización de la Institución correspondiente fabrique, confeccione, produzca, imprima o pinte, cualquiera de los uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, divisas, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes siglas u otros elementos utilizados en dichas instituciones.

Se entiende por uniformes, divisas o insignias para los efectos de este artículo, los señalados en las disposiciones aplicables de las fuerzas armadas, policías o de cualquier institución de seguridad pública o procuración de justicia.

**Artículo 250 bis-1.** Se impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa, al que:

I. Almacene, distribuya, posea o introduzca al territorio nacional uniformes y divisas de instituciones policiales falsificadas;

II. A sabiendas, adquiera, enajene o use por cualquier medio o título, uniformes, divisas, balizaje, credenciales de identificación o insignias de las fuerzas armadas, las policías o cualquier institución de seguridad pública o procuración de justicia, falsificadas;

III. Procurándose sin autorización los verdaderos uniformes o divisas de las fuerzas armadas, las policías o cualquier institución de seguridad pública o procuración de justicia, hiciere uso indebido de ellos;

IV. Deje de prestar sus servicios como integrante de una institución policial, no entregue cuando fuere requerido alguno de los objetos mencionados en este Capítulo.

Cuando se utilicen vehículos con balizaje, colores, equipamiento, originales, falsificados o con apariencia tal que se asemejen a los vehículos utilizados por las fuerzas armadas mexicanas, corporaciones policiacas, instituciones de seguridad pública o procuración de justicia, para cometer un delito, la pena prevista en este artículo se elevará hasta una mitad.

Se entiende por balizaje para los efectos de este artículo, los señalados en las disposiciones aplicables de las fuerzas armadas, policías o de cualquier institución de seguridad pública o procuración de justicia.

Se presumirá el conocimiento de la falsedad, cuando el objeto material se adquiera o enajene en la vía pública, mercados o establecimientos no autorizados por las Instituciones competentes.

A quien cometa en grado de tentativa los supuestos típicos contenidos en este artículo, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa.

**Artículo 250 bis-2.** Se impondrá de uno a cinco años de prisión y hasta quinientos días multa:

I. Al que sin autorización de las fuerzas armadas, corporaciones policiacas, instituciones de seguridad pública, o de procuración de justicia, produzca, almacene, pinte, posea o distribuya uniformes, balizaje, insignias, credenciales de identificación y divisas con tamaño similar o igual al reglamentario, cuando dichas piezas, sin ser copia del original, presenten algunas de las imágenes o elementos de los contenidos en aquellos, resultando con ello objetos o piezas con apariencia similar, confundibles con uniformes y divisas emitidas legalmente, y

II. Al servidor público o ex servidor público de las fuerzas armadas, corporaciones policiacas, instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia que facilite o enajene por cualquier medio y título los uniformes o divisas otorgados por dichas Instituciones.

Las penas señaladas en los artículos precedentes se agravarán hasta una mitad más, y se impondrá además privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por diez años, cuando el delito sea cometido por servidores públicos o ex servidores públicos de las fuerzas armadas, corporaciones policiacas, instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia.

Cuando se cometa un delito señalado en este Capítulo, el importe de la multa se hará efectivo a favor de la Institución agraviada.

## **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes.

**SEGUNDO.** La Federación contará con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto para crear e instalar el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza, el cual deberá certificar a los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública y sus respectivos procesos de evaluación en el mismo plazo.

**TERCERO.** En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sus respectivos ordenamientos legales.

**CUARTO.** Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de este Decreto. Quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**QUINTO.** Los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la rama correspondiente, en un plazo no mayor a un año.

**SEXTO.** Los servidores públicos que obtengan el certificado y que satisfagan los requisitos de ingreso y permanencia que se establecen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los ordenamientos legales aplicables, ingresarán o serán homologados al servicio de carrera, en las ramas ministerial, policial y pericial, según corresponda, en la jerarquía y grado, así como antigüedad y derechos que resulten aplicables, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

**SÉPTIMO.** Las acciones que, en cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, corresponda ejecutar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de Sistemas Complementarios de Seguridad Social, deberán cubrirse con cargo al presupuesto de dichas autoridades en razón de sus competencias.

**OCTAVO.** Se abroga la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Reitero a Usted, ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

#### **Notas**

1. Controversia constitucional 132/2006, sentencia 10 de marzo de 2008.
2. Jurisprudencia, No. De registro 187,982, tesis P./J.142/2002, Materia Constitucional, Novena Época, Instancia Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, XV, Enero de 2002, PÁGINA 1042: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES."

Palacio Nacional, a los veintinueve días de septiembre de dos mil ocho.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)  
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

04-12-2008

Cámara de Diputados.

**DICTAMEN** de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Aprobado** con 335 votos en pro, 39 en contra y 13 abstenciones.

Se turnó a la Cámara de Senadores.

Gaceta Parlamentaria, 04 de diciembre de 2008.

Discusión y votación, 04 de diciembre de 2008.

## **DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA**

### **Honorable Asamblea:**

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen correspondiente dos **iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública**.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y fracción XXII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen.

### **Antecedentes**

1. En sesión celebrada en fecha 18 de septiembre de 2008 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Diputado Andrés Lozano Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por diversos Diputados del mismo parlamento.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva acordó se turnara dicha Iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
3. En sesión celebrada en fecha 2 de octubre de 2008 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el titular del Ejecutivo presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva acordó se turnara dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
5. Con fecha 23 de octubre de 2003 la Presidencia de la Mesa Directiva dictó una modificación para turnar a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Cuenta Pública la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el titular del Ejecutivo Federal, y en lo que respecta a la adición de diversos artículos al Código Penal Federal, a la Comisión de Justicia.
6. Que el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió a la Comisión de Seguridad Pública propuesta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
7. Con fecha 3 de diciembre de 2008, los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura, se reunieron para analizar y discutir el presente dictamen, siendo aprobado, en lo general y en lo particular por 21 votos a favor.

## Contenido

### I. Con relación a la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal:

El titular del Ejecutivo Federal, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, señala en su exposición de motivos que las sociedades evolucionan cuando su régimen jurídico responde a las necesidades primordiales de los ciudadanos y los gobiernos son capaces de dar respuesta a las demandas de los gobernados.

El Poder Ejecutivo Federal, al cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, ha escuchado el reclamo social que le recuerda que nuestro sistema jurídico y nuestras Instituciones son perfectibles, y que existen temas fundamentales en la agenda nacional que urge atender con soluciones convincentes a los ojos de quienes padecen el problema. Uno de ellos es la inseguridad pública, por ende, la dimensión de esta responsabilidad es mayúscula en tanto que la seguridad pública es la primera garantía que se debe brindar para asegurar una vida digna.

Hoy más que nunca, la sociedad reclama una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, organizada a partir de una perspectiva del sistema federal y traducida en una eficiente convergencia de competencias corresponsables.

En este contexto se ubica, en las últimas dos décadas, la labor de los tres poderes de la Unión a fin de dar respuesta a la inseguridad, la cual generó la reforma constitucional de 1994, que modificó los artículos 21 y 73 de nuestra Ley Fundamental, dando sustento jurídico a la coordinación en materia de seguridad pública y ordenando la ley que estableció las bases sobre las cuales pudieran actuar los tres órdenes de gobierno.

A través de esta reforma, se establecieron las bases jurídicas de una política en materia de seguridad pública; con ella, se habló por primera vez de un esfuerzo sistematizado a nivel nacional para combatir la delincuencia, sin embargo, a catorce años de distancia, nadie puede negar que la realidad de nuestro país es otra, el constante desenvolvimiento de las fuerzas sociales y los cambios vertiginosos a nivel mundial han generado que nuestro país en menos de tres lustros viva otros escenarios en el ámbito de la seguridad pública.

La reforma constitucional aprobada el 18 de junio del presente año, es sintomática porque marca el inicio de una nueva etapa en nuestro estado de derecho, respecto de la coordinación de todos los órdenes de gobierno para la atención de la seguridad pública, la cual constituye una de las principales preocupaciones de la sociedad.

En la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada el 11 de diciembre de 1995, se había pretendido alcanzar la seguridad que demandan los mexicanos, al sentar las bases legales para un sistema nacional de seguridad pública que facilitase la coordinación de acciones entre los distintos niveles de gobierno.

En dicha ley se estableció el servicio civil como eje rector del desarrollo de las corporaciones de seguridad pública y como obligatoria la carrera policial en todas las policías del país, de conformidad con las fórmulas de coordinación intergubernamental que el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública contempló. No obstante, los objetivos de la ley citada no alcanzaron su realización y la idea de que la federación, los estados y los municipios garantizaran una política coherente en la materia se vio frustrada.

Por otra parte, el escaso interés de fortalecer a las instituciones policiales, más allá de lo que permiten los recursos del Fondo para la Seguridad Pública consignado en la Ley de Coordinación Fiscal y que es fuente principal del sostenimiento de las corporaciones en todo el país, ha generado un notable descuido en la preparación, equipamiento y capacidad institucional de sus elementos.

Tras diversos intentos de instituir una norma con un enfoque claramente orientado hacia el servicio policial de carrera, no se logró establecer a plenitud un sistema que pudiera fungir como modelo de organización y gestión para todas las policías del país.

Simultáneamente en las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se legisló para crear leyes



de seguridad pública locales cuyo principal elemento consistió en la organización de los propios sistemas estatales de seguridad pública.

Se debe reconocer que las policías federales han mejorado sus sistemas de reclutamiento y selección, y han instituido importantes centros de formación policial; todo esto no podrá rendir los frutos esperados si no existe en el plano legislativo una norma que comprometa en forma eficiente y bajo un sistema de consecuencias a las autoridades que deben regir el desarrollo policial.

Ante este panorama, el proyecto de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es no solamente factible, sino inaplazable en cuanto a su expedición y puesta en operación, como un instrumento acorde con los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 31 de mayo de 2007.

La seguridad pública ha quedado definida como una función de Estado y que deberá proveerse de manera concurrente y coordinada por la Federación, entidades federativas y municipios.

El criterio referido ha sido adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al advertir que la seguridad pública es una materia concurrente, en la que se pueden configurar las competencias en una ley marco o general.

No obstante, respecto del régimen federal y de supremacía constitucional, el alto tribunal de la Nación ha definido que las leyes del Congreso emanadas directamente de la Constitución son precisamente las leyes generales cuya jerarquía normativa es de orden constitucional, lo que significa que, en aquellos casos en que el legislador constitucional dispuso que determinada materia o facultad habría de normarse por una ley emanada de la Constitución, significa que dicha ley integra una porción de normatividad constitucional; en palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Nuestro lenguaje constitucional llama concurrencia legislativa las que derivan de la atribución combinada, segmentaria y hasta compartida que efectúa el constituyente en favor de los distintos órdenes de gobierno, en relación con una materia competencial específica, a través de la distribución que se establece en una ley del Congreso de la Unión, llamada Ley General.

Estas leyes generales o marco distribuyen las competencias entre la federación y los estados, otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales correlativas, desconstitucionalizando la atribución de competencias entre los dos órdenes de gobierno, dejando la función de reparto en el Congreso Federal.

Ahora bien, la coexistencia de un criterio constitucional de distribución de competencias cooperativo junto con (sic) el criterio federalista dual, produce una alteración en las relaciones entre las leyes, en tanto la Constitución no atribuye las competencias en las materias concurrentes, sino que remite a otras leyes federales para ello. De esta forma, la constitucionalidad de una ley federal o local, en las materias concurrentes depende tanto de la Constitución como de la ley marco.

En efecto, si únicamente operara una configuración competencial federal, la validez de una ley en atención al órgano que la emitió exclusivamente estaría condicionado a determinar si la Constitución otorgó a cierto nivel de gobierno la facultad para expedir determinada ley en determinada materia. Sin embargo, en tanto que normas de igual rango pueden distribuir competencias, la validez de una norma no depende sólo de la Constitución, sino de otra ley, en las materias concurrentes.

Así la constitucionalidad de una ley puede depender no solo de la infracción a la Constitución Federal, sino también de la contravención de lo que en otras jurisdicciones se ha denominado bloque de constitucionalidad, es decir, de las normas que no forman parte de la Constitución y que tienen un rango inferior a ella, pero que por disposición constitucional deben ser utilizadas como parámetros de validez respecto de las leyes de la misma jerarquía cuya contravención provoca la inconstitucionalidad de éstas.<sup>1</sup>

Ahora bien, en el tema de la seguridad pública, lejos de una conjunción de soberanías o autonomías o simple suma de proyectos, las reformas constitucionales tienden a la integración de capacidades y esfuerzos, a la

interacción de los órdenes de gobierno en el diseño de una estrategia para la seguridad pública integral para la Nación; la operatividad y alcance de cada uno de los órganos ha sido y es aún diferenciado, ya se trate de la competencia federal, ya del actuar local o municipal, pero la exigencia social, el proyecto y la responsabilidad es compartida y única ante la Nación.

Así, las bases de coordinación y colaboración deben ir más allá de un simple reparto de funciones; más bien se deben fijar con toda claridad los parámetros generales sobre los temas específicos, de manera que integrados en la Federación, en cada uno de sus ámbitos competenciales, constituyan una fuerza sólidamente unida, y no dispersa o difusa, en la atención a la seguridad pública.

La coordinación en el régimen federal no significa la simple distribución material o matemática de competencias o atribuciones de los órganos de gobierno, pero si constituyen parámetros equitativos y efectivos de coordinación o cooperación federalizada, precisamente, son parámetros reales y eficaces del actuar de cada uno de los órdenes de gobierno, con el respeto a su ámbito de funciones y operatividad, ni subordinación ni suprasubordinación, soberanos en sí, unidos en un proyecto nacional: el combate a la delincuencia.

A ese respecto, se han identificado diversas materias de facultades concurrentes, entre la Federación, las entidades federativas y los municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son, entre otras: la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

Por ello, las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el presente año, ordenan la constitución de un Sistema Nacional de Seguridad Pública sujeto a las bases mínimas siguientes, de acuerdo al artículo 21 constitucional:

"[...]

- a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y. desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones;
- b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema;
- c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos;
- d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública; y
- e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines".

Esa fue la intención del Constituyente Permanente al reformar el artículo 21 constitucional, ya que determinó como requisito para que los agentes de policía puedan realizar sus funciones de prevención e investigación del delito, que se sometan a un proceso de certificación, cuyas directrices deberán establecerse en las leyes federales e incorporadas en las legislaciones locales.

La reforma constitucional trascendió también a la estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia, ordenando una alineación de las capacidades del Estado mexicano contra el crimen organizado; en este respecto, reconoció las facultades de investigación para el combate y prevención del delito a las instituciones policiales, mismas que en el ejercicio de aquella función actuarán bajo la conducción del

Ministerio Público, pero sin que ello implique forzosamente una supeditación orgánica a la estructura ministerial.

La asignación de facultades para la investigación y prevención de los delitos a la policía, hace necesaria la creación o fortalecimiento de áreas especializadas en las diferentes actividades de las instituciones policiales; por ello, la presente iniciativa propone que las corporaciones de los tres órdenes de gobierno cuenten al menos con las áreas de investigación, prevención y reacción, a efecto de atender de manera eficaz y eficiente las demandas de la población en esta materia.

Las amenazas nacionales e internacionales que actualmente conlleva el fenómeno delictivo, es necesario evitar la comisión de delitos, en lugar de investigarlos una vez ocurridos. Además, la experiencia nos ha enseñado que el narcotráfico es, frecuentemente, parte de las operaciones de las empresas criminales, por lo que en muchos de los casos, el arresto de los perpetradores de un solo crimen, puede no tener gran impacto sobre la asociación delictiva, pues inclusive podría tratarse de un costo aceptable para los jefes de dichas organizaciones.

Por ello, es indispensable adoptar un enfoque de inteligencia para este tipo de actividades; así, en lugar de esperar que ocurra una actividad criminal, la policía debe reunir información permanentemente sobre diversos grupos e individuos, sus motivaciones, recursos, interconexiones, intenciones, entre otras cosas, con la finalidad de prevenir delitos.

La ruta tradicionalmente adoptada por las corporaciones policiales, en lo relativo a la especialización de las áreas encargadas respectivamente de la pluralidad de temas inherentes a la seguridad pública, ha derivado en una errónea fragmentación del mando policial.

Tal circunstancia ha generado, además de una división orgánica de los cuerpos policiales, falta de coordinación entre las mismas, e incluso, una lógica rivalidad entre las distintas agencias, que llega al extremo de no compartir la información de inteligencia para el combate al crimen.

Esa situación, puede entenderse en el contexto de las múltiples autonomías en los niveles municipal, estatal y federal; por lo que se hace necesaria la determinación de disposiciones generales que conlleven a la homogeneidad de grados, perfiles, procedimientos y esquemas de organización en las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno.

Por otra parte, la viabilidad de un Sistema Nacional de Seguridad Pública eficaz en las tareas propias de la función pública, hace imprescindible la operación e instrumentación de sistemas que garanticen el adecuado intercambio de información en materia de seguridad pública y que generen inteligencia apta para el ejercicio de las atribuciones de los órganos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

En este contexto y ante la crisis de inseguridad que vive el país, existe la imperiosa necesidad de desarrollar sistemas informáticos de vanguardia que proporcionen información de inteligencia idónea y oportuna para el combate de la delincuencia. Así, Plataforma México se constituye en un novedoso instrumento de la más avanzada tecnología que hace frente al desarrollo tecnológico de la delincuencia y concentra la información que es necesaria en la planeación de las operaciones policiales.

Del mismo modo, a efecto de brindar seguridad pública con respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, la Ley propuesta plantea la regulación del uso de la fuerza que ejercen los cuerpos de seguridad pública en cumplimiento de sus funciones.

Sin lugar a dudas, los puntos de contacto entre las policías con los sujetos que cometen faltas administrativas o delitos, tienen diferentes aristas en las que el principio de legalidad debe hacerse valer, así como también el principio de la debida diligencia, que sustituye al viejo concepto del cumplimiento del deber hasta la última de sus consecuencias y por todos los medios posibles, hecho que ha propiciado el surgimiento de incentivos y márgenes de acción, sobre la base de reglas informales o formales, a la conducta ilegítima y el abuso de la fuerza.

La actuación de la policía debe contar con un marco normativo que le brinde seguridad jurídica; al mismo tiempo que la ciudadanía debe conocer y saber cuáles son los límites del uso de la fuerza pública en los

procedimientos policiales. Ambos aspectos, hasta hoy, no han sido establecidos o definidos en una ley federal, por tanto, se siguen presentando controversias sobre el grado de apego que tiene diversos procedimientos policiales con respeto a los derechos humanos de los sujetos que debido a las circunstancias delictivas, son sometidos por los policías. No hay policía democrática cuando ésta no regulariza la relación armónica con los derechos humanos, cuando sus miembros no son reconocidos como autoridad con plenos derechos y obligaciones, y cuando el uso de la fuerza no es sujeto de control que garantice, al mismo tiempo, su eficacia y uso legítimo.

Desde esta perspectiva, la Iniciativa que se presenta, permite dar respaldo firme para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la medida que, por primera vez, desde una norma general, es posible inducir criterios técnicos, operativos, de procedimiento y de responsabilidad policial, con una mayor claridad que la que se consigue a través de manuales, códigos de ética y otros instrumentos de normas secundarias vigentes.

Ante la necesidad de combatir el crimen, pero sin exceder los límites del uso de la fuerza necesaria, la ley en proyecto atiende dos puntos: en primer lugar facilita el trabajo de las policías, aun y cuando recurran al uso de dicha fuerza; y segundo, se asegura que éstas no se desborden, por tanto, se trata de una ley que provee garantías complementarias al respeto de los Derechos Humanos en nuestro país.

La inclusión de la regulación de los procedimientos policiales en la Ley General que se propone, abre la posibilidad de que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, establezcan, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las normas de actuación en los distintos procedimientos al tenor de principios generales que garanticen un desempeño uniforme de la función de la seguridad pública en las corporaciones policiales.

La ciudadanía ha hecho énfasis en múltiples aspectos que abarcan: la falta de ética, programas, métodos de prevención, técnicas de investigación, sanciones eficaces y ejemplares para los servidores públicos que deben garantizar la seguridad pública en México y que se valen del cargo para delinquir; aunado a ello, una dolencia de la sociedad es una coordinación en ciernes entre los niveles de gobierno para resolver un problema que es común a todos, que más allá del protocolo, se traduzca en un sano entendimiento entre la federación, estados y municipios.

Por ello, en la presente iniciativa, se propone reformar el sistema de seguridad pública, y atacar el problema estructuralmente a través de un sistema integral que contemple la prevención, investigación y persecución de las conductas antisociales.

La Ley General que se somete a consideración de esa Honorable Soberanía, presenta el siguiente perfil de su estructura y contenido.

En el Título Primero, *Disposiciones Preliminares*, la Ley establece las disposiciones que orientan el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios a efecto de hacerlo efectivo, de igual forma define las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.

El Título Segundo *De las Instancias de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública*; prevé la creación del Consejo Nacional como máxima instancia de deliberación del Sistema; los Órganos e Instancias Auxiliares para el impulso y desarrollo de las distintas materias de coordinación a que se refiere la Ley, dentro de las cuales se plantean las conferencias de Secretarios de Seguridad Pública, la de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario, de Prevención del Delito, la de Participación Municipal y el establecimiento de los Consejos Regionales y Locales de Coordinación, encargados de la coordinación, planeación y supervisión del sistema en sus respectivos ámbitos de competencia.

Consciente de la fuerza que genera la sociedad civil en las tareas cotidianas de prevención de las conductas sociales, y de la importancia que tiene el núcleo familiar al ser generador y transmisor de valores ante la comunidad, la presente Ley regula el Consejo de Prevención del Delito, y le encomienda lo que antes fue una labor aislada en su actuar y al margen de las instituciones de seguridad pública, pero que en estos momentos se convierte en misión histórica: promover la cultura de prevención del delito, impulsar la coordinación entre las instancias educativas a fin de generar los lineamientos que orienten a los educandos, docentes y padres de familia, respecto al fenómeno delictivo; colaborar con las instituciones públicas y privadas para llevar a

cabo programas en materia de prevención de adicciones y en sí, todo tipo de actividades encaminadas a la inhibición de las conductas delictivas y la preservación de la integridad de las familias mexicanas.

El Título Tercero, *De la Distribución de Competencias*, incluye la distribución de competencias entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, conceptualizando a la seguridad pública como una materia concurrente.

El Título Cuarto, *De la Coordinación de las Instituciones de Seguridad Pública*, comprende la coordinación entre el Ministerio Público de la Federación, del Distrito Federal y de los Estados, así como la coordinación del Ministerio Público con la Policía en los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar el cumplimiento de la presente Ley y hacer efectiva la coordinación del Sistema.

El Título Quinto, *Disposiciones comunes a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública*, el cual contempla el catálogo de deberes de los servidores públicos que integran las instituciones de seguridad pública, los sistemas complementarios de seguridad social, la identificación del personal de dichas Instituciones y el reconocimiento al personal.

El Título Sexto, *Del Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia*, el cual comprende los requisitos de ingreso al servicio de carrera de las Instituciones de procuración de justicia, así como el desarrollo y terminación del servicio de carrera, la profesionalización y certificación del personal en dichas instituciones.

El Título Séptimo, *Del Desarrollo Policial*, define el Desarrollo Policial como un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las Instituciones y tiene por objeto, garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio, y garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales, determinando su ámbito de aplicación de manera general.

La Ley propuesta establece que el Servicio Civil de Carrera Policial tendrá carácter obligatorio y permanente en las Instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lo cual se define un marco normativo general para prevenir que no ingresen a las corporaciones de seguridad pública personas cuyo perfil no sea el adecuado. El mismo Título define los subsistemas que forman parte de la estructura de la carrera policial: el ingreso y permanencia, la selección y sus criterios generales, la definición del personal que se considera activo en el servicio; la certificación de los elementos de las corporaciones de seguridad pública y sus mandos, los estímulos asignables a los elementos con trayectorias distinguidas, las reglas generales para las promociones y ascensos, las normas de conclusión del servicio de los elementos y las previsiones y normas que determinan cuándo podrá darse de baja a un elemento del servicio.

Asimismo, propone la constitución de órganos policiales que deberán erigirse en las diferentes corporaciones de seguridad pública para efectos de conducir los procesos de la carrera policial en sus diferentes etapas; los órganos que se instituyen en la Ley son los siguientes:

1. Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza, como órgano encargado de dirigir, coordinar y certificar los procesos de evaluación de los Integrantes de las Instituciones;
2. Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública, responsables de aplicar los procesos de evaluación sobre el cumplimiento de los perfiles definidos para los puestos policiales y los requisitos de ingreso y permanencia; así como certificar a los elementos que satisfagan tales requisitos y perfiles;
3. Academias de Formación, de Capacitación y Profesionalización Policial, organizadas por la Federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios, que serán responsables de aplicar los planes y programas de capacitación, adiestramiento, profesionalización y actualización de los aspirantes, candidatos e Integrantes de los cuerpos policiales, así como el cumplimiento de los perfiles genéricos;

4. Instancias colegiadas, establecidas por la Federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios, en los que participen representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las instituciones policiales, que serán las encargadas de conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite en relación con los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario.

La Ley define el perfil de las dos principales instancias reconociéndolas como las Comisiones de Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y Justicia. El establecimiento de estas instituciones constituye un avance considerable de la nueva ley propuesta, pues viene a subsanar un vacío de la anterior Ley de Bases, que no establecía los órganos encargados de desempeñar las tareas relativas al servicio profesional de carrera y el régimen disciplinario de las instituciones de Seguridad Pública.

Además, su integración colegiada y representativa de las diferentes divisiones en que se organizan las corporaciones policiales contribuirá a reducir los riesgos de corrupción y fortalecerá la legitimidad de sus resoluciones.

El Título Octavo, *Del Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza*, que comprende las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios, tendentes a cumplir con los objetivos de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

El Título Noveno, *De la Información sobre Seguridad Pública*, establece que la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, analizarán y actualizarán oportuna y diariamente, la información sobre seguridad pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos que la integran, a fin de garantizar la integración y operación de la información; de igual manera, prevé el Sistema Único de Información Criminal, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Armamento y Equipo, y la Estadística de Seguridad Pública como partes integrantes de Plataforma México.

El Título Décimo, *De la Participación de la Comunidad*, prevé el establecimiento de mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la seguridad pública, privilegiando con ello la participación ciudadana, en la inteligencia de que sociedad y derecho constituyen un binomio indisoluble cuya dinámica debe estar encaminada a un mismo fin.

El Título Décimo Primero, *De las Responsabilidades de los Servidores Públicos*, tiene como finalidad asegurar el debido manejo o aplicación de los recursos de los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública; para ello tipifica los delitos en materia de seguridad pública, como delitos especiales.

El Título Décimo Segundo, *De las Instalaciones Estratégicas*, relativo a la protección, supervisión y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano en términos de la Ley de Seguridad Nacional.

El Título Décimo Tercero, *De los Servicios Privados de Seguridad*, dispone las facultades de la Federación y Entidades Federativas en la autorización de los servicios privados de seguridad, así como la participación de éstos en cuanto auxiliares de la función de seguridad pública.

Por último, el Título Décimo Cuarto, *De los Procedimientos Policiales*, tiene como propósito regular de manera general el uso de la fuerza que ejercen los cuerpos de seguridad pública en cumplimiento de sus funciones para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

En suma, el nuevo modelo de seguridad pública que contempla la iniciativa que hoy se somete a consideración de esa honorable soberanía, pretende colmar la expectativa de ésta y las siguientes generaciones, porque representa la decidida voluntad del gobierno de la República por atender la preocupación ciudadana y por formular un nuevo planteamiento, en la perenne edificación de una cultura de la legalidad y la seguridad pública.

## **II. Con relación a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través del diputado Andrés Lozano Lozano:**

En la exposición de Motivos, se señala que la seguridad es una garantía consagrada por la Constitución y, por tanto, es responsabilidad del Estado garantizarla.

Que las graves condiciones de inseguridad que prevalecen en diversas entidades federativas y el activismo cada vez mayor de grupos de la delincuencia organizada ha generado una reacción desconcertada y desarticulada del gobierno federal, cuya única respuesta ha sido enviar militares, recluir y detener policías y restringir, de manera tácita y por demás ilegal, las garantías individuales de los ciudadanos; todo lo anterior sin ningún resultado real y contundente más allá del incremento en los índices de la violencia.

Que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha señalado, en múltiples ocasiones, la urgencia de una nueva concepción de la seguridad pública, tal que respete no sólo los derechos humanos de la población sino que dignifique las labores policíacas y que genere nuevas condiciones de convivencia para regenerar el tejido social.

De acuerdo a lo anterior, se expresa en la misma que un gran paso se dio cuando, durante el año de 2007, el Congreso mexicano examinó el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y decidió reformarlo para poder brindar los instrumentos jurídicos necesarios que se requieren para hacer frente a una nueva situación mundial y proteger, de esta manera, los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional.

La reforma constitucional se concretó cuando fue publicada, el día 18 de junio, en el Diario Oficial de la Federación. En el caso del párrafo noveno del vigente artículo 21 constitucional, se establece que la seguridad pública debe ser concebida como una política de Estado, esto es, las políticas de seguridad pública deben transitar verticalmente entre los tres ámbitos de gobierno y, transversalmente, entre los tres poderes de la Unión; que las políticas de seguridad pública deben comprender la prevención y la sanción de los delitos y faltas, superando la concepción actual de las políticas hasta hoy implantadas de manera focal en la persecución coercitiva del delito.

Asimismo, instituye los principios fundamentales que deben regir la actuación de los integrantes e instituciones de seguridad pública: **legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.**

Por otra parte, se refiere que el párrafo décimo del mismo artículo 21, establece que las instituciones de seguridad pública deberán tener un carácter civil, excluyendo, de manera clara, la participación de las instituciones de seguridad nacional en acciones encaminadas a la preservación de la seguridad pública. Adicionalmente, se señala, que el Ministerio Público, institución que corresponde al ámbito de procuración de justicia, es considerada como una institución de seguridad pública y conformará, junto con las instituciones policiales de los tres ámbitos de gobierno, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, instrumento fundamental para la implementación coordinada, coherente y uniforme de las políticas de seguridad pública.

Este nuevo órgano, deberá avocarse a la regulación de los procedimientos de selección, ingreso, permanencia y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, esto es, deberá dictar las normas mínimas para la permanencia y promoción de los integrantes de las policías en sus cuerpos, pero también del Ministerio Público, en las Procuradurías de Justicia.

Asimismo, en la iniciativa se sostiene que la Ley que se presenta, tiene por fundamento el respeto al pacto federal, la división de poderes y, de manera primordial, se basa en la implantación de políticas preventivas y en la institucionalización de una serie de mecanismos que permitirán el control de las instituciones de seguridad pública y privada, así como de todos sus miembros. Para tal efecto, se divide en dos grandes partes. La primera, dedicada al Sistema Nacional de Seguridad Pública y la segunda, enfocada al establecimiento de los principios generales que deben regir las políticas de seguridad pública y los instrumentos institucionales mínimamente requeridos para conseguir sus fines.

De acuerdo a lo anterior y de manera general, la Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se desarrolla en la siguiente estructura:

**Primera Parte:** El artículo segundo de esta Iniciativa establece que la seguridad pública comprende "la prevención de los delitos, su investigación y persecución para hacerla efectiva así como la sanción de las infracciones administrativas"; el artículo 3 define a la prevención como la base de las políticas de seguridad pública. El artículo 4 establece las características de las instituciones de seguridad pública: civiles, disciplinadas y profesionales; el artículo 6 indica cuales son los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siguiendo lo dispuesto por el artículo 21 constitucional; el artículo 8 establece, como columna vertebral del Sistema Nacional, los principios de actuación de sus integrantes.

El capítulo I del Título Segundo instituye las competencias del Sistema Nacional, para determinar las políticas a seguir en materia de prevención; atención integral a víctimas; participación ciudadana; procedimientos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, certificación, promoción y retiro de los miembros de las instituciones de seguridad pública; los sistemas de estímulos y recompensas así como los disciplinarios y, de manera imprescindible, el suministro y sistematización de la información a la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública.

En el capítulo II se proponen cambios al Consejo Nacional de Seguridad Pública, concebido anteriormente como el órgano superior del Sistema Nacional, y que ahora se convierte en el órgano deliberativo y ejecutor del Sistema, con carácter colegiado y paritario, conformado por los titulares de los poderes Ejecutivos, los procuradores de justicia y los secretarios de seguridad pública o sus equivalentes, en los ámbitos federal y locales.

Asimismo, en el capítulo III se crea la figura de Secretario Técnico, cuyas funciones serán exclusivamente de auxilio administrativo al Consejo Nacional para dar seguimiento a sus acuerdos y resoluciones, publicar sus informes y realizar estudios especializados en la materia; no formará parte del órgano deliberativo y será nombrado por el propio Consejo a propuesta del presidente de la República.

En el capítulo IV, se establecen las bases para que, con absoluto respeto a las atribuciones constitucionales de cada ámbito de gobierno, se instauren Consejos de Seguridad Pública en cada una de las entidades federativas, municipios u órganos políticos administrativos, para dar seguimiento a la implantación de las políticas, acuerdos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional.

**Segunda Parte:** El Título Tercero consigna los lineamientos generales de las políticas en materia de prevención, atención a víctimas y participación ciudadana. En el artículo 24 del capítulo I se establece que la seguridad pública es un derecho fundamental de los habitantes del territorio nacional que debe ser garantizado por el Estado a través del diseño e implantación de políticas transversales de prevención, situadas como instrumento fundamental y base de las políticas de la seguridad pública.

Las estrategias de una prevención integral deben comprender, sin ninguna duda, al menos:

1. Una inversión temprana en los niños, cuidado pre y posnatal, así como asistencia nutricional para la madre y el niño;
2. Los jóvenes deberían estar incluidos en el desarrollo de las políticas de la prevención del delito, en particular las relacionadas con la salud, recreación, capacitación y empleo;
3. Los empleadores deben ofrecer oportunidades de trabajo y evitar las deserciones;
4. Los municipios y otras entidades de gobierno deben combatir la violencia familiar, los ataques sexuales y los abusos a mujeres y niños, y
5. La policía, los jueces, trabajadores sociales, doctores y maestros deben ser capacitados en escenarios interactivos para promover la prevención interorganizacional.

Con base en lo anterior es que, en el capítulo I del Título Tercero se establece en la Iniciativa que se analiza que todas las entidades de la administración pública y los tres poderes en los tres ámbitos de gobierno deberán implementar acciones preventivas para el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes, pueblos indígenas, adultos mayores y de cualquier grupo que se



encuentre en situación de desventaja por alguna circunstancia específica. Todos estos programas y acciones conformarán el **Programa Permanente de Prevención Integral**.

El capítulo II de este Título se enfoca en las políticas de atención a víctimas, definidas como una obligación del Estado tendientes a custodiar el "libre ejercicio de sus derechos desde todos los ámbitos de la acción social y tendrán como objetivo impedir y erradicar cualquier práctica que tenga como fin dilatar, obstaculizar o imposibilitar el goce y ejercicio de los mismos".

El capítulo III se encuentra dedicado a las formas de participación ciudadana y de la comunidad para la Seguridad Pública, establecida en dos niveles fundamentales: el de que la comunidad, tenga o no estructura organizativa, y el de la sociedad civil organizada. La comunidad debe participar, con la autoridad más cercana a ella, es decir la municipal o de la demarcación territorial, para determinar el diseño de las políticas de seguridad pública a implementarse en su entorno inmediato, para lo cual deberán integrarse a dos representantes en los Consejos Municipales o de las demarcaciones territoriales de Seguridad Pública, previa elección de su comunidad.

Las organizaciones de la sociedad civil deberán estar representadas en los Consejos Nacional, estatales y del Distrito Federal, en igualdad de circunstancias que sus demás integrantes, para lo cual los poderes Ejecutivos deberán emitir la convocatoria correspondiente. Adicionalmente, podrán participar en la implantación de las políticas de seguridad en los tres ámbitos de gobierno y, junto con las instituciones de educación superior, en la evaluación del diseño, implantación e impacto de las políticas de seguridad pública así como de las propias instituciones.

El proceso de evaluación de las políticas públicas implementada por las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior deberán contemplar los programas y la actuación de las propias organizaciones así como de las instituciones de seguridad pública en la implantación de las políticas así como su impacto, validarán los indicadores de gestión, publicarán sus resultados y podrán proponer, en su caso, el rediseño o redireccionamiento de las políticas.

En cuanto a la evaluación realizada por las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil de las instituciones de seguridad pública, deberán contemplar la evaluación del desempeño, la validación de las currículas para los programas de capacitación y profesionalización, las evaluaciones técnico-jurídicas y técnico-operativas de su actuación así como la evaluación del servicio prestado.

El Título Cuarto de esta iniciativa se encuentra dedicado a la regulación del Servicio Civil de Carrera en las Instituciones de Seguridad Pública, para lo cual se establecen, en el artículo 39, las obligaciones mínimas que deben cumplir, el beneficio de la objeción de conciencia y las garantías mínimas para el desarrollo de sus funciones.

El Título Quinto de esta Iniciativa se encuentra dedicado a la integración de la Base Nacional de Información sobre Seguridad Pública, conformada a partir de los datos criminalísticos y de personal de las instituciones de seguridad pública, aportados por los municipios o demarcaciones territoriales, los estados, el Distrito Federal y la Federación, gestionada y administrada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta Base Nacional tendrá tres Registros:

- a) El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
- b) El Registro Nacional de Armamento y Equipo de las Instituciones de Seguridad Pública.
- c) La Estadística de Seguridad Pública.
- d) La Información de Apoyo a la Procuración de Justicia.

Se establecen, en este mismo capítulo, las reglas generales para la consulta de esta Base Nacional, niveles y tipos de acceso a la Base así como la determinación de principios generales para su consulta por la población en general.

Por último se establecen los principios generales para la regulación de los servicios privados de seguridad en el Título Sexto. Entre los requisitos para el desarrollo de este tipo de actividades se incluyen la obligación de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley Federal de Seguridad Privada y contar con las licencias correspondientes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Dirección General del Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, inscribir a todos sus integrantes en el Registro Nacional de Personal de

Seguridad Pública y notificar cualquier cambio en su estatus laboral, inscribir su armamento y equipo en el Registro Nacional, obtener los permisos administrativos correspondientes en cada una de las entidades en que presten sus servicios y, en el caso de que éstos lo sean en dos o más entidades, además deberán contar con la autorización correspondiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

En razón de lo anterior, el paradigma de la seguridad pública debe ser modificado, incorporando el libre goce de los derechos humanos y las garantías individuales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y especialmente imbricados en la construcción de un Estado democrático social y de derecho que responda, de frente a la ciudadanía, para garantizar el derecho a la Seguridad como parte fundamental del desarrollo humano.

### **III. Con relación a la propuesta remitida por el Dip. Gerardo Octavio Vargas Landeros:**

En sus consideraciones se afirma que la seguridad pública es la principal exigencia de nuestra sociedad. Nadie puede negar que el responsable directo e inmediato de brindar las condiciones adecuadas de seguridad es el Estado en sus tres ámbitos de gobierno. Sin embargo, éste ha sido superado por la delincuencia durante estos últimos años. Hoy, la ciudadanía cuestiona y pone en duda la razón de ser y la eficacia de las instituciones.

Estado e instituciones están inmersos en una serie de problemas derivados de la violencia, corrupción e impunidad que han generado acontecimientos oprobiosos que denigran la dignidad de todos, los cuales se han hecho públicos a través de diversos medios de comunicación. La corrupción de las corporaciones policiales, la ineficacia e ineficiencia en la actuación de las autoridades preventivas, así como de las encargadas de la investigación y persecución del delito, así como la descomposición y sobrepoblación del modelo penitenciario, son los principales obstáculos que enfrenta nuestro Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cuál debe ser revisado con responsabilidad, para estar en condiciones de promover las reformas legislativas, incluso institucionales que sean necesarias

De acuerdo con el Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, la realidad que vivimos nos demuestra que el Estado y el funcionamiento de sus instituciones, en ocasiones se ven grandes para la atención de determinados asuntos y, a la vez, demasiado pequeños para resolver otros. Por ello, las acciones del Estado y la participación de la ciudadanía deben ser más proactivas, adelantarse y concatenarse a un esquema preventivo del delito que disminuya la incidencia delictiva e inhiba su comisión.

#### **Fundamento**

1. Que la fracción XXIII, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la facultad del H. Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la coordinación de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de seguridad pública.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXII. ...

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.

2. Que los párrafos sexto y séptimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, y disponen la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los siguientes términos:

Artículo 21. ...

...

...

...

...

...

...

...

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

**a)** La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

**b)** El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

**c)** La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

**d)** Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

**e)** Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

3. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal y los Municipios, para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4. Que el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20 21, y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Congreso de la Unión, a más tardar dentro de los seis meses a partir de la publicación de este Decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

#### **Consideraciones de la comisión**

1. Esta Comisión Dictaminadora tiene presente que en fecha 5 de diciembre de 1994, inició un proceso de reformas constitucionales y legislativas, con el objeto de contar con instrumentos jurídicos

que permitan a las autoridades competentes hacer frente al crecimiento de los índices delictivos y a la actuación de la delincuencia organizada.

Las reformas a los artículos 21 y 73, fracción XXIII, citadas, dieron sustento y origen al Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el párrafo sexto del primero, se establece que la seguridad es una función a cargo de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, asimismo, se contemplan los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que regirán las actuaciones de las instituciones policiales.

En el séptimo y último párrafo del artículo 21, en la reforma del 5 de diciembre de 1994, se señala que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios se coordinarán, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En congruencia con la adición de los párrafos sexto y séptimo al artículo 21 constitucional, se reformó la fracción XXIII del artículo 73, para otorgar facultades al H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir las leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de seguridad pública.

2. Con el objeto de reglamentar los párrafos sexto y séptimo de la reforma constitucional, en fecha 11 de diciembre de 1995, a poco más de una año de la reforma constitucional, se publicó la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A partir de la reforma constitucional citada y la publicación de Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se inició un proceso de organización de las autoridades competentes en materia de procuración de justicia y seguridad pública, de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, para enfrentar el crecimiento de la inseguridad pública.

La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece en el segundo párrafo del artículo 3º las vertientes a través de las cuáles se alcanzarán los fines de la seguridad pública, tales como la prevención, persecución y sanción de infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.

3. Esta Comisión tiene presente que no obstante la reforma constitucional de fecha 5 de diciembre de 1994, la publicación de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la publicación de otras leyes en la materia, como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, o incluso la publicación de leyes estatales en materia de seguridad pública, los resultados no son los que la sociedad demanda y merece.

Esta Comisión tiene presente que no obstante los esfuerzos de las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, no se ha logrado brindar a la sociedad nacional la seguridad pública que legítimamente le corresponde.

Que resulta lamentable observar el crecimiento de los índices delictivos en diversas estadísticas publicadas por las sociedad civil, instituciones académicas u organismos empresariales.

4. Que en materia de seguridad pública, el titular del Ejecutivo Federal reconoce en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, algunas de las limitaciones que se han presentado para llevar a cabo una adecuada coordinación entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, al señalar en el Marco de Referencia del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012. apartado 1.2. Coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno, lo siguiente:

La coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no ha alcanzado los resultados esperados, porque el respeto a las soberanías estatales y a las autonomías municipales se ha entendido más como limitante que como capacidad para la acción conjunta y concurrente entre los distintos ámbitos de responsabilidad policial. La falta de mecanismos consistentes de coordinación entre las un mil 661 corporaciones de policía que operan en la

República Mexicana, no ha permitido la cabal integración de los recursos disponibles para combatir la criminalidad como una sola fuerza policial cohesionada. Esta falta de coordinación también se manifiesta en la ausencia de políticas públicas compartidas y en el desarrollo desigual de los policías, sin una perspectiva de vida que comprometa su lealtad institucional.

La situación ha propiciado que la delincuencia, en particular la organizada, se haya apoderado de los espacios públicos en determinadas zonas del país, provocando un clima de violencia e inseguridad que en ocasiones ha rebasado a las autoridades locales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación de los tres órdenes de gobierno para el restablecimiento de las condiciones básicas de seguridad.

5. Que además de la creación de un marco jurídico específico en materia de seguridad pública, en ejercicio de sus facultades exclusivas la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha dispuesto, a propuesta del titular del Ejecutivo Federal, la asignación de recursos para la ejecución de programas y acciones a cargo de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de seguridad pública.

Que el presupuesto de federal de seguridad pública tiene dos componentes: el primero es el que ejerce el Gobierno Federal a través de cuatro Ramos Administrativos: Procuraduría General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad Pública. El segundo, corresponde a recursos que el Gobierno Federal asigna de manera etiquetada a las entidades federativas, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), perteneciente al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el apoyo de las tareas relacionadas con la función de seguridad pública.

Del primer componente, cabe señalar el Subsidio Municipal para la Seguridad Pública, a través del cual se asignan recursos a un número determinado de Municipios, conforme a las bases para la elegibilidad publicadas por la Secretaría de Seguridad Pública. Dicho Subsidio se estableció en el ejercicio fiscal 2008 y ha sido aprobado en el Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2009.

6. Esta Comisión Dictaminadora es consiente de las legítimas demandas ciudadanas en materia de seguridad pública, y que no obstante los programas y acciones realizadas por las autoridades competentes en materia de seguridad pública, la sociedad civil organizada ha vuelto a expresarse en una gran marcha nacional, contra la inseguridad en la capital del país, como en diversas entidades federativas.

7. Que durante la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en fecha 21 de agosto del presente, los Poderes Ejecutivo Federal y Estatales, el H. Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, representantes de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Que el Acuerdo citado, establece compromisos específicos al titular del Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los Gobiernos de los Estados, a las Asociaciones de Alcaldes, así como a los integrantes del sector productivo, asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.

8. Que en razón de lo anterior y con el objeto de avanzar en el perfeccionamiento del marco jurídico vigente en materia de seguridad pública, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó en fecha 18 de septiembre de 2008 ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

9. Que en fecha 30 de septiembre de 2008, en uso de sus atribuciones constitucionales, el titular del Ejecutivo Federal presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

10. Que en fecha 2 de octubre de 2008, los senadores Jesús Murillo Karam, a nombre propio y en nombre de los senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Pedro Joaquín Coldwell, Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez y Francisco Labastida Ochoa y de los diputados Emilio Gamboa Patrón, César Camacho Quiroz y Juan Francisco Rivera Bedoya, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 21, 73 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública.

11. Que las Iniciativas citadas reflejan el interés y preocupación del titular del Ejecutivo Federal, así como de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional en materia de Seguridad Pública.

12. Que con la finalidad de analizar con responsabilidad las Iniciativas presentadas en la materia, así como las propuestas formuladas por las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, por acuerdo de ésta, en fecha 27 de noviembre del presente año se estableció un grupo de trabajo plural integrado por los Diputados y Diputadas siguientes:

Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Diputado Federal por el Dto. XI. Nuevo León, del Estado de Nuevo León.

Gerardo Octavio Vargas Landeros, diputado federal por el Dto. II. Ahome, los Mochis, en el Estado de Sinaloa y Patricia Villanueva Abraján, Diputada Federal por el Dto. II. Teotitlán de Flores Magón, del Estado de Oaxaca de Juárez; del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ambos secretarios de la Comisión.

Édgar Armando Olvera Higuera, diputado federal por el Dto. XXI. Naucalpan, en el Estado de México y María de los Ángeles Jiménez del Castillo, Diputada Federal por el Dto. III. Querétaro, en el Estado de Querétaro; del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ambos secretarios de la Comisión.

David Mendoza Arellano, diputado federal por el Dto. XVIII. Iztapalapa en el Distrito Federal y Andrés Lozano Lozano, Diputado Federal por el Dto. I. Gustavo A. Madero en el Distrito Federal; del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

13. Que a través del grupo de trabajo la Comisión Dictaminadora, llevó a cabo el estudio cuidadoso y responsable de las Iniciativas presentadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados identificando en cuanto al fondo propuestas coincidentes, como la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y alcanzar los fines de la seguridad pública, a través de las vertientes de prevención del delito, su investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.

Asimismo, se presentan coincidencias en cuanto a la conveniencia de regular a partir de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Servicio Civil de Carrera en las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, aspecto importante a partir del cual se precisan las obligaciones de las autoridades competentes para conducirse con apego al orden jurídico, de manera profesional y eficaz, garantizando el respeto a los derechos humanos.

14. A partir de este esfuerzo, que permitió acercar las posiciones de los Diputados y Diputadas de los Grupos Parlamentarios representados en la Comisión de Seguridad Pública, en torno a uno de los problemas más sensibles para la sociedad mexicana, como lo es la seguridad pública, en fecha 2 de diciembre del 2008 se aprobó al interior del mismo, el Anteproyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para ser discutido en el pleno de la Comisión.

15. Posteriormente, se revisaron las diferencias entre las disposiciones contenidas en las Iniciativas presentadas, las cuales fueron analizadas y discutidas en diversas reuniones del grupo de trabajo, a efecto de integrar modificaciones que permitieran fortalecer las vertientes para alcanzar los fines de la seguridad pública.

16. Esta Comisión Dictaminadora estimo importante destacar como eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública la coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, recuperando la esencia de la propuesta contenida en el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, propuesta por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

17. En cuanto a la estructura del Consejo Nacional, la Iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone que este sea presidido por el titular del Ejecutivo Federal, con la finalidad de dar mayor fortaleza a sus decisiones, a la vez que obliga a una actuación más comprometida del mismo en materia de seguridad pública. A partir de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora ha considerado conveniente y viable que el Consejo Nacional de Seguridad Pública sea presidido por el titular del Ejecutivo Federal.

18. Por otra parte, con la finalidad de fortalecer al Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta Comisión Dictaminadora incorporo en el artículo 16 de la ley, con carácter de permanentes del Consejo Nacional de Seguridad Pública a las comisiones de información, de certificación, de prevención del delito y participación ciudadana. La integración de estas comisiones se vincula de manera directa con los Centros Nacionales que se crean para eficientar la actuación de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública, dispuestas en los artículos 19, 20 y 21.

Los Centros Nacionales citados serán instancias de apoyo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los titulares del Secretariado y de los Centros serán nombrados y removidos por el Presidente del Consejo Nacional.

Entre las atribuciones contempladas al Centro Nacional de Información, se ubican las relativas a establecer y administrar en términos del reglamento las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema, así como la determinación de los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del Sistema.

Entre las atribuciones del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se ubican el proponer los lineamientos de prevención social del delito a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas, así como la emisión de opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las instituciones de seguridad pública.

Con relación a la creación del centro citado, esta Comisión Dictaminadora tiene presente que la estrategia de combate a la delincuencia basada principalmente en el control y acción posterior a la realización de un hecho delictivo, no ha sido del todo efectiva en nuestro país, siendo necesario impulsar acciones adicionales en el ámbito de prevención del delito.

Del conjunto de acciones en materia de seguridad pública que se desarrollan en América Latina, descritas en una encuesta del Centro de Estudios para América Latina (CEPAL), se ha identificado la necesidad de llevar a cabo programas de doble orientación, es decir, que combinen medidas de control y prevención. Varios de estos programas comparten criterios transversales que ayudarían a hacer más integrales las acciones que se emprendan.

Uno de estos criterios es el de coordinación interinstitucional, que apunta a la necesaria simultaneidad de las medidas para reducir los delitos y aumentar su sanción que se adopten a distintos niveles: comunidad, gobiernos locales, organismos privados y gubernamentales, organismos policiales, judiciales y penitenciarios, organismos educacionales y laborales entre otros.<sup>1</sup>

Respecto al Centro Nacional de Acreditación y Control de Confianza, descrito en el artículo 21, será responsable de la certificación, acreditación y control de confianza.

Esta Comisión Dictaminadora, se identifica con el interés del titular del Ejecutivo Federal de implementar acciones concretas encaminadas a desarrollar un proceso permanente encaminado a la profesionalización de los miembros de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.

19. Por otra parte, esta Comisión Dictaminadora, atendiendo a propuesta realizada por el Dip. Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, coincidente con propuestas formuladas en diversos foros, y con el objeto de fortalecer al Consejo Nacional estimo viable la incorporación de un representante de la Cámara de Senadores y otro de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a partir de la adición de una fracción IX al artículo 12 del proyecto de decreto que se dictamina.

Con el mismo objeto y teniendo presente las condiciones de inseguridad que prevalecen en diversas entidades federativas, así como la implementación de operativos conjuntos de combate a la delincuencia organizada llevados a cabo con la participación de elementos de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, esta Comisión considera viable incorporar al Consejo Nacional, al Secretario de Gobernación, al Secretario de la Defensa Nacional y al Secretario de Marina.

20. Por otra parte, esta Comisión estima conveniente dotar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de autonomía técnica, de gestión y presupuestal.

21. Otro aspecto que destaca en el Dictamen que se presenta, es la supresión de la figura del secretario técnico como una instancia de apoyo a la Presidencia del Consejo Nacional, contenida en la Iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal, toda vez que las atribuciones otorgadas a éste en la Iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal, eran similares a las otorgadas al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional.

Esta Comisión tiene presente que el Secretario Ejecutivo, es la instancia de apoyo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como de cada uno de sus integrantes.

22. En cuanto a las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, como las relativas a las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y Secretarios de Seguridad Pública, contenidas en los artículos 14, 24 y 28, respectivamente, esta Comisión Dictaminadora realizó una revisión de técnica jurídica, a partir de la cual se sintetizaron diversas atribuciones en fracciones que recuperaban el mismo sentido.

23. En cuanto a las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, contenidas en el artículo 14, esta Comisión Dictaminadora estimo viable incorporar las siguientes:

En una fracción IV, Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito.

En una fracción VII, Determinar los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y vigilar que se observen en los términos de las disposiciones que resulten aplicables.

En una fracción VIII, resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones a las entidades federativas o, en su caso, a los municipios, por un período u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los Acuerdos Generales del Consejo o los convenios celebrados.

En una fracción XV, recomendar la remoción de los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública, previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley.

Y, finalmente, en una fracción XVII, promover las políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccional de las entidades federativas.

24. En cuanto a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, establecida en el artículo 26 de la Iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, esta Comisión Dictaminadora, a través del grupo de trabajo, modificó la forma de integración, disponiendo, en el artículo 29 del proyecto de Decreto, la



participación de los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal.

Asimismo, la Comisión Dictaminadora adicionó una atribución a dicha conferencia en la fracción VI, del citado artículo 29, en los siguientes términos:

Fracción VI. Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

25. Respecto a la Conferencia Nacional de Participación Municipal, el grupo de trabajo de la Comisión Dictaminadora estableció en el artículo 31 su integración y en el subsecuente sus atribuciones, con el objeto de fortalecer la actuación de las instituciones de seguridad pública en los Municipios.

26. Que en razón de la materia del presente Dictamen se han considerado las propuestas contenidas en la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada en fecha 13 de diciembre de 2007, por el Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, a través de la cual plantea, entre otros aspectos, la integración de los presidentes de las Comisiones de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Senadores al Consejo Nacional de Seguridad precisa, además, que los acuerdos y resoluciones de las sesiones del Consejo deberán ser aprobadas por la mayoría de votos de sus integrantes, así como la necesidad de definir el quórum legal de las sesiones.

Que dichas aportaciones fueron debidamente valoradas e incorporadas en los artículos 11 y 13 del texto de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

27. Esta Comisión Dictaminadora, a través del grupo de trabajo, ha recuperado los elementos substanciales de las Iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo Federal, así como del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como de la propuesta formulada por el Dip. Gerardo Octavio Vargas Landeros, tomando en cuenta también las propuestas formuladas por organizaciones sociales y académicas a efecto de avanzar en la estructuración de una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que responda a las condiciones que en la materia se presentan en diversas entidades de la República.

Por lo anteriormente expuesto y, después de estudiar detenidamente el contenido de las Iniciativas presentadas, a partir de las cuales se propone expedir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

### **Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.**

**Artículo Único.- Se EXPIDE la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:**

## **LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

### **TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES**

Artículo 1.- La presente ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

**Artículo 2.-** La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

**Artículo 3.-** La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

**Artículo 4.-** El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública.

La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 5.-** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Academias: a las Instituciones de Formación, de Capacitación y de Profesionalización Policial;

II. Bases de Datos Criminalísticas y de Personal: Las bases de datos nacionales y la información contenida en ellas, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema.

III. Carrera Ministerial: al Servicio Profesional de Carrera Ministerial;

IV. Carrera Pericial: al Servicio Profesional de Carrera Pericial;

V. Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial;

VI. Conferencias Nacionales: a las Conferencias a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley;

VII. Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Seguridad Pública;

VIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal;

IX. Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél;

X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;

**XI.** Institutos: a los órganos de las instituciones de seguridad pública de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, encargados de la formación y actualización especializada de aspirantes y servidores públicos de las funciones ministerial, pericial y de policía ministerial;

**XII.** Programa Rector: al conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia, respectivamente;

**XIII.** Registro Nacional: el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública;

**XIV.** Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal;

**XV.** Secretario Ejecutivo: el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema;

**XVI.** Sistema: al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 6.-** Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.

**Artículo 7.-** Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

**I.** Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines;

**II.** Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;

**III.** Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;

**IV.** Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación Democrática;

**V.** Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;

**VI.** Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;

**VII.** Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;

**VIII.** Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública;

**IX.** Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;

**X.** Coordinar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;

**XI.** Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;

**XII.** Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;

**XIII.** Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;

**XIV.** Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y

**XV.** Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.

**Artículo 8.-** La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con respeto de las atribuciones que la Constitución establece para las instituciones y autoridades que integran el Sistema.

**Artículo 9.-** Las Conferencias Nacionales, los consejos locales y demás instancias del Sistema, observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional.

En caso de contradicción entre las resoluciones y acuerdos generales adoptados por las conferencias, el Consejo Nacional determinará la que deba prevalecer.

## **TÍTULO SEGUNDO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

### **CAPÍTULO I**

#### **De la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 10.-** El Sistema se integrará por:

**I.** El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;

**II.** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

**III.** La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;

**IV.** La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;

**V.** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;

**VI.** Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y

**VII.** El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que contribuyan alcanzar los fines de la seguridad pública.

**Artículo 11.-** Las Conferencias Nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Nacional.

El Secretariado Ejecutivo se coordinará con los Presidentes de las Conferencias Nacionales para dar seguimiento a las resoluciones que se adopten por el Consejo Nacional, en los términos de esta Ley.

## **CAPÍTULO II**

### **Del Consejo Nacional de Seguridad Pública**

Artículo 12.- El Consejo Nacional estará integrado por:

- I.** El Presidente de la República, quien lo presidirá;
- II.** El Secretario de Gobernación;
- III.** El Secretario de la Defensa Nacional;
- IV.** El Secretario de Marina;
- V.** El Secretario de Seguridad Pública;
- VI.** El Procurador General de la República;
- VII.** Los Gobernadores de los Estados;
- VIII.** El Jefe del Gobierno del Distrito Federal;
- IX.** Un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, y
- X.** El Secretario Ejecutivo del Sistema.

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente.

El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que a su juicio puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico. Así mismo el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de este Consejo.

**Artículo 13.-** El personal de confianza de las unidades administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los Centros Nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el Acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.

**Artículo 14.-** El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

- I.** Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública;
- II.** Emitir acuerdos y resoluciones generales que resulten necesarios para el funcionamiento del Sistema;
- III.** Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad Pública;

- IV.** Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito;
- V.** Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;
- VI.** Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances;
- VII.** Determinar los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y vigilar que se observen en los términos de las disposiciones que resulten aplicables;
- VIII.** Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los Acuerdos Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia;
- IX.** Formular propuestas para los programas de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;
- X.** Formular propuestas para la evaluación y cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XI.** Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XII.** Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de gobierno;
- XIII.** Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;
- XIV.** Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública;
- XV.** Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de Seguridad Pública, previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley;
- XVI.** Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública;
- XVII.** Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;
- XVIII.** Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y
- XIX.** Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

**Artículo 15.-** El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en las comisiones previstas por esta ley. El Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.

El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes del Consejo.

Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema.

Los miembros del Consejo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.

**Artículo 16.-** Son comisiones permanentes del Consejo Nacional, las siguientes:

- I. De Información;
- II. De Certificación y Acreditación,
- III. De Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Estas comisiones se coordinarán con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de los Centros Nacionales que integran el Secretariado Ejecutivo. El Consejo Nacional determinará el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las mismas.

En las Comisiones podrán participar expertos de instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionados con su objeto.

Los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán designar por oficio a sus representantes permanentes ante el Secretario Ejecutivo del Sistema, los cuales deberán ser servidores públicos con un nivel jerárquico igual o superior a Director General en las Secretarías competentes en la entidad federativa respectiva, para la aplicación de esta Ley.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

Artículo 17.- El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos Centros.

El Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no tengan otra nacionalidad y estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
- II. Tener más de treinta años de edad;
- III. Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado;
- IV. Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y
- V. No haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitados como servidores públicos.

**Artículo 18.-** Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:

- I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente;
- II. Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema;
- III. Formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización;

- IV.** Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento;
- V.** Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;
- VI.** Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;
- VII.** Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema;
- VIII.** Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional;
- IX.** Proponer al Consejo Nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública;
- X.** Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo;
- XI.** Proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública en los términos de la ley;
- XII.** Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema en los términos de ley;
- XIII.** Presentar al Consejo Nacional los informes de las Conferencias Nacionales, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;
- XIV.** Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional;
- XV.** Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema, para fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial;
- XVI.** Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del Consejo, en términos de las disposiciones legales aplicables;
- XVII.** Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo y las demás disposiciones aplicables;
- XVIII.** Someter a consideración del Consejo Nacional el proyecto de resolución fundado y motivado de cancelación y, cuando proceda, la restitución de la ministración de aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso, municipios;
- XIX.** Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta Ley;
- XX.** Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;
- XXI.** Elaborar y someter a consideración del Consejo Nacional, opinión fundada y razonada por la que se recomiende la remoción de los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública;



**XXII.** Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como por el uso ilícito o indebido de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, e informar al respecto al Consejo Nacional;

**XXIII.** Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema;

**XXIV.** Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública, y

**XXV.** Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Nacional o su Presidente.

**Artículo 19.-** El Centro Nacional de Información será el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

I. Establecer y administrar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema en términos que señale el reglamento;

II. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del Sistema;

III. Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos;

IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada;

V. Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad con la Ley de la materia, y

VI. Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos.

**Artículo 20.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:

I. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;

II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;

III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:

a. Prevenir la violencia infantil y juvenil;

b. Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;

c. Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y

d. Garantizar la atención integral a las víctimas

IV. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de

comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;

V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;

VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;

VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;

VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;

IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley, y

X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.

**Artículo 21.** El Centro Nacional de Certificación y Acreditación será el responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Este Centro contará con un órgano consultivo integrado por las instituciones públicas y privadas que se determinen en el Reglamento de este ordenamiento.

**Artículo 22.** Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal, realizan sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para tal efecto, tendrá las facultades siguientes:

I. Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las conferencias.

II. Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos;

III. Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

IV. Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

V. Evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza que en el ámbito de Seguridad Pública operen instituciones privadas que así lo soliciten y cumplan con la normatividad correspondiente;

VI. Verificar periódicamente que los Centros de referencia apliquen los procesos certificados, conforme a los lineamientos y estándares que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación establezca;

VII. Apoyar a los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

**VIII.** Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de Evaluación y Control de Confianza;

**IX.** Establecer los requisitos que deben contener los certificados Ministerial, Policial y Pericial y aprobar sus características, y

**X.** Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.

#### **CAPÍTULO IV**

##### **De la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.**

**Artículo 23.-** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estará integrada por los titulares de las Instituciones de Procuración de Justicia de la Federación, el Distrito Federal y los Estados, y será presidida por el Procurador General de la República.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

**Artículo 24.-** El Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia podrá invitar a personas e instituciones por razón de los asuntos a tratar.

El Procurador General de Justicia Militar será invitado permanente de esta Conferencia.

**Artículo 25.-** Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

**I.** Formular políticas generales de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia;

**II.** Promover la coordinación y colaboración entre las Instituciones de Procuración de Justicia y las Instituciones Policiales;

**III.** Formular propuestas para la integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia y demás instrumentos programáticos relacionados con el ámbito de su competencia, así como darles seguimiento;

**IV.** Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia;

**V.** Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de Procuración de Justicia;

**VI.** Integrar los Comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;

**VII.** Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación conjuntos;

**VIII.** Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

**IX.** Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización;

**X.** Promover la homologación de los procedimientos de control de confianza de los Integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia, de conformidad con las disposiciones aplicables;

**XI.** Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de procuración de justicia, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;

**XII.** Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;

**XIII.** Impulsar las acciones necesarias para promover la denuncia de los delitos y la participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia;

**XIV.** Determinar las políticas y lineamientos sobre datos de procedimientos penales, juicios de amparo y otros procesos judiciales en los que intervenga el Ministerio Público, que se integren a las bases de datos que establece el presente ordenamiento;

**XV.** Fijar criterios de cooperación y coordinación para la entrega de indiciados, procesados y sentenciados; el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales; el aseguramiento de bienes instrumento, objeto o producto de delitos y el desahogo de diligencias judiciales, ministeriales y periciales;

**XVI.** Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y garantías reconocidas en la legislación vigente;

**XVII.** Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas, atención a víctimas y ofendidos de delitos;

**XVIII.** Proponer programas de cooperación internacional en materia de procuración de justicia;

**XIX.** Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de extradición y asistencia jurídica;

**XX.** Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito;

**XXI.** Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones de Procuración de Justicia;

**XXII.** Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;

**XXIII.** Promover la uniformidad de criterios jurídicos, y

**XXIV.** Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 26.-** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se reunirá cada seis meses de manera ordinaria. El Presidente de dicha Conferencia podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo estime necesario.

## **CAPÍTULO V**

### **De la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública**

**Artículo 27.-** La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública estará integrada por los titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la Federación, los Estados y el Distrito Federal y será presidida por el Secretario de Seguridad Pública Federal.

La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

Los titulares de las dependencias u órganos en que se integren los cuerpos de policía de los municipios, podrán participar en la Conferencia, de conformidad con las reglas que la misma establezca.

**Artículo 28.-** El Presidente de la Conferencia podrá invitar a personas e Instituciones por razón de los asuntos a tratar.

**Artículo 29.-** Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

I. Impulsar la coordinación de las actuaciones de las dependencias encargadas de la seguridad pública;

II. Promover la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las Instituciones Policiales, conforme al Programa Rector de Profesionalización;

I. Elaborar propuestas de reformas a leyes en materia de Seguridad Pública;

IV. Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales, cualquiera que sea su adscripción;

V. Proponer medidas para vincular el Sistema con otros nacionales, regionales o locales;

VI. Proponer la adopción y aplicación de políticas y programas de cooperación internacional sobre Seguridad Pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;

VII. Promover criterios uniformes para el desarrollo policial en términos de la presente Ley;

VIII. Integrar los Comités que sean necesarios en la materia;

IX. Desarrollar las especialidades policiales de alto desempeño para hacer frente a los delitos de impacto nacional e internacional;

X. Emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública federales, locales y municipales;

XI. Impulsar las acciones necesarias para que los integrantes del Sistema establezcan un servicio para la localización de personas y bienes;

XII. Promover el establecimiento de un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre emergencias, faltas y delitos;

XIII. Procurar que en las Instituciones Policiales se aplique homogénea y permanentemente, el protocolo de certificación correspondiente, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;

XIV. Proponer los requisitos que debe contener el Certificado Único Policial;

XV. Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las Instituciones Policiales y promover su aplicación;

XVI. Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones Policiales y para el manejo de información;

**XVII.** Proponer mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos, a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

**XVIII.** Proponer reglas para coadyuvar en la vigilancia y realización de acciones conjuntas para proteger las instalaciones estratégicas del país, en los términos de la legislación aplicable, y

**XIX.** Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

## **CAPÍTULO VI**

### **De la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario**

Artículo 30.- La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el titular de la Secretaría.

**Artículo 31.-** Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

**I.** Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional;

**II.** Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social;

**III.** Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de reinserción social;

**IV.** Proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de reinserción social;

**V.** Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción social en las legislaciones aplicables;

**VI.** Plantear criterios para efficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;

**VII.** Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticos y de personal, y

**VIII.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.

## **CAPÍTULO VII**

### **De la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal**

Artículo 32.- La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, estará integrada por los Presidentes Municipales y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal que participarán de conformidad con las siguientes reglas:

**I.** Dos Presidentes municipales, de cada Estado, designados por el Consejo Local de Seguridad Pública correspondiente, y

**II.** Dos titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal que ser por el Consejo Local de Seguridad Pública.

Dicha Conferencia Nacional contará con un Presidente, que será designado de entre sus miembros por el pleno de misma.

La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

**Artículo 33.-** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, tendrá las siguientes funciones mínimas:

- I. Emitir sus reglas de organización y funcionamiento;
- II. Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en materia de Seguridad Pública;
- III. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal;
- IV. Elaborar propuestas de reformas a las normas de aplicación municipal en materia de Seguridad Pública;
- V. Intercambiar experiencias y apoyo técnico entre los Municipios;
- VI. Proponer políticas públicas en materia de Seguridad Pública;
- VII. Colaborar con las instituciones publicas y privadas, en la ejecución de programas tendientes a prevenir el delito;
- VIII. Promover en el ámbito Municipal, la homologación del Desarrollo Policial;
- IX. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre la materia de Seguridad Pública Municipal, y
- X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o el consejo nacional.

## **CAPÍTULO VIII**

### **De los Consejos Locales e Instancias Regionales de Coordinación**

Artículo 34.- En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno. Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En los consejos locales de cada Estado participarán los municipios en los términos de la legislación de cada entidad federativa. En el caso del Distrito Federal, participarán los titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales, de conformidad con la legislación aplicable. Estos Consejos invitarán a cada sesión al menos a dos representantes de la sociedad civil o de la comunidad, de conformidad con los temas a tratar. Su participación será de carácter honorífico.

Los Consejos Locales y las Instancias Regionales de Coordinación se organizarán, de modo que permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura del Sistema e integración del Consejo Nacional.

Los Consejos Locales determinaran su organización y la de las Instancias Regionales de Coordinación correspondientes en términos de esta Ley.

**Artículo 35.-** Los Consejos Locales se integrarán por las Instituciones de Seguridad Pública de la entidad de que se trate y de la Federación.

Además, podrán invitar a personas e instituciones, de acuerdo con los temas a tratar.

**Artículo 36.-** Cuando para el cumplimiento de la función de Seguridad Pública sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente, en las que participarán las Instituciones de Seguridad Pública correspondientes.

Del mismo modo, podrán establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos estatales correspondientes. En el caso de las zonas conurbadas entre dos o más entidades federativas, se podrán suscribir convenios e instalar instancias regionales con la participación de los municipios respectivos y de los órganos político administrativos, tratándose del Distrito Federal.

**Artículo 37.-** Los Consejos Locales y las instancias regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines de la Seguridad Pública, en sus ámbitos de competencia.

Los miembros del Consejo designarán a uno de sus servidores públicos como enlace responsable de atender y dar seguimiento a la operación del Sistema en su respectiva entidad federativa.

Dichos enlaces están obligados a proporcionar la información requerida por el Secretariado Ejecutivo, en un plazo razonable, que no excederá de treinta días naturales, salvo justificación fundada.

**Artículo 38.-** Los Consejos Locales y las instancias regionales podrán proponer al Consejo Nacional y a las Conferencias Nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.

## **CAPÍTULO IX**

### **De la distribución de competencias**

Artículo 39.- La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

**A.** Corresponde a la Federación, por conducto de las autoridades competentes:

**I.** Proponer las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios;

Respecto del Desarrollo Policial:

**a)** En materia de Carrera Policial, proponer al Consejo Nacional:

**1.** Las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los Integrantes de las Instituciones Policiales, de acuerdo al Modelo Policial;

**2.** Los lineamientos para los procedimientos de Carrera Policial que aplicarán las autoridades competentes;

**b)** En materia de Profesionalización, proponer al Consejo Nacional:

**1.** El Programa Rector que contendrá los aspectos de formación, capacitación, adiestramiento, actualización e investigación académica, así como integrar las que formulen las instancias del Sistema;

**2.** Los procedimientos aplicables a la Profesionalización;

**3.** Los criterios para el establecimiento de las Academias e Institutos, y



**4.** El desarrollo de programas de investigación y formación académica.

**c)** En materia de Régimen Disciplinario, proponer al Consejo Nacional los lineamientos para la aplicación de los procedimientos respectivos.

**III.** Coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, y

**IV.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

**B.** Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

**I.** Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que deriven de ésta;

**II.** Contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación del Sistema;

**III.** Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario;

**IV.** Constituir y operar las Comisiones y las Academias a que se refiere esta Ley;

**V.** Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de personal;

**VI.** Designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la información a que se refiere esta Ley;

**VII.** Integrar y consultar en las bases de datos de personal de Seguridad Pública, los expedientes de los aspirantes a ingresar en las Instituciones Policiales;

**VIII.** Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo;

**IX.** Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo Policial, Ministerial y Pericial;

**X.** Establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable;

**XI.** Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo Policial para el registro y seguimiento, en las bases de datos criminalísticos y de personal de Seguridad Pública;

**XII.** Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y administración;

**XIII.** Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las Instalaciones Estratégicas del país, y

**XIV.** Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.

Los Estados y los Municipios podrán coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Leyes Estatales de Seguridad Pública podrán establecer la posibilidad de coordinación, y en su caso, los medios para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre un Estado y sus Municipios.

## **TÍTULO TERCERO**

### **DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

#### **CAPÍTULO I**

##### **De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública**

Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

- I.** Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;
- II.** Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan;
- III.** Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
- IV.** Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
- V.** Abstenerse en todo momento de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;
- VI.** Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
- VII.** Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;
- VIII.** Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
- IX.** Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
- X.** Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias;
- XI.** Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;
- XII.** Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
- XIII.** Preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
- XIV.** Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;

**XV.** Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;

**XVI.** Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;

**XVII.** Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;

**XVIII.** Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;

**XIX.** Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables;

**XX.** Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las Instituciones;

**XXI.** Abstenerse de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;

**XXII.** Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda;

**XXIII.** Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;

**XXIV.** Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones;

**XXV.** Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes;

**XXVI.** Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio;

**XXVII.** No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y

**XXVIII.** Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 41.-** Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

**I.** Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice;

**II.** Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes;

- III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;
- IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que les sean asignados, así como aquéllos de los que tengan conocimiento con motivo de sus funciones;
- V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
- VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, absteniéndose de ejecutarlas cuando sean contrarias a derecho;
- VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;
- VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
- IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;
- X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y
- XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Solamente en los casos en que estén en riesgo los derechos y garantías de personas e instituciones y el orden público, se podrá hacer uso legítimo de la fuerza por los integrantes de las instituciones policiales, siempre que se haga de manera racional, proporcional, congruente, oportuna y con pleno respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, absteniéndose en todo momento de obedecer ordenes ilegales.

**Artículo 42.-** El documento de identificación de los integrantes de las instituciones Seguridad Pública deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como, las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.

Todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente.

**Artículo 43.-** La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:

- I. El área que lo emite;
- II. El usuario capturista;
- III. Los Datos Generales de registro;
- IV. Motivo, que se clasifica en;
  - a) Tipo de evento, y
  - b) Subtipo de evento.
- V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
- VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos.
- VII. Entrevistas realizadas;

**VIII. En caso de detenciones:**

- a) Señalar los motivos de la detención;
- b) Descripción de la persona;
- c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
- d) Descripción de estado físico aparente;
- e) Objetos que le fueron encontrados;
- f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
- g) Lugar en el que fue puesto a disposición.

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

**Artículo 44.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán las sanciones aplicables al incumplimiento de los deberes previstos en esta ley, los procedimientos y los órganos competentes que conocerán de éstos. Las sanciones serán al menos, las siguientes:

- a) Amonestación;
- b) Suspensión, y
- c) Remoción.

**CAPÍTULO II**

**De los Sistemas Complementarios de Seguridad Social y Reconocimientos**

**Artículo 45.-** Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 46.-** Las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en esta Ley, realizarán y someterán a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión, actualización y fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.

**CAPÍTULO III**

**De las Academias e Institutos**

**Artículo 47.-** La Federación y las entidades federativas establecerán y operarán Academias e Institutos que serán responsables de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización que tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

- I. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema;
- II. Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos;
- III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial, pericial y policial, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Profesionalización;
- V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;
- VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;
- VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores públicos a que se refiere el Programa Rector;

**VIII.** Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de Profesionalización;

**IX.** Revalidar equivalencias de estudios de la Profesionalización;

**X.** Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación;

**XI.** Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de los Servidores Públicos y proponer los cursos correspondientes;

**XII.** Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso a las Academias e Institutos;

**XIII.** Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio ante las autoridades competentes;

**XIV.** Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que impartan;

**XV.** Proponer la celebración de convenios con Instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores públicos;

**XVI.** Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los manuales de las Academias e Institutos, y

**XVII.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 48.-** En materia de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales, la Secretaría tendrá la facultad de proponer a las Instancias de Coordinación de esta ley lo siguiente:

**I.** Los contenidos básicos de los programas para la formación, capacitación y profesionalización de los mandos de las Instituciones policiales;

**II.** Los aspectos que contendrá el Programa Rector;

**III.** Que los integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los programas correspondientes a las Academias y de estudios superiores policiales;

**IV.** El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales y vigilar su aplicación;

**V.** Estrategias y políticas de desarrollo de formación de los integrantes de las Instituciones Policiales;

**VI.** Los programas de investigación académica en materia policial;

**VII.** El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales;

**VIII.** La revalidación de equivalencias de estudios de la Profesionalización en el ámbito de su competencia, y

**IX.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

#### **TÍTULO CUARTO DEL SERVICIO DE CARRERA EN LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA**

## **Capítulo I**

### **Disposiciones Generales**

**Artículo 49.-** El Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia, comprenderá lo relativo al Ministerio Público y a los peritos.

Las Instituciones de Procuración de Justicia que cuenten en su estructura orgánica con policía ministerial para la investigación de los delitos, se sujetarán a lo dispuesto en esta ley para las Instituciones Policiales en materia de carrera policial.

Las reglas y procesos en materia de carrera policial y régimen disciplinario de la policía ministerial, serán aplicados, operados y supervisados por las Instituciones de Procuración de Justicia.

Los servidores públicos que tengan bajo su mando a agentes del Ministerio Público o peritos no formarán parte del Servicio de Carrera por ese hecho; serán nombrados y removidos conforme a los ordenamientos legales aplicables; se considerarán trabajadores de confianza, y los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento.

**Artículo 50.-** El Servicio de Carrera Ministerial y Pericial comprenderá las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, conforme a lo siguiente:

- I.** El ingreso comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación y certificación inicial, así como registro;
- II.** El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada, de actualización, de evaluación para la permanencia, de evaluación del desempeño, de desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y reconocimientos, de reingreso y de certificación. De igual forma, deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los miembros del Servicio de Carrera, y
- III.** La terminación comprenderá las causas ordinarias y extraordinarias de separación del Servicio, así como los procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar, ajustándose a lo establecido por las leyes y disposiciones aplicables.

**Artículo 51.-** El Servicio de Carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes:

- I.** Tendrá carácter obligatorio y permanente; abarcará los planes, programas, cursos, evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas que comprende;
- II.** Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en tareas de Procuración de Justicia;
- III.** El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación fomentará que los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos referidos y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades destrezas y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público;
- IV.** Contará con un sistema de rotación del personal;
- V.** Determinará los perfiles, niveles jerárquicos en la estructura y de rangos;
- VI.** Contará con procedimientos disciplinarios, sustentados en principios de justicia y con pleno respeto a los derechos humanos;
- VII.** Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño de sus funciones;

**VIII.** Buscará generar el sentido de pertenencia institucional;

**IX.** Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento de los certificados del personal, y

**X.** Contendrá las normas para el registro de las incidencias del personal.

## **CAPÍTULO II**

### **Del Ingreso al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

Artículo 52.- El ingreso al Servicio de Carrera se hará por convocatoria pública.

Los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán cumplir, cuando menos, con los requisitos siguientes:

#### **A. Ministerio Público.**

**I.** Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;

**II.** Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional;

**III.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;

**IV.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

**V.** No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

**VI.** No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;

**VII.** Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan, y

**VIII.** Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables.

#### **B. Peritos.**

**I.** Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos;

**II.** Acreditar que ha concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente;

**III.** Tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;

**IV.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;

**V.** Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan;



**VI.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

**VII.** No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

**VIII.** No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y

**IX.** Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezca la legislación federal y la de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 53.-** Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos de formación inicial, deberán consultarse sus antecedentes en el Registro Nacional y, en su caso, en los registros de las Instituciones de Procuración de Justicia.

Asimismo, deberá verificarse la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes.

**Artículo 54.-** Los aspirantes a ingresar al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán cumplir con los estudios de formación inicial.

Corresponderá a las autoridades competentes regular en sus legislaciones los términos en que la formación inicial se llevará a cabo. La duración de los programas de formación inicial no podrá ser inferior a quinientas horas clase. En todo caso atendiendo a los lineamientos aplicables.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Desarrollo del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 55.-** Son requisitos de permanencia del Ministerio Público y de los peritos, los siguientes:

- I.** Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio;
- II.** Cumplir con los programas de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables;
- III.** Aprobar las evaluaciones que establezcan las disposiciones aplicables;
- IV.** Contar con la certificación y registro actualizados a que se refiere esta Ley;
- V.** Cumplir las órdenes de rotación;
- VI.** Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas, y
- VII.** Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezcan las leyes respectivas.

**Artículo 56.-** Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable.

Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o

judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente ley.

**Artículo 57.-** Las solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su caso, concederán con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento a los requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o penal, local o federal.

#### **CAPÍTULO IV**

##### **De la Terminación del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 58.-** La Federación y las entidades federativas establecerán en sus respectivas leyes los procedimientos de separación y remoción aplicables a los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia, que cuando menos, comprenderán los aspectos previstos en el artículo siguiente.

**Artículo 59.-** La terminación del Servicio de Carrera será:

I. Ordinaria, que comprende:

- a) Renuncia;
- b) Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones;
- c) Jubilación, y
- d) Muerte.

II. Extraordinaria, que comprende:

- a) Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, o
- b) Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo.

**Artículo 60.-** En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación o remoción es injustificada, la institución respectiva sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

#### **CAPÍTULO V**

##### **De la Profesionalización**

**Artículo 61.-** El Programa Rector de Profesionalización es el instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal de las Instituciones de Procuración de Justicia.

**Artículo 62.-** Los planes de estudios se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolución de casos.

**Artículo 63.-** En materia de programas de Profesionalización y planes de estudio, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Promover estrategias y políticas de profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia;

**II.** Diseñar los modelos de profesionalización que correspondan para su concertación y en su caso, aplicación en las Instituciones de Procuración de Justicia;

**III.** Acordar los contenidos del Programa Rector de Profesionalización de los servidores públicos de las instituciones de Procuración de Justicia, a propuesta de su Presidente;

**IV.** Establecer criterios para supervisar que los servidores públicos se sujeten a los programas correspondientes en los Institutos de Capacitación;

**V.** Promover el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes a las Instituciones de Procuración de Justicia y vigilar su aplicación;

**VI.** Establecer programas de investigación académica en las materias ministerial y pericial;

**VII.** Consensuar los criterios por los que se revalidarán equivalencias de estudios en el ámbito de su competencia para su incorporación al programa rector de profesionalización, y

**VIII.** Las demás que le establezcan otras disposiciones legales.

**Artículo 64.-** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia están obligados a participar en las actividades de profesionalización que determine la institución respectiva, los cuales deberán cubrir un mínimo de 60 horas clase anuales.

## **CAPÍTULO VI**

### **De la Certificación**

**Artículo 65.-** Los aspirantes que ingresen a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán contar con el Certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por esta Ley.

Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia sin contar con el Certificado y registro vigentes.

**Artículo 66.-** Los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia emitirán los certificados correspondientes a quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece esta Ley y el ordenamiento legal aplicable a la institución de que se trate.

El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.

**Artículo 67.-** El Certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional que para tal efecto se establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.

**Artículo 68.-** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.

La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 69.-** La certificación que otorguen los centros de evaluación y control de confianza deberá contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia que deseen prestar sus servicios en otra institución, ya sea en la Federación o en las Entidades Federativas, deberán presentar el Certificado que les haya sido expedido previamente.

Las Instituciones de Procuración de Justicia reconocerán la vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados, conforme a las disposiciones de esta Ley y demás aplicables. En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los procesos de evaluación.

En todos los casos, se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el Registro Nacional.

**Artículo 70.-** La cancelación del certificado de los Servidores Públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia procederá:

- I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- II. Al ser removidos de su encargo;
- III. Por no obtener la revalidación de su Certificado, y
- IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.

**Artículo 71.-** La Institución de Procuración de Justicia que cancele algún certificado deberá hacer la anotación respectiva en el Registro Nacional correspondiente.

## **TITULO QUINTO DEL DESARROLLO POLICIAL**

### **CAPÍTULO I Disposiciones Generales**

**Artículo 72.-** El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos en el artículo 6 de la Ley.

**Artículo 73.-** Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.

**Artículo 74.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente.

**Artículo 75.-** Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:

- I. Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información;
- II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y
- III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.

**Artículo 76.-** Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, o bien, en las Instituciones Policiales, o en ambas, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones.

Las policías ministeriales ubicadas dentro de la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Título, quedando a cargo de dichas instituciones, la aplicación de las normas, supervisión y operación de los procedimientos relativos al desarrollo policial.

**Artículo 77.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación que podrán ser, entre otras, las siguientes:

- I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine;
- II. Deberán verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informará al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;
- III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;
- IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;
- VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;
- VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;
- VIII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables.

**IX.** Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;

**X.** Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;

**XI.** Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;

**XII.** Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:

**a)** Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

**b)** Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;

**c)** Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;

**d)** Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y

**e)** Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.

**XIII.** Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, y

**XIV.** Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

## **CAPÍTULO II**

### **De la Carrera Policial y de la Profesionalización**

**Artículo 78.-** La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales.

**Artículo 79.-** Los fines de la Carrera Policial son:

**I.** Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales;

**II.** Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones;

**III.** Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales;

**IV.** Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y

V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley.

**Artículo 80.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán la organización jerárquica de las Instituciones Policiales, considerando al menos las categorías siguientes:

- I. Comisarios;
- II. Inspectores;
- III. Oficiales, y
- IV. Escala Básica.

En las policías ministeriales se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al modelo policial previsto en esta Ley.

**Artículo 81.-** Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las siguientes jerarquías:

I. Comisarios:

- a) Comisario General;
- b) Comisario Jefe, y
- c) Comisario.

II. Inspectores:

- a) Inspector General;
- b) Inspector Jefe, y
- c) Inspector.

III. Oficiales:

- a) Subinspector;
- b) Oficial, y
- c) Suboficial.

IV. Escala Básica:

- a) Policía Primero;
- b) Policía Segundo;
- c) Policía Tercero, y
- d) Policía.

**Artículo 82.-** Las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.

Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los titulares de las instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerarquía.

Las instituciones estatales y del Distrito Federal, deberán satisfacer, como mínimo, el mando correspondiente al octavo grado de organización jerárquica.

Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones.

**Artículo 83.-** El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de la Instituciones con relación a las áreas operativas y de servicios será:

I. Para las áreas operativas, de policía a Comisario General, y

**II. Para los servicios, de policía a Comisario Jefe.**

**Artículo 84.-** La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.

De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

Para tales efectos, la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán promover en el ámbito de sus competencias respectivas, las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas, en los diferentes ámbitos de competencia.

**Artículo 85.-** La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:

**I.** Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas;

**II.** Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo;

**III.** Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema;

**IV.** Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;

**V.** La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;

**VI.** Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las leyes respectivas;

**VII.** Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;

**VIII.** Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales;

**IX.** Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;

**X.** El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por la instancia que señale la ley de la materia, y

**XI.** Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial.

La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección.



En términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las Instituciones Policiales podrán designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando su grado policial y derechos inherentes a la Carrera Policial.

**Artículo 86.-** La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales.

Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en la ley sobre los aspirantes aceptados.

**Artículo 87.-** El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en las Academias o Institutos de Capacitación Policial, el periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley.

**Artículo 88.-** La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales. Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:

De Ingreso:

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;
- II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
- III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
  - a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
  - b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
  - c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
- V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
- VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
- VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
- VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- IX. No padecer alcoholismo;
- X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;

**XII.** Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que deriven de la misma;

**XIII.** Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

**B. De Permanencia:**

**I.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;

**II.** Mantener actualizado su Certificado Único Policial;

**III.** No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;

**IV.** Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:

a) En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;

b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;

c) En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;

**V.** Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;

**VI.** Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;

**VII.** Aprobar las evaluaciones del desempeño;

**VIII.** Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;

**IX.** Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

**X.** No padecer alcoholismo;

**XI.** Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;

**XII.** Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

**XIII.** No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;

**XIV.** No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días, y

**XV.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 89.-** Las instancias responsables del Servicio de Carrera Policial fomentarán la vocación de servicio mediante la promoción y permanencia en las Instituciones Policiales para satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de sus integrantes.

**Artículo 90.-** El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual las Instituciones Policiales otorgan el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.

Todo estímulo otorgado por las instituciones será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.

**Artículo 91.-** La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.

Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.

Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.

Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.

**Artículo 92.-** Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los integrantes de las Instituciones Policiales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.

**Artículo 93.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán que la antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones Policiales, de la siguiente forma:

- I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Policiales, y
- II. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente.

La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera Policial.

**Artículo 94.-** La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

- I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurren las siguientes circunstancias:
  - a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;
  - b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y
  - c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones para conservar su permanencia.
- II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o

**III. Baja, por:**

- a)** Renuncia;
- b)** Muerte o incapacidad permanente, o
- c)** Jubilación o Retiro.

Al concluir el servicio el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.

**Artículo 95.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.

**Artículo 96.-** La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

Las Instituciones Policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.

La presente disposición será aplicable también al personal de los servicios de migración.

**Artículo 97.-** La certificación tiene por objeto:

A.- Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional;

B.- Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las Instituciones Policiales:

I. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;

II. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;

III. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;

V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y

VI. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley.

**Artículo 98.-** La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.

Los planes de estudio para la Profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje que estarán comprendidos en el programa rector que apruebe la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, a propuesta de su Presidente.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Régimen Disciplinario**

Artículo 99.- La actuación de los Integrantes de las Instituciones Policiales se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de esta Ley.

Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán sus regímenes disciplinarios, sobre las bases mínimas previstas en el presente capítulo.

La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.

La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados.

**Artículo 100.-** Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

**Artículo 101.-** El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.

**Artículo 102.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales, observarán las obligaciones previstas en los artículos 40 y 41 de esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.

**Artículo 103.-** La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor.

La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación aplicable.

**Artículo 104.-** El procedimiento ante las autoridades previstas en las leyes de la materia, iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o presidente de la instancia correspondiente, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor.

Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento.

**Artículo 105.-** La Federación, las entidades federativas y los municipios establecerán instancias colegiadas en las que participen, en su caso, cuando menos, representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las Instituciones Policiales, para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario.

Para tal fin, las Instituciones Policiales podrán constituir sus respectivas Comisiones del servicio profesional de carrera policial y de honor y justicia, las que llevarán un registro de datos de los integrantes de sus instituciones. Dichos datos se incorporarán las bases de datos de personal de Seguridad Pública.

En las Instituciones de Procuración de Justicia se integrarán instancias equivalentes, en las que intervengan representantes de los policías ministeriales.

## **TÍTULO SEXTO**

### **DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**

**Artículo 106.-** El sistema nacional de acreditación y control de confianza se conforma con las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

Integran este sistema: El Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales de la Federación y de las entidades federativas.

**Artículo 107.-** Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que establezca el Reglamento que emita el Ejecutivo Federal.

Cuando en los procesos de certificación a cargo de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En caso contrario, el proceso carecerá de validez.

**Artículo 108.-** Los Centros Nacional de Acreditación y Control de Confianza aplicarán las evaluaciones a que se refiere esta Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; para tal efecto, tendrán las siguientes facultades:

- I.** Aplicar los procedimientos de Evaluación y de Control de Confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- II.** Proponer lineamientos para la verificación y control de Certificación de los Servidores Públicos;
- III.** Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable;
- IV.** Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la confidencialidad y resguardo de expedientes;
- V.** Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad;
- VI.** Comprobar los niveles de escolaridad de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;
- VII.** Aplicar el procedimiento de certificación de los Servidores Públicos, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- VIII.** Expedir y actualizar los Certificados conforme a los formatos autorizados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- IX.** Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados de las evaluaciones que practiquen;
- X.** Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus funciones;

**XI.** Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención que permitan solucionar la problemática identificada;

**XII.** Proporcionar a las Instituciones, la asesoría y apoyo técnico que requieran sobre información de su competencia;

**XIII.** Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y que se requieran en procesos administrativos o judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables;

**XIV.** Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública, y

**XV.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios implementarán medidas de registro y seguimiento para quienes sean separados del servicio por no obtener el certificado referido en esta Ley.

## **TÍTULO SÉPTIMO DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA**

### **CAPÍTULO ÚNICO**

**Artículo 109.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.

El Presidente del Consejo Nacional dictará las medidas necesarias, además de las ya previstas en la Ley, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada mediante los instrumentos de información sobre Seguridad Pública.

Las Instituciones de Procuración de Justicia tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos criminalísticos y de personal, en el ámbito de su función de investigación y persecución de los delitos.

La información sobre administración de justicia, podrá ser integrada las bases de datos criminalísticas y de personal, a través de convenios con el Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia y con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

El acceso a las bases de datos del sistema estará condicionado al cumplimiento de esta Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia Ley emanen.

**Artículo 110.-** Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.

La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

**Artículo 111.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su Red Local correspondiente, con las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema, previstas en la presente Ley.

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Secretario Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios.

## **SECCIÓN PRIMERA**

### **Del Registro Administrativo de Detenciones**

**Artículo 112.-** Los agentes policiales que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información, de la detención, a través del Informe Policial Homologado.

**Artículo 113.-** El registro administrativo de la detención deberá contener, al menos, los datos siguientes:

- I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
- II. Descripción física del detenido;
- III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;
- IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción, y
- V. Lugar a donde será trasladado el detenido.

**Artículo 114.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán actualizar la información relativa al registro, tan pronto reciba a su disposición al detenido, recabando lo siguiente:

- I. Domicilio, fecha de nacimiento, edad, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión;
- II. Clave Única de Registro de Población;
- III. Grupo étnico al que pertenezca;
- IV. Descripción del estado físico del detenido;
- V. Huellas dactilares;
- VI. Identificación antropométrica, y
- VII. Otros medios que permitan la identificación del individuo;

El Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite de la detención de una persona y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emitirá las disposiciones necesarias para regular los dispositivos tecnológicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información a que se refiere este artículo, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología.

**Artículo 115.-** La información capturada en el Registro Administrativo de Detenciones será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:

- I. Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y
- II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales aplicables.



Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el Registro a terceros. El Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

**Artículo 116.-** Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal aplicable.

## **SECCIÓN SEGUNDA**

### **Del Sistema Único de Información Criminal**

**Artículo 117.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios serán responsables de integrar y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del adolescente.

**Artículo 118.-** Dentro del sistema único de información criminal se integrará una base nacional de datos de consulta obligatoria en las actividades de Seguridad Pública, sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de identificación, recursos y modos de operación.

Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que aporten las Instituciones de Seguridad Pública, relativa a las investigaciones, procedimientos penales, órdenes de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de penas.

**Artículo 119.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia podrán reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, conforme a las disposiciones aplicables, pero la proporcionarán al sistema único de información criminal inmediatamente después que deje de existir tal condición.

**Artículo 120.-** El Sistema Nacional de Información Penitenciaria es la base de datos que, dentro del sistema único de información criminal, contiene, administra y controla los registros de la población penitenciaria de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 121.-** La base de datos deberá contar, al menos, con el reporte de la ficha de identificación personal de cada interno con fotografía, debiendo agregarse los estudios técnicos interdisciplinarios, datos de los procesos penales y demás información necesaria para la integración de dicho sistema.

## **SECCIÓN TERCERA**

### **Del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública**

**Artículo 122.-** El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos:

- I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública;
- II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público, y
- III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron.

Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al Registro.

**Artículo 123.-** Las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios inscribirán y mantendrán actualizados permanentemente en el Registro los datos relativos a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de esta Ley.

Para efectos de esta Ley, se consideran miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente.

La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la presente Ley.

## **SECCIÓN CUARTA**

### **Del Registro Nacional de Armamento y Equipo.**

**Artículo 124.-** Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios manifestarán y mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el cual incluirá:

I. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo, y

II. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.

**Artículo 125.-** Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las instituciones de Seguridad Pública mantendrán un registro de los elementos de identificación de huella balística de las armas asignadas a los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública. Dicha huella deberá registrarse en una base de datos del Sistema.

**Artículo 126.-** En el caso de que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Nacional de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las normas aplicables.

**Artículo 127.-** El incumplimiento de las disposiciones de esta sección, dará lugar a que la portación o posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.

## **TÍTULO OCTAVO**

### **DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD**

#### **CAPÍTULO ÚNICO**

##### **De los Servicios de Atención a la Población**

**Artículo 128.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.

Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de:

I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y

## **II. La sociedad civil organizada.**

**Artículo 129.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes.

**Artículo 130.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.

**Artículo 131.-** Para mejorar el servicio de Seguridad Pública, las instancias de coordinación que prevé esta Ley promoverán la participación de la comunidad a través de las siguientes acciones:

- I. Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.
- II. Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;
- III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;
- IV. Realizar labores de seguimiento;
- V. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;
- VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y
- VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.

**Artículo 132.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que las Instituciones de Seguridad Pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad, para alcanzar los propósitos del artículo anterior.

La participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y de instituciones, se sujetará a los indicadores previamente establecidos con la autoridad sobre los siguientes temas:

- I. El desempeño de sus integrantes;
- II. El servicio prestado, y
- III. El impacto de las políticas públicas en prevención del delito.

Los resultados de los estudios deberán ser entregados a las Instituciones de Seguridad Pública, así como a los Consejos del Sistema, según corresponda. Estos estudios servirán para la formulación de políticas públicas en la materia.

**Artículo 133.-** El Centro Nacional de Información deberá proporcionar la información necesaria y conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana. No se podrá proporcionar la información que ponga en riesgo la seguridad pública o personal.

**Artículo 134.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán políticas públicas de atención a la víctima, que deberán prever, al menos los siguientes rubros:

- I. Atención de la denuncia en forma pronta y expedita;
- II. Atención jurídica, médica y psicológica especializada;
- III. Medidas de protección a la víctima, y
- IV. Otras, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

## **TÍTULO NOVENO**

### **DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

#### **CAPÍTULO PRIMERO**

##### **Disposiciones Generales**

**Artículo 135.-** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, locales y municipales por el manejo o aplicación ilícita de los recursos previstos en los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.

Serán consideradas violaciones graves a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, las acciones u omisiones previstas en el artículo 139, que se realicen en forma reiterada o sistemática.

**Artículo 136.-** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, estatales y municipales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables y por las autoridades federales competentes.

**Artículo 137.-** La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fiscalizará los recursos federales que ejerzan la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en materia de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones aplicables.

#### **CAPÍTULO SEGUNDO**

##### **De los Delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 138.-** Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa, a quien dolosa, ilícita y reiteradamente se abstenga de proporcionar al Secretariado Ejecutivo la información que esté obligado en términos de esta Ley, a pesar de ser requerido por el Secretario Ejecutivo, dentro del plazo previsto en el artículo 36 de esta Ley.

Se impondrá además, la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión en cualquier orden de gobierno.

**Artículo 139.** Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien:

- I.** Ingrese dolosamente a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública previstos en esta Ley, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información, las bases de datos o los equipos o sistemas que las contengan;
- II.** Divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases de datos o sistemas informáticos a que se refiere esta Ley.
- III.** Inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, prevista en esta Ley, como miembro o integrante de una institución de Seguridad Pública de cualquier orden de gobierno, a persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la Ley, o a sabiendas de que la certificación es ilícita;

**IV.** Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además, la inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público en cualquier orden de gobierno, y en su caso, la destitución.

**Artículo 140.** Se sancionará con cinco a doce años de prisión y de doscientos a ochocientos días multa, a quien falsifique el certificado a que se refiere la presente Ley, lo altere, comercialice o use a sabiendas de su ilicitud.

**Artículo 141.-** Las sanciones previstas en este capítulo se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos previstos en los ordenamientos penales federal o de las entidades federativas, según corresponda.

Las autoridades del fuero federal serán las competentes para conocer y sancionar los delitos previstos en este capítulo, conforme las disposiciones generales del Código Penal Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones legales, en atención a que la Federación es el sujeto pasivo, de conformidad con el artículo 50, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

## **TÍTULO DÉCIMO DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL**

### **CAPÍTULO I Disposiciones Preliminares**

**Artículo 142.-** Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto. Los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente Ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal.

Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel nacional sean determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, serán distribuidos con base en los criterios que apruebe el Consejo Nacional, a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Las autoridades correspondientes de las entidades federativas y de los municipios deberán concentrar los recursos en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública.

Asimismo, dichas autoridades deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema sobre los movimientos que presenten las cuentas específicas, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino así como los recursos comprometidos, devengados y pagados.

Sin perjuicio de lo que establece el artículo 143 los convenios generales o específicos establecerán obligaciones para las entidades federativas y los municipios, a efecto de fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se aporten, así como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

**Artículo 143.** Para efectos de control, vigilancia, transparencia y supervisión del manejo de los recursos previstos en el artículo que antecede, así como para determinar si se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 139, compete al Secretario Ejecutivo:

**I.** Requerir, indistintamente, a las autoridades hacendarias y de seguridad pública, entre otras, de las entidades federativas y de los municipios, informes relativos a:

a) El ejercicio de los recursos de los fondos y el avance en el cumplimiento de los programas o proyectos financiados con los mismos;

b) La ejecución de los programas de seguridad pública de las entidades federativas derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública;

II. Efectuar, en cualquier momento, visitas de verificación y revisiones de gabinete de los documentos, instrumentos y mecanismos inherentes o relativos al ejercicio de los recursos en las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios, a fin de comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las obligaciones a su cargo; de igual forma, podrá requerir la información que considere necesaria indistintamente a las autoridades hacendarias o de seguridad pública locales correspondientes;

III. Las demás acciones que resulten necesarias para la consecución de lo dispuesto en este artículo.

De manera supletoria a lo previsto en este artículo se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal.

## **CAPÍTULO II**

### **De la Cancelación y Suspensión de Ministración de los Recursos**

Artículo 144.- El Pleno del Consejo Nacional resolverá la cancelación o suspensión de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, a las entidades federativas o, en su caso, municipios, que incurran en lo siguiente:

I. Incumplir las obligaciones relativas al suministro, intercambio y sistematización de la información de Seguridad Pública, o violar las reglas de acceso y aprovechamiento de la información de las bases de datos previstas en esta Ley;

II. Incumplir los procedimientos y mecanismos para la certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;

III. Abstenerse de implementar el servicio telefónico nacional de emergencia;

IV. Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que disponen las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Aplicar criterios, normas y procedimientos distintos a los establecidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;

VI. Establecer y ejecutar un Modelo Policial básico distinto al determinado por el Consejo Nacional;

VII. Establecer servicios de carrera ministerial y policial sin sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones que de ella emanan;

VIII. Abstenerse de constituir y mantener en operación las instancias, centros de control de confianza y academias a que se refiere esta Ley, y

IX. Cualquier incumplimiento a las obligaciones de la presente Ley, que afecte a los mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Pública.

La cancelación de la ministración de los recursos federales a las entidades federativas y municipios, supone la pérdida de los mismos, por lo que no tendrán el carácter de recuperables o acumulables y deberán, en consecuencia, permanecer en la Tesorería de la Federación para los efectos legales correspondientes al finalizar el ejercicio fiscal, salvo que en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal se destinen a otras entidades federativas o municipios para llevar a cabo la función de seguridad pública, sin que se genere, para éstas, el derecho a recibir los recursos con posterioridad.

**Artículo 145.-** El procedimiento al que se sujetarán las visitas y revisiones a que se refiere el artículo 143, fracción II, y sobre las causas de cancelación de los recursos a que se refiere el artículo 144, se sujetará a las reglas siguientes:

**I.** En la orden de visita o revisión correspondiente se señalará el servidor público que la practicará, la institución, así como el periodo u objeto que haya de verificarse o revisarse;

**II.** La visita se practicará preferentemente en las oficinas principales de la institución o dependencia visitada; en caso de no ser posible por cualquier causa, se realizará en cualquier domicilio de la propia institución o dependencia o, en caso necesario, en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo; estando obligados los servidores públicos de las instituciones o dependencias visitadas a proporcionar todas las facilidades necesarias y atender los requerimientos que se les formulen;

**III.** En caso de advertirse incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, los acuerdos generales o los convenios, el Secretariado podrá decretar la suspensión provisional de las aportaciones subsecuentes. La suspensión de ministración de fondos subsistirá hasta que se aclare o subsane la acción u omisión que dio origen al incumplimiento.

La suspensión en el otorgamiento de los recursos no implica la pérdida de los mismos por parte de las entidades federativas o municipios, por lo que podrán aclarar o subsanar la acción u omisión que dio origen al incumplimiento, mientras no se emita la resolución que declare la cancelación;

**IV.** En un plazo no mayor a quince días hábiles, posteriores a la terminación de la visita, el Secretariado Ejecutivo presentará al Consejo el informe correspondiente al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones sujetas a verificación, así como toda la información que resulte necesaria para el efecto;

**V.** El Secretariado dará vista a la institución o dependencia visitada o revisada, para que en un plazo de veinte días hábiles, aporte la información pertinente para desvirtuar las imputaciones que, en su caso, se formulen en su contra;

**VI.** Transcurrido el plazo antes mencionado, en caso de incumplimiento, el Secretariado presentará al Consejo Nacional un proyecto de resolución, en que se contengan las conclusiones de la visita o revisión practicadas;

**VII.** En el proyecto de resolución señalará si la institución o dependencia revisada o visitada se hace acreedora a la cancelación de los fondos o, en su caso, que procede requerir la restitución de los mismos;

El Consejo Nacional resolverá en forma definitiva e inatacable sobre la existencia del incumplimiento y determinará, en su caso, la cancelación y, cuando proceda, la restitución de los recursos, con independencia de las responsabilidades que otras leyes establezcan.

De la suspensión o cancelación se dará cuenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes.

Cuando el Consejo Nacional resuelva que procede requerir la restitución de los recursos utilizados en forma indebida o ilícita, las entidades federativas o, en su caso, municipios contarán con un plazo de 30 días naturales para efectuar el reintegro; en caso contrario, los recursos podrán descontarse de las participaciones o aportaciones que le correspondan para el siguiente ejercicio fiscal.

Las entidades federativas estarán representadas por los titulares de los poderes ejecutivos a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 12 de esta Ley, o por quien ellos designen, sin que pueda recaer dicha representación en un servidor público de menor jerarquía a la de titular de una de las secretarías competentes en la entidad respectiva para la aplicación de esta Ley.

## **TÍTULO UNDÉCIMO DE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS**

**Artículo 146.-** Para efectos de esta Ley, se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.

**Artículo 147.-** El Distrito Federal, los Estados y los Municipios coadyuvarán en la protección y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de las instalaciones estratégicas y para garantizar su integridad y operación.

**Artículo 148.-** El resguardo de las instalaciones estratégicas queda a cargo de la Federación, que se coordinará con las Instituciones locales y municipales correspondientes por razón del territorio en el ejercicio de esta función, las cuales garantizarán la seguridad perimetral y el apoyo operativo en caso necesario.

El Ejecutivo Federal constituirá un Grupo de Coordinación Interinstitucional para las Instalaciones Estratégicas, que expedirá, mediante acuerdos generales de observancia obligatoria, la normatividad aplicable en la materia.

**Artículo 149.-** El Consejo Nacional establecerá los casos, condiciones y requisitos necesarios para el bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico para los fines de seguridad pública.

Las decisiones que en ese sentido emita el Consejo Nacional, deberán ser ejecutadas por las distintas Instituciones de Seguridad Pública que lo integran.

## **TITULO DUODÉCIMO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA**

**Artículo 150.-** Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local.

Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.

**Artículo 151.-** Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.

**Artículo 152.-** Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se registrarán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables que se establecen para las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Centro Nacional de Información.

Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán la obligación de las empresas privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza.

## **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes.



**SEGUNDO.-** El Ejecutivo Federal contará con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto para crear e instalar el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cual deberá acreditar a los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública y sus respectivos procesos de evaluación en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en operación del citado Centro Nacional.

**TERCERO.** De manera progresiva y en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el Consejo Nacional.

**CUARTO.-** Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**QUINTO.** Los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes estatales, en la rama correspondiente, en un plazo no mayor a un año.

**SEXTO.** Los servidores públicos que obtengan el certificado y que satisfagan los requisitos de ingreso y permanencia que se establecen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los ordenamientos legales federales y estatales aplicables, ingresarán o serán homologados al servicio de carrera, en las ramas ministerial, policial y pericial, según corresponda, en la jerarquía y grado, así como antigüedad y derechos que resulten aplicables, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

**SÉPTIMO.-** Las referencias realizadas en la presente Ley a la reinserción social, quedarán entendidas al término vigente readaptación social, toda vez que con este Decreto no entra en vigor el párrafo tercero del artículo 21 constitucional sujeto a la vacancia prevista en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

**OCTAVO.-** El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

**NOVENO.-** El Consejo Nacional y las Conferencias que prevé la presente Ley, deberán expedir las disposiciones a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo no mayor a nueve meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

**DÉCIMO.-** Por única ocasión, el Secretario Ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**DÉCIMO PRIMERO.-** Los recursos humanos, materiales y financieros con que cuente el Secretario Ejecutivo de conformidad con la abrogada Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables, se transferirán al Secretariado Ejecutivo previsto en esta Ley, a la brevedad posible.

Lo mismo sucederá con los asuntos en trámite del Secretario Ejecutivo, salvo que pudiera causarse algún daño o menoscabo al servicio o a los intereses del Sistema.

Los derechos del personal del Secretario Ejecutivo que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, sea transferido, se respetarán conforme a la ley aplicable.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Se abroga la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

#### **Nota**

1 Arraigada Irma, Godoy Lorena. Prevenir o reprimir: falso dilema de la seguridad ciudadana. *Revista de la CEPAL*. Abril del año 2000. pág. 119.

Sala de Comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 03 de diciembre de 2008.

#### **La Comisión de Seguridad Pública**

**Diputados:** Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete, Manuel Cárdenas Fonseca, Raúl Cervantes Andrade, Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso, Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román, Francisco Javier Santos Arreola, José de Jesús Solano Muñoz, Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).

04-12-2008

Cámara de Diputados.

**DICTAMEN** de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Aprobado** con 335 votos en pro, 39 en contra y 13 abstenciones.

Se turnó a la Cámara de Senadores.

Gaceta Parlamentaria, 04 de diciembre de 2008.

Discusión y votación, 04 de diciembre de 2008.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Se les dispensa la segunda lectura. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

**El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:** ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrase el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 411 diputados y diputadas, presidente.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para hacerlo a través de cédula.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Quienes no han registrado su asistencia, tienen 15 minutos para realizarlo mediante cédula. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Rivera Bedoya, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado Rivera Bedoya es Presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

**El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya:** Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Estimados compañeros diputados, el artículo 21 constitucional, en su transitorio, estableció el compromiso y la obligación de que en el término de seis meses debía de reglamentarse y establecerse esta iniciativa.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es una de las leyes más trascendentes y más importantes de nuestra comisión y al hablar de ella debo reconocer el intenso trabajo que se ha venido desarrollando durante meses por parte de todos los compañeros diputados de la comisión y de sus asesores.

Finalmente se logró ayer la aprobación por unanimidad, en lo general, de esta ley, reservándose algunos artículos, algunos compañeros, que posteriormente fueron comentados y discutidos.

La importancia de esta ley es que viene a establecer un sistema importante de coordinación en los tres niveles de gobierno; la creación de un Consejo Nacional de Seguridad que desde un principio se reclamó que encabezara el señor presidente de la república, por la importancia que tiene actualmente el tema de la seguridad.

Este consejo quedó conformado en esa forma por los secretarios de Gobernación, de Seguridad, de Marina, y los gobernadores de los estados, así como por otras autoridades.

El primer propósito que tuvo esta iniciativa fue lograda: que el presidente de la república encabezara el Consejo Nacional de Seguridad.

Existen cosas muy irrelevantes en esta ley y me referiré a las que fueron de especial trascendencia.

Desde un principio se buscó también que existiera un centro de certificación y evaluación de todas las policías, de todos los elementos que ingresen a las fuerzas de la seguridad. No se admitía que fuera el mismo órgano encargado de la seguridad, la evaluadora. Se buscó que fuera un centro ajeno, para que no se fuera juez y parte.

Fue, con el consenso de mis compañeros, logrado que esto así fuera, que existan Centros de Evaluación y Certificación que puedan garantizar en forma permanente el buen desempeño de los cuerpos de seguridad, de tal manera que en lo sucesivo ningún policía, ningún miembro de las fuerzas de seguridad, llamemosle procuradurías o policías, podrá ingresar al sistema si no hay una adecuada evaluación y certificación en que se tomen en cuenta todas las características, todas las modalidades que debe tener un hombre para poder portar un arma y ser representante de la seguridad de nuestro país.

Sabemos ¿para nadie es un secreto? que la mayor parte de las policías están infiltradas por la delincuencia. En las áreas municipales es una verdadera calamidad el control que tienen las bandas delictivas, y no se diga a ese nivel. Lo hemos visto a todos los niveles, municipales, estatales y federal.

El pueblo de México ya no puede seguir viviendo con ese tipo de corporaciones. Por esa razón mis compañeros han asumido la responsabilidad de crear ese Centro de Certificación y de Evaluación, y también que se sumen todas las fuerzas estatales, federales y municipales, para hacer programas, para manejar estrategias nacionales que nos den garantías para que los mexicanos podamos vivir tranquilos.

Ir poco a poco quitándole al Ejército el trabajo de policía, que lamentablemente la ineficiencia, la incapacidad de los cuerpos policiacos han requerido que nuestro Ejército tenga que asumir esas responsabilidades. Queremos tener una policía digna, una policía bien remunerada.

Para ello también se han establecido en esta ley sanciones especiales para quienes alteren, para quienes en forma dolosa certifiquen documentos de la información, penetren en las corporaciones policiacas y generen problemas dentro de los sistemas informativos de los policías.

Igualmente se ha regulado la intervención de los estados, en el sentido de que los recursos que hemos autorizado y que el año pasado duplicaron el presupuesto y en éste, en casi un 40 y hasta un 50 por ciento, sean debidamente vigilados.

Pero también cuidamos los dientes de la ley; que no sirva la ley para perseguir políticamente a las entidades; que se dé derecho de audiencia a cualquier estado que de alguna manera observe un retraso o incumpla algún compromiso.

Estamos de acuerdo en que los estados, los municipios que no atiendan la seguridad, que no hagan buen uso de los recursos sean sancionados, pero dentro de la ley. Todos tenemos una responsabilidad y los estados y los municipios están, desde luego, en esa tesitura.

Hubo grandes debates en nuestra comisión. Uno de ellos fue precisamente el del Centro de Información, el artículo 19, por un término que ahí se mencionaba y que hablaba de resguardar en el Centro de Información la información criminalística.

Por fortuna, y dentro del trabajo que hemos hecho por consenso, entre los compañeros, quiero respetar la postura del PRD que exigió que se incorporara una palabra, la palabra "resguardar" en la fracción I del artículo 19. "En el Centro Nacional de Información establecer, administrar y resguardar las bases de los datos criminalísticos".

Este concepto, gracias a la buena disposición de los demás partidos, ha quedado salvado y esta reserva, que espero sea considerada en este pleno, confiamos que podamos resolverla y recibir las demás opiniones que pudieran tener nuestros compañeros.

En este caso también debemos establecer la importancia del Centro de Prevención del Delito. La prevención en nuestro país, en el sistema penitenciario, que se ha convertido en una escuela de delincuencia, requiere de un programa, de una organización permanente para salvar a los jóvenes, para generar empleo, para atender

el trabajo de los centros de internamiento y darle seguimiento al salir de las prisiones a quienes están purgando una pena.

Todo esto, estimados compañeros, está contenido en esta ley de 150 artículos, que espero que la lean, que la lleven a sus entidades, que la vean sus gobernadores, que la vean sus jefes de seguridad, porque así como se incluyen muchos derechos, también hay muchas obligaciones y tipos penales que de alguna manera no incluimos; vendrían sanciones hasta de 10 años, cuando se proporcione información, cuando se alteren documentos, cuando haya fallas en el sistema, para que pueda cumplirse adecuadamente.

Es una ley que viene a cambiar el modelo de sistema policial mexicano. Ojalá que este instrumento que tenemos en nuestras manos y que ha sido creado con la mentalidad y el ingenio de mis compañeros, sirva para remediar la criminalidad, el problema que lacera a México y sacar de las corporaciones policiales a ese cáncer, a ese grupo de delincuentes que están incrustados en las policías municipales, en el estado y en la federación.

Vamos a acabar con ese lastre y a contribuir, como Legislativo, para tener una seguridad digna, la seguridad que merecen nuestras familias y todos los mexicanos. Muchas gracias a todos.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** En virtud de que el presidente de la Comisión nos ha hecho propuestas de modificación al dictamen? Si la Secretaría lee, por favor, la modificación propuesta por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Propuesta de modificación, artículo 19, fracción I: "Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del sistema en términos que señala el Reglamento". Es cuanto, presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones presentadas por la Comisión de Seguridad Pública, al dictamen.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión, al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Aceptadas las modificaciones propuestas por la comisión. En consecuencia está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por el diputado Rivera Bedoya, y aceptadas por la asamblea.

Se han registrado, para la discusión en lo general, la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, por Alternativa; el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, por Nueva Alianza; el diputado Silvano Garay Ulloa, por el Partido del Trabajo; el diputado Manuel Salvador Salgado Amador, por el Partido Verde Ecologista de México; la diputada Layda Elena Sansores San Román, por Convergencia; el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, por el Partido Revolucionario Institucional; el diputado David Mendoza Arellano, por el Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Édgar Armando Olvera Higuera, por el Partido Acción Nacional. En tanto, tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Aída Marina Arvizu Rivas.

**La diputada Aída Marina Arvizu Rivas:** Gracias, presidente. Compañeras, compañeros legisladores, para tener una idea comparada y en perspectiva de la dimensión del horror que estamos viviendo, baste sólo un dato.

En los peores 10 años de lucha contra la mafia en Italia murieron, en ajuste de cuentas, mil personas. En el último año de este gobierno han muerto más de 4 mil personas, sólo en un año en México han muerto cuatro veces más personas que en 10 años en Italia, en su lucha contra la famosa mafia siciliana.

Este horror ha llevado a la sociedad a la impotencia y al miedo, a un repliegue en el desánimo y la desconfianza. Lo advertimos hace más de dos años en esta tribuna y es de esa situación de ese intenso miedo social que surge una proliferación de medidas desesperadas literalmente dictadas por el miedo en el

caso de la sociedad o de la impotencia y la demagogia de la ausencia facilona de una reflexión seria sobre la naturaleza de la situación actual en el caso de los políticos.

Medidas como la pena de muerte son parte de esa suma entre la desesperación social y la irresponsabilidad política, como es el contexto de éste nuestro debate hoy. Anuncio que mi grupo parlamentario no tiene ningún problema en que se abra este debate y se le dé cauce a la inquietud social, como estuvimos siempre por abrir el debate público informado, razonado y razonable sobre otros temas como la despenalización del aborto, el uso de la Cannabis, la eutanasia, los matrimonios y las familias de homosexuales, y cualquier otro tema.

Sólo la sociedad en democracia tiene derecho a decidir sobre todos estos temas. Nadie está por encima de ella. Nadie debe hacer demagogia con estos temas. Todos estamos obligados a opiniones informadas y con fundamento serio, jurídico, científico, sociológico, psicológico y estadístico.

Mi grupo parlamentario no tiene ningún problema, siempre que se agregue a esta discusión el tema de la corrupción y la impunidad política, que es la que verdaderamente ¿no seamos cínicos, compañeros? está detrás de la corrupción y la impunidad policiaca.

¿Quieren discutir sobre la pena de muerte? Muy bien. Discutamos también sobre la corrupción de los políticos y su impunidad eterna, porque frente a esta grave situación hay posiciones equivocadas. Una posición dice: aumentaré las penas, elevaré los castigos, seré muy duro; llegaré hasta la pena de muerte. Ésta es la solución.

Quien dice esto no ha entendido nada. Nuestro problema en México no es que tengamos leyes blandas, algunos casos habrá, por ejemplo la sanción para violadores a niños y mujeres. Pero nuestro problema principal no está ahí. Está en poder sancionar, de verdad, a los delincuentes que se capturan para aplicarles las leyes que ya tenemos, que son, algunas, muy duras.

Como sabemos, casi siempre los expedientes están mal hechos, a veces intencionadamente tan mal hechos que nuestros policías honestos ¿que los hay? dice el presidente: uno de cada dos deben sufrir la burla del delincuente capturado al que no se le puede retener y castigar legalmente.

Subamos las sanciones, incrementémoslas, matem, fusilemos, acuchillemos o asfixiemos, señor gobernador de Coahuila. Salte usted públicamente sobre el cadáver de los así sancionados como un Fujimori cualquiera, señora gobernadora. ¿Y saben qué? Todo va a seguir igual. Miren, Estados Unidos es el reino de la pena de muerte, especialmente para los negros y los migrantes de origen mexicano, y todo sigue igual, porque ahí no está el problema.

Esto significa que no debemos endurecer las penas. No. Algunas deben ser mucho más duras de lo que hoy son; pero curiosamente nadie habla de ellas, porque las penas que hay que endurecer son aquellas que se cometen con cuello blanco, lavado de dinero, corrupción, impunidad política, protección y complicidad legislativa.

¿Hemos hablado alguna vez de ello en serio? No seriamente. Es decir, no con leyes a fondo sobre este tema.

Otra posición dice: "Combatiré la pobreza y crearé el empleo, y poco a poco dejará de haber delincuencia". Eso suena muy bien en el mundo de largo plazo; pero hoy es un error. La inseguridad y la violencia que padecemos la genera, en más de 90 por ciento, el crimen organizado y, muchas veces, el crimen internacionalmente organizado. Este crimen es una empresa transnacional, una rama industrial que da servicios a una sociedad enferma, que consume drogas, pornografía infantil, armas, mujeres y trabajadores indocumentados.

¿Quiere decir esto que no debemos crear empleos y no colocar la lucha contra el crimen organizado en el horizonte preventivo de mejor educación, mejor salud, mejores empleos y expectativas de vida para nuestros jóvenes? No. Todo ello hay que hacerlo, desde ahora, pero el reto del crimen organizado no se agota sólo con esto, con todo lo indispensable que son estas medidas.

¿Dónde está el problema? En que tenemos un sistema esquizofrénico. No hay prevención, no hay sanción, no hay rehabilitación.

El resultado es el siguiente: quienes deben detener; detienen. Se pasó de un promedio de 7 mil a 27 mil detenidos. ¿Con qué calidad de expedientes? Eso no importa. Se cumplió la cuota. El juez dictará, cuando pueda, sentencia. Pero, ¿hará justicia? No. Pero cumplirá con la cuota.

Y quien dirige las cárceles: ¿aplicará una política de liberación de detenidos para quitarle las presiones a las cárceles, sancionará, o mejor aún, rehabilitará? No. Pero no tendrá problemas en su penal.

Nuestro sistema de seguridad pública está hecho para cumplir metas políticas, números, protección de compadrazgos, comisiones por las compras, complicidad rentada con el crimen; no para crear seguridad y justicia.

Extraña que en la exposición de motivos del dictamen que hoy discutimos no haya ni una palabra sobre por qué las reformas generales de nuestro sistema de procuración de justicia que se intentaron antes. Específicamente en 1995 no funcionaron.

Ninguna palabra de balance, ninguna. La ausencia es sintomática. Sin balance damos soluciones falsas, y me temo que dentro de unos años otra legislatura estará reprobando nuestra irresponsabilidad; como lo hacemos hoy. Sin un balance y un diagnóstico preciso de gobiernos del pasado remoto o reciente, que se dedicaron a la administración pactada del crimen organizado, aunque sea por omisión.

¿Hay soluciones? Sí, las hay, claramente una. Reformar nuestro sistema, pero no al modo en que lo estamos haciendo hoy, sin una conciencia verdadera de la urgencia del problema, sin un plan consistente e integral, con un criterio político general y de Estado, de velar por la seguridad pública con respeto a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos, con la sabiduría que éste es esencialmente un proceso técnico y no de política menor, y esto es justamente lo que estamos haciendo; no estudiar y presentar un paquete conjunto, articulado de iniciativas, sino empezar por lo que nos parece menos complicado y grillezcamente posible, justo lo que la sociedad crítica no quiere: poner por delante los intereses grupales de gobernadores o partidos y no los de la sociedad agredida, y claro, para ocultar esto gritamos: arriba la pena de muerte.

¿Cuáles deben ser los criterios que deben orientar esta reforma? La reforma debe ser sistémica, cada medida debe ser congruente una con la otra. No podemos hacer ahora, en este trabajo posibilista, como lo hacemos con medidas contradictorias.

La reforma debe ser un proceso integral, no se puede reformar todo al mismo tiempo, debemos ir por partes, pero dentro de un plan.

La reforma debe ser un proceso eminentemente técnico y no político. No político en el sentido de la política menor, la grilla de los partidos o de los gobernadores por proteger sus cotos de poder y en algunos casos, de complicidad. Aquí los conceptos clave son la subrogación y la subsidiariedad.

¿Qué quiere decir? Primero, que el problema lo enfrenta quien está más cerca de él.

Segundo, que el problema pasa a otro nivel cuando no se puede enfrentar así. Cuando el municipio no puede, entra el estado; cuando el estado no puede, entra la Federación.

¿No es ésa la situación que vivimos hoy, no hay estados que están totalmente rebasados por el crimen organizado, pero que defienden su impotente autonomía sin hacer caso de la realidad?

¿No hay municipios, que ya son territorio sin ley, donde la palabra particular del crimen organizado es justamente la ley?

Esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad es débil y de resultados inciertos. Mientras no tengamos el paquete completo y estemos seguros en qué dirección vamos, nos parece que sólo estamos entreteniéndolo a una opinión pública que presiona, y con razón.

Coordinar en un sistema asambleístico nacional lo que está podrido hasta la médula, ¿sirve de algo? Claro, sirve para coordinar 32 podredumbres y una federal, si es que no hay conjuntamente iniciativas tendientes a

separar la paja del trigo, o mejor dicho, las manzanas podridas de las sanas, y esto francamente no lo vemos claro, no sólo con esta iniciativa, que es muy consensuada, pero por sí sola absolutamente insuficiente, porque este trabajo no abre la posibilidad de discutir otros temas.

Por ejemplo, ¿por qué le tenemos tanto miedo a discutir la creación de una policía nacional única, acuartelada, militarizada, con capacidad para investigación criminal y bajo el mando de las Fuerzas Armadas mexicanas? Que, por cierto, es la única institución confiable hoy en día, en materia de seguridad, pero sí queremos entrarle a otros temas, como el debate en la pena de muerte. Por eso, hoy mi grupo parlamentario se abstiene. Muchas gracias.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Gracias, compañera diputada. La Comisión de Seguridad Pública me ha solicitado conceder el uso de la palabra a dos de sus miembros, al señor diputado David Mendoza Arellano y al señor diputado Edgar Armando Olvera Higuera.

Esta Presidencia no tiene ninguna objeción en atender esa solicitud, y por tanto, le damos el uso de la palabra al señor diputado David Mendoza Arellano. Diputado Cárdenas Fonseca. Sonido a la curul del diputado Cárdenas Fonseca.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. ¿Cuál es la razón para que cambiemos el procedimiento? Ya se había posicionado el tema por parte del presidente de la Comisión de Seguridad, ya estamos en la discusión y en los posicionamientos en lo general; ya dio usted la lista de quienes estamos inscritos para el efecto.

¿Cuál es el sentido de modificar lo que ya está aprobado y que la sesión continúe en los términos que el propio Reglamento establece, y que usted tuvo a bien decretar en sus términos? Porque ahora entonces, en este tema, si se van a posicionar respecto del dictamen, que cada bancada lo haga respecto del dictamen y luego cada bancada en lo general y luego cada quien en lo particular.

O sea, yo le suplico a esa Presidencia que continuemos con el procedimiento que marca el Reglamento Interior, y que esa Presidencia atinadamente ha conducido hasta ahorita. No hay ningún argumento de esos dos compañeros para que persistan antes del procedimiento que ya usted atinadamente observó y decretó.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Con gusto, señor diputado, atendemos su sugerencia. Lo que sucede es que entendemos que es un tema que ha esperado una gran atención nacional. Sin duda entendemos su posición.

Esta Presidencia, de manera formal, se abocó la Mesa Directiva de la comisión solicitando precisamente esta intervención. Y lo que procede, señor diputado, respetando su posición, es consultar a la asamblea si es de aceptarse la ampliación por parte de la comisión para marcar y ampliar en ello la posición al dictamen.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Señor presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Diputado Manuel.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Diputado presidente, éste, como otros muchísimos temas, no pueden ser el atributo o el capricho de una Mesa Directiva en la que no están representadas todas las fuerzas políticas que con su voto nos trajeron aquí, al pleno.

En muchísimos otros temas, todas las bancadas hemos aceptado que el posicionamiento respecto del dictamen lo haga quien en suerte es el presidente de la misma. Y han sido temas que han esperado muchísimo.

Ahora entonces, de ser así, yo le solicito ¿porque no fue un tema planteado en la comisión y es un tema exclusivo de alguien que no tiene competencia para hacerlo y porque el procedimiento ya se inició y ya estamos en otro punto, ahora entonces lo que aplica para uno aplica para todos?, yo le suplico a esa Presidencia que, al no haber ningún argumento más allá de una obsequiosa posición y de estar iniciado ya el procedimiento que sí contempla el reglamento, en todo caso que hagan uso de la palabra y se inscriban en la



parte correspondiente y no ahorita, porque estamos violentando el mecanismo que esa Presidencia ya observó.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** De hecho, señor diputado, esa lista se ha recogido y ha habido ya precedentes en que se han fundamentado, por más de un diputado, los dictámenes que presenta alguna comisión, y a criterio de esta Presidencia, señor diputado, ha sido atendida, hemos hecho la atención. Por eso de alguna manera queremos validar con la opinión del pleno.

Solicito a la Secretaría que ponga a consideración del pleno si se autoriza el uso de la palabra a los señores diputados David Mendoza Arellano y Édgar Armando Olvera Higuera, por parte de la comisión.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Señor presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Sí, diputado don Manuel.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Simple y sencillamente decirle, diputado presidente, que la parte de posicionamiento en lo general ya empezó, con el Partido de Alternativa. Lo que está usted haciendo es absolutamente irregular.

Puede usted someter al pleno cuantas veces la discrecionalidad y la obsequiosa participación de algún grupo parlamentario que se lo solicite, para interrumpir un procedimiento que el reglamento señala claramente, cómo se da el debate y la atención.

El procedimiento ya estaba iniciado, ya estamos en lo general, ya hubo un grupo parlamentario que se expresó sobre el particular. Usted tiene una lista que no está respetando y está siendo obsequioso a caprichos personales respecto de un tema que quieren politizar y que quieren llevar mediáticamente, no respetando el procedimiento que esa Mesa Directiva ya había dictaminado.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** En consecuencia, y en atención a su inquietud, el señor diputado David Mendoza me ha solicitado retirarlo de la lista en este sentido, y vamos a otorgar el uso de la palabra en seguimiento ya de la lista, una vez encauzadas las posiciones que cada partido ha establecido.

Por lo tanto, señor diputado, tiene usted el uso de la palabra para que marque la posición a nombre de Nueva Alianza para este dictamen.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:** Con el permiso de la Presidencia. Acuso que por petición de respeto al procedimiento no se me vaya a censurar el uso del tiempo, como no se le hizo a quien me precedió en el uso de la palabra, en un tema que como aquí se dijo, es de la mayor importancia.

Pero lo que estamos haciendo es nuevas leyes, porque no aplicamos las actuales, porque desconocemos el derecho positivo mexicano y porque las autoridades ven sus facultades, sus obligaciones, eminentemente como discrecionales.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza va a favor de este dictamen, a pesar de que en la actitud y en la forma en la que se procesó, se violentó mucho la situación de pares, el trabajo en conjunto y sólo se determinó que fueran tres grupos parlamentarios los que trabajaran el documento, mismo que no pudimos conocer sino hasta el final, porque al parecer, el texto que lo contiene no es ni fue realizado por los diputados.

Se acusó que se incluían en el texto criterios del Senado de la República. Qué triste que una comisión y un presidente de comisión no conozcan el reglamento y lo que establece, para los efectos de trabajar en Conferencia.

Se ha dicho que son más de 4 mil los muertos. Se ha establecido que nos ha costado más vidas que en Irán e Irak. Se refrenda aquí la impotencia, la rabia, la desazón del ciudadano común.

Pero si bien es cierto que el contenido y la forma en que se integra el consejo desvirtúa absolutamente lo que estamos buscando, también es cierto que hay temas que son buenos y que habría que salvar, como la

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que hoy existe. Que el Procurador General de la República y los procuradores estatales a cada rato se reúnen, gastando el presupuesto con sus homólogos de las entidades federativas, y no son ni siquiera para mandar una iniciativa acordada entre los órdenes de gobierno.

En la materia que les compete hay criterios inclusive de interpretación de la ley. Hay excesos como incorporar a las Fuerzas Armadas. Algo que la Constitución no prevé, ahora lo están queriendo validar en una ley reglamentaria que será observada por todos los organismos internacionales.

A pesar de eso, para rescatar lo poco bueno que tiene, en términos de los trabajos en Conferencia, Nueva Alianza piensa que: a ver si de esta manera los procuradores trabajan por el bien de la ciudadanía.

Igual suerte corre la Conferencia en Seguridad Pública. Son un sinnúmero de reuniones las que ha tenido el secretario de Seguridad Pública federal con los homólogos estatales y sólo han servido para entrar en discusiones que no le traen las soluciones a los mexicanos.

Pero lo que es más grave en la constitución del consejo: todo indica el capricho de que sea el presidente de la república el que lo presida. Y la pregunta sería, ¿por qué no, entonces, el presidente de la república preside todos los consejos nacionales?

Esta iniciativa que hoy nos proponen trae cuatro o cinco puntos que obedecen a cortesías perversas entre actores, y no pensando en instituciones. Nuevamente se ve la vista corta, en exceso, de quienes fuera del recinto deciden los textos para venir a imponerlos con la mayoría de los votos.

Qué podemos decir del sistema penitenciario, en el que las entidades federativas sí acusan en sus centros de reclusión las universidades de la delincuencia, pero eso ha sido, porque el nivel federal, el orden federal, no ha querido poner orden en su sistema penitenciario y tiene a más de 50 mil presos recluidos con delinquentes menores.

¿Qué pasa con las víctimas y los ofendidos? Ésta es la parte que más destaca Nueva Alianza. Hoy por hoy en el andamiaje jurídico que pretendemos construir, y éste es uno solo de los elementos, el Estado mexicano no se hace cargo de los daños que generan a los particulares en su abuso de poder.

Hay varios ejemplos, el que aquí le fue cuestionado al secretario de Seguridad Pública, a través de un comunicado de un servidor, fue respecto del daño que se le hizo a una persona y que no querían operarlo y terminaron siendo aportaciones particulares las que lo tienen en la posibilidad de salvar una de sus extremidades inferiores.

Así pues, compañeros, Nueva Alianza va a favor del dictamen a pesar de los atropellos procesales, procedimentales y de técnica legislativa que decidieron los coordinadores parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD, y que nos excluyeron a quienes de una manera seria y además responsable quisimos abonar, con argumentos, con razones, para que esto saliera lo mejor posible.

Por último, haremos valer en las reservas del caso, los argumentos para que si este pleno en uso y abuso del sistema de mayoriteo no nos atiende, el Senado tenga plena conciencia de que estará actuando irresponsablemente al volver a poner a las Fuerzas Armadas en una ley para atender la seguridad pública.

Al excluir a la Secretaría de Hacienda de un consejo que pretende, dentro de sus funciones, atacar el lavado de dinero, y de agregar irresponsablemente, bajo una figura que la propia ley no contempla, como invitado permanente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es irregular.

Los agravios no se hacen en el gabinete, eso lo deben saber quienes atendieron esta cortesana actitud. Se comenten en la calle y no es el lugar para hacer corresponsable a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de algo que no es su competencia. Lo que sí lo será es la violación al estatuto jurídico por parte de las corporaciones y de los funcionarios. Es cuanto, muchas gracias.

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** Gracias, diputado Cárdenas Fonseca. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Salvador Salgado Amador, del Partido Verde Ecologista de México. Recordándoles que las intervenciones son de cinco minutos.

**El diputado Manuel Salvador Salgado Amador:** Con su permiso, señor presidente.

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** Adelante, compañero diputado.

**El diputado Manuel Salvador Salgado Amador:** Compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero iniciar mi intervención manifestando que el Grupo Parlamentario del Partido Verde celebra con beneplácito los consensos de los diversos partidos políticos representados en esta Cámara. Los cuales han permitido que el día de hoy estemos discutiendo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en pleno cumplimiento a la obligación asumida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de junio del presente año.

Hoy debemos reconocer aquí que el mayor reto y la mayor afrenta al Estado mexicano está en la inseguridad en que vivimos. La violencia en el país ha llegado a niveles críticos. Durante el presente año se han registrado más de cinco mil muertes relacionadas con el crimen organizado, estando entre las víctimas, narcotraficantes, agentes federales y civiles. De hecho en los 10 primeros meses del año hubo un incremento cercano al 10 por ciento en la comisión de delitos del fuero común.

La impunidad y el aumento alarmante de víctimas han propiciado que amplios sectores de la sociedad se pronuncien a favor de la aplicación de la pena de muerte. En tal virtud, exigimos se abran los espacios institucionales para llevar a cabo un debate nacional sobre la pena de muerte.

Diversas encuestas ciudadanas demuestran que los mexicanos están a favor de incrementar las penas, como medidas para inhibir la comisión de delitos. Inclusive, algunas de ellas evidencian el alto índice de aprobación de la pena de muerte que tiene nuestro país. En consecuencia, abramos el debate, es un reclamo social ante el cual no podemos ser omisos.

En otro aspecto, el problema de la delincuencia es muy complejo, tiene raíces históricas, profundas y trasciende los límites de una administración. La ley y el Estado fueron rebasados. Por ello es momento de reformar al Sistema Nacional de Seguridad Pública para adecuarlo a las nuevas realidades.

Aunque desde 1995 se llevó a cabo una importante reforma en materia de seguridad pública, la mayoría de las corporaciones policiales siguieron operando sin ningún cambio sustancial, ya que a pesar de que fue creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con dos instrumentos de coordinación: la carrera policial y el Sistema de Información Nacional, en este país la mayoría de las corporaciones policiales estuvieron funcionando por mucho tiempo sin controles en la contratación, permanencia y desarrollo profesional de sus integrantes.

En concreto, la falta de control, metodología y sistemas para la operación, así como las condiciones laborales precarias, permitieron a la delincuencia utilizar la infraestructura de algunas corporaciones policiales.

Lo anterior nos ha llevado a un escenario en el que urge una reforma integral en materia de seguridad pública.

Por ello, confiamos que con la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que hoy discutiremos se establezcan las bases para dignificar las labores de los cuerpos policiales y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, así como abatir el índice delictivo e implementar un Sistema Nacional de Seguridad Pública que sea más efectivo y que dé lugar a una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, estamos ciertos que con esta nueva ley se atacarán aspectos medulares que en materia de seguridad pública han contribuido a un aumento en el índice delictivo, entre ellos el deterioro estructural de las corporaciones policiales debido a la infiltración de la delincuencia organizada, la corrupción acompañada de deficientes esquemas de control y de confianza, el deterioro de las condiciones laborales, el desarrollo policial desigual en las corporaciones policiales federal, estatales y municipales, y la falta de una verdadera coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno.

Durante años los mexicanos hemos exigido que el Estado garantice la seguridad pública y frene a la delincuencia. No podemos ni debemos seguir permitiendo que los delincuentes se refugien en instituciones débiles o en deficiencias de la ley.

Por ello el Grupo Parlamentario del Partido Verde celebra una vez más la decisión de este órgano legislativo de participar en la modernización y transformación de nuestras leyes e instituciones, en materia de seguridad pública, mediante la regulación del Servicio Profesional de Carrera en las instituciones de procuración de justicia, del desarrollo policial, del Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza, y de la participación de la comunidad.

Los mexicanos tenemos derecho a realizar nuestras tareas y nuestras actividades con la confianza de que la vida, la integridad y el patrimonio efectivamente serán salvaguardados por el Estado. Es cuanto, señor presidente.

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** Muchas gracias, diputado Manuel Salvador Salgado Amador. Tiene la palabra la diputada Layda Elena Sansores San Román, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

**La diputada Layda Elena Sansores San Román:** Con base en el artículo 113, espero que sea condescendiente con el tiempo. Compañeras y compañeros, Convergencia lamenta la exclusión y la falta de respeto a diputados integrantes de la Comisión de Seguridad. Se nos citó para darnos a conocer el documento cuando ya estaba cocinado, cocinado en conciliábulos.

Esta iniciativa se reduce a juegos pirotécnicos para encubrir los magros resultados y la falta de voluntad para combatir a fondo el problema de la inseguridad. Nunca se ha gastado más dinero público en seguridad que en los últimos cuatro años, y nunca habíamos tenido peores resultados.

Que 100 días. ¡Por favor!, si en 700 días Calderón no ha podido. Decenas de familias esperando resultados. Cuántos periodistas asesinados. Ni un solo agresor consignado. Ni siquiera los casos emblemáticos.

Aún no se sabe quién, dentro de la SSP, mandaba a Lorena. Ella era empleada administrativa que hacía los oficios para el pago de viáticos, y dependía del director de Área de Secuestros, justamente el mismo que estuvo a cargo de la dudosa investigación del caso de la hija de Nelson Vargas. Qué coincidencias.

Más leyes, más dinero, más policías, más burocracia, más institutos, centros de evaluación, pero ¿dónde están la transparencia y la rendición de cuentas? La Ley del Sistema Nacional de Seguridad no permite sancionar a los casi 400 mil policías locales y municipales, simplemente hace recomendaciones y coordinaciones que nunca han funcionado.

Recuérdese que sólo el 5 por ciento de los policías son federales y esta ley está enfocada solamente a ellos. No se blindó al ciudadano contra la corrupción y la impunidad de los cárteles políticos de la SSP y la PGR y de los tres niveles de gobierno. Son algunas concesiones por la presión ciudadana.

Lo que está en juego en esta ley es la rebatanga de los fondos federales entre presidentes municipales y gobiernos estatales bajo el escudo de sus partidos, y lo que les detuvo en las discusiones.

La seguridad pública considerada desde la prevención del delito hasta impartición de justicia y las últimas reformas, se orientaron a crear un estado policiaco y hoy quieren consolidar este estado policiaco por arte de mafia.

No es sólo cuestión de persecución sino de solución de las causas que lo generan. Poco podrá avanzarse sin empleo y sin educación. Nunca los cuarteles podrán sustituir a las aulas.

Con fanfarrias se aprobaron las reformas de justicia, pero ni un peso para implementarlas. Mientras el Centro de Evaluación no sea constitucionalmente autónomo, de poco sirve que participen instituciones académicas en las evaluaciones si el Ejecutivo y el secretario de la SSP siguen teniendo el control y son juez y parte. Al Congreso y a la ciudadanía sólo nos dan atole con el dedo.

Propusimos en Convergencia evaluaciones independientes y externas. Se gestionaron desde hace dos años 100 millones de pesos, con el objeto de promover que el Congreso hiciera sus propias evaluaciones a través de la Auditoría Superior de la Federación. Hacienda desvirtuó el acuerdo y el fondo se lo entregó a la SSP y

creó un fideicomiso, pero hasta la fecha no ha dado un paso ni un peso para cumplir con los objetivos. Es claro que el gobierno le apuesta al maquillaje estadístico.

Y referente a las pruebas de control de confianza. Deben empezar por las cabezas o por los cabecillas de las instituciones y deben suprimirse las excepciones. Hicieron exámenes a los ministerios públicos, pero poco transparentes, ¿Quién los aplicó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué criterios? ¿Cuánto costaron? Los primeros que deben estar bajo la lupa son los funcionarios con mayor responsabilidad.

Y deberíamos estar legislando ya sobre revocación de mandato y que a Calderón le apliquen el polígrafo para saber cuáles son las verdaderas intenciones para defender con insistencia al secretario de Seguridad acusado de corrupción, porque lo preocupante no es que lo defienda, sino por qué lo defiende, qué hay en el fondo de la olla.

Eso invoca la sospecha, y es pregunta: ¿favores de campaña, complicidades, sociedades secretas, pactos inconfesables? De la mano de las mafias del narco están las mafias políticas y desde hace 11 años no hay un político de alto rango en la cárcel. No nos hagamos, en México se hace operación limpieza cuando un día nos hablan en inglés.

Preocupa el que no se haya dictaminado la Ley Orgánica de la PGR, a pesar de que se agendó para su discusión. Es claro que el PAN perdería. La mayoría se niega a mutilar el brazo investigador de la PGR y a darle el poder a un solo hombre en la SSP, quien tendría el control de toda la policía federal y de la policía nacional. Señores ni Maquiavelo, ni Fouché aspiraron a tanto.

El problema es que no hay contundencia para dejar claro a Calderón que la Agencia Federal Investigadora seguirá perteneciendo a la AFI y que, por tanto, hay que frenar el desmantelamiento que viene haciendo el secretario de Seguridad, desde hace dos años, con ley y su ley. Es un cínico.

Y ahora vienen a presentarnos la Ley de Unificación de las Policías. Pero sí ya lo viene haciendo. Cerca de 4 mil 500 afís permanecen sin espacios dignos, sin chalecos blindados, sin las armas que les fueron retiradas, sin certidumbre, en abierto despilfarro humano y material. Nuestra policía de elite, de nuestra FBI, reducida a retazos.

Queremos policías comprometidos, pero se da un trato de trabajadores de segunda, al conceder nula importancia a sus derechos laborales.

Calderón hace la finta que se combate la delincuencia y el narcotráfico. En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Calderón, ofreció fortalecer la denuncia contra la corrupción de servidores públicos.

Piden que los ciudadanos denuncien, pero cuando alguien se atreve le sueltan la guillotina. Nuestro sistema policíaco es maestro en el arte de incriminar por venganza, fabricando pruebas. Tenemos un ejemplo fresco en los hermanos Herrera Valles.

Javier Herrera Valles hizo denuncias documentadas a Calderón, a través de una carta. Candoroso, creí en Calderón. Cuando un alto mando policíaco, con 30 años de servicio, con un salario para vivir tranquilo el resto de sus días se atreve a hacer denuncias y las fundamenta, así estuviera equivocado, lo menos que debió hacer Calderón es protegerlo para investigar. Si hay protección para testigos o delincuentes protegidos, por qué no para servidores que tienen una vida institucional intachable y que se niegan a ser cómplices del silencio.

Un paréntesis. Ante el clamor de la pena de muerte es oportuno insistir, en Convergencia estamos en contra de la pena de muerte. Pero hay que debatirla. Hay quienes capitalizan el dolor y la indignación ciudadana para hondear banderas demagógicas y electoreras, y hay a quienes les importa más el paisaje que el hombre.

La delincuencia no se combate con mayores penas, sino con menos impunidad. Conceder el derecho a matar a un sistema corrupto es extremadamente riesgoso. Personalmente, creo que los dos extremos ¿entre crimen y pena de muerte? hay que debatir también la legalización de la droga: es la hora. Los secuestros, el crimen organizado, suelen estar vinculados a la droga.

Por lo pronto, votamos en contra. No hay tal unanimidad. Y porque no hay propuestas para una transformación sustantiva del panorama delictivo. Digamos que esta iniciativa es la misma "gata revolcada en billetes". Es un asunto de reparto de botín, y hay que enfrentar el delito bajo un nuevo paradigma y restaurar la confianza fracturada de una ciudadanía que, hoy más que nunca, necesita creer. Gracias.

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** Gracias, diputada Sansores San Román. Continuamos. Ahora es el turno del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros:** Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la seguridad pública es, sin duda alguna, la principal exigencia de nuestra sociedad. Nadie puede negar que el responsable directo e inmediato de brindar las condiciones adecuadas de seguridad es el Estado, en sus tres ámbitos de gobierno.

En atención a lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional colaboró importantemente con la construcción del decreto que hoy se pone a su consideración, dejando muy en claro nuestro compromiso con los mexicanos al atender con esta ley la principal demanda de los ciudadanos: la seguridad pública.

Los diputados del PRI impulsamos una nueva conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya que para nosotros ha sido de vital importancia que los municipios participen activamente en la organización y ejecución de este tema. Es por esto que propusimos la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal como un órgano que dote al sistema de propuestas basadas en la experiencia del gobierno municipal.

Celebramos que se hayan dado los consensos necesarios para que sea el titular del Ejecutivo federal quien presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a fin de que sea el coordinador de la lucha frontal contra la delincuencia, resaltando de esta manera la importancia a la situación de inseguridad por la que atraviesa nuestro país.

Con las disposiciones contenidas en esta ley, los recursos que les corresponden a los gobiernos de los estados ya no serán repartidos de manera discrecional, dejando de ser un instrumento político. Así, nuestros gobernadores serán los artífices de la planeación y el diseño de las nuevas políticas públicas que se emitan y se ejecuten en esta materia, erradicando de un solo tajo la costumbre que en los últimos años prevaleció en nuestro país de que, de manera unilateral se fijaran los lineamientos en este rubro; pero más grave aún, haber sido el único responsable para manejar los recursos públicos y la información destinada al combate a la delincuencia.

Hoy, en esta nueva ley, serán los gobernadores, los presidentes municipales, los académicos, la sociedad civil, quienes tomen las decisiones y vigilen su cabal cumplimiento. Por primera vez en nuestro país la responsabilidad de combatir la inseguridad pública, por disposiciones de ley, es de todos los actores públicos y sociales.

Es importante destacar que el Consejo Nacional funcionará como un órgano colegiado y plural en su integración. La nueva ley facilita su funcionamiento al formalizar los mecanismos para la discusión de los asuntos al ordenar su funcionamiento en el pleno o en comisiones.

Esta ley incorpora la figura del *quórum* para obligar a los miembros del Consejo Nacional a llevar sus reuniones con la mitad más uno de sus integrantes, y en consecuencia, a tomar sus acuerdos por la mayoría de los presentes, lo que garantiza una total transparencia en la toma de decisiones en materia de recursos, políticas e información de seguridad pública.

El funcionamiento de este sistema se ve fortalecido gracias a la transformación del Secretariado Ejecutivo, al convertirlo en un órgano operativo del sistema con autonomía técnica de gestión y presupuestal, el cual, para la realización de sus actividades se auxiliará por tres centros nacionales: el de Información, el de Certificación y Acreditación, y el de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, siendo el primero de estos centros nacionales fruto de las reflexiones de legisladores de nuestro instituto político.

A fin de garantizar el buen funcionamiento de los centros nacionales propusimos que estas instancias del Secretariado Nacional fueran supervisadas por tres comisiones permanentes, que estarán integradas por gobernadores y por funcionarios federales.

En este decreto se establecen también los requisitos mínimos que deben cumplir los tres niveles de gobierno para poder combatir a la delincuencia, siempre cuidando la integridad y los derechos de las personas.

Del mismo modo, nos preocupamos en incluir la participación de los expertos de instituciones académicas y, de la sociedad civil, quien representa mejor que nadie la preocupación de todos los mexicanos. Se incorpora, además, un nuevo apartado que fija las obligaciones y las sanciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública con el fin de generar parámetros de conducta moral y jurídica en el comportamiento de los servidores públicos responsables de la seguridad pública.

Con esto tendremos elementos para alcanzar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

A fin de mantener la seguridad y el resguardo de la información contenida en la base de datos del sistema, se establecieron delitos para aquellos funcionarios que hagan mal uso de esta información.

El día de hoy, los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional enviamos un mensaje de unidad y coraje. El día de hoy, las instituciones del país demuestran que pueden hacer valer el estado de derecho.

Confiamos en que esta nueva ley obtenga el voto unánime de los legisladores, toda vez que la seguridad pública no puede tener colores de partido. La seguridad y la certeza de cada uno de los mexicanos tiene un solo rostro, que es México. Hagamos valer el compromiso que asumimos frente al pueblo, por México.

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, solicito su voto aprobatorio a favor de este dictamen. Muchas gracias por su atención.

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** Gracias, diputado Gerardo Vargas Landeros. Se concede el uso de la tribuna al diputado Andrés Lozano Lozano, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

**El diputado Andrés Lozano Lozano:** Gracias. Con su venia, diputado presidente. La seguridad es una garantía consagrada por la Constitución y, por tanto, es responsabilidad de Estado garantizarla.

El Grupo Parlamentario del PRD ha señalado en distintas ocasiones la urgencia de tener una nueva concepción sobre la seguridad, tal que respetara no sólo los derechos humanos de la población, sino que dignifique las labores policíacas y que genere nuevas condiciones en la convivencia, y entonces salvar y regenerar este tejido social. Esa debe de ser una premisa fundamental en la seguridad pública.

En el PRD hemos estado en la mejor disposición porque esta ley no espere; también, no podemos tener intereses políticos ni partidistas en materia de seguridad pública. La reforma que fue publicada el 18 de junio de este año al artículo 21 constitucional, nos obligaba a entrar a esta nueva regulación.

No obstante, es importante señalar que el actual Sistema Nacional de Seguridad Pública, en mucho está en crisis, porque no existe una coordinación entre la federación, los estados y los municipios. No hay la confianza para que los estados integren una sola base de datos criminalísticos, policíacos ni de armamento.

Las condiciones generadas en la actualidad no dan la posibilidad de generar esa confianza que es premisa fundamental para un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Importante es respetar todos los principios que se consagraron en la reforma. Legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, es lo que requiere también un nuevo orden policíaco.

El dictamen que hoy se discute, sin duda recoge planteamientos presentados por nuestro grupo parlamentario. Concebimos a este sistema como un sistema horizontal entre los tres Poderes de la Unión y vertical entre los tres órdenes de gobierno; que garantice los acuerdos tomados en el consejo, pero que a la vez también respete el pacto federal. Se crearon pilares fundamentales de este sistema. Uno, como ya se ha dicho, que integre toda la información; otro que atienda a la prevención y la participación ciudadana.

La ciudadanía ha exigido nunca más estar ajena a lo que suceda en la seguridad pública. Se ha depositado desde hace tiempo en el Estado esta responsabilidad y sigue siendo una responsabilidad del Estado. Pero ahora la ciudadanía quiere participar en ella y eso ha sido parte fundamental de la aportación de nuestro grupo parlamentario en esta nueva concepción del sistema.

También se crearon el Centro de Certificación y Acreditación de las Policías del País. No puede ser, como sucede en la actualidad, que un estado de la república tenga requisitos distintos a cualquier otro para tener en la calle a un policía. No puede ser que se tengan condiciones distintas de policías investigadores y ministerios públicos en toda la república. No puede ser que se carezca de lo más elemental, que preparar a cualquier servidor público en igualdad de condiciones y de circunstancias.

Por eso es importante lo que se establece también en esta Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No podríamos tampoco dejar de señalar que fue este grupo parlamentario quien promovió que se integrara al Consejo al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un invitado permanente.

Si no entendemos que en el asunto de la seguridad pública deben de generarse equilibrios, si no entendemos que la seguridad pública debe ser concebida como un todo en el que, por un lado se doten de mayores herramientas al Estado para combatir al crimen organizado. Pero que también se garantice el respeto a los derechos humanos, no pudiéramos avanzar en condiciones de equilibrio.

Tampoco podemos avanzar si no entendemos que el uso de la fuerza por parte de los miembros de las instituciones de seguridad pública se debe limitar a una aplicación legítima. Debe ser el último recurso a aplicarse.

Toda la fuerza del Estado contra los narcotraficantes. Toda la fuerza del Estado contra los secuestradores. Toda la fuerza del Estado a quienes han desequilibrado a este país y a quienes hacen que vivamos con temor. Pero también toda la fuerza del Estado en las garantías y en el respeto a los derechos humanos. Nunca, nunca al abuso policial.

El PRD también incorporó y garantizó que pudieran generarse condiciones de equilibrio en la información que se entregue en este sistema. Este dictamen demuestra una vez más que formamos parte de un partido que tiene propuesta, que tiene plena disposición al diálogo, que tiene plena disposición para llegar a los consensos que beneficien al país.

También hemos de señalar que esta ley no es la panacea para resolver el problema de la seguridad pública. Que concebimos a la seguridad pública como un todo y que debemos de entrarle a otros ordenamientos jurídicos para su revisión.

Hay que reformar Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley de Extinción de Dominio, responsabilidad generada por el crimen organizado y muchos otros temas. Pero sin duda, esta ley es fundamental en la estructura que se requiere para combatir al crimen organizado. Es cuanto, diputado presidente.

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** Gracias, diputado Andrés Lozano. Es turno del diputado Edgar Armando Olvera Higuera, a nombre del Partido Acción Nacional.

**El diputado Edgar Armando Olvera Higuera:** Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Señoras y señores. Amigos todos. Los diputados de Acción Nacional, en cumplimiento de nuestras obligaciones y con el compromiso moral con los ciudadanos consumamos un esfuerzo compartido para que México sea un país fuerte, seguro y ordenado.



Los diputados de Acción Nacional desde el primer día de esta legislatura teníamos claras las acciones a realizar en materia de seguridad pública. Por eso desde el inicio hemos acompañado al presidente Felipe Calderón en esta gran guerra contra el narcotráfico.

Hoy más que nunca la sociedad reclama una coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Por eso, con esta ley aprobada en lo general por unanimidad en la Comisión de Seguridad Pública, buscamos por primera vez contar con una coordinación más amplia de los programas, planes y operativos por parte de los cuerpos de seguridad pública. A través de los informes homologados y de los criterios de capacitación y de reclutamiento de policías podremos saber quién ingresa a nuestros cuerpos de seguridad pública.

Buscamos tener la certeza y la seguridad de que quienes brindan un servicio para los ciudadanos sean los elementos más capacitados para combatir a la delincuencia. A través de esta ley buscamos certeza en la certificación de los elementos que brindan la seguridad a los ciudadanos, sometiéndolos a rigurosos y estrictos exámenes y evaluaciones de confianza, para que los elementos cumplan, a la patria a y nosotros.

Así, a los policías que con su trabajo y esfuerzo nos cumplan a nosotros, los ciudadanos, busquemos que sean premiados; y aquellos que no lo hagan, busquemos que sean castigados con el peso y el rigor de la ley.

Quiero mencionar a ustedes, compañeros, a nombre de todos los elementos de los cuerpos de seguridad pública que han dado su vida y que han dejado huérfanos en las familias, por defender con su vida la integridad de nuestras familias, dedicamos con esta ley el esfuerzo realizado por nuestra patria.

Con esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dotaremos de armas jurídicas a nuestros elementos de seguridad pública. Los equiparemos con certeza jurídica para que en el ejercicio de su deber puedan contar con el respaldo del Estado mexicano, y a la vez, los ciudadanos estaremos plenamente informados de los límites del uso de la fuerza pública.

No buscamos un simple reparto de funciones. Buscamos establecer con claridad los parámetros generales para que todos los cuerpos de seguridad pública se constituyan, entre todos, en una fuerza sólida.

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos permitirá tener un solo escudo contra la delincuencia organizada. Sabemos que esta ley no es la solución a un problema de raíz; sin embargo, es herramienta y arma para que los gobiernos estatales y municipales pongan en orden a su cuerpo de seguridad pública y presten un servicio eficaz para todos los ciudadanos.

En suma, el nuevo modelo de seguridad pública que contempla la iniciativa que hoy se somete a consideración de este honorable Congreso, pretende satisfacer las necesidades de la sociedad y de las siguientes generaciones.

Con esta nueva ley podemos atender a los ciudadanos con los nuevos planteamientos en la edificación de la legalidad y prevención del delito. Queremos que las familias vivan mejor, que recuperemos los espacios públicos, que nuestros niños crezcan en un ambiente más sano y justo, con todas las bondades que nuestro país ofrece.

Desde esta tribuna felicito a todas aquellas personas que sin reserva contribuyeron a la construcción de esta ley, porque como ustedes, yo también quiero ver un México más seguro, donde vivamos mejor.

México es más fuerte sin los delincuentes. Trabajando juntos lograremos un México más seguro para nuestros hijos. Muchas gracias.

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** Gracias, diputado Édgar Olvera. Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, las siguientes diputadas y los siguientes diputados:

En contra, el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido de Convergencia; y en pro los diputados: Patricia Villanueva Abraján, del Partido Revolucionario Institucional; el diputado David Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática; la diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Partido Acción Nacional, y el diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Partido de la Revolución Democrática.

Por lo tanto, se concede el uso de la palabra, para argumentar su posición, en contra, al diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia, hasta por cinco minutos.

**El diputado José Manuel del Río Virgen:** Compañeras, compañeros diputados, con el permiso de la presidencia, queremos retomar la última expresión de quien me antecedió en el uso de la palabra.

Nosotros también queremos ver un México más seguro, pero el problema de la inseguridad lo generó las crisis de las policías de este país, lo generó la SIEDO y también lo generaron los ministerios públicos federales.

Tan sólo un dato, siete de cada diez mexicanos no confían en el Ministerio Público ni tampoco confían en ninguna de las policías federales. Su corrupción, su impunidad, su ineficiencia, la inseguridad e injusticia que prevalecen en el país se les deben a estos policías y a estos ministerios públicos y hoy queremos darles una ley que les permita seguir en la impunidad total.

Así es de que, compañeras y compañeros, en México se cometen, para que sepan, 11 millones 810 mil 377 delitos, de los cuales solamente un millón 403 mil 425 se denuncian en el Ministerio Público.

¿Por qué los demás no se denuncian? Porque no confían en el Ministerio Público corrupto.

Cerca de un millón y medio de delitos denunciados en el Ministerio Público Federal, 248 mil 613 delitos solamente van ante un juez. De esos 248 mil delitos consignados, solamente obtienen sentencia condenatoria, de 190 mil 059, es decir, apenas un 76 por ciento.

Todos estos datos indican que un 98 por ciento de los delitos cometidos quedan impunes en este país.

México, sin lugar a dudas, es uno de los campeones mundiales en impunidad y criminalidad per cápita, 7 millones 987 mil 624 delitos cometidos?

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** Diputado Del Río, permítame interrumpirlo un momento. El diputado Cárdenas Fonseca pidió el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado?

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Si es tan amable, diputado presidente, preguntarle al orador si me permite hacerle una pregunta.

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** ¿Acepta, señor diputado?

**El diputado José Manuel del Río Virgen:** Con todo gusto, señor presidente.

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** Acepta el diputado. Adelante, formule su pregunta, por favor, diputado.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Diputado orador, gracias por aceptar el que le haga una pregunta. Aquí usted plantea este tema como de gran importancia y se han discutido las muertes que ha causado.

El PRI plantea que fueron ellos quienes pidieron que el presidente de la república presidiera este Consejo Nacional, como muchos otros que existen, a los cuales no ha pedido que el presidente presida.

Ahora entonces ¿para usted es más importante uno que otro? Toda vez que en materia de salud, el Consejo Nacional correspondiente no lo preside el presidente y nada más por cáncer cérvicouterino, por cáncer de mama, por diabetes y por otro tipo de males mueren más mexicanos que por la propia inseguridad pública. Entonces esos miles de mexicanos, más decenas de miles más ¿no son importantes? ¿Debiera, a su criterio, presidir también el presidente de la república, si sostiene el criterio del PRI, presidir los otros consejos?

**El diputado José Manuel del Río Virgen:** Señor presidente, le voy a responder al señor diputado Manuel Cárdenas Fonseca, con mucho gusto, en estos términos.

Es, sin lugar a dudas, un grave error que el señor presidente de la república vaya a presidir este Consejo Nacional de Seguridad. Es una aberración, incluso, de carácter legal y constitucional. Además se equivocan quienes creen que así vamos a combatir, exactamente, todos los crímenes de este país.

Le voy a dar un dato nada más para abonar la pregunta que usted me hace. De los robos que hay en este país y sus distintas topologías, 90 por ciento de los que asaltan son por un valor de 8 mil pesos. ¿Qué tiene que ver ahí el señor presidente en el Consejo Nacional de Seguridad, hablando de estos temas? Es una aberración.

¿No tiene todas las facultades legales y constitucionales el presidente para ordenar y mandar? ¿Que no él, como invitado del Consejo, podía exigirle a quien presidiera el Consejo que las cosas se hicieran como México quiere que se resuelvan?

Fíjese, diputado Cárdenas, que las estadísticas indican que la mayoría abrumadora de las víctimas de los delitos más repetitivos en el país son los habitantes más pobres y desamparados. ¿Que no convendría mejor crear un sistema de desarrollo social, que ese sí debería presidir el presidente, para evitar que haya inseguridad en este país?

Por lo que toca a los delitos vinculados con el narcotráfico, éstos se han multiplicado en 700 por ciento durante los últimos 10 años. ¿Qué los ex presidentes no tenían la facultad, la potestad, la fuerza constitucional para exigir a las policías, éstas corruptas, que resolvieran este tipo de problemas?

La inmensa mayoría de los jóvenes que caen en la drogadicción es pobre y sin trabajo permanente. ¿Que no podríamos crear un sistema nacional de empleo fuerte, que resolviera el problema, que tendría que presidir el señor presidente de la república?

Entre el 1o. de enero de 2005 y el 10 de abril de 2007 han ocurrido en territorio nacional cerca de 5 mil crímenes. Todos vinculados con el narcotráfico.

Voy a terminar, presidente, de darle respuesta al diputado Cárdenas con este dato. Los secuestros, en todas sus tipologías, han llegado a crecer 78 por ciento en un solo año. Van migrando hacia la población más desprotegida y común, a través del secuestro exprés y la extorsión virtual, dado que los estratos más ricos y poderosos, mediante su fuerza política, económica y mediática, obligaron a las autoridades a defenderlos y a combatir con mayor efectividad a sus secuestradores.

Creo, incluso, que no solamente es un exceso que el presidente de la república presida este Consejo. Creo que además lo va a cuestionar más en el mandato constitucional que tiene.

Continúo con mi participación, señor presidente.

Convergencia va a votar en contra porque esta ley, por cierto que es de 152 artículos y 12 transitorios. Además creemos que vulnera el federalismo, concentra todo el poder en el Ejecutivo. Lo nuevo de esta ley es que concentra problemas. La nueva ley no prevé un sistema federalista de atribuciones compartidas donde todos asuman responsabilidades.

Insisto, la problemática de la inseguridad la generó la crisis de los policías federales. El problema real es que la SIEDO contamina a las policías locales. Mientras no se cambien en las policías, y en los ministerios públicos, mientras no se cambien esos mandos corruptos, mientras no se les someta a un juicio y luego a la cárcel, la fragmentación de mandos va a seguir generando división orgánica de los cuerpos policiacos.

La lógica rivalidad entre las distintas agencias va a continuar, y no van a compartir la información ni la inteligencia para el combate al crimen. Va a continuar la desorganización de las capacidades del Estado para hacer frente al fenómeno delictivo y, por ello, se va a fortalecer el flagelo criminal con esta ley que quieren votar, una ley que ¿como dijo un diputado del Partido Revolucionario Institucional?: por favor léanla. Se las acaban de dar, cómo la van a leer, pues ni que tuvieran cursos de lectura rápida los diputados y las diputadas.

Por tal motivo, vamos a votar en contra porque no estamos de acuerdo en cómo se está planteando esta ley que vulnera el federalismo, no resuelve el problema, y el problema de fondo es atacar a los ministerios

públicos federales y atacar a las policías corruptas de la SIEDO; procesarlos, meterlos a la cárcel, crear nuevos sistemas de control, de evaluación y de confianza, y poder resolver el problema de fondo. No echarle la culpa y la pelota a los presidentes municipales y a los gobernadores de los estados.

Creo que los gobernadores de los estados, después de que ustedes voten esta ley, van a poner el grito en el cielo porque el poder lo va a tener absolutamente la federación, y se trata de responsabilidades compartidas; no de un poder central en una sola persona. Muchísimas gracias.

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** Gracias, diputado Del Río Virgen. Ahora para sustentar la posición en pro del dictamen se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**La diputada Patricia Villanueva Abraján:** Compañeras diputadas y compañeros diputados, en este proyecto de decreto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vengo a favor, para que lo votemos en lo general, porque esta Ley General que mandata el artículo 21 constitucional, en su artículo transitorio, para que reglamentáramos en materia de seguridad pública, permite una distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Pero yo creo que hay algo más importante. Creo que es significativo que regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Yo me he cuestionado en un sinnúmero de ocasiones durante las semanas, los meses y los últimos días en que estuvimos revisando esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿qué es realmente lo que requiere la sociedad?

¿Por qué estamos abrogando la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, y nos estamos dando este ordenamiento legal? ¿En qué condiciones nos los estamos dando? ¿En una situación de crisis que vive el país en materia de seguridad pública? ¿En situaciones verdaderamente graves de desconfianza? ¿Pulsando y viviendo, hasta en los propios integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, suspicacias en cuanto a las disposiciones, en cuanto a los términos, en cuanto al *corpus* de alguna disposición, que muchas veces no era trascendente, pero que generaba un gran revuelo si se cambiaba o si se sustituía de palabra o de sinónimo?

Yo creo que es precisamente esa desconfianza y esa suspicacia que nosotros mismos tenemos. Esa misma afectación que tienen nuestros conciudadanos, la sociedad mexicana, por vivir diariamente la situación de inseguridad que tiene nuestro país.

Pero yo creo que estamos obligados, totalmente obligados, a contribuir, todos, en lo que nos corresponde, para podernos dar un ordenamiento legal que nos permita indiscutiblemente salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar libertades, el orden y la paz pública.

Yo creo que indiscutiblemente habrá muchas insatisfacciones para muchas compañeras diputadas y compañeros diputados, sobre este ordenamiento legal, de esa Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública?

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Gracias.

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** Diputada Villanueva, ¿me permite un momento, por favor?. El diputado Cárdenas Fonseca está pidiendo la palabra. Quisiera saber con qué objeto, señor diputado. Abran su micrófono.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Tengo una duda respecto de una situación que plantea el dictamen. Entonces me gustaría saber si la diputada ponente, en uso de la palabra, me aceptaría una pregunta.

**La diputada Patricia Villanueva Abraján:** Sí se la acepto, diputado, pero cuando me permita que termine yo con mi intervención, con mucho gusto tenemos el diálogo.

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** Muy bien. Continúe entonces con su intervención.

**La diputada Patricia Villanueva Abraján:** Gracias, presidente. Y es por ello que nos dimos a la tarea no solamente de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública estuviera integrado por los gobernadores y presidido por el Ejecutivo Federal, sino también la contribución de los Centros, tanto de Información, como de Prevención y Colaboración Ciudadana, así como también el de Evaluación y Certificación de Control de Confianza, de las corporaciones policíacas.

Nunca vamos a avanzar si no existen criterios homogéneos para las corporaciones policíacas estatales, municipales y la federal. Nunca vamos a avanzar, si no nos damos los mismos instrumentos de técnicas y tácticas policíacas que nos permitan, indiscutiblemente, estar dando el embate por una causa común.

Nunca vamos a avanzar si la distribución de los recursos no es equitativa y se fortalecen a las entidades federativas y a los municipios. Nunca vamos a avanzar si no contribuyen los tres órdenes de gobierno y ponen toda su capacidad, talento, eficiencia y eficacia en las acciones en materia de seguridad pública.

Jamás la sociedad estará satisfecha si no ven resultados a corto y mediano plazo. Podremos tener muchos ordenamientos, podemos abrogar, como hoy pretendemos, la ley federal que establecía las bases de coordinación en materia de seguridad pública, que data de 1995. Pero ésta y muchas más que podrían estar enriquecidas con los criterios y las aportaciones jurídicas de mujeres y hombres talentosos, legisladores de esta LX Legislatura; nunca podremos tener lo suficiente. Si todos ponemos nuestro mejor esfuerzo y contribuimos, verdaderamente, para hacer acciones concretas en materia de seguridad pública.

Estamos infiltrados en las corporaciones; tenemos que certificar a nuestros policías, hay que darnos exámenes de confianza, hay que evaluarnos permanentemente. No es posible que queramos contribuir en este rubro y no hagamos lo propio cada una de las entidades federativas, los municipios y la federación. Es cuanto, señor presidente. Adelante, señor diputado. Le acepto la intervención.

**El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña:** Adelante, por favor, con la pregunta del diputado Cárdenas Fonseca.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Compañera diputada, muchas gracias por aceptar el que le pueda hacer una pregunta.

Para un servidor es muy grave que estemos desatendiendo controversias que emitió la Corte; observaciones que nos hacen la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los propios relatores de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, en el que hacen acusaciones muy graves y en ningún momento el Estado mexicano desmintió, como aquí el procurador general de la República, en su momento, no pudo argumentar el por qué las Fuerzas Armadas están en trabajos que no les son competentes.

Por qué y bajo qué argumento jurídico va a ir el PRI en contra de todo lo que se plantea respecto de instituciones como la ONU o Amnistía Internacional o de la propia Suprema Corte de Justicia, e incluye, en la constitución del consejo a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina.

Éste no es un consejo de seguridad nacional. En donde estaría totalmente de acuerdo un servidor. Esto es un consejo de seguridad pública. Si pudiera usted, ser tan amable, de decirme ¿cuál es el sentido primigenio, la tesis, la norma, la doctrina que ustedes están sustentando para aceptar que las Fuerzas Armadas estén siendo validadas en una ley federal, para que participen en algo que la propia Constitución no prevé; antes, por el contrario, las excluye de la materia. Por su respuesta, muchas gracias.

**La diputada Patricia Villanueva Abraján:** Señor diputado. Primeramente, casi, casi nos imputa usted, a nosotros, los del Partido Revolucionario Institucional, que incluimos a las Fuerzas Armadas y a la Marina.

Yo le quiero comentar a usted algo. Mire, usted es integrante de la comisión, usted hizo dos propuestas a través de la voz de mi compañero diputado Gerardo Vargas Landeros, de la cual una fue desechada y otra fue incluida. Si le interesaba este tema y los argumentos que ahorita usted me está virtiendo, hubiera acudido ayer, diputado, a la sesión ordinaria que tuvimos de dictamen, y hubiera usted hecho estas apreciaciones, y estoy segura que en consenso, las compañeras y compañeros diputados que conformamos esta comisión, hubiéramos transitado en algunas cosas con usted.

Yo le quiero decir que si algo me satisface es que transitamos en esta Comisión de Seguridad Pública, con todo respeto, aceptamos todos los comentarios y tratamos de transitar con estas divergencias que tenemos muchas veces, para construir cosas que verdaderamente nos permitan avanzar en la materia, beneficiar a nuestro país. Pero, sobre todo, a quien verdaderamente tenemos que dar cuenta es al electorado, sobre todo los diputados que somos de mayoría y que tuvimos el sufragio directo, y que confiaron en nosotros nuestros electores. Gracias, señor presidente. Es cuanto.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** De nada, compañera diputada doña Patricia Villanueva Abraján. Tiene el uso de la palabra don Manuel Cárdenas Fonseca. ¿Con qué objeto, diputado?

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Para que me registre, en el momento procesal correspondiente, para hechos, señor diputado presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Muy bien, diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD.

**El diputado David Mendoza Arellano:** Con su permiso, señor presidente. Muchas gracias. Quizás lo que habría que explicar, de manera sencilla y puntual, es si el país necesita o no un Sistema Nacional de Seguridad. Es obvio, es evidente, es lógico que México requiere de un sistema nacional y el espacio donde se construyó esta propuesta fue el espacio de la Comisión de Seguridad Pública.

Yo celebro que aquí se fijen posiciones a favor y en contra, porque eso va a permitir que la sociedad pueda identificar, con claridad, la diferencia entre los conceptos de seguridad que hay entre las fuerzas políticas del país, porque le permitirá tomar decisiones cuando lo tengan que hacer en la urna.

Para nosotros el problema fundamental es cómo logramos que se recupere la confianza, la credibilidad y el respeto en los órganos de gobierno que son responsables de dar seguridad pública a todos los mexicanos.

En primer lugar, pensamos ¿y por eso acudimos a esta discusión en la comisión?, que un aspecto fundamental que requieren todos estos órganos es coordinarse. Yo quiero decirles que en el órgano de coordinación, en el Consejo Nacional, es un nuevo paradigma, porque el hecho de que lo encabece el presidente de la república no le resta importancia a la presencia de los gobernadores de todo el país, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero además también a la inclusión del secretario de Defensa y de Marina, sin menoscabo ¿hay que decirlo, porque aquí ya se ha planteado? de que a propuesta nuestra está integrado como invitado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Para qué queremos ese consejo. Queremos ese consejo para que sea el órgano en donde todas estas formas de gobierno, estos tres órdenes de gobierno ¿hay que decirlo también, están integrados los municipios? puedan generar políticas públicas conjuntas que permitan enfrentar, entre todos, siendo corresponsable en esa responsabilidad, a la delincuencia organizada.

El otro gran reto era cómo hacerlo, garantizando las libertades y derechos constitucionales, sin menoscabo de lo que ya dijimos, de garantizar la seguridad, cómo lograr que este esquema se diera.

Aquí lo importante fue quitar de la propuesta del titular del Ejecutivo, todos los aspectos que tenían que ver con represión, con visión de estado policiaco, e integrar una nueva forma que permita la coordinación, pero además que permita la estructuración de tres grandes centros que se dediquen ¿como aquí ya se ha dicho y no voy a abundar en el tema?, por un lado a generar la base de datos de información que permita los elementos de inteligencia para combatir a la delincuencia, por otro lado cómo lograr un esquema que nos permita abatir la corrupción estructural que hay en los cuerpos de policía.

Para ese efecto se modificó la propuesta del Ejecutivo y se logró construir un centro que logre concentrar tres aspectos importantes: el control de confianza, la certificación y la acreditación de las academias, en donde se supone que se deberían de estar preparando, y lograr la profesionalización de la policía.

Al lograr esta integración lo que obtuvimos como resultado es que nunca más una institución se vuelva a certificar a sí misma. Ése era uno de los grandes temas y por eso consideramos que lograr este centro, independiente de a quién va a certificar, nos parece que es esencial y fundamental en esta parte.

Y, desde luego, no debemos olvidar que se ha construido un Centro de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana. Es decir, hemos buscado por la parte social garantizar un espacio en donde pueda estar representada la sociedad civil y donde además también puedan generarse, desde la sociedad civil, visiones y propuestas para enfrentar a la delincuencia.

No hay que olvidar también que en el dictamen se crea un Consejo Consultivo para este órgano de Certificación. Con ello también abrimos la posibilidad de que la sociedad pueda evaluar.

Finalmente quiero referirme a la parte de sanciones. ¿Cómo lograr que los órganos de gobierno se integraran debidamente y cumplieran con el mandato de la Constitución? Lean la parte de sanciones. Hay sanciones a las instituciones, pero también hay sanciones a los individuos, es decir a los servidores públicos que por razones de corrupción pudieran infiltrar esta situación de base de datos, de información, y hay penalidad.

Por eso nos parece importante votar a favor esta ley, que desde luego es perfectible; que desde luego debería continuarse avanzando en esta lógica para avanzar en las leyes que faltan.

Por ello reitero, hacemos un llamado para que votemos a favor. Ojalá que la votación sea unánime y pongamos por encima de nuestras posiciones políticas o ideológicas o intereses de partido, algo que la sociedad nos está demandando, que es otorgarles instrumentos a los titulares del Ejecutivo, en los tres órdenes de gobierno, que les permita combatir a la delincuencia y generar coordinación entre todos estos órganos encargados de combatir a la delincuencia. Muchas gracias por su voto a favor.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Gracias, diputado. Nos ha pedido la compañera diputada María de los Ángeles Jiménez ¿quien previamente se había registrado? hacer uso de la palabra desde su curul, a lo cual no tenemos ninguna objeción. Adelante, diputada.

**La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo:** Gracias, presidente. Declino mi participación en vista de que las fracciones representadas en esta Cámara han emitido su conformidad para sumarse a esta ley.

Pero quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a mis compañeros integrantes de la comisión; a mis amigos del PAN, del PRI, del Verde, de Convergencia, de Nueva Alianza y del PRD, porque hicimos un trabajo sumando nuestros esfuerzos para que esto saliera adelante, dejando a un lado nuestras vanidades y nuestros orgullos para que realmente esta ley fuera en beneficio de México.

Quisiera decirles también, a todas y a todos, que aún tenemos cosas pendientes. Tenemos cosas en las dos Comisiones, de Seguridad y de Justicia; por eso los invito a que este compromiso que hemos tenido con la nación, lo sigamos refrendando aprobando estas leyes antes de terminar este periodo. Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias a todos.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Muchas gracias a usted, compañera diputada María de los Ángeles Jiménez. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Partido de la Revolución Democrática.

**El diputado Francisco Javier Santos Arreola:** Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros, realmente venir a dar cuentas de un trabajo parlamentario tan serio, tan profesional y que tanto beneficia a nuestro país, realmente es un orgullo.

El día de ayer, cuando se discutía el dictamen en lo general, ya se había votado por unanimidad, surgió una diferencia que tenía el foco de alarma de que pudiera hacer que esta reforma no pudiese salir en el consenso que se tenía trabajado durante mucho tiempo.

Celebro la sensibilidad política y la atinada corrección de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, que corrigieron esa parte, esa reserva que teníamos al artículo 19, fracción I, que cambiaba de gran forma el sentido de lo que es el manejo de la información de este sistema. ¿En qué la beneficia al ciudadano? ¿Qué es lo que gana México con esa reforma?

Quiero referirme exclusivamente a dos temas que son sensibles y que sí van al fondo del cambio del problema de seguridad pública. Los que tuvimos la suerte de ser secretarios de seguridad pública sabemos de las limitaciones y de los problemas que se tienen desde la parte de la administración pública, para poder tener acceso a la información de las personas y en este caso saber si alguien es o no un delincuente.

La parte que va a llevar el sistema de información, hoy llamado Plataforma México, es una gran base de datos, una base de datos que va a tener toda la información de las dependencias federales: pasaportes, la CURP, la credencial de elector, toda la información de los estados, de las penitenciarías, de las procuradurías. Es una gran base de datos, pero además es base de datos bidireccional. Es decir, se puede nutrir desde los municipios o los estados y no nada más de la federación hacia los municipios y los estados. Esto va a permitir que esta base de datos esté continuamente actualizándose, todos los días se esté actualizando y ello va a permitir que las policías municipales y estatales, que son el 90 por ciento de las policías del país, tengan acceso cuando detengan a una persona, por cualquier falta menor, van a poder verificar, en primera, la identidad de la persona y en segunda, si esa persona tiene o no algún delito que se le persiga en otra entidad u otro municipio del país.

Esto va a permitir que la impunidad se disminuya de manera sensible. ¿Cuántas veces no ha estado en la cárcel un tipo por pelearse en la calle y es un homicida que está prófugo en algún estado del país?

La impunidad es el principal problema de la seguridad pública del país. Esto da verdaderamente nuevos elementos que se ponen al servicio del Estado y que benefician al ciudadano. Por ello el resguardo, que era la fracción I del artículo 19, era importantísimo que no estuviera a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Por eso quitar esa parte cambiaba por completo esto.

Qué bueno que se corrigió, porque ahora da la certeza de que la información que den las entidades, que dé la propia Federación y que den las demás autoridades, van a estar bajo resguardo de este sistema y que va a tener con ello la seguridad de que esta información la accese quien tiene derecho a accederla y obviamente, que este resguardo permita que esto se corrija.

Por otra parte, se crea un sistema de información de detenciones, esto es algo muy importante. ¿Cuántos ciudadanos no han tenido la duda de si un familiar está detenido o no porque se lo llevaron y empiezan a buscar si esa detención es o no legal y dónde está su familiar? Creamos un sistema donde es obligación de la autoridad dar de alta el nombre de la persona que fue detenida y el momento donde fue detenida y puesta de disposición?

**La diputada Aída Marina Arvizu Rivas** (desde la curul): Señor presidente, pido la palabra.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** ¿Me permite diputado? Diputada Marina Arvizu ¿con qué objeto?

**La diputada Aída Marina Arvizu Rivas** (desde la curul): Que si le pregunta por favor al diputado si me acepta una pregunta.

**El diputado Francisco Javier Santos Arreola:** Con todo gusto, diputado presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Diputado, concede usted la pregunta. Adelante diputada.

**La diputada Aída Marina Arvizu Rivas** (desde la curul) En una preocupación genuina realmente, mi pregunta va en el sentido de que no encuentro en ninguna parte de la ley, a lo mejor está en otro lado y quizá tú me podrías explicar o cualquiera de los integrantes de la comisión, no encuentro a la Secretaría de Hacienda en ninguna de estas definiciones que hacen de consejos y organismos que están en esta ley, por una razón importante me parece ¿cómo se vincula la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema de Aduanas de este país, que son dos cosas fundamentales para combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas ligeras en la frontera norte y en la sur?

Me gustaría que nos ampliara un poco la información en este sentido. Gracias.



**El diputado Francisco Javier Santos Arreola:** Indudablemente esta parte está dentro de la representación que tiene el propio procurador, dentro de sus funciones está combatir, precisamente, el lavado de dinero, y tiene una entidad encargada de ello dentro de la propia Procuraduría.

El procurador forma parte del sistema. Inclusive se crea una conferencia de procuradores donde toda esta parte financiera, esta parte que tiene que ver con este ¿sin lugar a dudas? problema grave que tenemos con el lavado de dinero, va a tener que ser esa área la que cree un mecanismo y se tendrá que hacer dentro de esa parte.

Esa parte no le corresponde a esta parte del sistema ¿lo que estamos presentando el día de hoy?, pero jurídicamente se forman los mecanismos a través de los cuales se van a tener que ir haciendo éstos.

Vamos a tener que crear, inclusive, las leyes que van a ser los funcionamientos de estos nuevos órganos que se van a crear, por ejemplo, el de participación ciudadana se le tiene que crear una ley para que funcione, igualmente va a ser para otras áreas.

Esto es el nacimiento del sistema, apenas es el nacimiento. Ojalá y esto se hubiera hecho hace 30 años, pero qué bueno que el día de hoy empezamos, es un gran avance realmente.

Concluiría mi intervención comentando?

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Permítame, diputado. Está usted muy solicitado hoy. Diputado Manuel Cárdenas Fonseca, ¿con qué objeto?

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Si le puede consultar al orador si me acepta una pregunta, si es tan amable.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** ¿Concede usted una pregunta, diputado?

**El diputado Francisco Javier Santos Arreola:** Con todo gusto, diputado presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Adelante, diputado. Proceda a plantear su pregunta.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Gracias, diputado presidente. La pregunta que hizo la compañera Arvizu no es menor. Aquí tuvimos en comparecencia, bajo protesta de decir verdad, al procurador General de la República, que por cierto no ha contestado, en esos términos, lo que se acordó por este pleno y determinó la Presidencia de la Mesa Directiva, de que contestaría las preguntas que se le hicieran llegar por escrito.

Aquí se plantea que la Procuraduría General de la República ya tiene los mecanismos. Aquí lo que reconoció el procurador General de la República es que los mecanismos están mal y no son suficientes, tan así que acusó que por lavado de dinero había aproximadamente 10 mil millones de dólares en el país, cifra que es pequeña. Yo creo que la triplica o la cuadruplica, ojalá y un día nos dijera cómo lo determina el procurador.

Pero lo que usted está planteando, compañero diputado, no es correcto. La entidad que tiene la responsabilidad de ver los movimientos que se suscitan en el circuito financiero bancario, sea de intermediación, inclusive cajas de ahorro o los sistemas de crédito que tienen casas comerciales como las que vemos, departamentales o de ropa, es la Secretaría de Hacienda.

Y cuando la Secretaría de Hacienda reporta los movimientos que considera que son riesgosos comunica a la Procuraduría para que investigue. Déjeme comentarle que, por esa disfunción que hay entre estas 2 entidades, sólo 714, de 37 mil observaciones que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, fueron atendidas por la PGR.

Entonces, si ustedes tienen ese criterio y no tenemos claro cuál es la competencia de la Secretaría de Hacienda en la materia, que es el lavado de dinero, el blanqueo de dinero, y no la quieren tener en este Consejo, cuando sí están incluyendo otras entidades que la ley determina que se prohíba porque no tiene las facultades encomendadas.

¿Entonces, cree usted ?o su partido? que de esta manera, excluyendo a la entidad responsable del blanqueo de dinero, en este país, es como vamos a resolver uno de los puntos torales?

Que ustedes lo han señalado como el brazo más importante de la delincuencia organizada, que es la rentabilidad económica, ¿ustedes creen que de esa manera, excluyendo a la entidad directamente responsable, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, es como van a resolver el problema de la delincuencia organizada en una de sus variables?

**El diputado Francisco Javier Santos Arreola:** Gracias por la pregunta, amigo Cárdenas. Mire, debo decirle muy claramente que cuando hay una investigación, ya por parte de la autoridad, en este caso de la Procuraduría, en cuanto hay un delito de lavado de dinero, tiene que pedir la información a la autoridad competente, que en este caso sería la Secretaría de Hacienda, porque la investigación puede venir de las dos formas: puede venir de parte de la secretaría hacia la Procuraduría, o bien, la Procuraduría darle vista a la Secretaría de Hacienda.

El Consejo de Seguridad Pública es el facultado para convocar a cualquier funcionario, federal o no, para que participe dentro de éste., de tal forma que la ley no limita, no es limitativa. Si el consejo determina que tiene que ir el secretario de Hacienda o que se requiere información de la Secretaría de Hacienda, tiene la facultad para hacerlo. De tal forma que esto no es limitativo. Apreciarlo de esa manera yo lo veo bastante lamentable.

También quiero decirle a mi amigo, Manuel Cárdenas, que extrañé su participación el día de ayer. Ha sido un hombre muy activo en la Comisión de Seguridad Pública durante estos dos años y medio, y creo que sus aportaciones valiosas, en materia financiera y en otras más, seguramente hubieran ayudado a este dictamen, que seguramente es perfectible; pero, creo que criticar o verle los *prietitos* a algo en lo que no se participó, y que se hizo, además, con toda la intención, más bien parece que se busca desacreditar el trabajo parlamentario de los que sí tuvimos interés de estar ahí.

Concluiría mi intervención, diputado presidente, comentando que esta parte del sistema de información de detenciones va a permitir que la gente que tenga un familiar detenido tenga la certeza de saber adónde está ese familiar, y eso va a darles a los ciudadanos una mayor certeza jurídica del porqué de su detención. Esto también cambia de gran forma la percepción de la seguridad pública.

El organismo de certificación. El organismo de certificación le va a dar certeza a los ciudadanos de saber que los policías, que los hombres que portan un arma, que las autoridades ministeriales van a estar sujetos permanentemente a este escrutinio.

Se crea un documento para que los policías tengan una especie de cédula que van a poder ellos utilizar para ser policías en otro lugar, y que haya la certeza de que este policía no fue inhabilitado en otro lugar. Y es obligación de la autoridad mantenerlo al día; pero también es obligación de la autoridad el exigir ese documento.

El capítulo de "Sanciones" crea sanciones verdaderamente severas para los funcionarios públicos que no cumplan.

Esta es una ley que beneficia a México y por ello debemos de votarla a favor. Muchas gracias.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Cárdenas Fonseca, para rectificación de hechos.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:** Gracias, diputado presidente. Les aprecio mucho a mis compañeros que hayan accedido a las preguntas que les formulé.

Sin embargo, me extraña que digan que uno no quiso participar. Efectivamente, en la reunión de las nueve de la noche, un servidor ya no estuvo presente, porque un servidor no acepta un trato de proceso de discusión de argucias, de mentiras, de engaños y de falsedades.

Y decir, que también le agradezco al diputado del PRI, Vargas Landeros, que haya hecho propias algunas de las observaciones que un servidor planteó, porque como no éramos escuchados, y como en el 90 por ciento del dictamen ¿al menos así lo referí en mi primera participación y nadie en todas sus intervenciones lo desmintió? vino de fuera de esta Cámara, y tan les hice llegar las observaciones, ante el desconocimiento de las otras fracciones parlamentarias, acusando recibo de mi otra compañera del PRI que dice que no estuve, aquí están los acuses de recibido y está su oficina y están hechos desde un día antes, porque la reunión iba a ser a las cinco de la tarde del día previo y la cancelaron y luego la pasaron a las siete y luego no fluía la información y hubo desavenencias de pares y de un servidor con empleados de nosotros por la forma perniciosa, engañosa y tramposa con la que escondían un tema de la mayor importancia, que es el que estamos tratando.

Adicionalmente, aquí plantean que fue por unanimidad. Honesto sería decir "de los presentes", porque les ha dado por confundir al pueblo de México diciendo que las cosas son por unanimidad y eso no es cierto. Habría que agregarle "de los presentes".

Porque adicionalmente, el día de ayer no faltaría quien los estuvo esperando con dos bolas de estambre y unos ganchos para hacer las sábanas de sus hijos o de sus nietos, a ver a qué hora se les ocurría invitarnos a conocer lo que ya habían resuelto fuera del recinto de esta honorable Cámara de Diputados.

Además, déjenme plantearles lo siguiente respecto de la intencionalidad del comentario de diputados de mayoría o de representación proporcional. Somos iguales aquí y ambos son votados. Qué pena que acusen extrañeza y no sepan que ambas figuras, para efectos del proceso electoral, son votadas. Independientemente de que yo haya sido electo por el principio de mayoría relativa en la LVII Legislatura y ahora sea por el de representación proporcional. Pero eso también señala la corta vista que tenemos.

Inclusive los coordinadores parlamentarios, el presidente de la Mesa, de la Conferencia o de la Junta de Coordinación Política somos pares y una gran parte de los abusos que aquí se han cometido es porque no respetan eso, porque viven en la graciosa concesión.

Los diputados del PRI, la diputada propiamente, señaló que se le imputaba al PRI. No. Yo simplemente le pregunté: de quién es la idea de que estén incluidos los secretarios de Defensa y de Marina para después poder debatir con quien tenga uno que debatir. La respuesta no quedó, no atendió la respuesta, se fue y se salió por otro lado para no corresponder a una obligación ética y moral de decirnos quién está incluyendo a las fuerzas armadas del país, que lo veremos en las reservas en lo particular, cuando vean que inclusive lo único que tenemos destacable y rescatable, que son las fuerzas armadas, ya han sido sancionadas por organismos internacionales por abuso y hasta por asesinato de civiles inocentes.

Y por cuanto a lo que me contestaba mi querido compañero Santos, de que podrá invitarse cuantas veces sea a quien se quiera, déjenme decirles que eso aplica para la Comisión Nacional de Derechos Humanos también y que en este caso en particular es más importante el secretario de Hacienda, por la información del sistema financiero, que el propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

No podemos venir a esta tribuna a decir que alguien a quien le compete directamente la responsabilidad puede no estar y otro, a quien le compete como consecuencia del abuso de la ley si puede estar.

Yo aspiro y espero que cuando discutamos las reservas en lo particular creen conciencia. Racionalicen la información. Ventilemos las cosas con argumentos. Pero no apliquemos una interpretación para cuando nos conviene y la desechemos cuando no nos conviene.

Yo lo planteo, cuando posicioné a mi partido, al partido al que pertenezco, a favor. A pesar de todos estos abusos, a pesar de grandes fallas que tiene esto en su concepción original, por la mescolanza que hacen de quienes deben de formar parte del Consejo, iríamos a favor porque reconocemos que soluciona problemas ¿diputado Santos?, soluciona problemas como la mentira que existe ahorita cuando trabaja en conferencias el procurador general de la República con los homólogos de las entidades federativas, o el secretario de Seguridad Pública federal.

De ahí que pues, uno no me contesta y el otro no tiene razón jurídica para exponer lo que aquí planteó. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Muchas gracias señor diputado Manuel Cárdenas Fonseca. Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general? Perdón, envió la Comisión? Proceda la Secretaría a dar lectura a la fe de erratas remitida por la Comisión de Seguridad Pública.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Comisión de Seguridad Pública, Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de diciembre de 2008. Diputado César Horacio Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.

En mi carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Pública, me permito remitir a usted la siguiente fe de erratas al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que sea puesta a consideración de esta honorable asamblea, y en su caso, integrado en la minuta correspondiente.

Fe de erratas.

Transitorios

Primero a Noveno. ?

Dice:

Décimo. "Por única ocasión, el secretario ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública".

Debe decir:

Décimo. "Por única ocasión, el secretario ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública".

Sin más por el momento le hago llegar un cordial saludo. Atentamente, diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente. Es cuanto, diputado presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Incorpórese al dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Esta Presidencia informa a la asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos del proyecto de decreto.

Artículo 12, diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza. Artículo 12, fracción IX, diputado José Jesús Reyna García, del Partido Revolucionario Institucional. Artículo 14, fracción VII, diputado Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional. Artículo 19, fracción I, diputado Francisco Javier

Santos Arriola, del Partido de la Revolución Democrática. Artículo 19, fracción I, diputado Armando Barreiro Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. Artículo 150, diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza; y Artículo 150, diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza; y Artículo 152, diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está aún abierto el sistema electrónico de votación. Ciérrase el sistema electrónico de votación. Se emitieron 335 votos en pro, 39 en contra y 13 abstenciones, diputado presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 335 votos.

Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular, los siguientes artículos: El 12, por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca. El 12, fracción IX, por el diputado Jesús Reyna García. El 14, fracción VII, por el diputado Javier Guerrero García. El 19, fracción I, por el diputado Francisco Javier Santos Arreola. El 19, fracción I, diputado Armando Barreiro Pérez. El 150, por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca; y El 152, por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.

En tanto, tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:** Gracias, diputado presidente. La reserva que hago del artículo 12 es porque necesitamos que éste se modifique.

Ya hemos señalado aquí en el debate, en el intercambio de interpretaciones y de impresiones, que no es el presidente de la república el que debe presidir este consejo. Quienes estén empeñados en ello, realmente están obedeciendo a querer limpiar manchas de su vestuario.

Y queriendo escalar el tema, porque no hemos sido lo suficientemente inteligentes y capaces para que las autoridades que hoy tienen las obligaciones, nos las cumplan.

Es como el curioso caso que plantean de los exámenes de control de confianza. Y quién aquí ha dicho que los mismos debieron de sufrirlos los subprocuradores generales los subsecretarios, el de la PFP. No, todo se queda en la medianía o en el comentario que algunos hacen, en la mediocridad de los rangos menores.

Por eso, un servidor plantea que el Consejo Nacional esté integrado por el secretario de Gobernación, que es quien lo deberá presidir; por el secretario de Hacienda y Crédito Público, porque es el legalmente vinculado, responsable del blanqueo de dinero y de la información en el sistema financiero.

Quienes no estén de acuerdo con la inclusión del secretario de Hacienda están, por razón propia, a favor de que este país siga siendo un país lavador de dinero. Ahí están los dos pronunciamientos de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América, de marzo de 2007 y marzo de 2008, donde nos acusan de ser un país lavador de dinero.

Me extraña del PRD que no haya querido incluirlo, cuando ha atacado tanto la venta de City Bank, Banamex, al grupo de City Corp, cuando es el banco que más acusaciones tiene en el mundo de lavado de dinero, y en el que inclusive hay consanguinidad entre quien está en la institución financiera y quien procura la justicia.

De ahí que el secretario de Seguridad Pública, que sustituiría en sus ausencias a quien presidiría el consejo, que es el de Gobernación, los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal, un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. Y, ¿por qué dejo el representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, sin señalar inclusive que deba ser quien representa legalmente a la Cámara? Porque indebidamente están así planteados, como también está indebidamente planteado, en una figura que no reconoce la propia ley, como invitado permanente al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sí dejo, por el contrario, contra lo que aquí se observaba, que el consejo tendrá la facultad, podrá invitar por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que, a su juicio, puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública, y que dicha participación será con carácter honorífico.

Así que, compañeros, no tienen argumento para no acceder a la imperiosa necesidad de que se cambie la forma en la que plantean que esté constituido el consejo, de tal suerte, concluyo con la redacción que se solicita se prescrite y esté presente, y que ya fue entregada a la Presidencia.

Artículo 12: El Consejo Nacional estará integrado por:

Uno. El secretario de Gobernación, quien lo presidirá.

Dos. El secretario de Seguridad Pública.

Tres. El secretario de Hacienda y Crédito Público.

Cuatro. El procurador general de la República.

Cinco. Los gobernadores de los estados.

Seis. El jefe de gobierno del Distrito Federal.

Siete. Un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, y

Ocho. El secretario ejecutivo del sistema.

El presidente del consejo será suplido en sus ausencias por el secretario de Seguridad Pública. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente. El consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil, que a su juicio puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública.

Dicha participación será con carácter honorífico. Ese es el texto, compañeros integrantes de la asamblea.

Le solicito a la Presidencia que anexe esta intervención íntegra en el Diario de Debates y se anexe también el documento ¿del que doy cuenta ahorita? en el que se señalan todas las recriminaciones que ha sufrido México por organismos internacionales como Amnistía Internacional o la Organización de las Naciones Unidas, en las que nos señalan que las Fuerzas Armadas no pueden estar atendiendo competencias que no les corresponde. Muchas gracias.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Insértese en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 12 por el señor diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Manuel Cárdenas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Diputado presidente, mayoría por la negativa.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Se desecha y se reserva para su votación en los términos del dictamen. Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Jesús Reyna García, del Grupo Parlamentario del PRI, quien se ha reservado el artículo 12, fracción IX.

**El diputado José Jesús Reyna García:** Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, he reservado del artículo 12 la fracción IX, donde se establece que un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión debe formar parte e integrar el Consejo Nacional de Seguridad.

Seré breve porque esto, más que argumentos, lo que requiere de todas y de todos los diputados es un poco de reflexión. Este importante ordenamiento que ya se votó en lo general y que se está discutiendo en sus particularidades, tiene por objeto regular la integración y organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ni en la teoría ni en los antecedentes legales, el Poder Legislativo forma parte de la cadena que tiene que ver con los distintos elementos, con las distintas instituciones implicadas con el tema de seguridad pública.

En las propias atribuciones que tiene el Consejo Nacional de Seguridad Pública en este dictamen que ya hemos votado y aprobado en lo general, no existe ninguna atribución en la que los representantes de las Cámaras del Congreso de la Unión puedan participar o coadyuvar.

La responsabilidad de nosotros, como legisladores, es ésta, la que estamos haciendo aquí: proponiendo las leyes, discutiéndolas y aprobándolas; siendo sensibles a lo que la sociedad requiere.

Y este Congreso ha sido sensible, pues desde el año pasado ha estado inmerso aprobando diversas reformas penales que ayudan ¿sin duda? benefician el desempeño de las instituciones y favorecen a mejorar la seguridad pública del país.

Por eso, compañeras y compañeros diputados, mi propuesta es que se suprima esta fracción IX para que no participe un representante de cada Cámara en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Que sea responsabilidad, la seguridad pública, de quien lo es: del Poder Ejecutivo. Y esto no impide que en un momento dado, cuando así se crea conveniente, puedan representantes de las Cámaras acudir como invitados a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad. Muchas gracias.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Gracias, señor diputado José Jesús Reyna García. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas al artículo reservado, artículo 12, fracción IX, propuestas por el diputado José Jesús Reyna García.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado José Jesús Reyna García. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Se admite la modificación propuesta y se reserva para la votación en su momento. Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del PRI, quien se ha reservado el artículo 14, fracción VII. Perdón diputado, se admitió a discusión, perdón.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca ha solicitado el uso de la palabra en contra de la reserva hecha por el diputado José Jesús Reyna García.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:** Con el permiso de la Presidencia. Compañeros del pleno, esta modificación que se reserva el Partido Revolucionario Institucional da cuenta plena de cómo ésta es una ley a los intereses de uno que otro actor; que un servidor quisiera saber quién fue. Ojalá me lo puedan contestar.

Porque es algo que se acuerda entre PRI, PAN y no sé si PRD, por qué el coordinador de la bancada del PAN y el coordinador de la bancada del PRI pudieran darle tránsito a excluir al Congreso de la Unión de un tema tan importante como lo han hecho valer aquí, no necesariamente con los mejores argumentos. Al contrario,

distaba mucho de tener argumentos para desechar otras propuestas que sí están debidamente fundadas y motivadas.

Lo menos que pudieran hacer es que, cuando menos, los pusieran como invitados permanentes si quisieran ser congruentes con su hacer y su decir, como el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o por lo menos dejarlos y aclarar, como dicen, de otros temas y de otros organismos en los reglamentos correspondientes donde se aclarara que sí formarán parte y serán representados por quienes tengan la representación legal de cada una de las Cámaras.

Si ya lo habían venido manteniendo durante tanto tiempo en esos trabajos fuera de la Cámara, y que aquí la comisión sólo procesaba la información que recibía y la incluía en el texto, ¿por qué ahora, de último momento, les cayó la iluminación divina y de repente les entró el temor, el miedo, la falta de consideración a los civiles, y no asumen la responsabilidad que ya tenían expresa en el texto que habían propuesto?

Y que no hay ningún argumento para que sustraigan a los representantes legales de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores a que formen parte, a que sean responsables, a que sean corresponsables de las medidas que ahí se adopten, porque es una manera artera de darle la espalda, ahora sí, a quienes emiten el sufragio por los legisladores.

De mayoría relativa de representación proporcional, aquí somos pares eso queda claro, ¿qué no quieren mucho a sus electores? ¿Qué no señalan que es imperativo el combatir la inseguridad pública?

Y por qué ahora, de último momento, un hada, una varita mágica, una esfera de cristal, les dice: salgámonos nosotros y dejemos embarcados a los otros, aún cuando lo estamos planteando que ahí estén, sin razón legal alguna ni siquiera de competencia.

Un servidor está en contra de la propuesta de que se excluya al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, porque si se les excluye, todos los que voten a favor de la exclusión están mintiendo a sus electores, están siendo hipócritas, porque suben a esta tribuna y acusan que es el problema más grave para el país, pero se salen de la responsabilidad de asumir las obligaciones que les competirán de quedar como integrantes del Consejo.

No quiero recordar expresiones que se han generado en razón del daño familiar que han recibido algunos ciudadanos comunes y corrientes, producto de la inseguridad y la impunidad que vivimos.

Pero estoy seguro que ese señor y esos señores, al ver que cortesanamente están sustrayéndose de la responsabilidad que ya habían asumido en el texto propuesto, les están dando la espalda a los electores y les están dando la espalda a quienes votaron y piden de ustedes responsabilidad. Estoy seguro que la gran mayoría del pleno tiene presente la expresión del señor Nelson Vargas.

Es cuanto, diputado presidente. Y le pido que se someta a votación también, en términos del procedimiento legislativo, la propuesta de un servidor, de que se rechace la aceptación de esta enmienda al texto que trae el dictamen. Es cuanto.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Pregunte la Secretaría a la asamblea, consulte si está suficientemente discutida la modificación propuesta por el diputado José Jesús Reyna García.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de modificación presentada por el diputado Jesús Reyna García. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si reaceptan las modificaciones propuestas por el diputado José Jesús Reyna García, al artículo 12, fracción IX.



**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación presentada por el diputado José Jesús Reyna García, al artículo 12, fracción IX.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Se aceptan las modificaciones y se reservan para su votación nominal con la modificación aceptada por la asamblea.

Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Guerrero García, quien se ha reservado el artículo 14, fracción VII.

Esta Presidencia saluda al grupo de jóvenes que nos acompañan, de la Juventud Popular Revolucionaria del Estado de Sinaloa. Bienvenidos. Los ha invitado la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, a nombre de los diputados sinaloenses.

**El diputado Javier Guerrero García:** Con su permiso, señor presidente, voy a ser muy breve y solamente para proponer una modificación a la fracción VII del artículo 14, que señala las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y que en la iniciativa que estamos discutiendo establece determinar los criterios de la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, y vigilar que se observen en los términos de las disposiciones que resulten aplicables.

A nuestro juicio, esta disposición contraviene una serie de disposiciones y facultades establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que proponemos que se modifique de la siguiente manera.

Propuesta: vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados, y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. Es cuanto, señor presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Diputado Manuel Cárdenas Fonseca.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca** (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sólo para solicitarle al proponente si nos permitiría, al grupo parlamentario, hacer propia también su reserva, toda vez que ésta sí tiene sustento, argumento y racionalidad jurídica.

**El diputado Javier Guerrero García:** Sí, con gusto.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Lo acepta el proponente. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la reserva planteada por el señor diputado Javier Guerrero García.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutida la modificación propuesta por el diputado Javier Guerrero.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputado presidente, suficientemente discutida.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Consulte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse las modificaciones propuestas por el diputado Javier Guerrero García y que se ha sumado el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la modificación propuesta por el diputado Javier Guerrero García y que está apoyada por la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Aceptada la modificación propuesta por el diputado Javier Guerrero García y se reserva para su votación en los términos del dictamen, con la modificación aceptada por la asamblea.

Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Grupo Parlamentario del PRD, quien ha reservado el artículo 19, fracción I.

**El diputado Francisco Javier Santos Arreola** (desde la curul): Diputado presidente, toda vez que esta modificación ya se corrigió por la mañana y el dictamen ya tiene la apreciación que yo quería hacer, declino mi participación.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Muy bien y felicitamos a la unidad técnica por cómo son habilidosos y rápidos en dar la palabra, sin que la conceda la Presidencia. Gracias, diputado.

Se concede el uso de la palabra al diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD. Sonido a la curul del diputado Barreiro.

**El diputado Armando Barreiro Pérez** (desde la curul): De la misma manera, diputado presidente. Toda vez que se ha recompuesto lo que puso en riesgo y en peligro los trabajos que por tantos días estuvo realizando la Comisión de Seguridad Pública, pero sobre todo los acuerdos para lograr los máximos consensos posibles, retiramos nuestra participación. Muchas gracias.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Muchas gracias, señor diputado Armando Barreiro Pérez. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Cárdenas Fonseca, quien ha reservado el artículo 150.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:** Gracias, diputado presidente. Esta reserva la hago basándome en distintos comentarios y argumentos que se han hecho válidos aquí para otros efectos en razón de la claridad que debe tener el texto por cuanto a las competencias de cada uno de los tres órdenes de gobierno y los otros organismos e instituciones que quedan circunscritos al mandato que imponga esta ley. No tiene mayor alcance que, desde mi muy particular punto de vista, ser claro el texto, ser preciso y ser conciso.

El artículo que propone el dictamen dice: "Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos de bienes o valores, incluido su traslado, deberán obtener autorización previa de la secretaría cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas, o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la secretaría, los particulares autorizados, además, deberán cumplir la regulación local.

"Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones". Así dice el texto.

Lo que un servidor está planteando mejora sustancialmente, porque da claridad, da certidumbre y no genera lo que hoy por hoy se está dando en las entidades federativas en una falsa interpretación de la ley, que inclusive ha llegado a generar controversias jurídicas que han llegado a la Corte, controversias de carácter constitucional.

Lo que un servidor plantea es que diga de la siguiente forma: "Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ¿aquí se agrega? y de la Ley Federal de Seguridad Privada?".

Porque están siendo omisos en atender una ley que existe y que regula un servicio que está íntimamente ligado con la seguridad pública.

El desconocer la Ley Federal de Seguridad Privada que esta soberanía aprobó, y que se planteó a partir de la controversia constitucional que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos está haciendo omisos y exhibiendo el desconocimiento de las propias leyes que nosotros hemos aprobado.

Y entonces al agregarse la Ley Federal de Seguridad Privada continuaría el texto diciendo: "Los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de lugares y establecimientos, de personas, bienes o valores, incluido su traslado, deberán obtener autorización previa de?". Y es exactamente el texto que tiene el dictamen, pero separado por dos puntos y aparte y subdivididos en dos fracciones para que quede clara la delimitación de competencias, porque el otro texto, por cuestiones gramaticales, se presta a la confusión y ambigüedad que estamos combatiendo.

Y diría, fracción I. "La Secretaría de Seguridad Pública cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas, o

Fracción II. "De la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad?" Y continuaría: "En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados además deberán cumplir con la regulación local".

Aquí es donde se complementa el separar las competencias y en obligar a los prestadores de servicios de seguridad privada a que no se acojan mañosamente, corruptamente con autoridades locales para desconocer a una o a otra autoridad, según les convenga.

Y terminaría diciendo: "Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones. Las competencias en materia de registro, autorización, regulación, supervisión, sanciones y aplicación de medidas de seguridad se ejercen exclusivamente por cada orden de gobierno en su ámbito de competencia antes señalado, coordinándose en los intercambios de información.

Como pueden ustedes ver, el texto propuesto incluye a una ley que esta soberanía aprobó, la Ley Federal de Seguridad Privada, y el dictamen está siendo omiso de la misma.

Adicionalmente, usando el mismo texto que tiene separa las competencias, porque hoy en día ¿como aquí se comentó? ahí está la Gaceta para que lo lean ¿alguien dijo?. Existe una controversia constitucional que es la 132/2006 del pleno de la Corte...

**La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** Concluya, por favor, señor diputado.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:** ... en la que precisa claramente lo que este texto está aportando. Así pues, diputada presidenta, le solicito que a quienes comieron alpiste los conmine al respeto al orador.

Bueno, como la Presidencia está ausente?

**La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** La Presidencia no está ausente, diputado. Concluya su intervención, por favor.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:** Si es tan amable de atender mi petición, por favor. Bueno.

Como pueden ver ustedes, hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el texto que se propone, única y exclusivamente da certidumbre y evita la ambigüedad. Evidentemente quienes silban ni han leído la Gaceta, ni conocen la materia, porque sería muy irresponsable de su parte el no estar a favor de esta aclaración y estructura de texto.

Porque entonces, quiere decir que están a favor de que la delincuencia que se ha visto altísimamente representada en estas instituciones, y en estas empresas de seguridad privada, los más de 108 mil desertores de las Fuerzas Armadas, los desertores de las policías estatales y federales, muchos de ellos van a estas empresas de seguridad privada. Acabamos de tener una en la que uno inclusive le daba servicios a la PGR, y entonces permiten que se acojan corruptamente a un criterio u otro.

Es por eso, diputado presidente, que esta reserva atiende al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y busca evitar que siga el mecanismo de confabulación que tienen estas empresas de carácter privado, con funcionarios, sea del orden estatal o del orden federal. Es cuanto.

**La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** Gracias, diputado. Le vamos a pedir a los señores oradores que, por favor, se constriñan al tiempo que se les ha asignado para sus intervenciones.

Paralelamente, pedirles a los señores diputados presentes en esta sesión, por favor escuchen con respeto y tolerancia las intervenciones de quienes estén haciendo uso de la palabra.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca al artículo 150.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, al artículo 150. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

**La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** No se admite a discusión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado... Se corrige el procedimiento. Se desecha.

Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para abordar la reserva al artículo 152 del dictamen a discusión.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:** Gracias, diputada presidente. No puedo sustraerme al comentario de que si no había otro orador. Yo formo parte de la Comisión de Seguridad Pública. Es un tema que me corresponde directamente y, como ustedes han visto, he dado argumentos, no concesiones ni textos irresponsables, y cuando ha habido argumentos los hemos apoyado.

Qué pena que no se den a la tarea de leer lo que con mucha anticipación les hicimos de su conocimiento, pero que empecinados en que sólo transite el capricho y la irracionalidad, dejan en libertad a las empresas privadas que prestan el servicio de seguridad pública, para que sigan delinquiendo. Allá ustedes.

En el caso particular del 152, lo que está solicitando un servidor es que se adicione un párrafo. México ha sido en innumerables ocasiones acusado de ser un país de piratería. La cultura que ya existe en nuestro país, de usar artículos pirata, todos ustedes la conocen. Yo creo que muchos de ustedes han tenido al alcance un sinfín de objetos, de artículos que infringen el derecho de autor y la propiedad intelectual, y eso, compañeros, hace que se pierdan trabajos.

Ustedes, que acusan que están a favor del empleo, no se refleja en el texto que someten a consideración, que verdaderamente estén a favor del empleo y de los centros de trabajo. Lo harán si aceptan esta adición al artículo de que se trata, que no modifica en nada su primero y segundo párrafos, y sólo adiciona un tercero porque es de suyo frecuente que quienes prestan el servicio de la seguridad abusen y hagan uso de información, de documentos, y los venden a competencias o los clonan y los sacan al mercado.

Una manera de que México sea un país respetado es que en esta ley hagamos del conocimiento expreso de las autoridades y de quienes tienen la autorización para prestar el servicio, de que el robo de los derechos de autor o el mal uso por no tener autorización ni la propiedad industrial, les será severamente castigado.

Y es por eso que, sencillamente piensen en sus amigos industriales siquiera, en aquellos que han escrito una obra, en aquellos que ahorita les están pidiendo que les consigan trabajo porque no lo encuentran en el mercado laboral, porque se van a multiplicar a la ene potencia si nosotros no protegemos los derechos de autor y la propiedad intelectual.

Por eso les planteo la adición del siguiente párrafo:

"Las autoridades de la federación, de los estados y del Distrito Federal tomarán las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar todo secreto industrial que, por cualquier medio conozcan, con motivo del desempeño de sus funciones, en materia de seguridad privada".

También es obligación de dichas autoridades respetar los derechos de los particulares, que se desprenden de las disposiciones legales en materia de propiedad industrial y de que los derechos de autor sean vigentes. Así de sencillo.

¿Qué es lo que sucede y qué es lo que sucederá si no estamos de acuerdo con la adición de este párrafo? Seguirá siendo el país un caldo de cultivo para utilizar indiscriminadamente y violatoriamente leyes internas y tratados internacionales para el uso, el abuso y la clonación de la información.

Probablemente algunos de los que quisieran que un servidor los escuchara tuvieran argumento, pero no lo tienen. Tal vez lo que tengan sea un amigo que, habiendo estado en el gobierno federal sustrajo la información y ahora la ofrece desde un despacho privado.

Yo no dudaría que en materia de seguridad pública, en materia de competencia electoral haya muchos aquí que le temen a este párrafo, porque han permitido que ex funcionarios utilicen la información que se recabó con el dinero de nuestros impuestos y se la llevaron a despachos particulares para ofertar servicios.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Concluya, diputado, por favor.

**El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:** Con mucho gusto, diputado presidente. Usted sí es quién y no aquellos jilgueros de poca prosa y falsa argumentación.

Por tanto, compañeros, les solicito respetuosamente que me acompañen en esta adición de párrafo para proteger la planta productiva y los trabajos que hoy tenemos. Es cuanto, diputado presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Muchas gracias, compañero diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la reserva a la que ha hecho alusión el diputado Cárdenas Fonseca.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca al artículo 152. Las diputadas y los diputados que estén pro la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Se desecha. No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para la votación en los términos del dictamen.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados 12; 12, fracción IX; 14, fracción VII; 19, fracción I; 150; y 152.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados 12; 12, fracción IX; 14, fracción VII; 19, fracción I; 150; y 152. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén pro la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Suficientemente discutidos. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen: artículo 19, fracción I; 150; y 152. Y votación de los artículos con las modificaciones aceptadas por el pleno: artículo 12, fracción IX; y 14, fracción VII.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen: 19, fracción I, 150, 152; y con las modificaciones aceptadas el 12, fracción IX y 14, fracción VII.

(Votación)

Está abierto el sistema electrónico de votación. Ciérrase el sistema electrónico de votación. De viva voz el diputado Héctor Padilla.

**El diputado Héctor Padilla Gutiérrez** (desde la curul): Héctor Padilla, a favor.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Se emitieron 318 votos en pro, 28 en contra y 4 abstenciones, diputado presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Aprobados los artículos reservados: 19, 150 y 152, en los términos del dictamen; y el 12 y 14, con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Aprobados por 318 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.

**Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.**



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

04 DIC 2008 "2008 Año de la Educación Física y el Deporte"

MESA DIRECTIVA  
LX LEGISLATURA  
OFICIO No. D.G.P.L. 60-II-2-2007.  
EXP. 4570

*Se turnó a las Comisiones Unidas de  
Seguridad Pública; y de Estudios  
Legislativos, Primera*

Secretarios de la  
H. Cámara de Senadores,  
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que se Expide la Ley General de Sistema de Seguridad Pública, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D. F., a 4 de diciembre de 2008.



DIP. MARIA DEL CARMEN PINETE VARGAS  
Secretaria

DIP. JACINTO GOMEZ PASILLAS  
Secretario

RECIBIDO

2008 DIC 4 PM 6 37

SECRETARÍA GENERAL  
CÁMARA DE SENADORES  
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

MAVA.\*

007244



**M I N U T A  
P R O Y E C T O  
D E  
D E C R E T O**

PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA.**

**Artículo Único.-** Se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

**LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES PRELIMINARES**

**Artículo 1.-** La presente ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

**Artículo 2.-** La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.







PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 3.-** La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

**Artículo 4.-** El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública.

La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 5.-** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

- I.** Academias: a las Instituciones de Formación, de Capacitación y de Profesionalización Policial;
- II.** Bases de Datos Criminalísticas y de Personal: Las bases de datos nacionales y la información contenida en ellas, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema.
- III.** Carrera Ministerial: al Servicio Profesional de Carrera Ministerial;
- IV.** Carrera Pericial: al Servicio Profesional de Carrera Pericial;
- V.** Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial;
- VI.** Conferencias Nacionales: a las Conferencias a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley;
- VII.** Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Seguridad Pública;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- VIII.** Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal;
- IX.** Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél;
- X.** Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;
- XI.** Institutos: a los órganos de las instituciones de seguridad pública de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, encargados de la formación y actualización especializada de aspirantes y servidores públicos de las funciones ministerial, pericial y de policía ministerial;
- XII.** Programa Rector: al conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia, respectivamente;
- XIII.** Registro Nacional: el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XIV.** Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal;
- XV.** Secretario Ejecutivo: el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema;
- XVI.** Sistema: al Sistema Nacional de Seguridad Pública.



**Artículo 6.-** Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 7.-** Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

- I.** Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines;
- II.** Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;
- III.** Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;
- IV.** Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación Democrática;
- V.** Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;
- VI.** Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;
- VII.** Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;
- VIII.** Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública;
- IX.** Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;
- X.** Coordinar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XI.** Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;
- XII.** Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;

- XIII.** Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;
- XIV.** Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y
- XV.** Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.

**Artículo 8.-** La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con respeto de las atribuciones que la Constitución establece para las instituciones y autoridades que integran el Sistema.

**Artículo 9.-** Las Conferencias Nacionales, los consejos locales y demás instancias del Sistema, observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional.

En caso de contradicción entre las resoluciones y acuerdos generales adoptados por las conferencias, el Consejo Nacional determinará la que deba prevalecer.

## **TÍTULO SEGUNDO**

### **DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**



#### **CAPÍTULO I**

#### **De la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 10.-** El Sistema se integrará por:

- I.** El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;
- II.** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- III.** La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;
- IV.** La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;
- V.** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;
- VI.** Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y
- VII.** El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que contribuyan alcanzar los fines de la seguridad pública.

**Artículo 11.-** Las Conferencias Nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Nacional.

El Secretariado Ejecutivo se coordinará con los Presidentes de las Conferencias Nacionales para dar seguimiento a las resoluciones que se adopten por el Consejo Nacional, en los términos de esta Ley.



## **CAPÍTULO II**

### **Del Consejo Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 12.-** El Consejo Nacional estará integrado por:

- I.** El Presidente de la República, quien lo presidirá;
- II.** El Secretario de Gobernación;
- III.** El Secretario de la Defensa Nacional;
- IV.** El Secretario de Marina;
- V.** El Secretario de Seguridad Pública;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- VI.** El Procurador General de la República;
- VII.** Los Gobernadores de los Estados;
- VIII.** El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y
- IX.** El Secretario Ejecutivo del Sistema.

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente.

El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que a su juicio puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico. Así mismo el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de este Consejo.

**Artículo 13.-** El personal de confianza de las unidades administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los Centros Nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el Acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.



**Artículo 14.-** El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

- I.** Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública;
- II.** Emitir acuerdos y resoluciones generales que resulten necesarios para el funcionamiento del Sistema;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- III.** Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad Pública;
- IV.** Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito;
- V.** Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;
- VI.** Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances;
- VII.** Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;
- VIII.** Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los Acuerdos Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia;
- IX.** Formular propuestas para los programas de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;
- X.** Formular propuestas para la evaluación y cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XI.** Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XII.** Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de gobierno;
- XIII.** Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;
- XIV.** Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- XV.** Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de Seguridad Pública, previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley;
- XVI.** Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública;
- XVII.** Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;
- XVIII.** Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y
- XIX.** Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

**Artículo 15.-** El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en las comisiones previstas por esta ley. El Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.

El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes del Consejo.

Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema.

Los miembros del Consejo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.

**Artículo 16.-** Son comisiones permanentes del Consejo Nacional, las siguientes:

- I.** De Información;
- II.** De Certificación y Acreditación,
- III.** De Prevención del Delito y Participación Ciudadana.







PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Estas comisiones se coordinarán con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de los Centros Nacionales que integran el Secretariado Ejecutivo. El Consejo Nacional determinará el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las mismas.

En las Comisiones podrán participar expertos de instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionados con su objeto.

Los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán designar por oficio a sus representantes permanentes ante el Secretario Ejecutivo del Sistema, los cuales deberán ser servidores públicos con un nivel jerárquico igual o superior a Director General en las Secretarías competentes en la entidad federativa respectiva, para la aplicación de esta Ley.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 17.-** El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos Centros.



El Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- I.** Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no tengan otra nacionalidad y estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
- II.** Tener más de treinta años de edad;
- III.** Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- IV.** Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y
- V.** No haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitados como servidores públicos.

**Artículo 18.-** Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:

- I.** Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente;
- II.** Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema;
- III.** Formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización;
- IV.** Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento;
- V.** Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;
- VI.** Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;
- VII.** Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema;
- VIII.** Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional;
- IX.** Proponer al Consejo Nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública;
- X.** Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo;
- XI.** Proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública en los términos de la ley;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- XII.** Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema en los términos de ley;
- XIII.** Presentar al Consejo Nacional los informes de las Conferencias Nacionales, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;
- XIV.** Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional;
- XV.** Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema, para fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial;
- XVI.** Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del Consejo, en términos de las disposiciones legales aplicables;
- XVII.** Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo y las demás disposiciones aplicables;
- XVIII.** Someter a consideración del Consejo Nacional el proyecto de resolución fundado y motivado de cancelación y, cuando proceda, la restitución de la ministración de aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso, municipios;
- XIX.** Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta Ley;
- XX.** Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;
- XXI.** Elaborar y someter a consideración del Consejo Nacional, opinión fundada y razonada por la que se recomiende la remoción de los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XXII.** Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como por el uso ilícito o indebido de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, e informar al respecto al Consejo Nacional;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- XXIII.** Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema;
- XXIV.** Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública, y
- XXV.** Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Nacional o su Presidente.

**Artículo 19.-** El Centro Nacional de Información será el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

- I.** Establecer, administrar y regular las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema en términos que señale el reglamento;
- II.** Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del Sistema;
- III.** Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos;
- IV.** Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada;
- V.** Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad con la Ley de la materia, y
- VI.** Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos.



**Artículo 20.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:

- I.** Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- II.** Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;
- III.** Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:
  - a)** Prevenir la violencia infantil y juvenil;
  - b)** Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
  - c)** Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y
  - d)** Garantizar la atención integral a las víctimas
- IV.** Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;
- V.** Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;
- VI.** Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;
- VII.** Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;
- VIII.** Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;
- IX.** Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley, y
- X.** Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 21.** El Centro Nacional de Certificación y Acreditación será el responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Este Centro contará con un órgano consultivo integrado por las instituciones públicas y privadas que se determinen en el Reglamento de este ordenamiento.

**Artículo 22.** Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal, realizan sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para tal efecto, tendrá las facultades siguientes:

- I.** Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las conferencias.
- II.** Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos;
- III.** Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- IV.** Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- V.** Evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza que en el ámbito de Seguridad Pública operen instituciones privadas que así lo soliciten y cumplan con la normatividad correspondiente;
- VI.** Verificar periódicamente que los Centros de referencia apliquen los procesos certificados, conforme a los lineamientos y estándares que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación establezca;
- VII.** Apoyar a los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- VIII.** Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de Evaluación y Control de Confianza;
- IX.** Establecer los requisitos que deben contener los certificados Ministerial, Policial y Pericial y aprobar sus características, y
- X.** Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.

#### **CAPÍTULO IV**

##### **De la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.**

**Artículo 23.-** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estará integrada por los titulares de las Instituciones de Procuración de Justicia de la Federación, el Distrito Federal y los Estados, y será presidida por el Procurador General de la República.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

**Artículo 24.-** El Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia podrá invitar a personas e instituciones por razón de los asuntos a tratar.



El Procurador General de Justicia Militar será invitado permanente de esta Conferencia.

**Artículo 25.-** Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

- I.** Formular políticas generales de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia;
- II.** Promover la coordinación y colaboración entre las Instituciones de Procuración de Justicia y las Instituciones Policiales;
- III.** Formular propuestas para la integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia y demás instrumentos programáticos



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

relacionados con el ámbito de su competencia, así como darles seguimiento;

- IV.** Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- V.** Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de Procuración de Justicia;
- VI.** Integrar los Comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;
- VII.** Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación conjuntos;
- VIII.** Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IX.** Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
- X.** Promover la homologación de los procedimientos de control de confianza de los Integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia, de conformidad con las disposiciones aplicables;
- XI.** Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de procuración de justicia, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;
- XII.** Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;
- XIII.** Impulsar las acciones necesarias para promover la denuncia de los delitos y la participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia;







PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- XIV.** Determinar las políticas y lineamientos sobre datos de procedimientos penales, juicios de amparo y otros procesos judiciales en los que intervenga el Ministerio Público, que se integren a las bases de datos que establece el presente ordenamiento;
- XV.** Fijar criterios de cooperación y coordinación para la entrega de indiciados, procesados y sentenciados; el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales; el aseguramiento de bienes instrumento, objeto o producto de delitos y el desahogo de diligencias judiciales, ministeriales y periciales;
- XVI.** Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y garantías reconocidas en la legislación vigente;
- XVII.** Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas, atención a víctimas y ofendidos de delitos;
- XVIII.** Proponer programas de cooperación internacional en materia de procuración de justicia;
- XIX.** Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de extradición y asistencia jurídica;
- XX.** Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito;
- XXI.** Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- XXII.** Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;
- XXIII.** Promover la uniformidad de criterios jurídicos, y
- XXIV.** Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 26.-** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se reunirá cada seis meses de manera ordinaria. El Presidente de dicha Conferencia podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo estime necesario.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## CAPÍTULO V

### De la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública

**Artículo 27.-** La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública estará integrada por los titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la Federación, los Estados y el Distrito Federal y será presidida por el Secretario de Seguridad Pública Federal.

La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

Los titulares de las dependencias u órganos en que se integren los cuerpos de policía de los municipios, podrán participar en la Conferencia, de conformidad con las reglas que la misma establezca.

**Artículo 28.-** El Presidente de la Conferencia podrá invitar a personas e Instituciones por razón de los asuntos a tratar.

**Artículo 29.-** Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

- I.** Impulsar la coordinación de las actuaciones de las dependencias encargadas de la seguridad pública;
- II.** Promover la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las Instituciones Policiales, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
- III.** Elaborar propuestas de reformas a leyes en materia de Seguridad Pública;
- IV.** Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales, cualquiera que sea su adscripción;
- V.** Proponer medidas para vincular el Sistema con otros nacionales, regionales o locales;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- VI.** Proponer la adopción y aplicación de políticas y programas de cooperación internacional sobre Seguridad Pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;
- VII.** Promover criterios uniformes para el desarrollo policial en términos de la presente Ley;
- VIII.** Integrar los Comités que sean necesarios en la materia;
- IX.** Desarrollar las especialidades policiales de alto desempeño para hacer frente a los delitos de impacto nacional e internacional;
- X.** Emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública federales, locales y municipales;
- XI.** Impulsar las acciones necesarias para que los integrantes del Sistema establezcan un servicio para la localización de personas y bienes;
- XII.** Promover el establecimiento de un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre emergencias, faltas y delitos;
- XIII.** Procurar que en las Instituciones Policiales se aplique homogénea y permanentemente, el protocolo de certificación correspondiente, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- XIV.** Proponer los requisitos que debe contener el Certificado Único Policial;
- XV.** Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las Instituciones Policiales y promover su aplicación;
- XVI.** Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones Policiales y para el manejo de información;
- XVII.** Proponer mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos, a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
- XVIII.** Proponer reglas para coadyuvar en la vigilancia y realización de acciones conjuntas para proteger las instalaciones estratégicas del país, en los términos de la legislación aplicable, y
- XIX.** Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## **CAPÍTULO VI**

### **De la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario**

**Artículo 30.-** La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el titular de la Secretaría.

**Artículo 31.-** Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

- I.** Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional;
- II.** Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social;
- III.** Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de reinserción social;
- IV.** Proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de reinserción social;
- V.** Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción social en las legislaciones aplicables;
- VI.** Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;
- VII.** Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticos y de personal, y
- VIII.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## **CAPÍTULO VII**

### **De la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal**

**Artículo 32.-** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, estará integrada por los Presidentes Municipales y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal que participarán de conformidad con las siguientes reglas:

- I.** Dos Presidentes municipales, de cada Estado, designados por el Consejo Local de Seguridad Pública correspondiente, y
- II.** Dos titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal que ser por el Consejo Local de Seguridad Pública.

Dicha Conferencia Nacional contará con un Presidente, que será designado de entre sus miembros por el pleno de misma.

La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

**Artículo 33.-** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, tendrá las siguientes funciones mínimas:

- I.** Emitir sus reglas de organización y funcionamiento;
- II.** Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en materia de Seguridad Pública;
- III.** Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal;
- IV.** Elaborar propuestas de reformas a las normas de aplicación municipal en materia de Seguridad Pública;
- V.** Intercambiar experiencias y apoyo técnico entre los Municipios;
- VI.** Proponer políticas públicas en materia de Seguridad Pública;
- VII.** Colaborar con las instituciones publicas y privadas, en la ejecución de programas tendientes a prevenir el delito;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- VIII.** Promover en el ámbito Municipal, la homologación del Desarrollo Policial;
- IX.** Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre la materia de Seguridad Pública Municipal, y
- X.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales o el consejo nacional.

## **CAPÍTULO VIII**

### **De los Consejos Locales e Instancias Regionales de Coordinación**

**Artículo 34.-** En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno. Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En los consejos locales de cada Estado participarán los municipios en los términos de la legislación de cada entidad federativa. En el caso del Distrito Federal, participarán los titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales, de conformidad con la legislación aplicable. Estos Consejos invitarán a cada sesión al menos a dos representantes de la sociedad civil o de la comunidad, de conformidad con los temas a tratar. Su participación será de carácter honorífico.



Los Consejos Locales y las Instancias Regionales de Coordinación se organizarán, de modo que permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura del Sistema e integración del Consejo Nacional.

Los Consejos Locales determinarán su organización y la de las Instancias Regionales de Coordinación correspondientes en términos de esta Ley.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 35.-** Los Consejos Locales se integrarán por las Instituciones de Seguridad Pública de la entidad de que se trate y de la Federación.

Además, podrán invitar a personas e instituciones, de acuerdo con los temas a tratar.

**Artículo 36.-** Cuando para el cumplimiento de la función de Seguridad Pública sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente, en las que participarán las Instituciones de Seguridad Pública correspondientes.

Del mismo modo, podrán establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos estatales correspondientes. En el caso de las zonas conurbadas entre dos o más entidades federativas, se podrán suscribir convenios e instalar instancias regionales con la participación de los municipios respectivos y de los órganos político administrativos, tratándose del Distrito Federal.

**Artículo 37.-** Los Consejos Locales y las instancias regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines de la Seguridad Pública, en sus ámbitos de competencia.

Los miembros del Consejo designarán a uno de sus servidores públicos como enlace responsable de atender y dar seguimiento a la operación del Sistema en su respectiva entidad federativa.

Dichos enlaces están obligados a proporcionar la información requerida por el Secretariado Ejecutivo, en un plazo razonable, que no excederá de treinta días naturales, salvo justificación fundada.

**Artículo 38.-** Los Consejos Locales y las instancias regionales podrán proponer al Consejo Nacional y a las Conferencias Nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## **CAPÍTULO IX**

### **De la distribución de competencias**

**Artículo 39.-** La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

**A.** Corresponde a la Federación, por conducto de las autoridades competentes:

**I.** Proponer las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios;

**II.** Respecto del Desarrollo Policial:

**a)** En materia de Carrera Policial, proponer al Consejo Nacional:

**1.-** Las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los Integrantes de las Instituciones Policiales, de acuerdo al Modelo Policial;

**2.-** Los lineamientos para los procedimientos de Carrera Policial que aplicarán las autoridades competentes;

**b)** En materia de Profesionalización, proponer al Consejo Nacional:

**1.-** El Programa Rector que contendrá los aspectos de formación, capacitación, adiestramiento, actualización e investigación académica, así como integrar las que formulen las instancias del Sistema;

**2.-** Los procedimientos aplicables a la Profesionalización;

**3.-** Los criterios para el establecimiento de las Academias e Institutos, y

**4.-** El desarrollo de programas de investigación y formación académica.

**c)** En materia de Régimen Disciplinario, proponer al Consejo Nacional los lineamientos para la aplicación de los procedimientos respectivos.

**III.** Coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, y

**IV.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales.







PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**B.** Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

- I.** Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que deriven de ésta;
- II.** Contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación del Sistema;
- III.** Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario;
- IV.** Constituir y operar las Comisiones y las Academias a que se refiere esta Ley;
- V.** Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de personal;
- VI.** Designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la información a que se refiere esta Ley;
- VII.** Integrar y consultar en las bases de datos de personal de Seguridad Pública, los expedientes de los aspirantes a ingresar en las Instituciones Policiales;
- VIII.** Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo;
- IX.** Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo Policial, Ministerial y Pericial;
- X.** Establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable;
- XI.** Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo Policial para el registro y seguimiento, en las bases de datos criminalísticos y de personal de Seguridad Pública;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- XII.** Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y administración;
- XIII.** Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las Instalaciones Estratégicas del país, y
- XIV.** Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.

Los Estados y los Municipios podrán coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Leyes Estatales de Seguridad Pública podrán establecer la posibilidad de coordinación, y en su caso, los medios para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre un Estado y sus Municipios.

### **TÍTULO TERCERO**

#### **DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

##### **CAPÍTULO I**

##### **De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública**



**Artículo 40.-** Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

- I.** Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- II.** Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan;
- III.** Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
- IV.** Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
- V.** Abstenerse en todo momento de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;
- VI.** Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
- VII.** Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;
- VIII.** Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
- IX.** Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
- X.** Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias;
- XI.** Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;
- XII.** Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- XIII.** Preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
- XIV.** Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
- XV.** Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;
- XVI.** Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;
- XVII.** Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;
- XVIII.** Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;
- XIX.** Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables;
- XX.** Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las Instituciones;
- XXI.** Abstenerse de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;
- XXII.** Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda;
- XXIII.** Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;

- XXIV.** Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones;
- XXV.** Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes;
- XXVI.** Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio;
- XXVII.** No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y
- XXVIII.** Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 41.-** Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

- I.** Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice;
- II.** Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes;
- III.** Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;
- IV.** Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que les sean asignados, así como aquéllos de los que tengan conocimiento con motivo de sus funciones;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- V.** Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
- VI.** Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, absteniéndose de ejecutarlas cuando sean contrarias a derecho;
- VII.** Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;
- VIII.** Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
- IX.** Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;
- X.** Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y
- XI.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Solamente en los casos en que estén en riesgo los derechos y garantías de personas e instituciones y el orden público, se podrá hacer uso legítimo de la fuerza por los integrantes de las instituciones policiales, siempre que se haga de manera racional, proporcional, congruente, oportuna y con pleno respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, absteniéndose en todo momento de obedecer ordenes ilegales.



**Artículo 42.-** El documento de identificación de los integrantes de las instituciones Seguridad Pública deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como, las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.

Todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 43.-** La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:

- I.** El área que lo emite;
- II.** El usuario capturista;
- III.** Los Datos Generales de registro;
- IV.** Motivo, que se clasifica en;
  - a)** Tipo de evento, y
  - b)** Subtipo de evento.
- V.** La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
- VI.** La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos.
- VII.** Entrevistas realizadas, y
- VIII.** En caso de detenciones:
  - a)** Señalar los motivos de la detención;
  - b)** Descripción de la persona;
  - c)** El nombre del detenido y apodo, en su caso;
  - d)** Descripción de estado físico aparente;
  - e)** Objetos que le fueron encontrados;
  - f)** Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
  - g)** Lugar en el que fue puesto a disposición.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

**Artículo 44.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán las sanciones aplicables al incumplimiento de los deberes previstos en esta ley, los procedimientos y los órganos competentes que conocerán de éstos. Las sanciones serán al menos, las siguientes:

- a) Amonestación;
- b) Suspensión, y
- c) Remoción.

## CAPÍTULO II

### De los Sistemas Complementarios de Seguridad Social y Reconocimientos

**Artículo 45.-** Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 46.-** Las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en esta Ley, realizarán y someterán a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión, actualización y fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.







PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

### **CAPÍTULO III**

#### **De las Academias e Institutos**

**Artículo 47.-** La Federación y las entidades federativas establecerán y operarán Academias e Institutos que serán responsables de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización que tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

- I.** Aplicar los procedimientos homologados del Sistema;
- II.** Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos;
- III.** Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial, pericial y policial, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IV.** Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Profesionalización;
- V.** Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;
- VI.** Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;
- VII.** Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores públicos a que se refiere el Programa Rector;
- VIII.** Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de Profesionalización;
- IX.** Revalidar equivalencias de estudios de la Profesionalización;
- X.** Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación;
- XI.** Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de los Servidores Públicos y proponer los cursos correspondientes;
- XII.** Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso a las Academias e Institutos;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- XIII.** Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio ante las autoridades competentes;
- XIV.** Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que impartan;
- XV.** Proponer la celebración de convenios con Instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores públicos;
- XVI.** Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los manuales de las Academias e Institutos, y
- XVII.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 48.-** En materia de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales, la Secretaría tendrá la facultad de proponer a las Instancias de Coordinación de esta ley lo siguiente:

- I.** Los contenidos básicos de los programas para la formación, capacitación y profesionalización de los mandos de las Instituciones policiales;
- II.** Los aspectos que contendrá el Programa Rector;
- III.** Que los integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los programas correspondientes a las Academias y de estudios superiores policiales;
- IV.** El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales y vigilar su aplicación;
- V.** Estrategias y políticas de desarrollo de formación de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- VI.** Los programas de investigación académica en materia policial;
- VII.** El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales;
- VIII.** La revalidación de equivalencias de estudios de la Profesionalización en el ámbito de su competencia, y
- IX.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## **TÍTULO CUARTO** **DEL SERVICIO DE CARRERA EN LAS INSTITUCIONES DE** **PROCURACIÓN DE JUSTICIA**

### **Capítulo I** **Disposiciones Generales**

**Artículo 49.-** El Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia, comprenderá lo relativo al Ministerio Público y a los peritos.

Las Instituciones de Procuración de Justicia que cuenten en su estructura orgánica con policía ministerial para la investigación de los delitos, se sujetarán a lo dispuesto en esta ley para las Instituciones Policiales en materia de carrera policial.

Las reglas y procesos en materia de carrera policial y régimen disciplinario de la policía ministerial, serán aplicados, operados y supervisados por las Instituciones de Procuración de Justicia.

Los servidores públicos que tengan bajo su mando a agentes del Ministerio Público o peritos no formarán parte del Servicio de Carrera por ese hecho; serán nombrados y removidos conforme a los ordenamientos legales aplicables; se considerarán trabajadores de confianza, y los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento.



**Artículo 50.-** El Servicio de Carrera Ministerial y Pericial comprenderá las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, conforme a lo siguiente:

- I.** El ingreso comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación y certificación inicial, así como registro;
- II.** El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada, de actualización, de evaluación para la permanencia, de evaluación del desempeño, de desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y reconocimientos, de reingreso y de certificación.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

De igual forma, deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los miembros del Servicio de Carrera, y

- III.** La terminación comprenderá las causas ordinarias y extraordinarias de separación del Servicio, así como los procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar, ajustándose a lo establecido por las leyes y disposiciones aplicables.

**Artículo 51.-** El Servicio de Carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes:

- I.** Tendrá carácter obligatorio y permanente; abarcará los planes, programas, cursos, evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas que comprende;
- II.** Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en tareas de Procuración de Justicia;
- III.** El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación fomentará que los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos referidos y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades destrezas y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público;
- IV.** Contará con un sistema de rotación del personal;
- V.** Determinará los perfiles, niveles jerárquicos en la estructura y de rangos;
- VI.** Contará con procedimientos disciplinarios, sustentados en principios de justicia y con pleno respeto a los derechos humanos;
- VII.** Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño de sus funciones;
- VIII.** Buscará generar el sentido de pertenencia institucional;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- IX.** Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento de los certificados del personal, y
- X.** Contendrá las normas para el registro de las incidencias del personal.

## **CAPÍTULO II**

### **Del Ingreso al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 52.-** El ingreso al Servicio de Carrera se hará por convocatoria pública.

Los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán cumplir, cuando menos, con los requisitos siguientes:

#### **A. Ministerio Público.**

- I.** Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
- II.** Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional;
- III.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- IV.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
- V.** No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
- VI.** No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- VII.** Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan, y
- VIII.** Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables.

#### **B. Peritos.**

- I.** Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos;
- II.** Acreditar que ha concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente;
- III.** Tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;
- IV.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- V.** Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan;
- VI.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
- VII.** No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
- VIII.** No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y
- IX.** Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezca la legislación federal y la de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 53.-** Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos de formación inicial, deberán consultarse sus antecedentes en el Registro Nacional y, en su caso, en los registros de las Instituciones de Procuración de Justicia.

Asimismo, deberá verificarse la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes.

**Artículo 54.-** Los aspirantes a ingresar al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán cumplir con los estudios de formación inicial.

Corresponderá a las autoridades competentes regular en sus legislaciones los términos en que la formación inicial se llevará a cabo. La duración de los programas de formación inicial no podrá ser inferior a quinientas horas clase. En todo caso atendiendo a los lineamientos aplicables.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Desarrollo del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 55.-** Son requisitos de permanencia del Ministerio Público y de los peritos, los siguientes:

- I.** Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio;
- II.** Cumplir con los programas de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables;
- III.** Aprobar las evaluaciones que establezcan las disposiciones aplicables;
- IV.** Contar con la certificación y registro actualizados a que se refiere esta Ley;
- V.** Cumplir las órdenes de rotación;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**VI.** Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas, y

**VII.** Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezcan las leyes respectivas.

**Artículo 56.-** Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable.

Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente ley.

**Artículo 57.-** Las solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su caso, concederán con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento a los requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o penal, local o federal.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **De la Terminación del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**



**Artículo 58.-** La Federación y las entidades federativas establecerán en sus respectivas leyes los procedimientos de separación y remoción aplicables a los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia, que cuando menos, comprenderán los aspectos previstos en el artículo siguiente.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 59.-** La terminación del Servicio de Carrera será:

**I.** Ordinaria, que comprende:

- a) Renuncia;
- b) Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones;
- c) Jubilación, y
- d) Muerte.

**II.** Extraordinaria, que comprende:

- a) Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, o
- b) Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo.

**Artículo 60.-** En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación o remoción es injustificada, la institución respectiva sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## **CAPÍTULO V**

### **De la Profesionalización**

**Artículo 61.-** El Programa Rector de Profesionalización es el instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal de las Instituciones de Procuración de Justicia.

**Artículo 62.-** Los planes de estudios se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolución de casos.

**Artículo 63.-** En materia de programas de Profesionalización y planes de estudio, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:

- I.** Promover estrategias y políticas de profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- II.** Diseñar los modelos de profesionalización que correspondan para su concertación y en su caso, aplicación en las Instituciones de Procuración de Justicia;
- III.** Acordar los contenidos del Programa Rector de Profesionalización de los servidores públicos de las instituciones de Procuración de Justicia, a propuesta de su Presidente;
- IV.** Establecer criterios para supervisar que los servidores públicos se sujeten a los programas correspondientes en los Institutos de Capacitación;
- V.** Promover el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes a las Instituciones de Procuración de Justicia y vigilar su aplicación;
- VI.** Establecer programas de investigación académica en las materias ministerial y pericial;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**VII.** Consensuar los criterios por los que se revalidarán equivalencias de estudios en el ámbito de su competencia para su incorporación al programa rector de profesionalización, y

**VIII.** Las demás que le establezcan otras disposiciones legales.

**Artículo 64.-** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia están obligados a participar en las actividades de profesionalización que determine la institución respectiva, los cuales deberán cubrir un mínimo de 60 horas clase anuales.

## **CAPÍTULO VI** **De la Certificación**

**Artículo 65.-** Los aspirantes que ingresen a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán contar con el Certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por esta Ley.

Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia sin contar con el Certificado y registro vigentes.

**Artículo 66.-** Los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia emitirán los certificados correspondientes a quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece esta Ley y el ordenamiento legal aplicable a la institución de que se trate.

El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.

**Artículo 67.-** El Certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional que para tal efecto se establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 68.-** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.

La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 69.-** La certificación que otorguen los centros de evaluación y control de confianza deberá contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia que deseen prestar sus servicios en otra institución, ya sea en la Federación o en las Entidades Federativas, deberán presentar el Certificado que les haya sido expedido previamente.

Las Instituciones de Procuración de Justicia reconocerán la vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados, conforme a las disposiciones de esta Ley y demás aplicables. En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los procesos de evaluación.

En todos los casos, se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el Registro Nacional.

**Artículo 70.-** La cancelación del certificado de los Servidores Públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia procederá:

- I.** Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- II.** Al ser removidos de su encargo;
- III.** Por no obtener la revalidación de su Certificado, y
- IV.** Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 71.-** La Institución de Procuración de Justicia que cancele algún certificado deberá hacer la anotación respectiva en el Registro Nacional correspondiente.

## **TÍTULO QUINTO DEL DESARROLLO POLICIAL**

### **CAPÍTULO I Disposiciones Generales**

**Artículo 72.-** El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos en el artículo 6 de la Ley.

**Artículo 73.-** Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.



Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 74.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente.

**Artículo 75.-** Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:

- I.** Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información;
- II.** Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y
- III.** Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.

**Artículo 76.-** Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, o bien, en las Instituciones Policiales, o en ambas, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones.

Las policías ministeriales ubicadas dentro de la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Título, quedando a cargo de dichas instituciones, la aplicación de las normas, supervisión y operación de los procedimientos relativos al desarrollo policial.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 77.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación que podrán ser, entre otras, las siguientes:

- I.** Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine;
- II.** Deberán verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informará al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;
- III.** Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;
- IV.** Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- V.** Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;
- VI.** Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;
- VII.** Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;
- VIII.** Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- IX.** Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;
- X.** Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;
- XI.** Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;
- XII.** Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:
  - a)** Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
  - b)** Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;
  - c)** Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;
  - d)** Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y
  - e)** Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.
- XIII.** Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, y
- XIV.** Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.







PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## **CAPÍTULO II**

### **De la Carrera Policial y de la Profesionalización**

**Artículo 78.-** La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales.

**Artículo 79.-** Los fines de la Carrera Policial son:

- I.** Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales;
- II.** Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones;
- III.** Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- IV.** Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y
- V.** Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley.

**Artículo 80.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán la organización jerárquica de las Instituciones Policiales, considerando al menos las categorías siguientes:

- I.** Comisarios;
- II.** Inspectores;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**III. Oficiales, y**

**IV. Escala Básica.**

En las policías ministeriales se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al modelo policial previsto en esta Ley.

**Artículo 81.-** Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las siguientes jerarquías:

**I. Comisarios:**

- a) Comisario General;
- b) Comisario Jefe, y
- c) Comisario.

**II. Inspectores:**

- a) Inspector General;
- b) Inspector Jefe, y
- c) Inspector.

**III. Oficiales:**

- a) Subinspector;
- b) Oficial, y
- c) Suboficial.

**IV. Escala Básica:**

- a) Policía Primero;
- b) Policía Segundo;
- c) Policía Tercero, y
- d) Policía.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 82.-** Las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.

Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los titulares de las instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerarquía.

Las instituciones estatales y del Distrito Federal, deberán satisfacer, como mínimo, el mando correspondiente al octavo grado de organización jerárquica.

Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones.

**Artículo 83.-** El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de la Instituciones con relación a las áreas operativas y de servicios será:

- I.** Para las áreas operativas, de policía a Comisario General, y
- II.** Para los servicios, de policía a Comisario Jefe.

**Artículo 84.-** La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.

De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

Para tales efectos, la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán promover en el ámbito de sus competencias respectivas, las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas, en los diferentes ámbitos de competencia.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 85.-** La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:

- I.** Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas;
- II.** Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo;
- III.** Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema;
- IV.** Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;
- V.** La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;
- VI.** Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las leyes respectivas;
- VII.** Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;
- VIII.** Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- IX.** Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- X.** El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por la instancia que señale la ley de la materia, y
- XI.** Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial.

La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección.

En términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las Instituciones Policiales podrán designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando su grado policial y derechos inherentes a la Carrera Policial.

**Artículo 86.-** La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales.

Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en la ley sobre los aspirantes aceptados.

**Artículo 87.-** El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en las Academias o Institutos de Capacitación Policial, el periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley.

**Artículo 88.-** La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales. Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**A. De Ingreso:**

- I.** Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;
- II.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
- III.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- IV.** Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
  - a)** En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
  - b)** Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
  - c)** En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
- V.** Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
- VI.** Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
- VII.** Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
- VIII.** Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- IX.** No padecer alcoholismo;
- X.** Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- XI.** No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
- XII.** Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que deriven de la misma;
- XIII.** Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**B. De Permanencia:**

- I.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;
- II.** Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
- III.** No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
- IV.** Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
  - a)** En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;
  - b)** Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
  - c)** En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
- V.** Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
- VI.** Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
- VII.** Aprobar las evaluaciones del desempeño;
- VIII.** Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;
- IX.** Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- X.** No padecer alcoholismo;
- XI.** Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;
- XII.** Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- XIII.** No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- XIV.** No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días, y
- XV.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 89.-** Las instancias responsables del Servicio de Carrera Policial fomentarán la vocación de servicio mediante la promoción y permanencia en las Instituciones Policiales para satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de sus integrantes.

**Artículo 90.-** El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual las Instituciones Policiales otorgan el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.

Todo estímulo otorgado por las instituciones será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.

**Artículo 91.-** La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.



Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.

Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.

Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 92.-** Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los integrantes de las Instituciones Policiales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.

**Artículo 93.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán que la antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones Policiales, de la siguiente forma:

- I.** Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Policiales, y
- II.** Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente.

La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera Policial.

**Artículo 94.-** La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

- I.** Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurren las siguientes circunstancias:
  - a)** Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;
  - b)** Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y
  - c)** Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones para conservar su permanencia.
- II.** Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

### **III.** Baja, por:

- a)** Renuncia;
- b)** Muerte o incapacidad permanente, o
- c)** Jubilación o Retiro.

Al concluir el servicio el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.

**Artículo 95.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.

**Artículo 96.-** La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

Las Instituciones Policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.

La presente disposición será aplicable también al personal de los servicios de migración.

**Artículo 97.-** La certificación tiene por objeto:

**A.-** Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**B.-** Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las Instituciones Policiales:

- I.** Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
- II.** Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;
- III.** Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- IV.** Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;
- V.** Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y
- VI.** Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley.

**Artículo 98.-** La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.



Los planes de estudio para la Profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje que estarán comprendidos en el programa rector que apruebe la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, a propuesta de su Presidente.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Régimen Disciplinario**

**Artículo 99.-** La actuación de los Integrantes de las Instituciones Policiales se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de esta Ley.

Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán sus regímenes disciplinarios, sobre las bases mínimas previstas en el presente capítulo.

La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.

La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados.

**Artículo 100.-** Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

**Artículo 101.-** El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.

**Artículo 102.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales, observarán las obligaciones previstas en los artículos 40 y 41 de esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 103.-** La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor.

La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación aplicable.

**Artículo 104.-** El procedimiento ante las autoridades previstas en las leyes de la materia, iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o presidente de la instancia correspondiente, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor.

Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento.

**Artículo 105.-** La Federación, las entidades federativas y los municipios establecerán instancias colegiadas en las que participen, en su caso, cuando menos, representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las Instituciones Policiales, para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario.

Para tal fin, las Instituciones Policiales podrán constituir sus respectivas Comisiones del servicio profesional de carrera policial y de honor y justicia, las que llevarán un registro de datos de los integrantes de sus instituciones. Dichos datos se incorporarán las bases de datos de personal de Seguridad Pública.

En las Instituciones de Procuración de Justicia se integrarán instancias equivalentes, en las que intervengan representantes de los policías ministeriales.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## **TÍTULO SEXTO**

### **DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**

**Artículo 106.-** El sistema nacional de acreditación y control de confianza se conforma con las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

Integran este sistema: El Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales de la Federación y de las entidades federativas.

**Artículo 107.-** Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que establezca el Reglamento que emita el Ejecutivo Federal.

Cuando en los procesos de certificación a cargo de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En caso contrario, el proceso carecerá de validez.



**Artículo 108.-** Los Centros Nacional de Acreditación y Control de Confianza aplicarán las evaluaciones a que se refiere esta Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; para tal efecto, tendrán las siguientes facultades:

- I.** Aplicar los procedimientos de Evaluación y de Control de Confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- II.** Proponer lineamientos para la verificación y control de Certificación de los Servidores Públicos;
- III.** Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable;
- IV.** Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la confidencialidad y resguardo de expedientes;
- V.** Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad;
- VI.** Comprobar los niveles de escolaridad de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;
- VII.** Aplicar el procedimiento de certificación de los Servidores Públicos, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- VIII.** Expedir y actualizar los Certificados conforme a los formatos autorizados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- IX.** Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados de las evaluaciones que practiquen;
- X.** Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus funciones;
- XI.** Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención que permitan solucionar la problemática identificada;
- XII.** Proporcionar a las Instituciones, la asesoría y apoyo técnico que requieran sobre información de su competencia;
- XIII.** Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y que se requieran en procesos administrativos o judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables;
- XIV.** Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública, y
- XV.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios implementarán medidas de registro y seguimiento para quienes sean separados del servicio por no obtener el certificado referido en esta Ley.

## **TITULO SÉPTIMO DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA**

### **CAPÍTULO ÚNICO**

**Artículo 109.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.

El Presidente del Consejo Nacional dictará las medidas necesarias, además de las ya previstas en la Ley, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada mediante los instrumentos de información sobre Seguridad Pública.

Las Instituciones de Procuración de Justicia tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos criminalísticos y de personal, en el ámbito de su función de investigación y persecución de los delitos.

La información sobre administración de justicia, podrá ser integrada las bases de datos criminalísticas y de personal, a través de convenios con el Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia y con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

El acceso a las bases de datos del sistema estará condicionado al cumplimiento de esta Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia Ley emanen.







PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 110.-** Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.

La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

**Artículo 111.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su Red Local correspondiente, con las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema, previstas en la presente Ley.

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Secretario Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios.

## **SECCIÓN PRIMERA**

### **Del Registro Administrativo de Detenciones**

**Artículo 112.-** Los agentes policiales que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información, de la detención, a través del Informe Policial Homologado.

**Artículo 113.-** El registro administrativo de la detención deberá contener, al menos, los datos siguientes:

- I.** Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
- II.** Descripción física del detenido;
- III.** Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- IV.** Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción, y
- V.** Lugar a donde será trasladado el detenido.

**Artículo 114.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán actualizar la información relativa al registro, tan pronto reciba a su disposición al detenido, recabando lo siguiente:

- I.** Domicilio, fecha de nacimiento, edad, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión;
- II.** Clave Única de Registro de Población;
- III.** Grupo étnico al que pertenezca;
- IV.** Descripción del estado físico del detenido;
- V.** Huellas dactilares;
- VI.** Identificación antropométrica, y
- VII.** Otros medios que permitan la identificación del individuo;

El Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite de la detención de una persona y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emitirá las disposiciones necesarias para regular los dispositivos tecnológicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información a que se refiere este artículo, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología.



**Artículo 115.-** La información capturada en el Registro Administrativo de Detenciones será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- I. Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y
- II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el Registro a terceros. El Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

**Artículo 116.-** Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal aplicable.



## SECCIÓN SEGUNDA

### Del Sistema Único de Información Criminal

**Artículo 117.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios serán responsables de integrar y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del adolescente.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 118.-** Dentro del sistema único de información criminal se integrará una base nacional de datos de consulta obligatoria en las actividades de Seguridad Pública, sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de identificación, recursos y modos de operación.

Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que aporten las Instituciones de Seguridad Pública, relativa a las investigaciones, procedimientos penales, órdenes de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de penas.

**Artículo 119.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia podrán reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, conforme a las disposiciones aplicables, pero la proporcionarán al sistema único de información criminal inmediatamente después que deje de existir tal condición.

**Artículo 120.-** El Sistema Nacional de Información Penitenciaria es la base de datos que, dentro del sistema único de información criminal, contiene, administra y controla los registros de la población penitenciaria de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 121.-** La base de datos deberá contar, al menos, con el reporte de la ficha de identificación personal de cada interno con fotografía, debiendo agregarse los estudios técnicos interdisciplinarios, datos de los procesos penales y demás información necesaria para la integración de dicho sistema.

### SECCIÓN TERCERA

#### Del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública



**Artículo 122.-** El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos:



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- I.** Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública;
- II.** Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público, y
- III.** Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron.

Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al Registro.

**Artículo 123.-** Las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios inscribirán y mantendrán actualizados permanentemente en el Registro los datos relativos a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de esta Ley.

Para efectos de esta Ley, se consideran miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente.

La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la presente Ley.

## **SECCIÓN CUARTA**

### **Del Registro Nacional de Armamento y Equipo.**



**Artículo 124.-** Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios manifestarán y mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el cual incluirá:

- I.** Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo, y



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**II.** Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.

**Artículo 125.-** Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las instituciones de Seguridad Pública mantendrán un registro de los elementos de identificación de huella balística de las armas asignadas a los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública. Dicha huella deberá registrarse en una base de datos del Sistema.

**Artículo 126.-** En el caso de que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Nacional de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las normas aplicables.

**Artículo 127.-** El incumplimiento de las disposiciones de esta sección, dará lugar a que la portación o posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.



## **TÍTULO OCTAVO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD**

### **CAPÍTULO ÚNICO De los Servicios de Atención a la Población**

**Artículo 128.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de:

- I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y
- II. La sociedad civil organizada.

**Artículo 129.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes.

**Artículo 130.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.

**Artículo 131.-** Para mejorar el servicio de Seguridad Pública, las instancias de coordinación que prevé esta Ley promoverán la participación de la comunidad a través de las siguientes acciones:

- I. Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.
- II. Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;
- III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;
- IV. Realizar labores de seguimiento;
- V. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;
- VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**VII.** Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.

**Artículo 132.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que las Instituciones de Seguridad Pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad, para alcanzar los propósitos del artículo anterior.

La participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y de instituciones, se sujetará a los indicadores previamente establecidos con la autoridad sobre los siguientes temas:

- I.** El desempeño de sus integrantes;
- II.** El servicio prestado, y
- III.** El impacto de las políticas públicas en prevención del delito.

Los resultados de los estudios deberán ser entregados a las Instituciones de Seguridad Pública, así como a los Consejos del Sistema, según corresponda. Estos estudios servirán para la formulación de políticas públicas en la materia.

**Artículo 133.-** El Centro Nacional de Información deberá proporcionar la información necesaria y conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana. No se podrá proporcionar la información que ponga en riesgo la seguridad pública o personal.

**Artículo 134.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán políticas públicas de atención a la víctima, que deberán prever, al menos los siguientes rubros:

- I.** Atención de la denuncia en forma pronta y expedita;
- II.** Atención jurídica, médica y psicológica especializada;
- III.** Medidas de protección a la víctima, y







PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**IV.** Otras, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

## **TÍTULO NOVENO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

### **CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales**

**Artículo 135.-** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, locales y municipales por el manejo o aplicación ilícita de los recursos previstos en los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.

Serán consideradas violaciones graves a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, las acciones u omisiones previstas en el artículo 139, que se realicen en forma reiterada o sistemática.

**Artículo 136.-** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, estatales y municipales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables y por las autoridades federales competentes.

**Artículo 137.-** La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fiscalizará los recursos federales que ejerzan la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en materia de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones aplicables.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## CAPÍTULO SEGUNDO

### De los Delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública

**Artículo 138.-** Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa, a quien dolosa, ilícita y reiteradamente se abstenga de proporcionar al Secretariado Ejecutivo la información que esté obligado en términos de esta Ley, a pesar de ser requerido por el Secretario Ejecutivo, dentro del plazo previsto en el artículo 36 de esta Ley.

Se impondrá además, la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión en cualquier orden de gobierno.

**Artículo 139.** Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien:

- I.** Ingrese dolosamente a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública previstos en esta Ley, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información, las bases de datos o los equipos o sistemas que las contengan;
- II.** Divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases de datos o sistemas informáticos a que se refiere esta Ley.
- III.** Inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, prevista en esta Ley, como miembro o integrante de una institución de Seguridad Pública de cualquier orden de gobierno, a persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la Ley, o a sabiendas de que la certificación es ilícita, y
- IV.** Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además, la inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público en cualquier orden de gobierno, y en su caso, la destitución.

**Artículo 140.** Se sancionará con cinco a doce años de prisión y de doscientos a ochocientos días multa, a quien falsifique el certificado a que se refiere la presente Ley, lo altere, comercialice o use a sabiendas de su ilicitud.

**Artículo 141.-** Las sanciones previstas en este capítulo se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos previstos en los ordenamientos penales federal o de las entidades federativas, según corresponda.

Las autoridades del fuero federal serán las competentes para conocer y sancionar los delitos previstos en este capítulo, conforme las disposiciones generales del Código Penal Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones legales, en atención a que la Federación es el sujeto pasivo, de conformidad con el artículo 50, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

## **TÍTULO DÉCIMO DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL**

### **CAPÍTULO I Disposiciones Preliminares**

**Artículo 142.-** Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto. Los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente Ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel nacional sean determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, serán distribuidos con base en los criterios que apruebe el Consejo Nacional, a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Las autoridades correspondientes de las entidades federativas y de los municipios deberán concentrar los recursos en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública.

Asimismo, dichas autoridades deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema sobre los movimientos que presenten las cuentas específicas, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino así como los recursos comprometidos, devengados y pagados.

Sin perjuicio de lo que establece el artículo 143 los convenios generales o específicos establecerán obligaciones para las entidades federativas y los municipios, a efecto de fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se aporten, así como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

**Artículo 143.** Para efectos de control, vigilancia, transparencia y supervisión del manejo de los recursos previstos en el artículo que antecede, así como para determinar si se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 139, compete al Secretario Ejecutivo:

- I. Requerir, indistintamente, a las autoridades hacendarias y de seguridad pública, entre otras, de las entidades federativas y de los municipios, informes relativos a:
  - a) El ejercicio de los recursos de los fondos y el avance en el cumplimiento de los programas o proyectos financiados con los mismos;





- b) La ejecución de los programas de seguridad pública de las entidades federativas derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública;
- II. Efectuar, en cualquier momento, visitas de verificación y revisiones de gabinete de los documentos, instrumentos y mecanismos inherentes o relativos al ejercicio de los recursos en las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios, a fin de comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las obligaciones a su cargo; de igual forma, podrá requerir la información que considere necesaria indistintamente a las autoridades hacendarias o de seguridad pública locales correspondientes, y
- III. Las demás acciones que resulten necesarias para la consecución de lo dispuesto en este artículo.

De manera supletoria a lo previsto en este artículo se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal.

## CAPÍTULO II

### De la Cancelación y Suspensión de Ministración de los Recursos

**Artículo 144.-** El Pleno del Consejo Nacional resolverá la cancelación o suspensión de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, a las entidades federativas o, en su caso, municipios, que incurran en lo siguiente:

- I. Incumplir las obligaciones relativas al suministro, intercambio y sistematización de la información de Seguridad Pública, o violar las reglas de acceso y aprovechamiento de la información de las bases de datos previstas en esta Ley;
- II. Incumplir los procedimientos y mecanismos para la certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;
- III. Abstenerse de implementar el servicio telefónico nacional de emergencia;
- IV. Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que disponen las disposiciones jurídicas aplicables;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- V.** Aplicar criterios, normas y procedimientos distintos a los establecidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- VI.** Establecer y ejecutar un Modelo Policial básico distinto al determinado por el Consejo Nacional;
- VII.** Establecer servicios de carrera ministerial y policial sin sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones que de ella emanan;
- VIII.** Abstenerse de constituir y mantener en operación las instancias, centros de control de confianza y academias a que se refiere esta Ley, y
- IX.** Cualquier incumplimiento a las obligaciones de la presente Ley, que afecte a los mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Pública.

La cancelación de la ministración de los recursos federales a las entidades federativas y municipios, supone la pérdida de los mismos, por lo que no tendrán el carácter de recuperables o acumulables y deberán, en consecuencia, permanecer en la Tesorería de la Federación para los efectos legales correspondientes al finalizar el ejercicio fiscal, salvo que en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal se destinen a otras entidades federativas o municipios para llevar a cabo la función de seguridad pública, sin que se genere, para éstas, el derecho a recibir los recursos con posterioridad.

**Artículo 145.-** El procedimiento al que se sujetarán las visitas y revisiones a que se refiere el artículo 143, fracción II, y sobre las causas de cancelación de los recursos a que se refiere el artículo 144, se sujetará a las reglas siguientes:

- I.** En la orden de visita o revisión correspondiente se señalará el servidor público que la practicará, la institución, así como el periodo u objeto que haya de verificarse o revisarse;
- II.** La visita se practicará preferentemente en las oficinas principales de la institución o dependencia visitada; en caso de no ser posible por cualquier causa, se realizará en cualquier domicilio de la propia institución o dependencia o, en caso necesario, en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo; estando obligados los servidores públicos de las instituciones o dependencias visitadas a proporcionar todas las facilidades necesarias y atender los requerimientos que se les formulen;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**III.** En caso de advertirse incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, los acuerdos generales o los convenios, el Secretariado podrá decretar la suspensión provisional de las aportaciones subsecuentes. La suspensión de ministración de fondos subsistirá hasta que se aclare o subsane la acción u omisión que dio origen al incumplimiento.

La suspensión en el otorgamiento de los recursos no implica la pérdida de los mismos por parte de las entidades federativas o municipios, por lo que podrán aclarar o subsanar la acción u omisión que dio origen al incumplimiento, mientras no se emita la resolución que declare la cancelación;

- IV.** En un plazo no mayor a quince días hábiles, posteriores a la terminación de la visita, el Secretariado Ejecutivo presentará al Consejo el informe correspondiente al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones sujetas a verificación, así como toda la información que resulte necesaria para el efecto;
- V.** El Secretariado dará vista a la institución o dependencia visitada o revisada, para que en un plazo de veinte días hábiles, aporte la información pertinente para desvirtuar las imputaciones que, en su caso, se formulen en su contra;
- VI.** Transcurrido el plazo antes mencionado, en caso de incumplimiento, el Secretariado presentará al Consejo Nacional un proyecto de resolución, en que se contengan las conclusiones de la visita o revisión practicadas, y
- VII.** En el proyecto de resolución señalará si la institución o dependencia revisada o visitada se hace acreedora a la cancelación de los fondos o, en su caso, que procede requerir la restitución de los mismos.

El Consejo Nacional resolverá en forma definitiva e inatacable sobre la existencia del incumplimiento y determinará, en su caso, la cancelación y, cuando proceda, la restitución de los recursos, con independencia de las responsabilidades que otras leyes establezcan.

De la suspensión o cancelación se dará cuenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Cuando el Consejo Nacional resuelva que procede requerir la restitución de los recursos utilizados en forma indebida o ilícita, las entidades federativas o, en su caso, municipios contarán con un plazo de 30 días naturales para efectuar el reintegro; en caso contrario, los recursos podrán descontarse de las participaciones o aportaciones que le correspondan para el siguiente ejercicio fiscal.

Las entidades federativas estarán representadas por los titulares de los poderes ejecutivos a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 12 de esta Ley, o por quien ellos designen, sin que pueda recaer dicha representación en un servidor público de menor jerarquía a la de titular de una de las secretarías competentes en la entidad respectiva para la aplicación de esta Ley.

## **TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS**

**Artículo 146.-** Para efectos de esta Ley, se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.

**Artículo 147.-** El Distrito Federal, los Estados y los Municipios coadyuvarán en la protección y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de las instalaciones estratégicas y para garantizar su integridad y operación.

**Artículo 148.-** El resguardo de las instalaciones estratégicas queda a cargo de la Federación, que se coordinará con las Instituciones locales y municipales correspondientes por razón del territorio en el ejercicio de esta función, las cuales garantizarán la seguridad perimetral y el apoyo operativo en caso necesario.







PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

El Ejecutivo Federal constituirá un Grupo de Coordinación Interinstitucional para las Instalaciones Estratégicas, que expedirá, mediante acuerdos generales de observancia obligatoria, la normatividad aplicable en la materia.

**Artículo 149.-** El Consejo Nacional establecerá los casos, condiciones y requisitos necesarios para el bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico para los fines de seguridad pública.

Las decisiones que en ese sentido emita el Consejo Nacional, deberán ser ejecutadas por las distintas Instituciones de Seguridad Pública que lo integran.

## **TITULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA**

**Artículo 150.-** Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local.

Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.

**Artículo 151.-** Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 152.-** Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se registrarán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables que se establecen para las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Centro Nacional de Información.

Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán la obligación de las empresas privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza.

### TRANSITORIOS

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes.

**SEGUNDO.-** El Ejecutivo Federal contará con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto para crear e instalar el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cual deberá acreditar a los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública y sus respectivos procesos de evaluación en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en operación del citado Centro Nacional.

**TERCERO.** De manera progresiva y en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el Consejo Nacional.

**CUARTO.-** Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el certificado serán





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**QUINTO.** Los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes estatales, en la rama correspondiente, en un plazo no mayor a un año.

**SEXTO.** Los servidores públicos que obtengan el certificado y que satisfagan los requisitos de ingreso y permanencia que se establecen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los ordenamientos legales federales y estatales aplicables, ingresarán o serán homologados al servicio de carrera, en las ramas ministerial, policial y pericial, según corresponda, en la jerarquía y grado, así como antigüedad y derechos que resulten aplicables, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

**SÉPTIMO.-** Las referencias realizadas en la presente Ley a la reinserción social, quedarán entendidas al término vigente readaptación social, toda vez que con este Decreto no entra en vigor el párrafo tercero del artículo 21 constitucional sujeto a la vacancia prevista en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

**OCTAVO.-** El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

**NOVENO.-** El Consejo Nacional y las Conferencias que prevé la presente Ley, deberán expedir las disposiciones a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo no mayor a nueve meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

**DÉCIMO.-** Por única ocasión, el Secretario Ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**DÉCIMO PRIMERO.**- Los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Secretario Ejecutivo de conformidad con la abrogada Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables, se transferirán al Secretariado Ejecutivo previsto en esta Ley, a la brevedad posible.

Lo mismo sucederá con los asuntos en trámite del Secretario Ejecutivo, salvo que pudiera causarse algún daño o menoscabo al servicio o a los intereses del Sistema.

Los derechos del personal del Secretario Ejecutivo que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, sea transferido, se respetarán conforme a la ley aplicable.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Se abroga la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

SALON DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- México, D.F., a 4 de diciembre de 2008.

DIP. CESAR HORACIO DUARTE JAQUEZ  
Presidente

DIP. JACINTO GOMEZ PASILLAS  
Secretario

Se remite a la H. Cámara de Senadores  
para sus efectos constitucionales  
México, D.F., a 4 de diciembre de 2008

Lic. Emilio Suarez Licona  
Secretario Interino de  
Servicios Parlamentarios

MAVA\*





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

## **DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

Honorable Asamblea,

La Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue turnada con fecha cuatro de diciembre del año en curso a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, las cuales se han avocado a revisar y analizar dicha propuesta normativa. Estas Comisiones desean destacar que dicho estudio se ha realizado por todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara y, asimismo, de manera intensa pero también integral y minuciosa, pues es el ánimo y propósito de todas las corrientes políticas expresadas en el Senado dotar a las autoridades que tienen a su cargo la función de la Seguridad Pública en el país de instrumentos ágiles y eficaces, con respeto a los derechos humanos, que permitan a los mexicanos una convivencia sana y armónica, en el clima de tranquilidad y paz delineado por nuestra Constitución Política. De conformidad con los artículos 86, 89, 90 fr. XXVIII; 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, para fundar el presente dictamen se exponen los siguientes,

### **I. Antecedentes.**

En sesión celebrada en fecha 18 de septiembre de 2008 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en pleno ejercicio del tercer año de la LX Legislatura, el Diputado Andrés Lozano Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por diversos Diputados del mismo grupo parlamentario. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva acordó se turnara dicha Iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El 2 de octubre del mismo año, se recibió del Poder Ejecutivo Federal una Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Con fecha 23 de octubre de 2003 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó una modificación para turnar a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Cuenta Pública la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el titular del Ejecutivo Federal, y en lo que respecta a la adición de diversos artículos al Código Penal Federal, a la Comisión de Justicia.

Posteriormente, el Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió a la Comisión de Seguridad Pública propuesta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a las Comisiones antes designadas.

El 4 de diciembre es aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados por 318 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones el Dictamen del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, remitiendo la Mesa Directiva al Senado de la República la Minuta del Proyecto de Decreto correspondiente.

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado turnó a la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, la Minuta que contiene el Proyecto de Decreto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estas Comisiones valoraron dicha Minuta al tenor de las siguientes,

## **II. Consideraciones.**

Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera coinciden en señalar que la Minuta estudiada incorpora las propuestas formuladas por las distintas fracciones que conforman el Congreso de la Unión y la contenida en la Iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Federal, las cuales fueron ampliamente debatidas por las comisiones dictaminadoras de



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

nuestra Colegisladora. Reconocen que la Minuta estructura los contenidos indispensables para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el Título Primero, *Disposiciones Preliminares*, la Ley establece las disposiciones que orientan el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios a efecto de hacerlo efectivo, de igual forma define las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. No pasa desapercibido para estas comisiones dictaminadoras que la Minuta supera a la ley en vigor ya que se ocupa de la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no sólo de su integración y funcionamiento. Establece que la seguridad pública comprende la prevención especial y general de los delitos así como la investigación para hacerla efectiva. Clarifica la atención a las causas del delito al prescribir el deber del Estado de desarrollar políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral. Introduce un catálogo de definiciones legales que permite mayor claridad al ordenamiento y, finalmente, consagra la rendición de cuentas como uno de los pilares de la participación ciudadana. En relación a la coordinación, estas Comisiones Unidas estiman conveniente que se desarrolle, como se hace en la Minuta a estudio, los nuevos compromisos que integran la coordinación de los participantes en el sistema, entre los que destaca precisar que las políticas de seguridad pública serán integrales, sistemáticas, continuas y evaluables. Se precisa entre los instrumentos programáticos el Nacional de Procuración de Justicia. Se distribuyen actividades específicas entre los integrantes del Sistema. Se establecen, controlan y muy importante se resguardan las bases de datos criminalísticos y del personal que labora en el sistema. Se establece la participación en la vigilancia de las instalaciones estratégicas. Se evalúa la aplicación de los fondos y se busca fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos y sus familias.

El Título Segundo *De las Instancias de Coordinación y la Distribución de Competencias del Sistema Nacional de Seguridad Pública*; prevé la creación del Consejo Nacional como máxima instancia de deliberación del Sistema; los Órganos e Instancias Auxiliares para el impulso y desarrollo de las distintas materias de coordinación a que se refiere la Ley, dentro de las cuales se plantean las conferencias de Secretarios de Seguridad Pública, la de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario, la de Seguridad Pública Municipal y el establecimiento de los Consejos Locales e Instancias Regionales, encargados de la coordinación, planeación y supervisión del





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

sistema en sus respectivos ámbitos de competencia. Ante la importancia de la seguridad como uno de los principales retos del país, las Comisiones dictaminadoras comparten la disposición de la Minuta de que el Titular del Ejecutivo presida el Consejo, del cual forme parte también el Secretario de Gobernación quien suplirá al Presidente en sus ausencias. Positiva se considera la presencia permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Consejo, ya que el combate a la delincuencia debe darse en estricto apego a nuestra Constitución Política y respeto absoluto a las garantías que ésta consagra. En cuanto a la ampliación de atribuciones del Consejo Nacional, estas Comisiones coinciden con lo plasmado en la Minuta en el sentido de que se promuevan políticas de atención a las víctimas de los delitos por razón de elemental justicia; que se homologuen y desarrollen los modelos policial, ministerial y parcial para lograr calidad en los servicios que prestan las instituciones. Convencidos los integrantes de estas Comisiones Unidas de que la solvencia presupuestal constituye la base realista y objetiva de la función de la seguridad pública, comparten que el Consejo tenga la atribución de vigilar que en los criterios de distribución de los recursos se observe la Ley de Coordinación Fiscal así como la cancelación de las aportaciones a entidades federativas y municipios que no cumplan los compromisos con el Sistema. Favorable para el cumplimiento de los acuerdos resulta para estas Dictaminadoras el contemplar en este Título tanto al Secretariado Ejecutivo como un órgano operativo con autonomía técnica, de gestión y presupuestal como a las Comisiones Permanentes de Información, de Certificación y Acreditación y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Por otra parte, es acertado ampliar las funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En particular, tomando en cuenta la escasa preparación de los investigadores y Agentes del Ministerio Público el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia. Para abatir la impunidad se pondera necesaria la adopción de tecnologías de la información que permitan agilizar los procedimientos penales, juicios de amparo y otros procesos para abatir la impunidad y, con ello, recobrar la confianza ciudadana en la presentación de denuncias. Estas Comisiones desean poner énfasis en el compromiso de los tres poderes con los derechos humanos, al reiterar en este dictamen el fomento de una cultura de respeto, como función de las Procuradurías de Justicia del país. Por lo que hace a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública valoramos entre otros la nueva función de desarrollar las especialidades policiales de alto desempeño contra los delitos de impacto y el servicio para la localización de personas y bienes, seguros de que coadyuvarán a devolver la





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

tranquilidad a las familias mexicanas. El establecimiento claro en la ley de promover el trabajo comunitario y de convenios para que los sentenciados extingan su pena en establecimientos de jurisdicción diversa es bien vista por estas Comisiones ya que desde luego favorece la reinserción social. De importancia estratégica total consideran estas Comisiones Unidas a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, ya que la primera línea para hacer frente a la delincuencia es precisamente la autoridad municipal, que es la que cuenta también con el estado de fuerza mayor, pero con un bajo perfil. De ahí que se estima favorable para los fines de la seguridad pública todas las funciones de dicha Conferencia y en particular el intercambio de experiencias que habrá de permitir la difusión de casos de éxito entre los Municipios, así como la homologación del Desarrollo Policial. Para combatir a la delincuencia se requiere que las autoridades estén alineadas de acuerdo a su esfera de competencia y con una organización que les de cohesión para ejercer sus funciones de manera ágil, oportuna y efectiva. Por ello, consideramos que el esquema de distribución de competencias planteado en la Minuta presenta dichas características ya que confiere a la Federación el aseguramiento de la coordinación mediante propuestas al Consejo Nacional en materia de Desarrollo Policial, Profesionalización, vigilancia y protección de instalaciones estratégicas principalmente, reservando a las entidades el contribuir a la coordinación y aplicar los modelos, lineamientos y datos acordados por la Federación, los propios estados y municipios al seno del Consejo Nacional.

El Título Tercero, *Disposiciones Comunes a los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública*, con el propósito de que los mexicanos tengan la seguridad de que antes, durante y después de algún evento delictivo las autoridades competentes ejercerán sus atribuciones cabalmente, estas Comisiones Unidas ratifican las 39 obligaciones fijadas en la Minuta a cargo de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a efecto de garantizar los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Especial aprobación de los miembros de estas Comisiones merece el haber incluido en la Minuta reglas para el uso de la fuerza, que será legítimo sólo ante el riesgo de los derechos de personas y únicamente de manera racional, proporcional, congruente, oportuna y con respeto estricto a los derechos humanos. Para lograr detenciones más rápido es esencial que las integrantes del Sistema compartan información sobre los movimientos de la delincuencia en línea y en tiempo real, para lo cual resulta favorable el Informe Policial Homologado



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

contemplado en el Minuta que se analiza por estas Comisiones. A fin de que los servidores públicos estén en aptitud de desarrollar sus funciones, estas Comisiones consideran imprescindible para que encuentren satisfacción y motivación en su trabajo, tanto los sistemas complementarios de seguridad social y reconocimientos como el que las Academias e Institutos presten su actividad en torno a Programas Rectores de Profesionalización.

El Título Cuarto, *Del Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia*, el cual comprende los requisitos de ingreso al servicio de carrera de las Instituciones de procuración de justicia, así como el desarrollo y terminación del servicio de carrera, la profesionalización y certificación del personal en dichas instituciones. Se trata de que en el servicio estén no sólo lo más aptos con verdadera vocación hacia la ciudadanía, sino gente honesta que anteponga la tranquilidad de la población a desvíos corruptores provenientes de la delincuencia.

El Título Quinto, *Del Desarrollo Policial*, define un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las Instituciones y tiene por objeto, garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio, y garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales.

Se precisa en la Ley General contenida en la Minuta a estudio que dicho ordenamiento es aplicable a los elementos de los tres órdenes de gobierno que desarrollen funciones de seguridad pública, incluidas las de investigación para la prevención y combate de los delitos; y establece las materias que son objeto de coordinación intergubernamental en materia del desarrollo de las policías, su servicio de carrera, así como las atribuciones que tienen la Federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios para llevar a cabo dicha coordinación.

Estas Comisiones comparten la convicción de que la Carrera Policial tenga carácter obligatorio y permanente en las Instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lo cual se define un marco normativo general para asegurar que sólo ingresen a las instituciones policiales las personas con el perfil adecuado. El mismo Título define los requisitos de la carrera policial: el



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

ingreso y permanencia, la selección y sus criterios generales, la definición del personal que se considera activo en el servicio; la certificación de los elementos de las corporaciones de seguridad pública y sus mandos, los estímulos asignables a los elementos con trayectorias distinguidas, las reglas generales para las promociones y ascensos, las normas de conclusión del servicio de los elementos y las previsiones y normas que determinan cuándo podrá darse de baja a un elemento del servicio.

Lo anterior, bajo la perspectiva de que la carrera policial es el elemento básico para la formación de los integrantes de las instituciones policiales, a fin de cumplir con los principios de actuación y desempeño.

No obstante y a efecto de que en las Instituciones estén los Integrantes con el más alto grado de compromiso y desempeño en el servicio público, se prevé un régimen disciplinario enfocado a asegurar que la actuación de los integrantes de las instituciones policiales esté regida por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, para lo cual establece los deberes mínimos que los elementos de las corporaciones de seguridad pública deberán cumplir, así como los procedimientos genéricos para calificar y aplicar las sanciones que correspondan a la inobservancia de las normas establecidas en la Ley y por las infracciones en que se incurra durante el desempeño dentro del servicio.

El Título Sexto, *Del Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza*, que comprende las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios, tendentes a cumplir con los objetivos de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

En la Ley se establece que corresponde al Centro Nacional de Evaluación y Confianza, proponer los criterios mínimos para la evaluación de los servidores públicos; se promueve a través de esta instancia la homologación, validación y actualización en todo el país, de los procedimientos y criterios de evaluación de los servidores públicos. Estas Comisiones Unidas desean destacar que en los procesos de evaluación y control de confianza intervendrán instituciones privadas que cuenten con la acreditación vigente, lo que permite que dicha evaluación se practique por un ente ajeno a la institución cuyos integrantes se verifican en cuanto a la confianza.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Título Séptimo, *De la Información sobre Seguridad Pública*, para ir un paso adelante de los movimientos de la delincuencia se requiere información y que dichos datos sean dinámicos, es decir, que se capturen oportunamente y se actualicen. Es así que estas Comisiones celebran que la Minuta contenga una preceptiva mucho más extensa relativa a la información que la ley en vigor y coinciden en que los tres órdenes de gobierno tendrán el deber de suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la información sobre la seguridad pública conformando con esta captura diaria de datos el Sistema Único de Información Criminal, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y el Registro Nacional de Armamento y Equipo. Estas bases de datos permitirán cruzar información en línea y en tiempo real que ahorre tiempo valioso a los investigadores, que tendrán a la mano modos de operar, vínculos, media filiación en unos cuantos segundos que son cruciales para el éxito de una indagatoria. Los legisladores de estas Comisiones apoyamos que el servicio de llamadas de emergencia y de denuncia anónima operará con un número único de atención a la ciudadanía. Estas Comisiones estiman que en razón de la movilidad y amplios recursos de que dispone la delincuencia planeando, preparando y concretando delitos en diversas entidades federativas se hace necesario que se tenga información al día, especialmente cuando alguna institución policial integrante hace una detención subiéndola de inmediato al Sistema, para abatir la impunidad por medio del conocimiento de otras autoridades a efecto de que dicho detenido responda de todos los delitos que haya cometido independientemente de la entidad. Coincidimos, pues, con el Registro Administrativo de Detenciones en vista que está orientado a que los familiares sepan del paradero y condición jurídica del detenido y toda vez que la Minuta expresamente señala que la información será confidencial y reservada y que no será utilizada como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

El Título Octavo, *De la Participación de la Comunidad*, prevé el establecimiento de mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la seguridad pública, privilegiando con ello la participación ciudadana, en la inteligencia de que sociedad y derecho constituyen un binomio indisoluble cuya dinámica debe estar encaminada a un mismo fin. El servicio orientado a las necesidades del usuario permite la mejora continua. De ahí que estas Comisiones coinciden con la Minuta en que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana reciba reportes sobre emergencias, faltas y delitos y tenga comunicación con las instituciones de seguridad pública, de salud, de protección civil y las demás



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

asistenciales públicas y privadas, para brindar una atención integral a la comunidad. Estas Comisiones desean resaltar el precepto de la Minuta que contempla el establecimiento de políticas públicas de atención a las víctimas en las legislaciones locales, coincidiendo con la atención pronta y expedita de las denuncias, pues éstas son la base para acabar con la impunidad. Hay que facilitar la denuncia para acabar con la elevada cifra negra.

El Título Noveno, *De las Responsabilidades de los Servidores Públicos*, tiene como finalidad asegurar el debido manejo o aplicación de los recursos de los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública; así como preservar la información del Sistema como Bien Jurídico Tutelado; para ello tipifica los delitos en materia de seguridad pública, como delitos especiales.

El Título Décimo, *De los Fondos de Ayuda Federal*, Estas Comisiones Unidas estiman que sin solvencia presupuestal la lucha contra el crimen queda en buenas intenciones. Por ello, coinciden con la Minuta en que los fondos para la seguridad pública, cuya composición se clarifica en la misma, queden sujetos a la Ley de Coordinación Fiscal y al presente ordenamiento, precisando que serán distribuidos según los criterios aprobados por el Consejo Nacional para ser destinados exclusivamente para los fines de la seguridad pública. La preceptiva se completa fijando facultades al Secretario Ejecutivo del Sistema para solicitar informes o practicar revisiones tendentes a verificar el destino legal y oportuno de los recursos. Para garantizar que las autoridades se conduzcan con responsabilidad, coincidimos estas Comisiones Unidas en la cancelación de las ministraciones de los recursos con carácter de no recuperables o acumulables, pues el subejercicio no es aceptable mucho menos tratándose de los fondos para una función primaria del Estado como la seguridad pública.

El Título Décimo Primero, *De las Instalaciones Estratégicas*, relativo a la protección, supervisión y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquéllas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano en términos de la Ley de Seguridad Nacional.





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Título Décimo Segundo, *De los Servicios Privados de Seguridad*, dispone las facultades de la Federación y Entidades Federativas en la autorización de los servicios privados de seguridad, así como la participación de éstos en cuanto son auxiliares de la función de seguridad pública.

En suma, este Dictamen es tendente a satisfacer la demanda de seguridad de la ciudadanía a partir de una nueva preceptiva con las disposiciones siguientes:

Que garantice la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, gracias a un esquema equilibrado y razonable de corresponsabilidad.

Que permita la depuración y profesionalización, a través de una Carrera Policial consolidada, para que las instituciones de seguridad y procuración de justicia recuperen su funcionalidad lo más pronto posible.

Que dote a los integrantes de las instituciones de seguridad de un catálogo claro de sus obligaciones, de un régimen disciplinario ágil y congruente con la naturaleza del servicio encomendado y un sistema complementario de seguridad social y reconocimientos que les brinde satisfacción y motivación en el trabajo.

Que con el uso de tecnologías de la información, las instituciones integrantes del Sistema dispongan de información relevante para el combate a la delincuencia en línea y tiempo real, traduciendo las cuantiosas inversiones en este renglón en beneficios concretos y tangibles para la ciudadanía.

Que permita a la ciudadanía, organizada o no, que las autoridades encargadas de la seguridad pública le rindan cuentas.

Que la solvencia presupuestal sea la base realista y objetiva del combate a la delincuencia, con fondos para la seguridad destinados a sus fines y cancelación de ministraciones de recursos a las autoridades incumplidas.

Las Comisiones Unidas hemos realizado diversas adecuaciones a la Minuta analizada, acordes con la redacción de la misma para precisar el sentido y alcance de sus preceptos, principalmente en una materia como es la seguridad pública que incide en las garantías individuales de los gobernados. De igual modo, en diversos preceptos se ha clarificado la correlación de diversas facultades de los integrantes del sistema con otros ordenamientos. Finalmente, se armoniza esta Ley con los preceptos contenidos en la Miscelánea Penal recientemente aprobada en esta Cámara, en particular con las obligaciones de las policías cuando actúen bajo el mando del Ministerio Público.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los preceptos que fueron adecuados son: 7, fracción X; 10 último párrafo; 12 último párrafo; 14 fracciones II y X; 19 fracción I; 32 fracción II; 40 fracciones II, V, XIII y XXI; 41 fracciones IV y VI y último párrafo; 59 fracción I inciso d); el 114 fracción I; 136 último párrafo; 137, primer renglón; 138 primer párrafo último renglón; 152, último párrafo.

Así, por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera, someten a la consideración de esta H. Asamblea y para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, el siguiente :



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

## **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

**Artículo Único.-** Se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

### **LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

#### **TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES**

**Artículo 1.-** La presente ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

**Artículo 2.-** La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 3.-** La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

**Artículo 4.-** El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública.

La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 5.-** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

- I.** Academias: a las Instituciones de Formación, de Capacitación y de Profesionalización Policial;
- II.** Bases de Datos Criminalísticas y de Personal: Las bases de datos nacionales y la información contenida en ellas, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema.
- III.** Carrera Ministerial: al Servicio Profesional de Carrera Ministerial;
- IV.** Carrera Pericial: al Servicio Profesional de Carrera Pericial;
- V.** Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial;
- VI.** Conferencias Nacionales: a las Conferencias a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley;
- VII.** Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Seguridad Pública;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- VIII.** Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal;
- IX.** Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél;
- X.** Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;
- XI.** Institutos: a los órganos de las instituciones de seguridad pública de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, encargados de la formación y actualización especializada de aspirantes y servidores públicos de las funciones ministerial, pericial y de policía ministerial;
- XII.** Programa Rector: al conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia, respectivamente;
- XIII.** Registro Nacional: el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XIV.** Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal;
- XV.** Secretario Ejecutivo: el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema;
- XVI.** Sistema: al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 6.-** Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se registrá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 7.-** Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

- I.** Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines;
- II.** Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;
- III.** Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;
- IV.** Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación;
- V.** Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;
- VI.** Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;
- VII.** Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;
- VIII.** Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública;
- IX.** Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;
- X.** Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XI.** Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;
- XII.** Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;

- XIII.** Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;
- XIV.** Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y
- XV.** Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.

**Artículo 8.-** La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con respeto a las atribuciones que la Constitución establece para las instituciones y autoridades que integran el Sistema.

**Artículo 9.-** Las Conferencias Nacionales, los consejos locales y demás instancias del Sistema, observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional.

En caso de contradicción entre las resoluciones y acuerdos generales adoptados por las conferencias, el Consejo Nacional determinará la que deba prevalecer.

## **TÍTULO SEGUNDO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

### **CAPÍTULO I De la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 10.-** El Sistema se integrará por:

- I.** El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;
- II.** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- III.** La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;
- IV.** La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;
- V.** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;
- VI.** Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y
- VII.** El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

**Artículo 11.-** Las Conferencias Nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Nacional.

El Secretariado Ejecutivo se coordinará con los Presidentes de las Conferencias Nacionales para dar seguimiento a las resoluciones que se adopten por el Consejo Nacional, en los términos de esta Ley.

## **CAPÍTULO II**

### **Del Consejo Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 12.-** El Consejo Nacional estará integrado por:

- I.** El Presidente de la República, quien lo presidirá;
- II.** El Secretario de Gobernación;
- III.** El Secretario de la Defensa Nacional;
- IV.** El Secretario de Marina;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- V.** El Secretario de Seguridad Pública;
- VI.** El Procurador General de la República;
- VII.** Los Gobernadores de los Estados;
- VIII.** El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y
- IX.** El Secretario Ejecutivo del Sistema.

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente.

El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico. Así mismo el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de este Consejo.

**Artículo 13.-** El personal de confianza de las unidades administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los Centros Nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el Acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.

**Artículo 14.-** El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

- I.** Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública;
- II.** Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- III.** Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad Pública;
- IV.** Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito;
- V.** Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;
- VI.** Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;
- VII.** Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;
- VIII.** Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los Acuerdos Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia;
- IX.** Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;
- X.** Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XI.** Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XII.** Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de gobierno;
- XIII.** Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;
- XIV.** Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública;





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- XV.** Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de Seguridad Pública, previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley;
- XVI.** Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública;
- XVII.** Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;
- XVIII.** Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y
- XIX.** Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

**Artículo 15.-** El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en las comisiones previstas por esta ley. El Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.

El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes del Consejo.

Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema.

Los miembros del Consejo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.

**Artículo 16.-** Son comisiones permanentes del Consejo Nacional, las siguientes:

- I.** De Información;
- II.** De Certificación y Acreditación,
- III.** De Prevención del Delito y Participación Ciudadana.





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estas comisiones se coordinarán con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de los Centros Nacionales que integran el Secretariado Ejecutivo. El Consejo Nacional determinará el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las mismas.

En las Comisiones podrán participar expertos de instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionados con su objeto.

Los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán designar por oficio a sus representantes permanentes ante el Secretario Ejecutivo del Sistema, los cuales deberán ser servidores públicos con un nivel jerárquico igual o superior a Director General en las Secretarías competentes en la entidad federativa respectiva, para la aplicación de esta Ley.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 17.-** El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos Centros.

El Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- I.** Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no tengan otra nacionalidad y estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
- II.** Tener más de treinta años de edad;
- III.** Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- IV.** Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y
- V.** No haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitados como servidores públicos.

**Artículo 18.-** Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:

- I.** Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente;
- II.** Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema;
- III.** Formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización;
- IV.** Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento;
- V.** Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;
- VI.** Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;
- VII.** Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema;
- VIII.** Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional;
- IX.** Proponer al Consejo Nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública;
- X.** Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo;
- XI.** Proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública en los términos de la ley;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- XII.** Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema en los términos de ley;
- XIII.** Presentar al Consejo Nacional los informes de las Conferencias Nacionales, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;
- XIV.** Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional;
- XV.** Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema, para fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial;
- XVI.** Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del Consejo, en términos de las disposiciones legales aplicables;
- XVII.** Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo y las demás disposiciones aplicables;
- XVIII.** Someter a consideración del Consejo Nacional el proyecto de resolución fundado y motivado de cancelación y, cuando proceda, la restitución de la ministración de aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso, municipios;
- XIX.** Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta Ley;
- XX.** Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;
- XXI.** Elaborar y someter a consideración del Consejo Nacional, opinión fundada y razonada por la que se recomiende la remoción de los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XXII.** Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como por el uso ilícito o indebido de los



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, e informar al respecto al Consejo Nacional;

- XXIII.** Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema;
- XXIV.** Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública, y
- XXV.** Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Nacional o su Presidente.

**Artículo 19.-** El Centro Nacional de Información será el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

- I.** Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema en términos que señale el reglamento;
- II.** Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del Sistema;
- III.** Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos;
- IV.** Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada;
- V.** Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad con la Ley de la materia, y
- VI.** Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos.

**Artículo 20.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- I.** Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;
- II.** Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;
- III.** Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:
  - a)** Prevenir la violencia infantil y juvenil;
  - b)** Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
  - c)** Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y
  - d)** Garantizar la atención integral a las víctimas
- IV.** Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;
- V.** Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;
- VI.** Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;
- VII.** Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;
- VIII.** Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;
- IX.** Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley, y



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- X.** Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.

**Artículo 21.** El Centro Nacional de Certificación y Acreditación será el responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Este Centro contará con un órgano consultivo integrado por las instituciones públicas y privadas que se determinen en el Reglamento de este ordenamiento.

**Artículo 22.** Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal, realizan sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para tal efecto, tendrá las facultades siguientes:

- I.** Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las conferencias.
- II.** Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos;
- III.** Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- IV.** Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- V.** Evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza que en el ámbito de Seguridad Pública operen instituciones privadas que así lo soliciten y cumplan con la normatividad correspondiente;
- VI.** Verificar periódicamente que los Centros de referencia apliquen los procesos certificados, conforme a los lineamientos y estándares que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación establezca;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- VII.** Apoyar a los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- VIII.** Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de Evaluación y Control de Confianza;
- IX.** Establecer los requisitos que deben contener los certificados Ministerial, Policial y Pericial y aprobar sus características, y
- X.** Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.

#### **CAPÍTULO IV**

##### **De la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.**

**Artículo 23.-** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estará integrada por los titulares de las Instituciones de Procuración de Justicia de la Federación, el Distrito Federal y los Estados, y será presidida por el Procurador General de la República.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

**Artículo 24.-** El Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia podrá invitar a personas e instituciones por razón de los asuntos a tratar.

El Procurador General de Justicia Militar será invitado permanente de esta Conferencia.

**Artículo 25.-** Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

- I.** Formular políticas generales de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia;
- II.** Promover la coordinación y colaboración entre las Instituciones de Procuración de Justicia y las Instituciones Policiales;





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- III.** Formular propuestas para la integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia y demás instrumentos programáticos relacionados con el ámbito de su competencia, así como darles seguimiento;
- IV.** Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- V.** Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de Procuración de Justicia;
- VI.** Integrar los Comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;
- VII.** Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación conjuntos;
- VIII.** Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IX.** Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
- X.** Promover la homologación de los procedimientos de control de confianza de los Integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia, de conformidad con las disposiciones aplicables;
- XI.** Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de procuración de justicia, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;
- XII.** Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- XIII.** Impulsar las acciones necesarias para promover la denuncia de los delitos y la participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia;
- XIV.** Determinar las políticas y lineamientos sobre datos de procedimientos penales, juicios de amparo y otros procesos judiciales en los que intervenga el Ministerio Público, que se integren a las bases de datos que establece el presente ordenamiento;
- XV.** Fijar criterios de cooperación y coordinación para la entrega de indiciados, procesados y sentenciados; el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales; el aseguramiento de bienes instrumento, objeto o producto de delitos y el desahogo de diligencias judiciales, ministeriales y periciales;
- XVI.** Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y garantías reconocidas en la legislación vigente;
- XVII.** Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas, atención a víctimas y ofendidos de delitos;
- XVIII.** Proponer programas de cooperación internacional en materia de procuración de justicia;
- XIX.** Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de extradición y asistencia jurídica;
- XX.** Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito;
- XXI.** Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- XXII.** Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;
- XXIII.** Promover la uniformidad de criterios jurídicos, y
- XXIV.** Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 26.-** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se reunirá cada seis meses de manera ordinaria. El Presidente de dicha Conferencia podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo estime necesario.

## **CAPÍTULO V**

### **De la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública**

**Artículo 27.-** La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública estará integrada por los titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la Federación, los Estados y el Distrito Federal y será presidida por el Secretario de Seguridad Pública Federal.

La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

Los titulares de las dependencias u órganos en que se integren los cuerpos de policía de los municipios, podrán participar en la Conferencia, de conformidad con las reglas que la misma establezca.

**Artículo 28.-** El Presidente de la Conferencia podrá invitar a personas e Instituciones por razón de los asuntos a tratar.

**Artículo 29.-** Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

- I.** Impulsar la coordinación de las actuaciones de las dependencias encargadas de la seguridad pública;
- II.** Promover la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las Instituciones Policiales, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
- III.** Elaborar propuestas de reformas a leyes en materia de Seguridad Pública;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- IV.** Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales, cualquiera que sea su adscripción;
- V.** Proponer medidas para vincular el Sistema con otros nacionales, regionales o locales;
- VI.** Proponer la adopción y aplicación de políticas y programas de cooperación internacional sobre Seguridad Pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;
- VII.** Promover criterios uniformes para el desarrollo policial en términos de la presente Ley;
- VIII.** Integrar los Comités que sean necesarios en la materia;
- IX.** Desarrollar las especialidades policiales de alto desempeño para hacer frente a los delitos de impacto nacional e internacional;
- X.** Emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública federales, locales y municipales;
- XI.** Impulsar las acciones necesarias para que los integrantes del Sistema establezcan un servicio para la localización de personas y bienes;
- XII.** Promover el establecimiento de un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre emergencias, faltas y delitos;
- XIII.** Procurar que en las Instituciones Policiales se aplique homogénea y permanentemente, el protocolo de certificación correspondiente, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- XIV.** Proponer los requisitos que debe contener el Certificado Único Policial;
- XV.** Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las Instituciones Policiales y promover su aplicación;
- XVI.** Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones Policiales y para el manejo de información;
- XVII.** Proponer mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos, a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- XVIII.** Proponer reglas para coadyuvar en la vigilancia y realización de acciones conjuntas para proteger las instalaciones estratégicas del país, en los términos de la legislación aplicable, y
- XIX.** Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

## **CAPÍTULO VI**

### **De la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario**

**Artículo 30.-** La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el titular de la Secretaría.

**Artículo 31.-** Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

- I.** Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional;
- II.** Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social;
- III.** Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de reinserción social;
- IV.** Proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de reinserción social;
- V.** Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción social en las legislaciones aplicables;
- VI.** Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- VII.** Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticos y de personal, y
- VIII.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.

## **CAPÍTULO VII**

### **De la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal**

**Artículo 32.-** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, estará integrada por los Presidentes Municipales y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal que participarán de conformidad con las siguientes reglas:

- I.** Dos Presidentes municipales, de cada Estado, designados por el Consejo Local de Seguridad Pública correspondiente, y
- II.** Dos titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal serán nombrados por el Consejo Local de Seguridad Pública.

Dicha Conferencia Nacional contará con un Presidente, que será designado de entre sus miembros por el pleno de misma.

La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

**Artículo 33.-** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, tendrá las siguientes funciones mínimas:

- I.** Emitir sus reglas de organización y funcionamiento;
- II.** Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en materia de Seguridad Pública;
- III.** Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- IV.** Elaborar propuestas de reformas a las normas de aplicación municipal en materia de Seguridad Pública;
- V.** Intercambiar experiencias y apoyo técnico entre los Municipios;
- VI.** Proponer políticas públicas en materia de Seguridad Pública;
- VII.** Colaborar con las instituciones publicas y privadas, en la ejecución de programas tendientes a prevenir el delito;
- VIII.** Promover en el ámbito Municipal, la homologación del Desarrollo Policial;
- IX.** Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre la materia de Seguridad Pública Municipal, y
- X.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales o el consejo nacional.

## **CAPÍTULO VIII**

### **De los Consejos Locales e Instancias Regionales de Coordinación**

**Artículo 34.-** En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno. Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En los consejos locales de cada Estado participarán los municipios en los términos de la legislación de cada entidad federativa. En el caso del Distrito Federal, participarán los titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales, de conformidad con la legislación aplicable. Estos Consejos invitarán a cada sesión al menos a dos representantes de la sociedad civil o de la comunidad, de conformidad con los temas a tratar. Su participación será de carácter honorífico.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los Consejos Locales y las Instancias Regionales de Coordinación se organizarán, de modo que permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura del Sistema e integración del Consejo Nacional.

Los Consejos Locales determinaran su organización y la de las Instancias Regionales de Coordinación correspondientes en términos de esta Ley.

**Artículo 35.-** Los Consejos Locales se integrarán por las Instituciones de Seguridad Pública de la entidad de que se trate y de la Federación.

Además, podrán invitar a personas e instituciones, de acuerdo con los temas a tratar.

**Artículo 36.-** Cuando para el cumplimiento de la función de Seguridad Pública sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente, en las que participarán las Instituciones de Seguridad Pública correspondientes.

Del mismo modo, podrán establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos estatales correspondientes. En el caso de las zonas conurbadas entre dos o más entidades federativas, se podrán suscribir convenios e instalar instancias regionales con la participación de los municipios respectivos y de los órganos político administrativos, tratándose del Distrito Federal.

**Artículo 37.-** Los Consejos Locales y las instancias regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines de la Seguridad Pública, en sus ámbitos de competencia.

Los miembros del Consejo designarán a uno de sus servidores públicos como enlace responsable de atender y dar seguimiento a la operación del Sistema en su respectiva entidad federativa.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dichos enlaces están obligados a proporcionar la información requerida por el Secretariado Ejecutivo, en un plazo razonable, que no excederá de treinta días naturales, salvo justificación fundada.

**Artículo 38.-** Los Consejos Locales y las instancias regionales podrán proponer al Consejo Nacional y a las Conferencias Nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.

## **CAPÍTULO IX**

### **De la distribución de competencias**

**Artículo 39.-** La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

**A.** Corresponde a la Federación, por conducto de las autoridades competentes:

**I.** Proponer las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios;

**II.** Respecto del Desarrollo Policial:

**a)** En materia de Carrera Policial, proponer al Consejo Nacional:

**1.-** Las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los Integrantes de las Instituciones Policiales, de acuerdo al Modelo Policial, conforme a la normatividad aplicable;

**2.-** Los lineamientos para los procedimientos de Carrera Policial que aplicarán las autoridades competentes;

**b)** En materia de Profesionalización, proponer al Consejo Nacional:

**1.-** El Programa Rector que contendrá los aspectos de formación, capacitación, adiestramiento, actualización e investigación académica, así como integrar las que formulen las instancias del Sistema;

**2.-** Los procedimientos aplicables a la Profesionalización;





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- 3.-** Los criterios para el establecimiento de las Academias e Institutos, y
- 4.-** El desarrollo de programas de investigación y formación académica.
- c)** En materia de Régimen Disciplinario, proponer al Consejo Nacional los lineamientos para la aplicación de los procedimientos respectivos.
- III.** Coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, y
- IV.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales.
- B.** Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:
  - I.** Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que deriven de ésta;
  - II.** Contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación del Sistema;
  - III.** Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario;
  - IV.** Constituir y operar las Comisiones y las Academias a que se refiere esta Ley;
  - V.** Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de personal;
  - VI.** Designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la información a que se refiere esta Ley;
  - VII.** Integrar y consultar en las bases de datos de personal de Seguridad Pública, los expedientes de los aspirantes a ingresar en las Instituciones Policiales;
  - VIII.** Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- IX.** Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo Policial, Ministerial y Pericial;
- X.** Establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable;
- XI.** Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo Policial para el registro y seguimiento, en las bases de datos criminalísticos y de personal de Seguridad Pública;
- XII.** Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y administración;
- XIII.** Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las Instalaciones Estratégicas del país, y
- XIV.** Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.

Los Estados y los Municipios podrán coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Leyes Estatales de Seguridad Pública podrán establecer la posibilidad de coordinación, y en su caso, los medios para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre un Estado y sus Municipios.

### **TÍTULO TERCERO**

#### **DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

#### **CAPÍTULO I**

##### **De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública**



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 40.-** Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

- I.** Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;
- II.** Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;
- III.** Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
- IV.** Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
- V.** Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;
- VI.** Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
- VII.** Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;
- VIII.** Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- IX.** Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
- X.** Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias;
- XI.** Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;
- XII.** Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
- XIII.** Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
- XIV.** Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
- XV.** Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;
- XVI.** Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;
- XVII.** Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;
- XVIII.** Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;
- XIX.** Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables;
- XX.** Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las Instituciones;
- XXI.** Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;

- XXII.** Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda;
- XXIII.** Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;
- XXIV.** Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones;
- XXV.** Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes;
- XXVI.** Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio;
- XXVII.** No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y
- XXVIII.** Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 41.-** Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

- I.** Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- II.** Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes;
- III.** Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;
- IV.** Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;
- V.** Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
- VI.** Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;
- VII.** Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;
- VIII.** Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
- IX.** Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;
- X.** Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y
- XI.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

En los casos en que esté en riesgo el orden público, se podrá hacer uso legítimo de la fuerza por los integrantes de las instituciones policiales, siempre que se haga de manera racional, proporcional, congruente, oportuna y con pleno respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.

**Artículo 42.-** El documento de identificación de los integrantes de las instituciones Seguridad Pública deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como, las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.

Todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente.

**Artículo 43.-** La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:

- I.** El área que lo emite;
- II.** El usuario capturista;
- III.** Los Datos Generales de registro;
- IV.** Motivo, que se clasifica en;
  - a)** Tipo de evento, y
  - b)** Subtipo de evento.
- V.** La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
- VI.** La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos.
- VII.** Entrevistas realizadas, y
- VIII.** En caso de detenciones:



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- a) Señalar los motivos de la detención;
- b) Descripción de la persona;
- c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
- d) Descripción de estado físico aparente;
- e) Objetos que le fueron encontrados;
- f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
- g) Lugar en el que fue puesto a disposición.

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

**Artículo 44.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán las sanciones aplicables al incumplimiento de los deberes previstos en esta ley, los procedimientos y los órganos competentes que conocerán de éstos. Las sanciones serán al menos, las siguientes:

- a) Amonestación;
- b) Suspensión, y
- c) Remoción.

## **CAPÍTULO II**

### **De los Sistemas Complementarios de Seguridad Social y Reconocimientos**

**Artículo 45.-** Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 46.-** Las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en esta Ley, realizarán y someterán a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión, actualización y fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.

### **CAPÍTULO III**

#### **De las Academias e Institutos**

**Artículo 47.-** La Federación y las entidades federativas establecerán y operarán Academias e Institutos que serán responsables de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización que tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

- I.** Aplicar los procedimientos homologados del Sistema;
- II.** Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos;
- III.** Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial, pericial y policial, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IV.** Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Profesionalización;
- V.** Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;
- VI.** Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;
- VII.** Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores públicos a que se refiere el Programa Rector;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- VIII.** Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de Profesionalización;
- IX.** Revalidar equivalencias de estudios de la Profesionalización;
- X.** Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación;
- XI.** Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de los Servidores Públicos y proponer los cursos correspondientes;
- XII.** Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso a las Academias e Institutos;
- XIII.** Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio ante las autoridades competentes;
- XIV.** Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que impartan;
- XV.** Proponer la celebración de convenios con Instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores públicos;
- XVI.** Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los manuales de las Academias e Institutos, y
- XVII.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 48.-** En materia de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales, la Secretaría tendrá la facultad de proponer a las Instancias de Coordinación de esta ley lo siguiente:

- I.** Los contenidos básicos de los programas para la formación, capacitación y profesionalización de los mandos de las Instituciones policiales;
- II.** Los aspectos que contendrá el Programa Rector;
- III.** Que los integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los programas correspondientes a las Academias y de estudios superiores policiales;
- IV.** El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales y vigilar su aplicación;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- V.** Estrategias y políticas de desarrollo de formación de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- VI.** Los programas de investigación académica en materia policial;
- VII.** El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales;
- VIII.** La revalidación de equivalencias de estudios de la Profesionalización en el ámbito de su competencia, y
- IX.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

## **TÍTULO CUARTO DEL SERVICIO DE CARRERA EN LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA**

### **Capítulo I Disposiciones Generales**

**Artículo 49.-** El Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia, comprenderá lo relativo al Ministerio Público y a los peritos.

Las Instituciones de Procuración de Justicia que cuenten en su estructura orgánica con policía ministerial para la investigación de los delitos, se sujetarán a lo dispuesto en esta ley para las Instituciones Policiales en materia de carrera policial.

Las reglas y procesos en materia de carrera policial y régimen disciplinario de la policía ministerial, serán aplicados, operados y supervisados por las Instituciones de Procuración de Justicia.

Los servidores públicos que tengan bajo su mando a agentes del Ministerio Público o peritos no formarán parte del Servicio de Carrera por ese hecho; serán nombrados y removidos conforme a los ordenamientos legales aplicables; se considerarán trabajadores de confianza, y los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 50.-** El Servicio de Carrera Ministerial y Pericial comprenderá las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, conforme a lo siguiente:

- I.** El ingreso comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación y certificación inicial, así como registro;
- II.** El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada, de actualización, de evaluación para la permanencia, de evaluación del desempeño, de desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y reconocimientos, de reingreso y de certificación. De igual forma, deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los miembros del Servicio de Carrera, y
- III.** La terminación comprenderá las causas ordinarias y extraordinarias de separación del Servicio, así como los procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar, ajustándose a lo establecido por las leyes y disposiciones aplicables.

**Artículo 51.-** El Servicio de Carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes:

- I.** Tendrá carácter obligatorio y permanente; abarcará los planes, programas, cursos, evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas que comprende;
- II.** Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en tareas de Procuración de Justicia;
- III.** El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación fomentará que los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos referidos y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades destrezas y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- IV.** Contará con un sistema de rotación del personal;
- V.** Determinará los perfiles, niveles jerárquicos en la estructura y de rangos;
- VI.** Contará con procedimientos disciplinarios, sustentados en principios de justicia y con pleno respeto a los derechos humanos;
- VII.** Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño de sus funciones;
- VIII.** Buscará generar el sentido de pertenencia institucional;
- IX.** Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento de los certificados del personal, y
- X.** Contendrá las normas para el registro de las incidencias del personal.

## **CAPÍTULO II**

### **Del Ingreso al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 52.-** El ingreso al Servicio de Carrera se hará por convocatoria pública.

Los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán cumplir, cuando menos, con los requisitos siguientes:

#### **A. Ministerio Público.**

- I.** Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
- II.** Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional;
- III.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- IV.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- V.** No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
- VI.** No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;
- VII.** Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan, y
- VIII.** Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables.

#### **B. Peritos.**

- I.** Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos;
- II.** Acreditar que ha concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente;
- III.** Tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;
- IV.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- V.** Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan;
- VI.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
- VII.** No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

**VIII.** No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y

**IX.** Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezca la legislación federal y la de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 53.-** Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos de formación inicial, deberán consultarse sus antecedentes en el Registro Nacional y, en su caso, en los registros de las Instituciones de Procuración de Justicia.

Asimismo, deberá verificarse la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes.

**Artículo 54.-** Los aspirantes a ingresar al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán cumplir con los estudios de formación inicial.

Corresponderá a las autoridades competentes regular en sus legislaciones los términos en que la formación inicial se llevará a cabo. La duración de los programas de formación inicial no podrá ser inferior a quinientas horas clase. En todo caso atendiendo a los lineamientos aplicables.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Desarrollo del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 55.-** Son requisitos de permanencia del Ministerio Público y de los peritos, los siguientes:

**I.** Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- II.** Cumplir con los programas de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables;
- III.** Aprobar las evaluaciones que establezcan las disposiciones aplicables;
- IV.** Contar con la certificación y registro actualizados a que se refiere esta Ley;
- V.** Cumplir las órdenes de rotación;
- VI.** Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas, y
- VII.** Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezcan las leyes respectivas.

**Artículo 56.-** Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable.

Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente ley.

**Artículo 57.-** Las solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su caso, concederán con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento a los requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o penal, local o federal.

## **CAPÍTULO IV**

### **De la Terminación del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 58.-** La Federación y las entidades federativas establecerán en sus respectivas leyes los procedimientos de separación y remoción aplicables a los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia, que cuando menos, comprenderán los aspectos previstos en el artículo siguiente.

**Artículo 59.-** La terminación del Servicio de Carrera será:

**I.** Ordinaria, que comprende:

- a)** Renuncia;
- b)** Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones, y
- c)** Jubilación.

**II.** Extraordinaria, que comprende:

- a)** Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, o
- b)** Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo.

**Artículo 60.-** En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación o remoción es injustificada, la institución respectiva sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

## **CAPÍTULO V**

### **De la Profesionalización**

**Artículo 61.-** El Programa Rector de Profesionalización es el instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal de las Instituciones de Procuración de Justicia.

**Artículo 62.-** Los planes de estudios se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolución de casos.

**Artículo 63.-** En materia de programas de Profesionalización y planes de estudio, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:

- I.** Promover estrategias y políticas de profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- II.** Diseñar los modelos de profesionalización que correspondan para su concertación y en su caso, aplicación en las Instituciones de Procuración de Justicia;
- III.** Acordar los contenidos del Programa Rector de Profesionalización de los servidores públicos de las instituciones de Procuración de Justicia, a propuesta de su Presidente;
- IV.** Establecer criterios para supervisar que los servidores públicos se sujeten a los programas correspondientes en los Institutos de Capacitación;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- V.** Promover el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes a las Instituciones de Procuración de Justicia y vigilar su aplicación;
- VI.** Establecer programas de investigación académica en las materias ministerial y pericial;
- VII.** Consensuar los criterios por los que se revalidarán equivalencias de estudios en el ámbito de su competencia para su incorporación al programa rector de profesionalización, y
- VIII.** Las demás que le establezcan otras disposiciones legales.

**Artículo 64.-** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia están obligados a participar en las actividades de profesionalización que determine la institución respectiva, los cuales deberán cubrir un mínimo de 60 horas clase anuales.

## **CAPÍTULO VI**

### **De la Certificación**

**Artículo 65.-** Los aspirantes que ingresen a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán contar con el Certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por esta Ley.

Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia sin contar con el Certificado y registro vigentes.

**Artículo 66.-** Los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia emitirán los certificados correspondientes a quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece esta Ley y el ordenamiento legal aplicable a la institución de que se trate.

El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 67.-** El Certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional que para tal efecto se establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.

**Artículo 68.-** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.

La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 69.-** La certificación que otorguen los centros de evaluación y control de confianza deberá contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia que deseen prestar sus servicios en otra institución, ya sea en la Federación o en las Entidades Federativas, deberán presentar el Certificado que les haya sido expedido previamente.

Las Instituciones de Procuración de Justicia reconocerán la vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados, conforme a las disposiciones de esta Ley y demás aplicables. En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los procesos de evaluación.

En todos los casos, se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el Registro Nacional.

**Artículo 70.-** La cancelación del certificado de los Servidores Públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia procederá:



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- I.** Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- II.** Al ser removidos de su encargo;
- III.** Por no obtener la revalidación de su Certificado, y
- IV.** Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.

**Artículo 71.-** La Institución de Procuración de Justicia que cancele algún certificado deberá hacer la anotación respectiva en el Registro Nacional correspondiente.

## **TÍTULO QUINTO DEL DESARROLLO POLICIAL**

### **CAPÍTULO I Disposiciones Generales**

**Artículo 72.-** El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos en el artículo 6 de la Ley.

**Artículo 73.-** Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.

**Artículo 74.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente.

**Artículo 75.-** Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:

- I.** Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información;
- II.** Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y
- III.** Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.

**Artículo 76.-** Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, o bien, en las Instituciones Policiales, o en ambas, en



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

cuyo caso se coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones.

Las policías ministeriales ubicadas dentro de la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Título, quedando a cargo de dichas instituciones, la aplicación de las normas, supervisión y operación de los procedimientos relativos al desarrollo policial.

**Artículo 77.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación que podrán ser, entre otras, las siguientes:

- I.** Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine;
- II.** Deberán verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informará al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;
- III.** Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;
- IV.** Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- V.** Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;
- VI.** Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- VII.** Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;
- VIII.** Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables.
- IX.** Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;
- X.** Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;
- XI.** Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;
- XII.** Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:
  - a)** Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
  - b)** Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;
  - c)** Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;
  - d)** Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y

- e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.

**XIII.** Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, y

**XIV.** Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

## **CAPÍTULO II**

### **De la Carrera Policial y de la Profesionalización**

**Artículo 78.-** La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales.

**Artículo 79.-** Los fines de la Carrera Policial son:

- I.** Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales;
- II.** Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones;
- III.** Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- IV.** Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y
- V.** Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley.

**Artículo 80.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán la organización jerárquica de las Instituciones Policiales, considerando al menos las categorías siguientes:

- I.** Comisarios;
- II.** Inspectores;
- III.** Oficiales, y
- IV.** Escala Básica.

En las policías ministeriales se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al modelo policial previsto en esta Ley.

**Artículo 81.-** Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las siguientes jerarquías:

- I.** Comisarios:
  - a)** Comisario General;
  - b)** Comisario Jefe, y
  - c)** Comisario.
- II.** Inspectores:
  - a)** Inspector General;
  - b)** Inspector Jefe, y
  - c)** Inspector.
- III.** Oficiales:
  - a)** Subinspector;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- b) Oficial, y
- c) Suboficial.

**IV.** Escala Básica:

- a) Policía Primero;
- b) Policía Segundo;
- c) Policía Tercero, y
- d) Policía.

**Artículo 82.-** Las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.

Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los titulares de las instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerarquía.

Las instituciones estatales y del Distrito Federal, deberán satisfacer, como mínimo, el mando correspondiente al octavo grado de organización jerárquica.

Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones.

**Artículo 83.-** El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de la Instituciones con relación a las áreas operativas y de servicios será:

- I.** Para las áreas operativas, de policía a Comisario General, y
- II.** Para los servicios, de policía a Comisario Jefe.

**Artículo 84.-** La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

Para tales efectos, la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán promover en el ámbito de sus competencias respectivas, las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas, en los diferentes ámbitos de competencia.

**Artículo 85.-** La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:

- I.** Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas;
- II.** Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo;
- III.** Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema;
- IV.** Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;
- V.** La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;
- VI.** Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las leyes respectivas;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- VII.** Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;
- VIII.** Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- IX.** Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;
- X.** El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por la instancia que señale la ley de la materia, y
- XI.** Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial.

La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección.

En términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las Instituciones Policiales podrán designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando su grado policial y derechos inherentes a la Carrera Policial.

**Artículo 86.-** La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales.

Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en la ley sobre los aspirantes aceptados.

**Artículo 87.-** El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

formación inicial o capacitación en las Academias o Institutos de Capacitación Policial, el periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley.

**Artículo 88.-** La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales. Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:

**A. De Ingreso:**

- I.** Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;
- II.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
- III.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- IV.** Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
  - a)** En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
  - b)** Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
  - c)** En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
- V.** Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
- VI.** Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
- VII.** Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
- VIII.** Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- IX.** No padecer alcoholismo;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- X.** Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- XI.** No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
- XII.** Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que deriven de la misma;
- XIII.** Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

**B. De Permanencia:**

- I.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;
- II.** Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
- III.** No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
- IV.** Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
  - a)** En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;
  - b)** Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
  - c)** En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
- V.** Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
- VI.** Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
- VII.** Aprobar las evaluaciones del desempeño;
- VIII.** Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- IX.** Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- X.** No padecer alcoholismo;
- XI.** Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;
- XII.** Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- XIII.** No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
- XIV.** No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días, y
- XV.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 89.-** Las instancias responsables del Servicio de Carrera Policial fomentarán la vocación de servicio mediante la promoción y permanencia en las Instituciones Policiales para satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de sus integrantes.

**Artículo 90.-** El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual las Instituciones Policiales otorgan el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.

Todo estímulo otorgado por las instituciones será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.

**Artículo 91.-** La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.

Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.

Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.

**Artículo 92.-** Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los integrantes de las Instituciones Policiales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.

**Artículo 93.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán que la antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones Policiales, de la siguiente forma:

- I.** Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Policiales, y
- II.** Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente.

La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera Policial.

**Artículo 94.-** La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

- I.** Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurren las siguientes circunstancias:



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;
  - b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y
  - c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones para conservar su permanencia.
- II.** Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o
- III.** Baja, por:
- a) Renuncia;
  - b) Muerte o incapacidad permanente, o
  - c) Jubilación o Retiro.

Al concluir el servicio el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.

**Artículo 95.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.

**Artículo 96.-** La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las Instituciones Policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.

La presente disposición será aplicable también al personal de los servicios de migración.

**Artículo 97.-** La certificación tiene por objeto:

**A.-** Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional;

**B.-** Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las Instituciones Policiales:

- I.** Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
- II.** Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;
- III.** Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- IV.** Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;
- V.** Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y
- VI.** Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley.

**Artículo 98.-** La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización,



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.

Los planes de estudio para la Profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje que estarán comprendidos en el programa rector que apruebe la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, a propuesta de su Presidente.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Régimen Disciplinario**

**Artículo 99.-** La actuación de los Integrantes de las Instituciones Policiales se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de esta Ley.

Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán sus regímenes disciplinarios, sobre las bases mínimas previstas en el presente capítulo.

La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.

La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados.

**Artículo 100.-** Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

**Artículo 101.-** El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.

**Artículo 102.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales, observarán las obligaciones previstas en los artículos 40 y 41 de esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.

**Artículo 103.-** La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor.

La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación aplicable.

**Artículo 104.-** El procedimiento ante las autoridades previstas en las leyes de la materia, iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o presidente de la instancia correspondiente, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor.

Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento.

**Artículo 105.-** La Federación, las entidades federativas y los municipios establecerán instancias colegiadas en las que participen, en su caso, cuando menos, representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las Instituciones Policiales, para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para tal fin, las Instituciones Policiales podrán constituir sus respectivas Comisiones del servicio profesional de carrera policial y de honor y justicia, las que llevarán un registro de datos de los integrantes de sus instituciones. Dichos datos se incorporarán las bases de datos de personal de Seguridad Pública.

En las Instituciones de Procuración de Justicia se integrarán instancias equivalentes, en las que intervengan representantes de los policías ministeriales.

## **TÍTULO SEXTO**

### **DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**

**Artículo 106.-** El sistema nacional de acreditación y control de confianza se conforma con las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

Integran este sistema: El Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales de la Federación y de las entidades federativas.

**Artículo 107.-** Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que establezca el Reglamento que emita el Ejecutivo Federal.

Cuando en los procesos de certificación a cargo de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la acreditación vigente del



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En caso contrario, el proceso carecerá de validez.

**Artículo 108.-** Los Centros Nacional de Acreditación y Control de Confianza aplicarán las evaluaciones a que se refiere esta Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; para tal efecto, tendrán las siguientes facultades:

- I.** Aplicar los procedimientos de Evaluación y de Control de Confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- II.** Proponer lineamientos para la verificación y control de Certificación de los Servidores Públicos;
- III.** Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable;
- IV.** Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la confidencialidad y resguardo de expedientes;
- V.** Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad;
- VI.** Comprobar los niveles de escolaridad de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;
- VII.** Aplicar el procedimiento de certificación de los Servidores Públicos, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- VIII.** Expedir y actualizar los Certificados conforme a los formatos autorizados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- IX.** Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados de las evaluaciones que practiquen;
- X.** Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus funciones;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- XI.** Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención que permitan solucionar la problemática identificada;
- XII.** Proporcionar a las Instituciones, la asesoría y apoyo técnico que requieran sobre información de su competencia;
- XIII.** Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y que se requieran en procesos administrativos o judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables;
- XIV.** Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública, y
- XV.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios implementarán medidas de registro y seguimiento para quienes sean separados del servicio por no obtener el certificado referido en esta Ley.

## **TITULO SÉPTIMO DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA**

### **CAPÍTULO ÚNICO**

**Artículo 109.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.

El Presidente del Consejo Nacional dictará las medidas necesarias, además de las ya previstas en la Ley, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada mediante los instrumentos de información sobre Seguridad Pública.





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las Instituciones de Procuración de Justicia tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos criminalísticos y de personal, en el ámbito de su función de investigación y persecución de los delitos.

La información sobre administración de justicia, podrá ser integrada las bases de datos criminalísticas y de personal, a través de convenios con el Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia y con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

El acceso a las bases de datos del sistema estará condicionado al cumplimiento de esta Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia Ley emanen.

**Artículo 110.-** Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.

La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

**Artículo 111.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su Red Local correspondiente, con las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema, previstas en la presente Ley.

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Secretario Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios.

## SECCIÓN PRIMERA



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

## **Del Registro Administrativo de Detenciones**

**Artículo 112.-** Los agentes policiales que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información, de la detención, a través del Informe Policial Homologado.

**Artículo 113.-** El registro administrativo de la detención deberá contener, al menos, los datos siguientes:

- I.** Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
- II.** Descripción física del detenido;
- III.** Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;
- IV.** Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción, y
- V.** Lugar a donde será trasladado el detenido.

**Artículo 114.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán actualizar la información relativa al registro, tan pronto reciba a su disposición al detenido, recabando lo siguiente:

- I.** Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión;
- II.** Clave Única de Registro de Población;
- III.** Grupo étnico al que pertenezca;
- IV.** Descripción del estado físico del detenido;
- V.** Huellas dactilares;
- VI.** Identificación antropométrica, y
- VII.** Otros medios que permitan la identificación del individuo;



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite de la detención de una persona y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emitirá las disposiciones necesarias para regular los dispositivos tecnológicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información a que se refiere este artículo, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología.

**Artículo 115.-** La información capturada en el Registro Administrativo de Detenciones será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:

- I.** Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y
- II.** Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el Registro a terceros. El Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

**Artículo 116.-** Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal aplicable.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

## **SECCIÓN SEGUNDA**

### **Del Sistema Único de Información Criminal**

**Artículo 117.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios serán responsables de integrar y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del adolescente.

**Artículo 118.-** Dentro del sistema único de información criminal se integrará una base nacional de datos de consulta obligatoria en las actividades de Seguridad Pública, sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de identificación, recursos y modos de operación.

Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que aporten las Instituciones de Seguridad Pública, relativa a las investigaciones, procedimientos penales, órdenes de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de penas.

**Artículo 119.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia podrán reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, conforme a las disposiciones aplicables, pero la proporcionarán al sistema único de información criminal inmediatamente después que deje de existir tal condición.

**Artículo 120.-** El Sistema Nacional de Información Penitenciaria es la base de datos que, dentro del sistema único de información criminal, contiene, administra y controla los registros de la población penitenciaria de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 121.-** La base de datos deberá contar, al menos, con el reporte de la ficha de identificación personal de cada interno con fotografía, debiendo agregarse los estudios técnicos interdisciplinarios, datos de los procesos penales y demás información necesaria para la integración de dicho sistema.

### **SECCIÓN TERCERA**

#### **Del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública**

**Artículo 122.-** El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos:

- I.** Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública;
- II.** Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público, y
- III.** Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron.

Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al Registro.

**Artículo 123.-** Las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios inscribirán y mantendrán actualizados permanentemente en el Registro los datos relativos a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de esta Ley. Para efectos de esta Ley, se consideran miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la presente Ley.

## **SECCIÓN CUARTA**

### **Del Registro Nacional de Armamento y Equipo.**

**Artículo 124.-** Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios manifestarán y mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el cual incluirá:

- I.** Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo, y
- II.** Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.

**Artículo 125.-** Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las instituciones de Seguridad Pública mantendrán un registro de los elementos de identificación de huella balística de las armas asignadas a los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública. Dicha huella deberá registrarse en una base de datos del Sistema.

**Artículo 126.-** En el caso de que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Nacional de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las normas aplicables.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 127.-** El incumplimiento de las disposiciones de esta sección, dará lugar a que la portación o posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.

## **TÍTULO OCTAVO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD**

### **CAPÍTULO ÚNICO De los Servicios de Atención a la Población**

**Artículo 128.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.  
Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de:

- I.** La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y
- II.** La sociedad civil organizada.

**Artículo 129.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes.

**Artículo 130.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 131.-** Para mejorar el servicio de Seguridad Pública, las instancias de coordinación que prevé esta Ley promoverán la participación de la comunidad a través de las siguientes acciones:

- I.** Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.
- II.** Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;
- III.** Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;
- IV.** Realizar labores de seguimiento;
- V.** Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;
- VI.** Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y
- VII.** Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.

**Artículo 132.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que las Instituciones de Seguridad Pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad, para alcanzar los propósitos del artículo anterior.

La participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y de instituciones, se sujetará a los indicadores previamente establecidos con la autoridad sobre los siguientes temas:

- I.** El desempeño de sus integrantes;
- II.** El servicio prestado, y
- III.** El impacto de las políticas públicas en prevención del delito.

Los resultados de los estudios deberán ser entregados a las Instituciones de Seguridad Pública, así como a los Consejos del Sistema, según corresponda. Estos estudios servirán para la formulación de políticas públicas en la materia.





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 133.-** El Centro Nacional de Información deberá proporcionar la información necesaria y conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana. No se podrá proporcionar la información que ponga en riesgo la seguridad pública o personal.

**Artículo 134.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán políticas públicas de atención a la víctima, que deberán prever, al menos los siguientes rubros:

- I.** Atención de la denuncia en forma pronta y expedita;
- II.** Atención jurídica, médica y psicológica especializada;
- III.** Medidas de protección a la víctima, y
- IV.** Otras, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

## **TÍTULO NOVENO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

### **CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales**

**Artículo 135.-** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, locales y municipales por el manejo o aplicación ilícita de los recursos previstos en los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.

Serán consideradas violaciones graves a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, las acciones u omisiones previstas en el artículo 139, que se realicen en forma reiterada o sistemática.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 136.-** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, estatales y municipales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.

**Artículo 137.-** La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales que ejerzan la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en materia de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones aplicables.

## **CAPÍTULO SEGUNDO**

### **De los Delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 138.-** Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa, a quien dolosa, ilícita y reiteradamente se abstenga de proporcionar al Secretariado Ejecutivo la información que esté obligado en términos de esta Ley, a pesar de ser requerido por el Secretario Ejecutivo, dentro del plazo previsto en el artículo 37 de esta Ley.

Se impondrá además, la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión en cualquier orden de gobierno.

**Artículo 139.** Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien:

- I.** Ingrese dolosamente a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública previstos en esta Ley, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

pretenda dañar en cualquier forma la información, las bases de datos o los equipos o sistemas que las contengan;

- II.** Divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases de datos o sistemas informáticos a que se refiere esta Ley.
- III.** Inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, prevista en esta Ley, como miembro o integrante de una institución de Seguridad Pública de cualquier orden de gobierno, a persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la Ley, o a sabiendas de que la certificación es ilícita, y
- IV.** Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además, la inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público en cualquier orden de gobierno, y en su caso, la destitución.

**Artículo 140.** Se sancionará con cinco a doce años de prisión y de doscientos a ochocientos días multa, a quien falsifique el certificado a que se refiere la presente Ley, lo altere, comercialice o use a sabiendas de su ilicitud.

**Artículo 141.-** Las sanciones previstas en este capítulo se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos previstos en los ordenamientos penales federal o de las entidades federativas, según corresponda.

Las autoridades del fuero federal serán las competentes para conocer y sancionar los delitos previstos en este capítulo, conforme las disposiciones generales del Código Penal Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones legales, en atención a que la Federación es el sujeto pasivo, de conformidad con el artículo 50, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

## **TÍTULO DÉCIMO**



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

## **DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL**

### **CAPÍTULO I Disposiciones Preliminares**

**Artículo 142.-** Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto. Los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente Ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal.

Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel nacional sean determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, serán distribuidos con base en los criterios que apruebe el Consejo Nacional, a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Las autoridades correspondientes de las entidades federativas y de los municipios deberán concentrar los recursos en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública.

Asimismo, dichas autoridades deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema sobre los movimientos que presenten las cuentas específicas, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino así como los recursos comprometidos, devengados y pagados.

Sin perjuicio de lo que establece el artículo 143 los convenios generales o específicos establecerán obligaciones para las entidades federativas y los municipios, a efecto de fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se aporten, así como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 143.** Para efectos de control, vigilancia, transparencia y supervisión del manejo de los recursos previstos en el artículo que antecede, así como para determinar si se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 139, compete al Secretario Ejecutivo:

- I.** Requerir, indistintamente, a las autoridades hacendarias y de seguridad pública, entre otras, de las entidades federativas y de los municipios, informes relativos a:
  - a)** El ejercicio de los recursos de los fondos y el avance en el cumplimiento de los programas o proyectos financiados con los mismos;
  - b)** La ejecución de los programas de seguridad pública de las entidades federativas derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública;
- II.** Efectuar, en cualquier momento, visitas de verificación y revisiones de gabinete de los documentos, instrumentos y mecanismos inherentes o relativos al ejercicio de los recursos en las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios, a fin de comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las obligaciones a su cargo; de igual forma, podrá requerir la información que considere necesaria indistintamente a las autoridades hacendarias o de seguridad pública locales correspondientes, y
- III.** Las demás acciones que resulten necesarias para la consecución de lo dispuesto en este artículo.

De manera supletoria a lo previsto en este artículo se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal.

## **CAPÍTULO II**

### **De la Cancelación y Suspensión de Ministración de los Recursos**



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 144.-** El Pleno del Consejo Nacional resolverá la cancelación o suspensión de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, a las entidades federativas o, en su caso, municipios, que incurran en lo siguiente:

- I.** Incumplir las obligaciones relativas al suministro, intercambio y sistematización de la información de Seguridad Pública, o violar las reglas de acceso y aprovechamiento de la información de las bases de datos previstas en esta Ley;
- II.** Incumplir los procedimientos y mecanismos para la certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;
- III.** Abstenerse de implementar el servicio telefónico nacional de emergencia;
- IV.** Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que disponen las disposiciones jurídicas aplicables;
- V.** Aplicar criterios, normas y procedimientos distintos a los establecidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- VI.** Establecer y ejecutar un Modelo Policial básico distinto al determinado por el Consejo Nacional;
- VII.** Establecer servicios de carrera ministerial y policial sin sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones que de ella emanan;
- VIII.** Abstenerse de constituir y mantener en operación las instancias, centros de control de confianza y academias a que se refiere esta Ley, y
- IX.** Cualquier incumplimiento a las obligaciones de la presente Ley, que afecte a los mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Pública.

La cancelación de la ministración de los recursos federales a las entidades federativas y municipios, supone la pérdida de los mismos, por lo que no tendrán el carácter de recuperables o acumulables y deberán, en consecuencia, permanecer en la Tesorería de la Federación para los efectos legales correspondientes al finalizar el ejercicio fiscal, salvo que en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal se destinen a otras entidades federativas o municipios para llevar a cabo la función de seguridad pública, sin que se genere, para éstas, el derecho a recibir los recursos con posterioridad.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 145.-** El procedimiento al que se sujetarán las visitas y revisiones a que se refiere el artículo 143, fracción II, y sobre las causas de cancelación de los recursos a que se refiere el artículo 144, se sujetará a las reglas siguientes:

- I.** En la orden de visita o revisión correspondiente se señalará el servidor público que la practicará, la institución, así como el periodo u objeto que haya de verificarse o revisarse;
- II.** La visita se practicará preferentemente en las oficinas principales de la institución o dependencia visitada; en caso de no ser posible por cualquier causa, se realizará en cualquier domicilio de la propia institución o dependencia o, en caso necesario, en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo; estando obligados los servidores públicos de las instituciones o dependencias visitadas a proporcionar todas las facilidades necesarias y atender los requerimientos que se les formulen;
- III.** En caso de advertirse incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, los acuerdos generales o los convenios, el Secretariado podrá decretar la suspensión provisional de las aportaciones subsecuentes. La suspensión de ministración de fondos subsistirá hasta que se aclare o subsane la acción u omisión que dio origen al incumplimiento.  
  
La suspensión en el otorgamiento de los recursos no implica la pérdida de los mismos por parte de las entidades federativas o municipios, por lo que podrán aclarar o subsanar la acción u omisión que dio origen al incumplimiento, mientras no se emita la resolución que declare la cancelación;
- IV.** En un plazo no mayor a quince días hábiles, posteriores a la terminación de la visita, el Secretariado Ejecutivo presentará al Consejo el informe correspondiente al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones sujetas a verificación, así como toda la información que resulte necesaria para el efecto;
- V.** El Secretariado dará vista a la institución o dependencia visitada o revisada, para que en un plazo de veinte días hábiles, aporte la información pertinente para desvirtuar las imputaciones que, en su caso, se formulen en su contra;





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- VI.** Transcurrido el plazo antes mencionado, en caso de incumplimiento, el Secretariado presentará al Consejo Nacional un proyecto de resolución, en que se contengan las conclusiones de la visita o revisión practicadas, y
- VII.** En el proyecto de resolución señalará si la institución o dependencia revisada o visitada se hace acreedora a la cancelación de los fondos o, en su caso, que procede requerir la restitución de los mismos.

El Consejo Nacional resolverá en forma definitiva e inatacable sobre la existencia del incumplimiento y determinará, en su caso, la cancelación y, cuando proceda, la restitución de los recursos, con independencia de las responsabilidades que otras leyes establezcan.

De la suspensión o cancelación se dará cuenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes.

Cuando el Consejo Nacional resuelva que procede requerir la restitución de los recursos utilizados en forma indebida o ilícita, las entidades federativas o, en su caso, municipios contarán con un plazo de 30 días naturales para efectuar el reintegro; en caso contrario, los recursos podrán descontarse de las participaciones o aportaciones que le correspondan para el siguiente ejercicio fiscal.

Las entidades federativas estarán representadas por los titulares de los poderes ejecutivos a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 12 de esta Ley, o por quien ellos designen, sin que pueda recaer dicha representación en un servidor público de menor jerarquía a la de titular de una de las secretarías competentes en la entidad respectiva para la aplicación de esta Ley.

## **TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS**

**Artículo 146.-** Para efectos de esta Ley, se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y





Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.

**Artículo 147.-** El Distrito Federal, los Estados y los Municipios coadyuvarán en la protección y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de las instalaciones estratégicas y para garantizar su integridad y operación.

**Artículo 148.-** El resguardo de las instalaciones estratégicas queda a cargo de la Federación, que se coordinará con las Instituciones locales y municipales correspondientes por razón del territorio en el ejercicio de esta función, las cuales garantizarán la seguridad perimetral y el apoyo operativo en caso necesario.

El Ejecutivo Federal constituirá un Grupo de Coordinación Interinstitucional para las Instalaciones Estratégicas, que expedirá, mediante acuerdos generales de observancia obligatoria, la normatividad aplicable en la materia.

**Artículo 149.-** El Consejo Nacional establecerá los casos, condiciones y requisitos necesarios para el bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico para los fines de seguridad pública.

Las decisiones que en ese sentido emita el Consejo Nacional, deberán ser ejecutadas por las distintas Instituciones de Seguridad Pública que lo integran.

## **TITULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA**

**Artículo 150.-** Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local.

Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.

**Artículo 151.-** Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.

**Artículo 152.-** Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se registrarán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables que se establecen para las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Centro Nacional de Información.

Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán conforme a la normatividad aplicable, la obligación de las empresas privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza.

## **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes.

**SEGUNDO.-** El Ejecutivo Federal contará con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto para crear e instalar el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cual deberá acreditar a los centros de



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública y sus respectivos procesos de evaluación en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en operación del citado Centro Nacional.

**TERCERO.** De manera progresiva y en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el Consejo Nacional.

**CUARTO.-** Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**QUINTO.** Los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes estatales, en la rama correspondiente, en un plazo no mayor a un año.

**SEXTO.** Los servidores públicos que obtengan el certificado y que satisfagan los requisitos de ingreso y permanencia que se establecen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los ordenamientos legales federales y estatales aplicables, ingresarán o serán homologados al servicio de carrera, en las ramas ministerial, policial y pericial, según corresponda, en la jerarquía y grado, así como antigüedad y derechos que resulten aplicables, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

**SÉPTIMO.-** Las referencias realizadas en la presente Ley a la reinserción social, quedarán entendidas al término vigente readaptación social, toda vez que con este Decreto no entra en vigor el párrafo tercero del artículo 21 constitucional sujeto a la vacancia prevista en el artículo Quinto Transitorio del



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

**OCTAVO.-** El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

**NOVENO.-** El Consejo Nacional y las Conferencias que prevé la presente Ley, deberán expedir las disposiciones a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo no mayor a nueve meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

**DÉCIMO.-** Por única ocasión, el Secretario Ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**DÉCIMO PRIMERO.-** Los recursos humanos, materiales y financieros con que cuente el Secretario Ejecutivo de conformidad con la abrogada Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables, se transferirán al Secretariado Ejecutivo previsto en esta Ley, a la brevedad posible.

Lo mismo sucederá con los asuntos en trámite del Secretario Ejecutivo, salvo que pudiera causarse algún daño o menoscabo al servicio o a los intereses del Sistema.

Los derechos del personal del Secretario Ejecutivo que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, sea transferido, se respetarán conforme a la ley aplicable.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Se abroga la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Por la COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA**

---

**Presidente**  
**Sen. Felipe González González**

---

**Secretario**  
**Sen. René Arce Islas**

---

**Sen. Alejandro González Alcocer**

---

**Sen. Blanca Judith Díaz Delgado**

---

**Sen. Federico Döring Casar**

---

**Sen. Rafael Moreno Valle Rosas**

---

**Sen. Gabriela Ruiz del Rincón**

---

**Sen. Angel Heladio Aguirre Rivero**

---

**Sen. Francisco Labastida Ochoa**

---

**Sen. Jesús María Ramón Valdés**

---

**Sen. Héctor Miguel Bautista López**

---

**Sen. Ricardo Monreal Ávila**

---

**Sen. Francisco Javier Obregón  
Espinoza**

---

**Sen. Luis Maldonado Venegas**



Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Por la COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA**

---

**Presidente**  
**Sen. Fernando Castro Trenti**

---

**Secretario**  
**Sen. José Guadarrama Márquez**

---

**Sen. Angel Alonso Díaz Caneja**

---

**Sen. Manuel Velasco Coello**

---

**Sen. Dante Delgado Rannauro**

09-12-2008

Cámara de Senadores.

**DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Aprobado** con 94 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

**Devuelto** a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

Gaceta Parlamentaria, 09 de diciembre de 2008.

Discusión y votación, 09 de diciembre de 2008.

-Informo a la Asamblea que las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, remitieron a esta Mesa Directiva un dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.

-El mismo ha sido distribuido incluyendo el voto particular que ha presentado el Senador Ricardo Monreal, entre la Asamblea, para su conocimiento.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la primera lectura del dictamen.

Quienes estén porque se dispense, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente).

Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente).

-Sí se dispensa la lectura, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

Los que estén porque se dispense, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente).

Los que estén porque no se dispense, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente).

-Aprobado, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Está a discusión en lo general.

Antes de la fundamentación por parte de las Comisiones, se concede la palabra al Senador Ricardo Monreal para que pueda hacer la presentación del voto particular que en los términos del Reglamento ha sido presentado.

Primero el voto particular y luego la fundamentación.

-EL C. SENADO MONREAL AVILA: Ciudadanos Legisladores. Ciudadano Presidente, muchas gracias. Creo que esta Ley, este Proyecto de Decreto que hoy se discute, es una Ley muy importante que lamentablemente se está dando con prisas.

Fíjense ustedes, apenas 24 horas, 24 horas para analizar, dictaminar y resolver. Hace 10 minutos nos llegó el dictamen. Es difícil.

Yo quiero presentar mi voto particular porque en las consideraciones que yo hice solicité que se modificaran algunas disposiciones que vienen de Cámara de Diputados y que debieron haberse hecho éstas en el dictamen.

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Permítame, Senador Monreal.

¿Dígame, Senador Arroyo?.

-EL C. SENADOR ARROYO VIEYRA (Desde su escaño): Está teniendo la gentileza el contenido de su voto particular, quisiera le preguntara si me acepta una pregunta.

-EL C. SENADOR MONREAL AVILA: Sí, claro.

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: ¿Acepta, Senador?.

-EL C. SENADOR MONREAL AVILA: Sí, por supuesto.

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Sí la acepta, Senador Arroyo, puede formularla.

-EL C. SENADOR ARROYO VIEYRA: Señor Senador Monreal, no quisiera que quede la impresión de que estamos actuando por prisa con irresponsabilidad. Creo que la sociedad mexicana es la que tiene prisa que legislemos en estas materias, porque es un reclamo muy sentido.

Quienes estamos en esta sesión tenemos muchos meses, si no años, estudiando los temas. ¿No cree usted que el día de hoy en el Pleno no estamos viendo sino la última etapa de un procedimiento parlamentario largo y concienzudo

Por su respuesta, muchas gracias.

-EL C. SENADOR MONREAL AVILA: Me parece muy buena pregunta, ciudadano Senador.

-Primero, no, no justifica las prisas porque este día, ciudadano Senador, se han aprobado cerca de 20 Leyes. Si usted ve en el escaño debe de haber en la última hora cerca de 5 Proyectos de Decreto que se han entregado, y no creo que haya capacidad humana para poderlos leer. Y le aseguro, se lo aseguro que esta Ley que contiene 150 Artículos y 10 Transitorios no se ha leído por ningún Senador, porque hace diez minutos, sí, ninguno, el proyecto que estamos discutiendo. Hace 10 minutos o 30 minutos se nos entregó el Proyecto de Dictamen. Y apenas ayer, señor Senador, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde estábamos sesionando, a las 6 de la tarde. O sea, menos de 24 horas. No solo eso, se lo voy a demostrar porque además, además, Senador, qué bueno que me da pie a darle respuesta porque me temo que de las observaciones que el día de ayer hicimos no están registradas en este Proyecto de Decreto, no están registradas.

Mire usted, el día de ayer el Senador Labastida, el Senador Castro Trenti, el Senador René Arce, el Senador Obregón y un servidor y otros Senadores, hicimos observaciones a este proyecto de decreto. Resulta que en algunos artículos, señores senadores, trae disposiciones contradictorias a lo que aprobamos nosotros en la última sesión en la Miscelánea Fiscal, concretamente en el Código Penal de Procedimientos Penales.

Es decir, en el Código Penal nosotros eliminamos ciertas facultades de las policías, atenuamos las disposiciones y aquí se mantienen vivas, y lo voy a demostrar en el momento en el que me toque reservar artículos, porque ahorita sólo estoy presentando mi voto particular.

Debo advertir una cosa, el día de ayer, a las 18:00 de la tarde, que empezamos la sesión de la Comisión de Seguridad Pública, nos declaramos en Sesión Permanente, porque las directivas, las mesas directivas tendrían ahora una reunión con los homólogos dictaminadores o los que aprobaron de la Comisión de Seguridad Pública para intentar conciliar de qué manera dábamos congruencia a una y a otra ley, al Código Penal de Procedimientos Penales, que está contenido en la Miscelánea Fiscal, y a esta Ley General del Sistema de Seguridad Pública que ahora se está discutiendo, una y otra disposición contienen contradicción.



Y ayer el acuerdo fue que las mesas directivas se reunieran para ver por qué vía resolvíamos este diferendo. Algunos sostenían que por la vía de la fe de erratas, pero eran disposiciones tan profundas que no podía por fe de erratas modificarse una disposición.

Otros creíamos que era importante regresar... Todavía no concluyo la respuesta, ciudadano senador...

**-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:** Vamos a dejar que concluya su respuesta, senador Arroyo.

**-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA:** Otros creíamos que era conveniente regresar a la legisladora con observaciones todas las inconsistencias que esta Ley del Sistema de Seguridad Pública contenía y que era totalmente opuesta a la que nosotros aprobamos apenas el jueves pasado. Por eso no son buenas las prisas, senador.

Y yo le aseguro que no conoce usted estas contradicciones del artículo 77, del 75, del 76, del 12, de varios artículos que lamentablemente no son congruentes con lo que aprobamos apenas el jueves pasado.

Por eso no importa el tiempo, podríamos convocar a un Periodo Extraordinario. Lo que la gente espera es tener leyes confiables, no leyes abusivas; no leyes que conviertan a este país en un estado policiaco; y no importa unas horas más, unos días más, no importa si estamos en esa discusión. Y ahí concluyo la respuesta.

**-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:** Gracias. Sí, senador Arroyo, ¿dígame?

**-EL C. SENADOR FRANCISCO AGUSTIN ARROYO VIEYRA:** Es usted tan gentil en preguntar al orador si me acepta una segunda y última pregunta, cuando menos en esta intervención.

**-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:** ¿Está usted de acuerdo en aceptar?

**-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA:** Sí, por supuesto.

**-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:** Adelante, senador Arroyo.

**-EL C. SENADOR FRANCISCO AGUSTIN ARROYO VIEYRA:** Primero se me informa que usted no tuvo la gentileza de asistir el día de hoy en la mañana a comisión. A la mejor por eso no conoce el dictamen, pero si no lo conoce le pregunto: ¿Cómo hizo usted un voto particular respecto a un dictamen que le es desconocido?

**-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:** Puede responder, senador Monreal.

**-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA:** Primero, mire, senador, déjeme decirle una cosa, y le voy a decir cuál fue el acuerdo del día de ayer, y aquí están los miembros de la comisión.

El día de ayer a las 18:00 de la tarde algunos hicimos observaciones desde ayer. Yo les dije que haría observaciones, que ese fue un mecanismo normal de trabajo en la Comisión de Justicia pasada.

Como a las 19:00, 19:30 de la tarde, las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, acordó declararse a sesión permanente, aceptar las observaciones por escrito, cosa que hice puntualmente, ayer mismo los hice, y se convocó, se autorizó a los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, senador, a estar en una reunión hoy a las 8:00 de la mañana.

Yo no soy miembro de la Mesa Directiva, los únicos que se iban a reunir a las 8:00 de la mañana eran los miembros de la Mesa Directiva. Y para su conocimiento, los miembros de la Mesa Directiva de cada comisión con el presidente y los secretarios, yo no soy ni presidente ni secretario; pero hice llegar mis observaciones por escrito antes de la elaboración del voto particular.

Déjeme decirle otra cosa, senador.

A partir de las 8:00 de la mañana, que se reunió la Mesa Directiva, no ha habido convocatoria a sesionar conjuntamente las comisiones dictaminadoras. Ese es mi reclamo.

No estaba obligado a ir a las 8:00 de la mañana porque estaban las mesas directivas. Y aquí los compañeros podrán así demostrarlo o bien señalarme que estoy mintiendo.

No, senador, procuro siempre estar en todas las comisiones en las que yo participo. Y procuro leer los dictámenes.

No lo leí porque me lo acaban de entregar, pero sabía los trazos que tenía. Y si no presentaba el voto particular en las comisiones, no pasaba al Pleno, cómo quería que presentara el voto particular si no hubo convocatoria para sesionar a las comisiones. Es una vergüenza que sesiones de esta manera, al vapor, en donde estamos aprobando 30 leyes en un día, y le aseguro que ninguno conoce ni siquiera las cinco que hemos aprobado en el último acto; no hay discusión, no hay reflexión, no hay deliberación, hay una aprobación mecánica. Y ese es mi reclamo y será siempre permanentemente mi reclamo.

Y si tiene dudas, pregúntele al presidente de Seguridad Pública, que es de su partido, Castro Trenti; y el presidente de Seguridad Pública, Felipe González.

Y no sólo eso, acordamos que era mejor regresar este proyecto de dictamen que tenemos hace diez o treinta minutos, y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública actuó con atingencia. Yo creo que fue lo correcto, es lo correcto regresarlo.

Ayer había la discusión si por fe de erratas pasábamos este dictamen para no agredir a la Cámara legislador a la Colegisladora. Y qué bueno que ahora todos estuvimos de acuerdo por consenso que se regresara.

No sólo eso, aquí tengo observaciones senador, en donde lo que ayer discutimos no está contenido en el dictamen. Si de cualquier forma vamos a regresar esta minuta proyecto a la colegisladora, por qué no modificar lo que está mal, cuál es la prisa, si aquí atrás hay bocadillos para los que tengan apetito, por qué no quedarnos, trabajamos cuatro horas cada dos días por semana, cuatro horas, y están ya muy alterados. Las fiestas patrias les están invadiendo, quieren irse el jueves, fiestas navideñas y las fiestas patrias también, porque...

**-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:** Quiere continuar con la presentación de su...

**-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA:** No, no, presidente, todavía no le termino de responder, y no me meto al voto particular.

No, miren, de verdad, actuemos con seriedad, actuemos con seriedad. Le termino de responder con esto.

Sí leí incluso la versión estenográfica de la Cámara de Diputados, la leí íntegra. Y saben lo que dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública cuando presentó el dictamen este que ahora estamos discutiendo, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública: "...esta ley es muy importante porque es un reclamo ciudadano, contiene una serie de medidas importantes como el centro de especialización y otras cosas. Les pido, diputados, que una vez que la aprobemos la lean, después de que la aprobemos la lea cada uno para que sepa lo que contiene". Eso dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública: "...léanla después".

Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Lamentablemente hay poca cultura de debate y de deliberación, se les hace tarde para estar aprobando al vapor todo.

Bueno, termino la respuesta, presidente, al explicarles la consecuencia de mi voto particular, el propio Presidente de la Comisión de Seguridad Pública aceptó que se entregara por este procedimiento y el Presidente de la Cámara aceptó que este voto particular se distribuyera a todos los senadores, en él contiene varias disposiciones, unas de fondo, otras de forma, por ejemplo, en lo relativo al consejo, en el Consejo de Seguridad Pública, según esta Ley lo preside el Presidente de la República y lo integran entre otros el Secretario de Marina y el Secretario de la Defensa Nacional.

Nosotros creemos que por disposición constitucional, de acuerdo con el artículo 129 existe prohibición expresa de que las fuerzas armadas participen en asuntos civiles o que se encuentran fuera de sus cuarteles en tiempos de paz.

Dejen recordar de lo que dice el artículo 129, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependen inmediatamente del Gobierno de la Unión, en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones, establecieran para la estación de las tropas, es decir, de acuerdo con la Constitución vigente, ni el Secretario de la Defensa Nacional, ni el Secretario de Marina pueden participar con voto en un órgano civil, podrán ser invitados permanentes, ahora lo único que en este momento ha resultado frente al crimen organizado y frente a que están perneadas las corporaciones civiles policiacas es el Ejército, si así se quiere, modifiquemos la Constitución y entonces sí demosle atribuciones al Ejército Mexicano y a la Marina para que puedan hacer labores de vigilancia civil o labores civiles. Por eso yo propongo en mi voto particular una serie de modificaciones a este artículo, al 14, Fracción IX, al 15, al 17, al 41, al 49, al 73, al 74, al 75, al 77, fundamentalmente. Esto es lo que contiene el voto particular, sin embargo la discusión en la próxima ronda será otra cosa, porque voy a demostrar en la discusión cómo en el dictamen no viene ninguna de las observaciones que hicimos, ni el Senador Labastida, ni el Senador Castro Trenti, ni el Senador Obregón ni nadie, sino que el dictamen está exactamente igual como llegó, solamente con algunas correcciones de letra y de dedo, por qué no lo habíamos hecho antes, porque hace quince minutos no lo dieron y es tan grave, que miren, el ejemplo del artículo 77; en el artículo 77 dice así: -este es un asunto muy delicado y por eso me atrevo a quitarles tiempo, yo sé que todo mundo está deseoso de salir- dice: "las legislaciones de la federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizan las unidades operativas de investigación que podrá ser entre otras las siguientes:

Fracción II.- Se deberán verificar la información de las denuncias que les sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no está identificada e informará al Ministerio Público para que en su caso le dé trámite legal o la deseche del pleno".

Recordará el Senador Murillo que él fue el que insistió en que se suprimiera esta disposición textual del Código Penal de Procedimientos Penales, la suprimimos allá, pero aquí persiste, y el día de ayer habíamos acordado que se suprimiera para darle congruencia al texto de la miscelánea penal.

Pero hay otros que también participó, también pasa lo mismo con el tercero y el cuarto, hay otros por ejemplo donde participó usted y el Senador Tomás Torres, hablamos del registro, en la fracción V, dice registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público, lo registral de inmediato la detención como garantía del inculcado en términos de las disposiciones aplicables así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público. Y nosotros le agregamos, recordará el Senador Tomás Torres y usted, porque fueron muy insistentes, le agregaron: "en dicho registro deberá anotarse la resolución que se emita con relación a su situación jurídica". Y no sólo eso, senadores, le agregamos: "el registro deberá ser cancelado de oficio y sin mayor trámite cuando se resuelva la libertad del detenido o cuando en la averiguación previa no se hayan reunido los elementos necesarios para ejercitar la acción penal y cuando se haya determinado su inocencia o cuando se actualicen las hipótesis previstas en el artículo 195bis de este código.

Señores, esto es lo que contiene, no se agregó lo que en las Comisiones dictaminamos en el Código Federal de Procedimientos Penales, y así como este hay muchos otros, entonces el jueves aprobamos una Ley y hoy aprobamos lo contrario de esa Ley.

¿Vale la pena que haya prisas? Les pregunto, ¿No vale la pena que estudiemos una o dos horas? ¿No vale la pena reunirnos para revisar esto y que mañana nos cite a una reunión extraordinaria del Senado? Que se declare Comisión Permanente este día y que vayamos a comer y regresemos mañana a las 12:00 del día, pero por qué las prisas afectando lo que ustedes dicen que la gente tiene urgencia. ¿Creen que con estas medidas coercitivas, represivas y de estado policiaco vayan a resolver? Yo creo que no, están equivocados, pero allá ustedes. Muchas gracias.

**-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:** Gracias, Senador Monreal.

Ahora para fundamentar el dictamen está a discusión, tiene la palabra el Senador Felipe González, a nombre de las comisiones.

**-EL C. SENADOR FELIPE GONZALEZ GONZALEZ:** Con su permiso, Presidente, en prime lugar un reconocimiento a todas y todos los senadores que me hicieron favor de participar en el estudio de estos dictámenes, y créanme que sí, aunque fue algo intenso, pero la fundamentación por lo cual quedó elaborado de esta manera el dictamen es porque la sociedad está en espera de una Ley que le devuelva la tranquilidad frente a la resistencia de la delincuencia ante el combate decidido de todas las autoridades del país.

En estos días, desde esta misma Asamblea, turnó la minuta los integrantes de las Comisiones de Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera para que la revisáramos, la cual la trabajamos intensamente, ya venía de la Cámara de Diputados después de algunos meses en los que les queremos agradecer a ellos, primero quienes nos estuvieron informando paralelamente de sus discusiones en la Cámara de Diputados y después de que

el día de hoy hayan participado algunos diputados también en nuestras observaciones y para que nos aclararan algunos de los tópicos en los que teníamos algunas dudas.

Esto es para ver la posibilidad de que la autoridad tenga más eficiencia y eficacia, para que también dentro de las corporaciones en un máximo de cuatro años tengamos una policía profesional, una policía que verdaderamente responda a la confianza de la población, es cierto, el hecho de que el Ejército esté haciendo labores de policía es debido, y la Marina, debido a que no tenemos una policía que desafortunadamente haya podido contestar a los requerimientos de nuestra sociedad.

Creemos nosotros que con esto veremos, en lo posible, primero más articulación entre los tres niveles de gobierno para que sus policías al mismo tiempo estén trabajando con la sociedad en ámbitos que hasta este momento se reservaban algunos.

Por otro lado, se están ampliando funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en particular tomando en cuenta la escasa preparación que recientemente han mostrado una buena parte de los investigadores y agentes del Ministerio Público.

Se establece el programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia; se establece que el secretariado ejecutivo se caracterice como un órgano operativo con autonomía técnica, de gestión y presupuestal apoyado en las comisiones permanentes de información, de certificación y acreditación y de prevención del delito, y sobre todo de la de participación ciudadana.

Para abatir la impunidad se pondera necesaria la adopción de tecnologías de la información que permitan agilizar los procedimientos penales, juicios de amparo y otros procesos, y con ello recobrar la confianza ciudadana en la presentación de denuncias. Estas comisiones desean poner énfasis en el compromiso de los tres poderes con los derechos humanos.

Por eso, senadoras y senadores, les quiero decir que este dictamen va en estas consecuencias. Si bien es cierto les repartimos ahorita este dictamen, pero es solamente con las modificaciones que se le hicieron por el que les entregaron la semana pasada.

Muchas gracias.

**-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:** Gracias, senador Felipe González. Ahora con la posición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra el senador Francisco Labastida Ochoa.

**-EL C. SENADOR FRANCISCO LABASTIDA OCHOA:** Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros senadores:

Vengo a expresar la posición del Partido Revolucionario Institucional, de los senadores que integramos la fracción para expresar nuestro respaldo a la iniciativa que está a su consideración, a la minuta que elaboró la Cámara de Diputados y que hoy vamos a dictaminar.

Quiero expresarla, yo formo parte de la Comisión de Seguridad Pública, habiendo leído, desde que nos llegó, el documento del dictamen que nos envió la Cámara de Diputados, la minuta correspondiente. Asistí también hoy a la reunión de la mañana, de las ocho de la mañana no perteneciendo a las comisiones directivas que integran, a las Comisiones Unidas, tanto la de Seguridad Pública, como la de Estudios Legislativos, Primera, y me tomé la libertad de hacer las observaciones y las modificaciones que consideramos convenientes.

Quiero dar fe que todas ellas fueron recogidas en el documento que nos acaban de presentar hoy, lo acabo de revisar y han sido recogidas. Ahora, de fondo, este es el primer esfuerzo de fondo, profundo, que se está haciendo en materia de Seguridad Pública; creo que es el más importante que se ha realizado en mucho tiempo.

Creo que hay algunas cosas que, sin lugar a dudas, son perfectibles, en eso tiene razón nuestro compañero y amigo que ha expresado la opinión del PRD, Ricardo Monreal. Pero me parece que las ventajas son tan grandes respecto a lo que tenemos hoy que es una ley que hay que aprobarla. Obliga a que se cree en el país un sistema nacional de información sobre delincuencia debidamente encriptado y asegurado, el cual se convierte de forma obligatoria por los estados a entregar la información a ella, con penalizaciones fuertes para los funcionarios que no cumplan con dichas disposiciones jurídicas.

Obliga a que todos los policías en un lapso de cuatro años sean certificados, evaluados y obliga a los funcionarios públicos a que sólo se contraten policías con dichas características, después de haber sido depurados los cuerpos policíacos y pasar por el proceso de certificación. Obliga a que los recursos destinados a Seguridad Pública se destinen exclusivamente a ellos. Obliga a que el sistema penitenciario del país se modernice, cumpla con las normas elementales de tener el registro de quienes son recluidos en las cárceles, y establece las limitantes para el ejercicio de la fuerza pública respetando los derechos humanos.

Es cierto, como toda ley, es perfectible, pero no tenemos duda de que representa un importante avance respecto a lo que el país tiene. Y agrego, por último como experiencia personal. Hace cerca de diez años nosotros intentamos hacer cambios de esta magnitud y profundidad, con pleno sentido de responsabilidad la fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, junto con la fracción de nuestro partido en la Cámara de Diputados ha tratado de contribuir, y ha contribuido, a enriquecer estas iniciativas.

Creemos que es por el bien de la República. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias a usted, senador Labastida. Tiene ahora la palabra, para referirse también al dictamen, la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos.

-LA C. SENADORA LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS: Gracias, senador presidente. Con su permiso.

Compañeras senadoras; compañeros senadores:

Para el Senado de la República por supuesto la seguridad es una prioridad, creo que hoy la gente, tanto de las colonias, como de las comunidades en todo el país, están exigiendo que la autoridad les garantice su seguridad, y por supuesto están reclamando a los gobiernos ponerle un hasta aquí a esta delincuencia.

Nosotros insistimos que no podemos ni debemos seguir permitiendo que los criminales se refugien en instituciones débiles o se libren de ser castigados por causas de leyes deficientes. Hoy debemos reconocer que el futuro del país está amenazado por delincuentes bien organizados, la violencia ha llegado a niveles preocupantes, sólo en el presente año, por decir una cifra, se han registrado más de cinco mil muertes ligadas con el narcotráfico.

En un país donde campea la impunidad, donde sólo cinco de cada cien delitos son castigados, no nos extraña que muchos de los mexicanos sintiendo impotencia ante esta falta de seguridad apoyen la legislación de la pena de muerte. En el Partido Verde se ha hecho encuestas ciudadanas que demuestran el apoyo a esta iniciativa, por lo que exigimos, al igual que algunos gobernadores se han manifestado, que se abra este debate nacional para que todas las voces sean escuchadas y tomemos entre todos una decisión de común acuerdo que beneficie a este país.

Bueno, por otro lado, es momento de reformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que la falta de controles, de capacitación, sumando a esto las pésimas condiciones laborales de nuestras policías, han permitido que la delincuencia corrompa las instituciones de seguridad. Con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública podemos revertir esta situación y empezar a dignificar las condiciones, labores de todas y todos las policías del país.

El objetivo es de hacer realidad un Sistema Nacional que sea más efectivo y que dé una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno, cosa que en algunos estados no está pasando. Y con esta nueva ley también podremos garantizar más seguridad y más tranquilidad para las familias mexicanas, ya que los recursos asignados a los gobiernos de los estados dejarán de ser un instrumento político.

De esta manera pues nuestros gobernadores serán quienes encabezen la planeación y el diseño de los nuevos programas en materia de seguridad y combate a la delincuencia. Con esta reforma los gobernadores, los presidentes municipales, los académicos, la sociedad civil, tomaremos las decisiones y vigilarán el cumplimiento de los objetivos y la asignación transparente de los recursos.

Por primera vez en nuestro país, compañeros, la responsabilidad de combatir la inseguridad pública será un asunto de todos, y estará por encima de colores partidistas y de calendarios electorales.

Por eso consideramos importante apoyar esta ley porque con ella podemos brindarle un país más seguro a las actuales y a las futuras generaciones. Las mexicanas y los mexicanos demandan paz, demandan seguridad, por eso las senadoras y los senadores de la República debemos atender esta aspiración popular y crear mejores policías sometiéndolos a controles de confianza, y brindándoles un salario digno.

Sabemos que esta ley es un comienzo, es un primer paso para derrotar al crimen, es una valiosa herramienta para que los gobiernos estatales y municipales fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

En suma, con esta ley habrá prevención del delito y menos violencia; habrá acciones contundentes para recuperar los espacios públicos y se podrá construir un México más seguro para que nuestras niñas y niños crezcan en un ambiente sano. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, senadora. También para referirse a este tema, tiene la palabra la senadora Irma Martínez Manríquez.

-LA C. SENADORA IRMA MARTINEZ MANRIQUEZ: Gracias, senador presidente. Es para nosotros satisfactorio que esta soberanía haya dado pasos en firme para lograr la aprobación de diversos ordenamientos legales, en materia de seguridad pública.

Entre los que destacan la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, así como diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Con ello hemos dado cumplimiento al artículo 21 constitucional que en su transitorio estableció que en el término de seis meses debía reglamentarse la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y comenzamos a atacar un problema tal vez el más grave que padece nuestro país, que es el de la inseguridad pública.

Como integrantes del Partido Nueva Alianza, nos pronunciamos a favor de dicha reformas, aunque nos parece pertinente precisar que dicho apoyo no es ciego ni incondicional, pues aún es necesario considerar importantes aspectos y aristas sobre el tema.

A pesar de la polémica, imitaciones y hasta posibles hierros que se han suscitado en torno a la aprobación de la reforma señaladas, la razón más relevante por la que creemos necesario apoyarlas, es porque si bien la seguridad pública es un bien al que todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho, en los hechos es algo de lo que carecemos, pues lo que ahora campea a lo largo y ancho de todo el país, es la inseguridad pública.

La seguridad pública es el mayor de los bienes que integran el llamado bien común, porque de la seguridad pública depende el goce y disfrute de la vida, de los bienes patrimoniales, de los derechos y las libertades y de la paz social.

La seguridad pública, mucho se ha insistido, es la suma de un buen gobierno y de un comportamiento civilizado por parte de individuos y grupos sociales. Por el contrario, la inseguridad pública es el mayor de los males que puede padecer un país, sobre todo cuando ese mal se ha generalizado tanto, que ha llegado a convertirse en un cáncer maligno.

Es por ello que resulta indispensable apoyar toda iniciativa tendiente a abatir todos los altos índices de inseguridad pública, pues la demanda de justicia y de tranquilidad social constituyen el principal reclamo, insatisfecho de nuestra sociedad, y su atención es impostergable, no sólo por razones éticas, sino también porque la inseguridad pública constituye un grave problema de convivencia social, de seguridad del Estado, y de seguridad nacional.

Los ciudadanos que expresan su creciente inquietud y temor por los alarmantes índices de inseguridad pública nos están exigiendo la realización de acciones encaminadas a prevenir, combatir y castigar eficazmente el crimen, cosa que aun está muy lejos de ser una realidad generalizada.

Si nos permiten comenzar a vivir en un auténtico estado de derecho, que atienda, fomente, desarrolle y mantenga las condiciones de progreso material y cultural, indispensable para cultivar la paz social, así como el orden y la seguridad que necesitamos los seres humanos para poder realizar los fines intrínsecos de la vida en sociedad, habremos dado otro gran paso.

Es innegable que todos esos avances no podrán lograrse de la noche a la mañana, y que aún es mucho lo que falta por hacer para contrarrestar el fenómeno de la inseguridad pública. Entre las acciones pendientes podemos citar: hacer del combate a la inseguridad una política de Estado que deje de considerar la seguridad pública como una función, y que abra espacios de participación no sólo a los tres órdenes de gobierno, sino también a los tres poderes de la unión, particularmente en lo que se refiere a la integración del Consejo de Seguridad Pública.

Implementar políticas eficaces de combate y disminución de la impunidad, en particular cuando este deviene como resultado de la corrupción o infiltración de las propias instituciones de seguridad pública, o de las cúpulas de poder, que el Estado Mexicano se haga cargo de los daños generados por la delincuencia y el crimen organizado a las víctimas y ofendidos, impartiendo justicia efectiva y resarciendo los daños en la medida de lo posible.

Establecer compromisos y metas específicas en materia de combate a la delincuencia y al crimen organizado, así como sistemas de información, transparencia y rendición de cuentas que muestren a la ciudadanía los avances o retrocesos en la materia.

Incluir investigadores y expertos en la materia en las próximas reformas, así como el conjunto de fuerzas y partidos políticos, terminando con el vicio de que sean sólo unos cuantos partidos y actores políticos los que decidan en contenido y alcance de las reformas, lo que va en detrimento de una práctica parlamentaria realmente democrática e incluyente.

Hacer que la educación juegue un papel preponderante en la prevención del delito y la construcción de una cultura de la paz, mediante la inclusión de materias, cursos, conferencias, foros y talleres escolares que desarrollen una cultura de la legalidad entre los alumnos, así como los valores éticos y de civilidad que son la base de una sana convivencia social.

Compañeras y compañeros senadores, nos pronunciamos a favor de las reformas en materia de seguridad pública que hoy se debate en esta soberanía, pero con las reservas que anteriormente hemos mencionado, las apoyamos porque en suma creemos que es imperativo recuperar el postulado de "Leviatán", de "Thomas Hobbes", de que el Estado debe garantizar la paz y la seguridad para terminar con el estado de guerra entre los hombres.

Sólo de este modo avanzaremos en la construcción de un país y una sociedad civilizada, donde ya no sea más el hombre para el hombre, como un lobo para el cordero. Muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Gracias a usted, senadora. Tiene el uso de la palabra don Tomás Torres Mercado. Tiene el uso de la voz, posteriormente don Ulises Ramírez, y de inmediato preguntaremos si está suficientemente discutido.

**-EL C. SENADOR TOMAS TORRES MERCADO:** Gracias, ciudadano Presidente.

Señoras legisladoras,

Señores legisladores:

Puede no resultar precisamente ortodoxo, puede no resultar normal que hagamos un planteamiento como el que --con la licencia de ustedes-- expresaré en seguida.

En el tema de Seguridad Pública y de Justicia Penal, consideramos que a todas las fuerzas políticas, la discusión, el debate de las Iniciativas, de las minutas, de los dictámenes, nos han puesto en un lugar común.

Más que la posición partidaria, ha dominado la necesidad de darle al Poder Ejecutivo Federal, trascender a los estados y a los municipios con herramientas, con leyes que les puedan servir para combatir este flagelo social tan grave por el que está pasando nuestro país, esta crisis nacional de Seguridad Pública.

Señores senadores;

Señoras senadoras:

En discusiones anteriores a la del día de hoy, en esta dinámica tan intensa, se había anticipado en esta misma tribuna de que parecía algo no bien intencionado el que se hubieran turnado y presentado diferentes Iniciativas en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores.

Pero tal hipótesis, finalmente, las dos Cámaras tenemos la responsabilidad de darle orden y metodología al debate, materia de las Iniciativas.

Miren, al tiempo que discutíamos en el Senado de la República la Miscelánea Penal, es decir, Código Penal Federal y reglas de procedimiento, como el Código Federal de Procedimientos Penales, y también la estructura y la funcionalidad como de la Procuraduría General de la República o de la Policía Federal, al mismo tiempo en Cámara de Diputados se estaba discutiendo ésta que ahora discutimos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pero resulta --señoras y señores senadores-- que no hay plena armonía, no hay plena concatenación entre lo aquí discutido y al mismo tiempo discutido en Cámara de Diputados, me refiero a Miscelánea Penal y a Ley General sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el trabajo que ocurre en esta discusión parlamentaria, en los acercamientos de los grupos parlamentarios, todos, y por las reservas que acotaba que el Senador Ricardo Monreal Avila, con relación específicamente a un artículo, que es el 77, en su extensión de 14 fracciones que hay contradicción, y que se deja abierto las bases generales para los Gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, de modo potestativo, y que pueden trascender al respeto de derechos fundamentales de los gobernados que son innegociables, que son irreductibles, los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del Verde Ecologista, de los presentes Senadores del Partido del Trabajo, del presente Senador, y por supuesto del Partido de la Revolución Democrática, en cuyo nombre hablo, es que desde esta tribuna y en la circunstancia que apuntamos, asumamos un compromiso político parlamentario de Iniciativa para rectificar, como debe ocurrir en la vida privada y en la vida pública, para que tengan más confianza o nos tengamos más confianza, corregir donde pueda y deba corregirse, para que, en un lapso que sea pertinente políticamente, modifiquemos estos particulares, que decimos: son definitivamente corregibles por ausencia de armonía o de concordancia. Ese es el planteamiento.



Por lo demás, por su puesto que hemos estando en la actitud todos, no sólo de votar a favor, sino de contribuir en la parte que le toca al Congreso de la Unión para combatir, lo que hemos dicho, trastoca la paz y la tranquilidad de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

**-EL C. PRESIDENTE FRANCISCO AGUSTIN ARROYO VIEYRA:** Muchas gracias, señor Senador.

-Don Ulises Ramírez, tiene usted el uso de la palabra, a nombre del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.

**-EL C. SENADOR ULISES RAMIREZ NUÑEZ:** Con su venia, señor Presidente.

Honorable Asamblea:

Primero, vengo a expresar la postura del Partido Acción Nacional respecto de este importantísimo dictamen que aprueba la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, primero dejando muy en claro que estamos cumpliendo con nuestra labor legislativa.

Hace poco tiempo aprobamos una reforma constitucional que nos obliga a seguir construyendo ese andamiaje que le permita al Ejecutivo tener mayores herramientas para continuar la lucha frontal contra la delincuencia organizada.

Por eso hoy yo me congratulo que podamos estar discutiendo, y discutiendo en estas circunstancias.

¿Cuáles son ellas?

Primero.- Es un dictamen que viene de Cámara de Diputados, que trae un respaldo de los grupos parlamentarios que componen esa legislatura. Eso es un avance importantísimo y muestra la voluntad clara de que cuando hay voluntad política de construir acuerdos, se logran mucho más allá de colores partidistas, y eso lo debo reconocer.

Debo reconocer también el trabajo de mis compañeros senadores. Pero quiero hacer una acotación al respecto, respecto de lo que se comentó aquí.

Yo en este momento no soy parte de la comisión, no soy parte de la Comisión de Seguridad Pública, fui parte de ella, fui Presidente de esta comisión en la reforma constitucional, ahora no soy parte; tampoco soy parte de la de Estudios Legislativos; tampoco soy miembro de la Mesa Directiva, por supuesto, y estuvimos discutiendo desde ayer, hoy muy temprano, la reforma, las adiciones, y se tomaron en cuenta las sugerencias, las participaciones de todos los que estuvimos ahí.

Por eso quiero hacer una referencia muy puntual. Creo que en este tema, en el tema de Seguridad Pública y de Justicia, no debemos regatear tiempos, no debemos regatear debates, y el debate se dio de manera muy rica, de manera muy candente en las comisiones.

Por eso también quiero decir hoy: que me encuentro verdaderamente satisfecho de haber participado en este dictamen porque, bajo la visión de Acción Nacional, primero, atiende la principal preocupación de todos los mexicanos, que es la inseguridad.

Comentaba yo justamente con el Senador Labastida en un desayuno que tuvimos con el Presidente de la República, y él muy atinadamente, en esa discusión señalaba: "Si tenemos o seguimos teniendo una coordinación de buena voluntad, el señor Presidente decía él en aquella ocasión, el sistema nunca va a funcionar".

Y este dictamen es una herramienta clara y contundente donde se están estipulando los mecanismos y los alcances de una coordinación verdadera en los tres niveles de gobierno.

Comenté también, muchas veces, con el Senador Murillo respecto de un asunto importantísimo, y señalábamos: "El Consejo Nacional de Seguridad Pública no sirve para nada, más que para repartir recursos". Si no le ponemos dientes a este sistema, jamás va a funcionar.

Y este dictamen, a través de la figura del Secretario Ejecutivo, como un órgano desconcentrado con autonomía de gestión y financiera, tiene las facultades suficientes para que se esté supervisando, se esté evaluando el cumplimiento de las metas y el ejercicio del Presupuesto; y eso es algo muy importante que contiene este dictamen.

Contiene también elementos importantes que antes no se habían tocado. Y yo pienso que si preguntamos a la gente, qué es lo que piensa o qué es lo anhela, respecto de los cuerpos de seguridad, es, tener cuerpos de seguridad profesionales.

Y en este dictamen, también, se estipulan las bases para crear un servicio profesional policiaco. Para profesionalizar al Ministerio Público y también a los peritos, y de manera contundente, este dictamen lo contiene.

Es un avance, pero no podemos sentirnos satisfechos, y yo vengo a expresar la posición, también, del Partido Acción Nacional.

Decirle al senador Monreal, a Tomás Torres, a mis compañeros del PRI, que vemos con muy buenos ojos la propuesta que hace el senador Tomás Torres, que nos sumamos a ella, y que estamos dispuestos a atender a la brevedad posible este dictamen.

Creo que hemos dado muestras de que se tiene voluntad de avanzar, y prueba de ello, lo hicimos cuando aprobamos, lo que se llama o se denominó: miscelánea penal.

Modificamos el Código Federal de Procedimientos Penales, que contiene varios de los aspectos que se están discutiendo aquí, y que fuimos verdaderamente exhaustivos y cuidadosos en ese dictamen.

Este dictamen ha sido aprobado hoy, por unanimidad, también, en la Cámara de Diputados.

Vengo, finalmente, a nombre del Partido Acción Nacional, que no vamos a regatear esfuerzo, en un tema tan importante; en el tema que más le preocupa a la sociedad.

Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y dotar al Ejecutivo de esas herramientas que le permitan continuar esta batalla que se ha iniciado en todo el país.

A nombre del Partido Acción Nacional, está nuestro compromiso. Y agradezco a todos los compañeros que hemos estado vinculados en este dictamen, porque sé que hemos actuado de buena fe; porque sé que hemos actuado con responsabilidad y también con honor.

Muchas gracias. (Aplausos)

**-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:** Tiene el uso de la voz, el señor senador don Jesús Murillo.

Inmediatamente después de esta intervención, es que preguntaremos respecto de las reservas.

**-EL C. SENADOR JESUS MURILLO KARAM:** A mi fracción parlamentaria le pareció indispensable, también fijar, cuál es nuestra posición en este aspecto.

Hace unas semanas decíamos en esta misma tribuna, que la forma en que se habían distribuido las iniciativas, había generado una partición en los conceptos y que había que iniciativas que requieran conectividad, o que requieran adecuaciones, para que fuesen en el mismo sentido, estaban propiciando un debate difícil, un debate complicado.

Pero a todos nos queda clara, las razones que nos mueven en este sentido.

Primero. Entendemos los senadores, como lo entiende la población mexicana, que éste es el problema fundamental al que tenemos que darle inmediata atención.

No podemos permitir, que por unos días o por unas semanas, pudiera cometerse un crimen o cometerse algunos crímenes, que por desidia o por falta de atención, pudieran haberse evitado.

Podríamos y tenemos esas alternativas, de tener éstas, y esperarnos unas semanas o convocar a un período extraordinario y alargar éste, para tratar de hacer la concatenación o coordinación de iniciativas.

Pero analizadas en los grupos de trabajo de los partidos, llegamos a la conclusión, de que haríamos más daño deteniéndolas, que aprobando éstas, en los términos que tienen, y darles la concordancia y la adecuación que requieren en un compromiso serio de trabajo en el próximo período.

Porque con ello lo que hacemos, es no dejar desatendido o desarmado al Poder Ejecutivo, sobre algunas posibilidades de acción, eficiente y pronta; pero al mismo tiempo, generamos las condiciones para que, de manera adecuada, podamos darle la forma, la adecuación, la corrección que requiere la concatenación de tantas iniciativas que fueron modificadas.

Esa es la razón de este compromiso. Esa es la razón por lo que los senadores tomamos la decisión, más correcta en el tiempo y más correcta frente a la sociedad mexicana, con el compromiso serio, de no detenernos en la búsqueda de soluciones mucha más correctas, mucho más adecuadas y mucho más prontas; en la solución del principal problema de los mexicanos, que no dejamos desatendido.

No hay, ni falta de atención, ni falta de responsabilidad, ni de este Senado, ni de la Cámara de Diputados.

Muchas gracias, compañeros. (Aplausos)

**-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:** Esta Presidencia informa, que se han reservado en lo particular, el señor senador don Ricardo Monreal, los artículos 12, 41, 74 y 77.

En términos reglamentarios, es que preguntamos, ¿si hay alguna otra reserva?

No habiendo...

**-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA:** (Desde su escaño) Señor presidente.

**-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:** ¿Senador Monreal? Sonido en el escaño del senador Monreal Avila.

**-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA:** (Desde su escaño) Bueno, gracias, presidente.

Quisiera, nada más rectificar, el número de artículos reservados. En efecto, en un principio yo le había dado al doctor Garita, un número de artículos, pero son el 7, el 12, el 14, el 17, el 15, el 41, el 49, 73, 74, 75 y 77.

**-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:** En términos reglamentarios, está hecha la reserva.

Y no habiendo más reservas, ábrase el sistema electrónico, por tres minutos...

**-EL C. SENADOR RICARDO GARCIA CERVANTES:** (Desde su escaño) Señor presidente.

**-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:** ¿Sí, senador?

Don Ricardo García Cervantes.

**-EL C. SENADOR RICARDO GARCIA CERVANTES:** (Desde su escaño) Solamente, en los dictámenes que nos entregaron, vienen dos páginas 42. Toda vez que la que está suelta, sustituye a la que viene engrapada en el dictamen.

Yo quisiera que se tuviera la precaución o la previsión, de que es, esa sustitución de hoja, porque modifica un párrafo, el último párrafo de la página 42.

Entonces, el dictamen incluye la fracción XI, contenida en la página 42, que está suelta, del dictamen. Para evitar cualquier tipo de confusión.

**-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:** Tome las secretarías, las prevenciones necesarias, para efectos de votación.

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recabar votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación electrónica)

**-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO:** Señor presidente, se emitieron 94 votos en pro, por el sí; cero votos por el no; y dos abstenciones.

**-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:** Aprobado en lo general y los artículos no reservados en el proyecto del decreto.

Tiene el uso de la palabra el senador Monreal. ¿Si usted gusta presentar las reservas en conjunto?

Pase usted a la tribuna. Presentará las reservas de los artículos 7, 12, 14, 15, 17, 41, 49, 73, 74, 75 y 77.

**-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA:** Presidente, si me permite, y si obtengo la tolerancia de la Asamblea, en una sola intervención, agotaré los artículos reservados, en virtud de que no hay otro orador, ni otro senador o senadora que haya reservado artículo alguno.

Lo único que le pediría es tolerancia, para no hacer una vez por cada uno de los artículos, y en un solo acto desahogarlos.

Ciudadanos legisladores, senadoras y senadores: La seguridad y la justicia constituyen dos de los pilares fundamentales de todo Estado democrático, y uno de los compromisos centrales de todo representante popular con la sociedad.

Me he permitido reservar varias de las disposiciones, que enseguida comentaré.

Este dictamen que se presenta con Proyecto de Decreto hoy al Pleno para su aprobación, desde mi punto de vista trae diversas disposiciones que trasgreden lo ya aprobado por esta Cámara de Senadores respecto del mismo tema y que ha sido motivo de este debate con un compromiso formal de todos los Grupos Parlamentarios de enmendarlo en cuanto sea lo más rápido posible.

Me parece que está bien el compromiso, pero para qué esperar, por qué no modificarlo ahora y por qué esperar una mejor oportunidad de modificar lo que ya acordamos de que está mal en la Ley.

Son varias las disposiciones que tienen algún artículo correspondiente en la legislación penal adjetiva que reformamos apenas el jueves pasado. Además otros temas que tienen un fondo importante y que por ello no puede aceptarse.

De manera personal entiendo y comparto la preocupación que se ha expresado por los compañeros Senadores y Senadoras en esta tribuna, pero les aseguro a todos que técnicamente nos van a cuestionar.

Cualquier escuela de derecho, cualquier académico, cualquier abogado va a cuestionar este trabajo apresurado en el que estamos incurriendo, pero además inadecuado técnicamente y jurídicamente.

El Artículo Séptimo, Fracción Once de la Ley que se propone aprobar, sobre las Instituciones de Seguridad Pública, dice que “deberán coordinarse para proteger y vigilar las instalaciones estratégicas del país”.

Fíjense, este es un asunto que pareciera ser menor, pero dice que esta Ley regulará todas las instituciones de seguridad pública y vigilar las instalaciones estratégicas del país, cuando es de todos conocido que esta actividad la tiene encomendada el Ejército Nacional. Para vigilar todas las áreas estratégicas del país, le corresponde su vigilancia al Ejército Mexicano. Y el Ejército Mexicano definitivamente no forma parte de las Instituciones de Seguridad Pública del país. Es una grave definición incorrecta.

En el Artículo Doce, esto es lo que contiene el Artículo Séptimo, entonces hago una propuesta que al final se las comento.

Paso al segundo artículo. En el Artículo Doce de la Ley en comento se establece la composición del Consejo de Seguridad, en la cual se propone que el Consejo Nacional de Seguridad no sea integrado por los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina por tratarse de un Consejo de carácter civil. Y este tipo de cuerpos castrenses no deben participar en estas tareas sin dejar de considerarlos como una aportación importante, pero como invitados del propio órgano directivo, más no como miembros activos con voz y voto.

La justificación es que la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos prescribe, en su Artículo 129, la prohibición de que las Fuerzas Armadas participen en asuntos civiles o que se encuentren fuera de sus cuarteles en tiempos de paz.

También propongo que en este Consejo de Seguridad sí participe el Secretario de Hacienda y Crédito Público ya que el área de inteligencia financiera de dicha Secretaría podría aportar información para atacar el principal factor de poder y corrupción del crimen organizado. Los recursos económicos lavados en nuestro país por el propio sistema financiero, ascienden a más de 10 mil millones de pesos. Se trata de una disposición importante y que se encuentre acorde con diversas recomendaciones que han hecho los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.

También propongo en este Artículo, en el último párrafo, que las invitaciones a participar en el Consejo Nacional de Seguridad no se hagan a juicio del Consejo, sino con base en los conocimientos y experiencias que puedan aportar para los asuntos que se aborden en el Consejo.

Paso al siguiente Artículo 14. En su Fracción Octava establece como facultad del Consejo de Seguridad la de cancelar las aportaciones a las Entidades Federativas, sin establecer, de forma clara y precisa, los supuestos en que operaría esta hipótesis de sanción.

Por ello propongo una mejor redacción que supondría establecer de forma específica los criterios bajo los cuales se sancionarán a las Entidades Federativas o Municipios que no cumplan con esos criterios y no dejarlo al libre albedrío o al arbitrio del Consejo Nacional.

En la Fracción Nueve, desde mi punto de vista carece de una correcta redacción y en ella quedan comprendidas las fracciones once y diez, por lo que propongo una nueva redacción alterna que permita darle mayor sustancia al Artículo.

En el Artículo 15 se propone cambiar la redacción en el sentido de que los acuerdos se tomarán por mayoría de los miembros del Consejo ya que, desde mi punto de vista hay otra mala redacción.

En el Artículo 17, Fracción Quinta, se propone agregar como requisito para poder ser Secretario Ejecutivo del Consejo, además de no haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público, también sea requisito el no haber sido señalado por violaciones a los derechos humanos por una recomendación debidamente comprobada.

Dentro de las atribuciones que en el Artículo 20, Fracción Sexta se le dan al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, también se podría incluir una mejor redacción que la trae el texto de la Minuta enviada por la Colegisladora.

En el Artículo 41 hay varias observaciones que podrían permitir armonizar el texto enviado por los Diputados con el que se aprobó en el Senado de la República. Por ejemplo, la Fracción Segunda instruye a las instancias policiales a remitir a la instancia que corresponda. Este es un tema que también discutimos. Dice "las instancias policiales, a las instancias que corresponda". Técnicamente lo modificamos en el Código de Procedimientos Penales y pusimos "Ministerio Público" porque además no hay otras instancias. Así quedó modificado. Pero en esta redacción quedó exactamente igual que como había sido la iniciativa que modificamos.

En la Fracción Tercera se obliga a apoyar a las autoridades que así lo soliciten. Esta fue otra discusión en las Comisiones de Justicia, Gobernación y Seguridad Pública que aprobamos la Miscelánea Penal, si lo recuerdan.

La Fracción Tercera obliga a apoyar a las autoridades que así lo soliciten, cuando la obligación debe de ser al Ministerio Público, y otros en el caso de catástrofes o desastre.

La Fracción Cuarta trae otra redacción que nosotros modificamos en la Miscelánea penal. Estoy hablando del artículo 41, no del 77. Por lo que sería conveniente armonizar los textos para que quedaran acordes.

En el artículo 49 de la ley en comento se habla de una policía ministerial dentro de alguna estructura orgánica de las instituciones de procuración de justicia, cuando conforme a las reformas aprobadas en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, se derogó el fundamento para una policía ministerial. Por lo que se podría eliminar estas previsiones en el artículo 49.

En materia del servicio de carrera de las instituciones de procuración de justicia, se propone agregar como requisito mínimo para poder aspirar a incorporarse a estas, el de no haber cometido violaciones a los derechos humanos, tanto para el caso de peritos como del Ministerio Público.

En el artículo 73 se debería hablar de relaciones de carácter laboral y no de relaciones jurídicas, por al amplitud del término jurídicas es por ello que debiera sustituirse por el "término laborales".

En este caso, yo debo expresar mi reticencia a que a los policías, todos en general, se les califiquen con el mismo rasero.

Ha habido una campaña de estigmatización contra los policías y caen todos en el mismo concepto general de que la policía toda es corrupta, toda es deshonesta, toda está pagada por el crimen organizado.

No me parece correcta la generalización, es una actitud torpe e injusta, porque seguramente habrá un número importante de policías que intenta hacer su trabajo de la mejor manera.

Hace poco en San Luis Potosí recibía de San Luis Potosí un correo de gentes de la Policía Federal Preventiva que se capacitaron, que los adiestraron para ser policías de élite y estuvieron varios meses y años, y que ahora están totalmente abandonados, nadie aprovecha la experiencia ni el conocimiento adquirido en la academia y hay una total desorganización.

La propia SIEDO, la propia Policía Federal Preventiva, la AFI, todas las policías están en un total desorden.

Por eso ojalá y con este instrumento jurídico, en esa parte sí podamos ordenar o instrumentar una policía profesional que ese es el propósito del Legislativo.

En el caso del artículo 74, tiene relación con el artículo 80 de la Ley de Amparo, que, fíjense, esta ley, este artículo 74 que persiste en lo que estamos discutiendo y que va a aprobar ustedes, en la discusión fue suprimido del dictamen, aquí en esta Cámara fue suprimida esta disposición de la Ley de Amparo. Por lo que creo que sería prudente retirar también esta disposición del cuerpo de este artículo para ser congruentes.

En el artículo 75 habría que adicionar que las instituciones periciales que se encuentran bajo el mando del Ministerio Público en los términos del artículo 21 de la Constitución, para volverlas congruente con la reforma aprobada hace algunos días por esta misma comisión, así como cambiar la redacción de las tres fracciones que compone el artículo ya que no es correcto.

Finalmente, el artículo 77, en las fracciones que ya he comentado. Es muy triste estar dirigiéndose a la asamblea y que nadie le haga caso, todo mundo está con su tema. Omito, hay pocas personas haciendo caso, pero es muy triste, porque es un tema tan delicado, todo mundo viene a la tribuna y dice que es muy importante para la nación, que están muy interesados, no han leído el dictamen, no escuchan los apartados, no escuchan los artículos que estamos reservando y verdaderamente se siente uno mal de pertenecer a esta Cámara de Senadores.

Gracias, presidente.

(Aplausos)

**-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:** Gracias a usted, senador Monreal. Y voy a pedir a la secretaría que dé lectura a las propuestas de modificación que ha presentado el senador Ricardo Monreal, y que inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión, a partir del artículo siete. Es comenzando por el artículo siete y posteriormente 12, 14, 15, son las que están en negritas.

**-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO:** Respecto al artículo siete, propone la modificación en la fracción cuarta para incorporar, la fracción cuarta dice: ...”proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, propone adicionar el Programa Nacional de Seguridad Pública; y después continuar como andaba, y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación Democrática. Es decir, se propone incluir el Programa Nacional de Seguridad Pública en esta fracción cuarta del artículo siete.

En la fracción décima incluir la palabra “coordinar acciones y operativos conjuntos de las instituciones de seguridad pública”.

En la fracción décimo tercera, siempre del artículo siete, incluir las palabras “servidores públicos” para decir “fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes e instrumentar los complementarios a estos”.

Y en la fracción décimo cuarta, incluir la palabra “realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública”.

En el artículo doce, propone una fracción séptima recorriendo las fracciones actuales para que diga, la fracción séptima diga: ...”un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión y la actual fracción séptima pasaría a ser fracción octava”.

En el artículo 14, propone que en la fracción segunda se incluya lo siguiente.

Emitir acuerdos y resoluciones generales que resulten, y él propone incluir “necesarios para el funcionamiento del sistema”.

En la fracción novena, él propone integrar una fracción novena que diga: ...”proponer, aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, de prevención social del delito, de seguridad pública y demás instrumentos programáticos en la materia, previstos en la Ley de Planeación democrática”.

Y en el artículo 15,...

Artículo 17, propone agregar en el segundo párrafo: ...”el secretario ejecutivo y los titulares de los centros nacionales, incluir la palabra “el secretario ejecutivo”.

En el artículo, no sé cuál sea la modificación, senador, de los artículos... ¿perdón?

Artículo 41...

Y a los demás artículos darles congruencia con lo que establece el Código de Procedimientos Penales.

Consulta a la asamblea, en votación económica si se admiten a discusión los anteriores, las anteriores propuestas y reservas del Senador Monreal.

-Quienes estén porque se admitan a discusión, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

-Quienes estén porque no se admitan a discusión, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

-No se admiten a discusión, señor Presidente.

**-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:** Muchas gracias.

Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 7, 12, 14, 15, 17, 41, 49, 73, 74, 75 y 77 reservados, en el entendido que el voto a favor es porque queden los artículos en los términos del dictamen.

(Se recoge la votación)

**-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO:** Señor Presidente, según el sistema electrónico, se emitieron 82 votos por el sí, dos votos por el no y once abstenciones.

**-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:** Muchas gracias.

Aprobados los artículos 7, 12, 14, 15, 17, 41, 49, 73, 74, 75 y 77 del Proyecto de Decreto.

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.

**Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional.**





"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

**MESA DIRECTIVA**

**OFICIO No. DGPL-1P3A.-9008.**

México, D. F., a 9 de diciembre de 2008.

**CC. SECRETARIOS DE LA  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS  
PRESENTES.**

*Turnese a la Comisión de  
Seguridad Pública.  
Diciembre 9 del 2008.  
Luisa Vega*

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene **MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

Atentamente



  
**SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN**  
**Vicepresidente**



## MINUTA

### PROYECTO DE DECRETO

**POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

**Artículo Único.-** Se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

### ***LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA***

#### ***TÍTULO PRIMERO***

#### ***DISPOSICIONES PRELIMINARES***



**Artículo 1.-** La presente ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

4

**Artículo 2.-** La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

**Artículo 3.-** La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

**Artículo 4.-** El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública.

La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 5.-** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

- I. Academias: a las Instituciones de Formación, de Capacitación y de Profesionalización Policial;
- II. Bases de Datos Criminalísticas y de Personal: Las bases de datos nacionales y la información contenida en ellas, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema.
- III. Carrera Ministerial: al Servicio Profesional de Carrera Ministerial;
- IV. Carrera Pericial: al Servicio Profesional de Carrera Pericial;



- V.** Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial;
- VI.** Conferencias Nacionales: a las Conferencias a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley;
- VII.** Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Seguridad Pública;
- VIII.** Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal;
- IX.** Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél;
- X.** Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;
- XI.** Institutos: a los órganos de las instituciones de seguridad pública de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, encargados de la formación y actualización especializada de aspirantes y servidores públicos de las funciones ministerial, pericial y de policía ministerial;
- XII.** Programa Rector: al conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia, respectivamente;
- XIII.** Registro Nacional: el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XIV.** Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal;
- XV.** Secretario Ejecutivo: el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema;
- XVI.** Sistema: al Sistema Nacional de Seguridad Pública.





4



**Artículo 6.-** Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.

**Artículo 7.-** Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

- 
- 
- I.** Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines;
  - II.** Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;
  - III.** Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;
  - IV.** Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación;
  - V.** Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;
  - VI.** Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;
  - VII.** Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;
  - VIII.** Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública;



- IX.** Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;
- X.** Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XI.** Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;
- XII.** Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;
- XIII.** Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;
- XIV.** Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y
- XV.** Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.

**Artículo 8.-** La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con respeto a las atribuciones que la Constitución establece para las instituciones y autoridades que integran el Sistema.

**Artículo 9.-** Las Conferencias Nacionales, los consejos locales y demás instancias del Sistema, observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional.

En caso de contradicción entre las resoluciones y acuerdos generales adoptados por las conferencias, el Consejo Nacional determinará la que deba prevalecer.

4



**TÍTULO SEGUNDO**  
**DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN**  
**DE COMPETENCIAS**  
**DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**CAPÍTULO I**

**De la organización del**  
**Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 10.-** El Sistema se integrará por:

- I.** El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;
- II.** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
- III.** La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;
- IV.** La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;
- V.** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;
- VI.** Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y
- VII.** El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

**Artículo 11.-** Las Conferencias Nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar

4



que la coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Nacional.

El Secretariado Ejecutivo se coordinará con los Presidentes de las Conferencias Nacionales para dar seguimiento a las resoluciones que se adopten por el Consejo Nacional, en los términos de esta Ley.

## **CAPÍTULO II**

### **Del Consejo Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 12.-** El Consejo Nacional estará integrado por:

- I.** El Presidente de la República, quien lo presidirá;
- II.** El Secretario de Gobernación;
- III.** El Secretario de la Defensa Nacional;
- IV.** El Secretario de Marina;
- V.** El Secretario de Seguridad Pública;
  
- VI.** El Procurador General de la República;
- VII.** Los Gobernadores de los Estados;
- VIII.** El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y
- IX.** El Secretario Ejecutivo del Sistema.

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente.

El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter






honorífico. Así mismo el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de este Consejo.

**Artículo 13.-** El personal de confianza de las unidades administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los Centros Nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el Acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.

**Artículo 14.-** El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

- 
- I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública;
  - II. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema;
  - III. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad Pública;
  - IV. Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito;
  - V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;
  - VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;
  - VII. Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;

4



- VIII.** Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los Acuerdos Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia;
- IX.** Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;
- X.** Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XI.** Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XII.** Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de gobierno;
- XIII.** Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;
- XIV.** Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública;
- XV.** Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de Seguridad Pública, previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley;
- XVI.** Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública;
- XVII.** Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;
- XVIII.** Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y



**XIX.** Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

**Artículo 15.-** El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en las comisiones previstas por esta ley. El Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.

El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes del Consejo.

Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema.

Los miembros del Consejo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.

**Artículo 16.-** Son comisiones permanentes del Consejo Nacional, las siguientes:

- I.** De Información;
- II.** De Certificación y Acreditación,
- III.** De Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Estas comisiones se coordinarán con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de los Centros Nacionales que integran el Secretariado Ejecutivo. El Consejo Nacional determinará el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las mismas.

En las Comisiones podrán participar expertos de instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionados con su objeto.



Los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán designar por oficio a sus representantes permanentes ante el Secretario Ejecutivo del Sistema, los cuales deberán ser servidores públicos con un nivel jerárquico igual o superior a Director General en las Secretarías competentes en la entidad federativa respectiva, para la aplicación de esta Ley.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública**



**Artículo 17.-** El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos Centros.

El Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- I.** Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no tengan otra nacionalidad y estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
- II.** Tener más de treinta años de edad;
- III.** Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado;
- IV.** Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y
- V.** No haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitados como servidores públicos.

4



**Artículo 18.-** Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:

- I.** Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente;
- II.** Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema;
- III.** Formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización;
- IV.** Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento;
- V.** Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;
- VI.** Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;
- VII.** Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema;
- VIII.** Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional;
- IX.** Proponer al Consejo Nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública;
- X.** Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo;
- XI.** Proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública en los términos de la ley;
- XII.** Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema en los términos de ley;



**XIII.** Presentar al Consejo Nacional los informes de las Conferencias Nacionales, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;

**XIV.** Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional;

**XV.** Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema, para fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial;

**XVI.** Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del Consejo, en términos de las disposiciones legales aplicables;

**XVII.** Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo y las demás disposiciones aplicables;

**XVIII.** Someter a consideración del Consejo Nacional el proyecto de resolución fundado y motivado de cancelación y, cuando proceda, la restitución de la ministración de aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso, municipios;

**XIX.** Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta Ley;

**XX.** Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;

**XXI.** Elaborar y someter a consideración del Consejo Nacional, opinión fundada y razonada por la que se recomiende la remoción de los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública;

**XXII.** Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como por el uso ilícito o indebido de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, e informar al respecto al Consejo Nacional;



4



- XXIII.** Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema;
- XXIV.** Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública, y
- XXV.** Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Nacional o su Presidente.

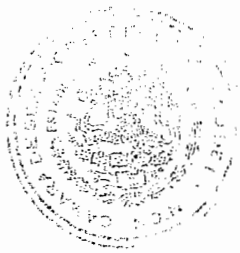
**Artículo 19.-** El Centro Nacional de Información será el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

- I.** Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema en términos que señale el reglamento;
- II.** Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del Sistema;
- III.** Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos;
- IV.** Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada;
- V.** Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad con la Ley de la materia, y
- VI.** Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos.

**Artículo 20.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:



- I.** Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;
- II.** Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;
- III.** Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:
  - a)** Prevenir la violencia infantil y juvenil;
  - b)** Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
  - c)** Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y
  - d)** Garantizar la atención integral a las víctimas
- IV.** Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;
- V.** Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;
- VI.** Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;
- VII.** Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;
- VIII.** Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;



4





- IX.** Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley, y
- X.** Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.

**Artículo 21.** El Centro Nacional de Certificación y Acreditación será el responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Este Centro contará con un órgano consultivo integrado por las instituciones públicas y privadas que se determinen en el Reglamento de este ordenamiento.

**Artículo 22.** Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal, realizan sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para tal efecto, tendrá las facultades siguientes:

- I.** Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las conferencias.
- II.** Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos;
- III.** Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- IV.** Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- V.** Evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza que en el ámbito de Seguridad Pública operen instituciones privadas que así lo soliciten y cumplan con la normatividad correspondiente;



- VI.** Verificar periódicamente que los Centros de referencia apliquen los procesos certificados, conforme a los lineamientos y estándares que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación establezca;
- VII.** Apoyar a los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- VIII.** Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de Evaluación y Control de Confianza;
- IX.** Establecer los requisitos que deben contener los certificados Ministerial, Policial y Pericial y aprobar sus características, y
- X.** Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.



#### **CAPÍTULO IV**

##### **De la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.**

**Artículo 23.-** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estará integrada por los titulares de las Instituciones de Procuración de Justicia de la Federación, el Distrito Federal y los Estados, y será presidida por el Procurador General de la República.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

**Artículo 24.-** El Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia podrá invitar a personas e instituciones por razón de los asuntos a tratar.

El Procurador General de Justicia Militar será invitado permanente de esta Conferencia.

**Artículo 25.-** Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

4



- I.** Formular políticas generales de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia;
- II.** Promover la coordinación y colaboración entre las Instituciones de Procuración de Justicia y las Instituciones Policiales;
- III.** Formular propuestas para la integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia y demás instrumentos programáticos relacionados con el ámbito de su competencia, así como darles seguimiento;
- IV.** Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- V.** Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de Procuración de Justicia;
- VI.** Integrar los Comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;
- VII.** Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación conjuntos;
- VIII.** Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IX.** Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
- X.** Promover la homologación de los procedimientos de control de confianza de los Integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia, de conformidad con las disposiciones aplicables;
- XI.** Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de procuración de justicia, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;



- XII.** Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;
- XIII.** Impulsar las acciones necesarias para promover la denuncia de los delitos y la participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia;
- XIV.** Determinar las políticas y lineamientos sobre datos de procedimientos penales, juicios de amparo y otros procesos judiciales en los que intervenga el Ministerio Público, que se integren a las bases de datos que establece el presente ordenamiento;
- XV.** Fijar criterios de cooperación y coordinación para la entrega de indiciados, procesados y sentenciados; el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales; el aseguramiento de bienes instrumento, objeto o producto de delitos y el desahogo de diligencias judiciales, ministeriales y periciales;
- XVI.** Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y garantías reconocidas en la legislación vigente;
- XVII.** Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas, atención a víctimas y ofendidos de delitos;
- XVIII.** Proponer programas de cooperación internacional en materia de procuración de justicia;
- XIX.** Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de extradición y asistencia jurídica;
- XX.** Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito;
- XXI.** Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- XXII.** Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;



4



**XXIII.** Promover la uniformidad de criterios jurídicos, y

**XXIV.** Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 26.-** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se reunirá cada seis meses de manera ordinaria. El Presidente de dicha Conferencia podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo estime necesario.

## **CAPÍTULO V**

### **De la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública**

**Artículo 27.-** La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública estará integrada por los titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la Federación, los Estados y el Distrito Federal y será presidida por el Secretario de Seguridad Pública Federal.

La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

Los titulares de las dependencias u órganos en que se integren los cuerpos de policía de los municipios, podrán participar en la Conferencia, de conformidad con las reglas que la misma establezca.

**Artículo 28.-** El Presidente de la Conferencia podrá invitar a personas e Instituciones por razón de los asuntos a tratar.

**Artículo 29.-** Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

**I.** Impulsar la coordinación de las actuaciones de las dependencias encargadas de la seguridad pública;



- II.** Promover la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las Instituciones Policiales, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
- III.** Elaborar propuestas de reformas a leyes en materia de Seguridad Pública;
- IV.** Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales, cualquiera que sea su adscripción;
- V.** Proponer medidas para vincular el Sistema con otros nacionales, regionales o locales;
- VI.** Proponer la adopción y aplicación de políticas y programas de cooperación internacional sobre Seguridad Pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;
- VII.** Promover criterios uniformes para el desarrollo policial en términos de la presente Ley;
- VIII.** Integrar los Comités que sean necesarios en la materia;
- IX.** Desarrollar las especialidades policiales de alto desempeño para hacer frente a los delitos de impacto nacional e internacional;
- X.** Emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública federales, locales y municipales;
- XI.** Impulsar las acciones necesarias para que los integrantes del Sistema establezcan un servicio para la localización de personas y bienes;
- XII.** Promover el establecimiento de un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre emergencias, faltas y delitos;
- XIII.** Procurar que en las Instituciones Policiales se aplique homogénea y permanentemente, el protocolo de certificación correspondiente, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- XIV.** Proponer los requisitos que debe contener el Certificado Único Policial;



4



- XV.** Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las Instituciones Policiales y promover su aplicación;
- XVI.** Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones Policiales y para el manejo de información;
- XVII.** Proponer mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos, a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
- XVIII.** Proponer reglas para coadyuvar en la vigilancia y realización de acciones conjuntas para proteger las instalaciones estratégicas del país, en los términos de la legislación aplicable, y
- XIX.** Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

## **CAPÍTULO VI**

### **De la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario**

**Artículo 30.-** La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el titular de la Secretaría.

**Artículo 31.-** Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

- I.** Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional;
- II.** Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social;
- III.** Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de reinserción social;



- IV.** Proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de reinserción social;
- V.** Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción social en las legislaciones aplicables;
- VI.** Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;
- VII.** Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticos y de personal, y
- VIII.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.



## **CAPÍTULO VII**

### **De la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal**

**Artículo 32.-** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, estará integrada por los Presidentes Municipales y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal que participarán de conformidad con las siguientes reglas:

- I.** Dos Presidentes municipales, de cada Estado, designados por el Consejo Local de Seguridad Pública correspondiente, y
- II.** Dos titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal serán nombrados por el Consejo Local de Seguridad Pública.

Dicha Conferencia Nacional contará con un Presidente, que será designado de entre sus miembros por el pleno de misma.

La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.





**Artículo 33.-** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, tendrá las siguientes funciones mínimas:

- I.** Emitir sus reglas de organización y funcionamiento;
- II.** Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en materia de Seguridad Pública;
- III.** Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal;
- IV.** Elaborar propuestas de reformas a las normas de aplicación municipal en materia de Seguridad Pública;
- V.** Intercambiar experiencias y apoyo técnico entre los Municipios;
- VI.** Proponer políticas públicas en materia de Seguridad Pública;
- VII.** Colaborar con las instituciones publicas y privadas, en la ejecución de programas tendientes a prevenir el delito;
- VIII.** Promover en el ámbito Municipal, la homologación del Desarrollo Policial;
- IX.** Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre la materia de Seguridad Pública Municipal, y
- X.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales o el consejo nacional.

## **CAPÍTULO VIII**

### **De los Consejos Locales e Instancias Regionales de Coordinación**

**Artículo 34.-** En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno. Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos,



lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En los consejos locales de cada Estado participarán los municipios en los términos de la legislación de cada entidad federativa. En el caso del Distrito Federal, participarán los titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales, de conformidad con la legislación aplicable. Estos Consejos invitarán a cada sesión al menos a dos representantes de la sociedad civil o de la comunidad, de conformidad con los temas a tratar. Su participación será de carácter honorífico.

Los Consejos Locales y las Instancias Regionales de Coordinación se organizarán, de modo que permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura del Sistema e integración del Consejo Nacional.

Los Consejos Locales determinaran su organización y la de las Instancias Regionales de Coordinación correspondientes en términos de esta Ley.

**Artículo 35.-** Los Consejos Locales se integrarán por las Instituciones de Seguridad Pública de la entidad de que se trate y de la Federación.

Además, podrán invitar a personas e instituciones, de acuerdo con los temas a tratar.

**Artículo 36.-** Cuando para el cumplimiento de la función de Seguridad Pública sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente, en las que participarán las Instituciones de Seguridad Pública correspondientes.

Del mismo modo, podrán establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos estatales correspondientes. En el caso de las zonas conurbadas entre dos o más entidades federativas, se podrán suscribir convenios e instalar instancias regionales con la participación de



los municipios respectivos y de los órganos político administrativos, tratándose del Distrito Federal.

**Artículo 37.-** Los Consejos Locales y las instancias regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines de la Seguridad Pública, en sus ámbitos de competencia.

Los miembros del Consejo designarán a uno de sus servidores públicos como enlace responsable de atender y dar seguimiento a la operación del Sistema en su respectiva entidad federativa.

Dichos enlaces están obligados a proporcionar la información requerida por el Secretariado Ejecutivo, en un plazo razonable, que no excederá de treinta días naturales, salvo justificación fundada.

**Artículo 38.-** Los Consejos Locales y las instancias regionales podrán proponer al Consejo Nacional y a las Conferencias Nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.

## **CAPÍTULO IX**

### **De la distribución de competencias**

**Artículo 39.-** La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

**A.** Corresponde a la Federación, por conducto de las autoridades competentes:

**I.** Proponer las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios;

**II.** Respecto del Desarrollo Policial:

**a)** En materia de Carrera Policial, proponer al Consejo Nacional:



1.- Las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los Integrantes de las Instituciones Policiales, de acuerdo al Modelo Policial, conforme a la normatividad aplicable;

2.- Los lineamientos para los procedimientos de Carrera Policial que aplicarán las autoridades competentes;

b) En materia de Profesionalización, proponer al Consejo Nacional:

1.- El Programa Rector que contendrá los aspectos de formación, capacitación, adiestramiento, actualización e investigación académica, así como integrar las que formulen las instancias del Sistema;

2.- Los procedimientos aplicables a la Profesionalización;

3.- Los criterios para el establecimiento de las Academias e Institutos, y

4.- El desarrollo de programas de investigación y formación académica.

c) En materia de Régimen Disciplinario, proponer al Consejo Nacional los lineamientos para la aplicación de los procedimientos respectivos.

III. Coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, y

IV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

B. Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que deriven de ésta;

II. Contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación del Sistema;



- III.** Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario;
- IV.** Constituir y operar las Comisiones y las Academias a que se refiere esta Ley;
- V.** Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de personal;
- VI.** Designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la información a que se refiere esta Ley;
- VII.** Integrar y consultar en las bases de datos de personal de Seguridad Pública, los expedientes de los aspirantes a ingresar en las Instituciones Policiales;
- VIII.** Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo;
- IX.** Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo Policial, Ministerial y Pericial;
- X.** Establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable;
- XI.** Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo Policial para el registro y seguimiento, en las bases de datos criminalísticos y de personal de Seguridad Pública;
- XII.** Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y administración;
- XIII.** Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las Instalaciones Estratégicas del país, y
- XIV.** Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.



4



Los Estados y los Municipios podrán coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Leyes Estatales de Seguridad Pública podrán establecer la posibilidad de coordinación, y en su caso, los medios para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre un Estado y sus Municipios.

### **TÍTULO TERCERO**

#### **DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

#### **CAPÍTULO I**

##### **De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública**

**Artículo 40.-** Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

- I.** Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;
- II.** Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;
- III.** Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;



- IV.** Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
- V.** Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;
- VI.** Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
- VII.** Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;
- VIII.** Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
- IX.** Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
- X.** Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias;
- XI.** Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;
- XII.** Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
- XIII.** Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
- XIV.** Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;



4



- XV.** Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;
- XVI.** Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;
- XVII.** Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;
- XVIII.** Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;
- XIX.** Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables;
- XX.** Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las Instituciones;
- XXI.** Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;
- XXII.** Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda;
- XXIII.** Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;
- XXIV.** Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de



4





carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones;

**XXV.** Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes;

**XXVI.** Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio;

**XXVII.** No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y

**XXVIII.** Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.



**Artículo 41.-** Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

**I.** Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice;

**II.** Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes;

**III.** Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;

**IV.** Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;

**V.** Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;

4



- VI.** Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;
- VII.** Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;
- VIII.** Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
- IX.** Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;
- X.** Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y
- XI.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con pleno respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.

**Artículo 42.-** El documento de identificación de los integrantes de las instituciones Seguridad Pública deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como, las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.

Todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente.

**Artículo 43.-** La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los



integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:

- I.** El área que lo emite;
- II.** El usuario capturista;
- III.** Los Datos Generales de registro;
- IV.** Motivo, que se clasifica en;
  - a) Tipo de evento, y
  - b) Subtipo de evento.
- V.** La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
- VI.** La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos.
- VII.** Entrevistas realizadas, y
- VIII.** En caso de detenciones:
  - a) Señalar los motivos de la detención;
  - b) Descripción de la persona;
  - c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
  - d) Descripción de estado físico aparente;
  - e) Objetos que le fueron encontrados;
  - f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
  - g) Lugar en el que fue puesto a disposición.

4



El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

**Artículo 44.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán las sanciones aplicables al incumplimiento de los deberes previstos en esta ley, los procedimientos y los órganos competentes que conocerán de éstos. Las sanciones serán al menos, las siguientes:

- a) Amonestación;
- b) Suspensión, y
- c) Remoción.



## **CAPÍTULO II**

### **De los Sistemas Complementarios de Seguridad Social y Reconocimientos**

**Artículo 45.-** Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4

**Artículo 46.-** Las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en esta Ley, realizarán y someterán a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión,



actualización y fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.

### **CAPÍTULO III**

#### **De las Academias e Institutos**

**Artículo 47.-** La Federación y las entidades federativas establecerán y operarán Academias e Institutos que serán responsables de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización que tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

- I.** Aplicar los procedimientos homologados del Sistema;
- II.** Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos;
- III.** Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial, pericial y policial, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IV.** Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Profesionalización;
- V.** Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;
- VI.** Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;
- VII.** Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores públicos a que se refiere el Programa Rector;
- VIII.** Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de Profesionalización;
- IX.** Revalidar equivalencias de estudios de la Profesionalización;
- X.** Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación;



4



- XI.** Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de los Servidores Públicos y proponer los cursos correspondientes;
- XII.** Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso a las Academias e Institutos;
- XIII.** Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio ante las autoridades competentes;
- XIV.** Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que impartan;
- XV.** Proponer la celebración de convenios con Instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores públicos;
- XVI.** Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los manuales de las Academias e Institutos, y
- XVII.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 48.-** En materia de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales, la Secretaría tendrá la facultad de proponer a las Instancias de Coordinación de esta ley lo siguiente:

- I.** Los contenidos básicos de los programas para la formación, capacitación y profesionalización de los mandos de las Instituciones policiales;
- II.** Los aspectos que contendrá el Programa Rector;
- III.** Que los integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los programas correspondientes a las Academias y de estudios superiores policiales;
- IV.** El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales y vigilar su aplicación;
- V.** Estrategias y políticas de desarrollo de formación de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- VI.** Los programas de investigación académica en materia policial;



- VII.** El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales;
- VIII.** La revalidación de equivalencias de estudios de la Profesionalización en el ámbito de su competencia, y
- IX.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

## **TÍTULO CUARTO DEL SERVICIO DE CARRERA EN LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA**

### **Capítulo I Disposiciones Generales**



**Artículo 49.-** El Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia, comprenderá lo relativo al Ministerio Público y a los peritos.

Las Instituciones de Procuración de Justicia que cuenten en su estructura orgánica con policía ministerial para la investigación de los delitos, se sujetarán a lo dispuesto en esta ley para las Instituciones Policiales en materia de carrera policial.

Las reglas y procesos en materia de carrera policial y régimen disciplinario de la policía ministerial, serán aplicados, operados y supervisados por las Instituciones de Procuración de Justicia.

Los servidores públicos que tengan bajo su mando a agentes del Ministerio Público o peritos no formarán parte del Servicio de Carrera por ese hecho; serán nombrados y removidos conforme a los ordenamientos legales aplicables; se considerarán trabajadores de confianza, y los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento.

**Artículo 50.-** El Servicio de Carrera Ministerial y Pericial comprenderá las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, conforme a lo siguiente:

4



- I. El ingreso comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación y certificación inicial, así como registro;
- II. El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada, de actualización, de evaluación para la permanencia, de evaluación del desempeño, de desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y reconocimientos, de reingreso y de certificación. De igual forma, deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los miembros del Servicio de Carrera, y
- III. La terminación comprenderá las causas ordinarias y extraordinarias de separación del Servicio, así como los procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar, ajustándose a lo establecido por las leyes y disposiciones aplicables.



**Artículo 51.-** El Servicio de Carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes:

- I. Tendrá carácter obligatorio y permanente; abarcará los planes, programas, cursos, evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas que comprende;
- II. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en tareas de Procuración de Justicia;
- III. El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación fomentará que los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos referidos y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades destrezas y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público;
- IV. Contará con un sistema de rotación del personal;

4





- V.** Determinará los perfiles, niveles jerárquicos en la estructura y de rangos;
- VI.** Contará con procedimientos disciplinarios, sustentados en principios de justicia y con pleno respeto a los derechos humanos;
- VII.** Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño de sus funciones;
- VIII.** Buscará generar el sentido de pertenencia institucional;
- IX.** Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento de los certificados del personal, y
- X.** Contendrá las normas para el registro de las incidencias del personal.

## **CAPÍTULO II**

### **Del Ingreso al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 52.-** El ingreso al Servicio de Carrera se hará por convocatoria pública.

Los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán cumplir, cuando menos, con los requisitos siguientes:

#### **A. Ministerio Público.**

- I.** Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
- II.** Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional;
- III.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- IV.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;



- V.** No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
- VI.** No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;
- VII.** Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan, y
- VIII.** Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables.

#### **B. Peritos.**



- I.** Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos;
- II.** Acreditar que ha concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente;
- III.** Tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;
- IV.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- V.** Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan;
- VI.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
- VII.** No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a

4



procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

**VIII.** No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y

**IX.** Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezca la legislación federal y la de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 53.-** Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos de formación inicial, deberán consultarse sus antecedentes en el Registro Nacional y, en su caso, en los registros de las Instituciones de Procuración de Justicia.

Asimismo, deberá verificarse la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes.

**Artículo 54.-** Los aspirantes a ingresar al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán cumplir con los estudios de formación inicial.

Corresponderá a las autoridades competentes regular en sus legislaciones los términos en que la formación inicial se llevará a cabo. La duración de los programas de formación inicial no podrá ser inferior a quinientas horas clase. En todo caso atendiendo a los lineamientos aplicables.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Desarrollo del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 55.-** Son requisitos de permanencia del Ministerio Público y de los peritos, los siguientes:



- I. Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio;
- II. Cumplir con los programas de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables;
- III. Aprobar las evaluaciones que establezcan las disposiciones aplicables;
- IV. Contar con la certificación y registro actualizados a que se refiere esta Ley;
- V. Cumplir las órdenes de rotación;
- VI. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas, y
- VII. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezcan las leyes respectivas.

**Artículo 56.-** Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable.

Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente ley.

**Artículo 57.-** Las solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su caso, concederán con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento a los requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o penal, local o federal.



## **CAPÍTULO IV**

### **De la Terminación del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 58.-** La Federación y las entidades federativas establecerán en sus respectivas leyes los procedimientos de separación y remoción aplicables a los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia, que cuando menos, comprenderán los aspectos previstos en el artículo siguiente.

**Artículo 59.-** La terminación del Servicio de Carrera será:

**I.** Ordinaria, que comprende:

- a) Renuncia;
- b) Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones, y
- c) Jubilación.

**II.** Extraordinaria, que comprende:

- a) Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, o
- b) Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo.

**Artículo 60.-** En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación o remoción es injustificada, la institución respectiva sólo estará obligada a la



indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.



## **CAPÍTULO V**

### **De la Profesionalización**

**Artículo 61.-** El Programa Rector de Profesionalización es el instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal de las Instituciones de Procuración de Justicia.

**Artículo 62.-** Los planes de estudios se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolución de casos.

**Artículo 63.-** En materia de programas de Profesionalización y planes de estudio, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:

- 4
- I.** Promover estrategias y políticas de profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia;



- II.** Diseñar los modelos de profesionalización que correspondan para su concertación y en su caso, aplicación en las Instituciones de Procuración de Justicia;
- III.** Acordar los contenidos del Programa Rector de Profesionalización de los servidores públicos de las instituciones de Procuración de Justicia, a propuesta de su Presidente;
- IV.** Establecer criterios para supervisar que los servidores públicos se sujeten a los programas correspondientes en los Institutos de Capacitación;
- V.** Promover el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes a las Instituciones de Procuración de Justicia y vigilar su aplicación;
- VI.** Establecer programas de investigación académica en las materias ministerial y pericial;
- VII.** Consensuar los criterios por los que se revalidarán equivalencias de estudios en el ámbito de su competencia para su incorporación al programa rector de profesionalización, y
- VIII.** Las demás que le establezcan otras disposiciones legales.

**Artículo 64.-** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia están obligados a participar en las actividades de profesionalización que determine la institución respectiva, los cuales deberán cubrir un mínimo de 60 horas clase anuales.

## **CAPÍTULO VI**

### **De la Certificación**

**Artículo 65.-** Los aspirantes que ingresen a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán contar con el Certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por esta Ley.

Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia sin contar con el Certificado y registro vigentes.



**Artículo 66.-** Los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia emitirán los certificados correspondientes a quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece esta Ley y el ordenamiento legal aplicable a la institución de que se trate.

El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.



**Artículo 67.-** El Certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional que para tal efecto se establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.

**Artículo 68.-** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.

La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior.

4

**Artículo 69.-** La certificación que otorguen los centros de evaluación y control de confianza deberá contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia que deseen prestar sus servicios en otra institución, ya sea en la





Federación o en las Entidades Federativas, deberán presentar el Certificado que les haya sido expedido previamente.

Las Instituciones de Procuración de Justicia reconocerán la vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados, conforme a las disposiciones de esta Ley y demás aplicables. En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los procesos de evaluación.

En todos los casos, se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el Registro Nacional.

**Artículo 70.-** La cancelación del certificado de los Servidores Públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia procederá:

- I.** Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- II.** Al ser removidos de su encargo;
- III.** Por no obtener la revalidación de su Certificado, y
- IV.** Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.

**Artículo 71.-** La Institución de Procuración de Justicia que cancele algún certificado deberá hacer la anotación respectiva en el Registro Nacional correspondiente.

4



## **TÍTULO QUINTO DEL DESARROLLO POLICIAL**

### **CAPÍTULO I Disposiciones Generales**

**Artículo 72.-** El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos en el artículo 6 de la Ley.

**Artículo 73.-** Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.

**Artículo 74.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.



Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente.

**Artículo 75.-** Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:

- I. Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información;
- II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y
- III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.



**Artículo 76.-** Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, o bien, en las Instituciones Policiales, o en ambas, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones.

Las policías ministeriales ubicadas dentro de la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Título, quedando a cargo de dichas instituciones, la aplicación de las normas, supervisión y operación de los procedimientos relativos al desarrollo policial.

4

**Artículo 77.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación que podrán ser, entre otras, las siguientes:



- I.** Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine;
- II.** Deberán verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informará al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;
- III.** Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;
- IV.** Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- V.** Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;
- VI.** Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;
- VII.** Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;
- VIII.** Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables.
- IX.** Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación,



4



cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;

- X.** Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;
- XI.** Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;
- XII.** Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:

- a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
- b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;
- c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;
- d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y
- e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.

**XIII.** Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, y

**XIV.** Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

4



## **CAPÍTULO II**

### **De la Carrera Policial y de la Profesionalización**

**Artículo 78.-** La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales.

**Artículo 79.-** Los fines de la Carrera Policial son:

- I.** Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales;
- II.** Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones;
- III.** Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- IV.** Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y
- V.** Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley.

**Artículo 80.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán la organización jerárquica de las Instituciones Policiales, considerando al menos las categorías siguientes:



- I.** Comisarios;
- II.** Inspectores;
- III.** Oficiales, y
- IV.** Escala Básica.

En las policías ministeriales se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al modelo policial previsto en esta Ley.

**Artículo 81.-** Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las siguientes jerarquías:

- I.** Comisarios:
  - a) Comisario General;
  - b) Comisario Jefe, y
  - c) Comisario.
- II.** Inspectores:
  - a) Inspector General;
  - b) Inspector Jefe, y
  - c) Inspector.
- III.** Oficiales:
  - a) Subinspector;
  - b) Oficial, y
  - c) Suboficial.
- IV.** Escala Básica:
  - a) Policía Primero;
  - b) Policía Segundo;
  - c) Policía Tercero, y
  - d) Policía.



4



**Artículo 82.-** Las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.

Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los titulares de las instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerarquía.

Las instituciones estatales y del Distrito Federal, deberán satisfacer, como mínimo, el mando correspondiente al octavo grado de organización jerárquica.

Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones.

**Artículo 83.-** El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de la Instituciones con relación a las áreas operativas y de servicios será:

- I. Para las áreas operativas, de policía a Comisario General, y
- II. Para los servicios, de policía a Comisario Jefe.

**Artículo 84.-** La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.

De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

Para tales efectos, la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán promover en el ámbito de sus competencias





respectivas, las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas, en los diferentes ámbitos de competencia.

**Artículo 85.-** La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se registrá por las normas mínimas siguientes:

- I. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas;
- II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo;
- III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema;
- IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;
- V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;
- VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las leyes respectivas;
- VII. Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;



4



- VIII.** Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- IX.** Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;
- X.** El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por la instancia que señale la ley de la materia, y
- XI.** Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial.

La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección.

En términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las Instituciones Policiales podrán designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando su grado policial y derechos inherentes a la Carrera Policial.

**Artículo 86.-** La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales.

Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en la ley sobre los aspirantes aceptados.

**Artículo 87.-** El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en las Academias o Institutos de Capacitación Policial, el periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley.



**Artículo 88.-** La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales. Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:

**A. De Ingreso:**

- I.** Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;
- II.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
- III.** En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- IV.** Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
  - a)** En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
  - b)** Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
  - c)** En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
- V.** Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
- VI.** Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
- VII.** Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
- VIII.** Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- IX.** No padecer alcoholismo;
- X.** Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;



4



- XI.** No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
- XII.** Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que deriven de la misma;
- XIII.** Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

**B. De Permanencia:**

- I.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;
- II.** Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
- III.** No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
- IV.** Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
  - a)** En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;
  - b)** Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
  - c)** En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
- V.** Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
- VI.** Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
- VII.** Aprobar las evaluaciones del desempeño;
- VIII.** Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;
- IX.** Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- X.** No padecer alcoholismo;



4



- XI.** Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;
- XII.** Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- XIII.** No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
- XIV.** No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días, y
- XV.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 89.-** Las instancias responsables del Servicio de Carrera Policial fomentarán la vocación de servicio mediante la promoción y permanencia en las Instituciones Policiales para satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de sus integrantes.

**Artículo 90.-** El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual las Instituciones Policiales otorgan el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.

Todo estímulo otorgado por las instituciones será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.

**Artículo 91.-** La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.



4



Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.

Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.

Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.

**Artículo 92.-** Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los integrantes de las Instituciones Policiales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.

**Artículo 93.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán que la antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones Policiales, de la siguiente forma:

- I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Policiales, y
- II. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente.

La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera Policial.

**Artículo 94.-** La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

- I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurren las siguientes circunstancias:



- a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;
- b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y
- c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones para conservar su permanencia.

**II.** Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o

**III.** Baja, por:

- a) Renuncia;
- b) Muerte o incapacidad permanente, o
- c) Jubilación o Retiro.

Al concluir el servicio el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.

**Artículo 95.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.

**Artículo 96.-** La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza



correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.



Las Instituciones Policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.

La presente disposición será aplicable también al personal de los servicios de migración.

**Artículo 97.-** La certificación tiene por objeto:

**A.-** Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional;

**B.-** Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las Instituciones Policiales:

- 
- 
- I.** Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
  - II.** Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;
  - III.** Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
  - IV.** Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;
  - V.** Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y
  - VI.** Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley.





**Artículo 98.-** La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.

Los planes de estudio para la Profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje que estarán comprendidos en el programa rector que apruebe la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, a propuesta de su Presidente.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Régimen Disciplinario**

**Artículo 99.-** La actuación de los Integrantes de las Instituciones Policiales se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de esta Ley.

Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán sus regímenes disciplinarios, sobre las bases mínimas previstas en el presente capítulo.

La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.

La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.



La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados.

**Artículo 100.-** Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

**Artículo 101.-** El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.

**Artículo 102.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales, observarán las obligaciones previstas en los artículos 40 y 41 de esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.

**Artículo 103.-** La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor.

La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación aplicable.

**Artículo 104.-** El procedimiento ante las autoridades previstas en las leyes de la materia, iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o presidente de la instancia correspondiente, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor.

Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento.



**Artículo 105.-** La Federación, las entidades federativas y los municipios establecerán instancias colegiadas en las que participen, en su caso, cuando menos, representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las Instituciones Policiales, para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario.

Para tal fin, las Instituciones Policiales podrán constituir sus respectivas Comisiones del servicio profesional de carrera policial y de honor y justicia, las que llevarán un registro de datos de los integrantes de sus instituciones. Dichos datos se incorporarán las bases de datos de personal de Seguridad Pública.

En las Instituciones de Procuración de Justicia se integrarán instancias equivalentes, en las que intervengan representantes de los policías ministeriales.



## **TÍTULO SEXTO**

### **DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**

**Artículo 106.-** El sistema nacional de acreditación y control de confianza se conforma con las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

Integran este sistema: El Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales de la Federación y de las entidades federativas.



**Artículo 107.-** Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o



Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que establezca el Reglamento que emita el Ejecutivo Federal.

Cuando en los procesos de certificación a cargo de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En caso contrario, el proceso carecerá de validez.

**Artículo 108.-** Los Centros Nacional de Acreditación y Control de Confianza aplicarán las evaluaciones a que se refiere esta Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; para tal efecto, tendrán las siguientes facultades:

- 
- 
- I.** Aplicar los procedimientos de Evaluación y de Control de Confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
  - II.** Proponer lineamientos para la verificación y control de Certificación de los Servidores Públicos;
  - III.** Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable;
  - IV.** Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la confidencialidad y resguardo de expedientes;
  - V.** Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad;
  - VI.** Comprobar los niveles de escolaridad de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;
  - VII.** Aplicar el procedimiento de certificación de los Servidores Públicos, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;



- VIII.** Expedir y actualizar los Certificados conforme a los formatos autorizados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- IX.** Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados de las evaluaciones que practiquen;
- X.** Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus funciones;
- XI.** Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención que permitan solucionar la problemática identificada;
- XII.** Proporcionar a las Instituciones, la asesoría y apoyo técnico que requieran sobre información de su competencia;
- XIII.** Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y que se requieran en procesos administrativos o judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables;
- XIV.** Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública, y
- XV.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.



La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios implementarán medidas de registro y seguimiento para quienes sean separados del servicio por no obtener el certificado referido en esta Ley.

## **TITULO SÉPTIMO DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA**

### **CAPÍTULO ÚNICO**

**Artículo 109.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán,



analizarán y actualizarán, la información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.

El Presidente del Consejo Nacional dictará las medidas necesarias, además de las ya previstas en la Ley, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada mediante los instrumentos de información sobre Seguridad Pública.

Las Instituciones de Procuración de Justicia tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos criminalísticos y de personal, en el ámbito de su función de investigación y persecución de los delitos.

La información sobre administración de justicia, podrá ser integrada las bases de datos criminalísticas y de personal, a través de convenios con el Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia y con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

El acceso a las bases de datos del sistema estará condicionado al cumplimiento de esta Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia Ley emanen.

**Artículo 110.-** Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.

La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

**Artículo 111.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su Red Local correspondiente, con las



bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema, previstas en la presente Ley.

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Secretario Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios.

## **SECCIÓN PRIMERA**

### **Del Registro Administrativo de Detenciones**

**Artículo 112.-** Los agentes policiales que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información, de la detención, a través del Informe Policial Homologado.

**Artículo 113.-** El registro administrativo de la detención deberá contener, al menos, los datos siguientes:

- I.** Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
- II.** Descripción física del detenido;
- III.** Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;
- IV.** Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción, y
- V.** Lugar a donde será trasladado el detenido.

**Artículo 114.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán actualizar la información relativa al registro, tan pronto reciba a su disposición al detenido, recabando lo siguiente:

- I.** Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión;



- II.** Clave Única de Registro de Población;
- III.** Grupo étnico al que pertenezca;
- IV.** Descripción del estado físico del detenido;
- V.** Huellas dactilares;
- VI.** Identificación antropométrica, y
- VII.** Otros medios que permitan la identificación del individuo;

El Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite de la detención de una persona y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emitirá las disposiciones necesarias para regular los dispositivos tecnológicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información a que se refiere este artículo, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología.



**Artículo 115.-** La información capturada en el Registro Administrativo de Detenciones será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:

- I.** Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y
- II.** Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales aplicables.

4

Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el Registro a terceros. El Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.





Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

**Artículo 116.-** Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal aplicable.

## **SECCIÓN SEGUNDA**

### **Del Sistema Único de Información Criminal**

**Artículo 117.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios serán responsables de integrar y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del adolescente.

**Artículo 118.-** Dentro del sistema único de información criminal se integrará una base nacional de datos de consulta obligatoria en las actividades de Seguridad Pública, sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de identificación, recursos y modos de operación.

4  
Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que aporten las Instituciones de Seguridad Pública, relativa a las investigaciones, procedimientos penales, órdenes de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de penas.



**Artículo 119.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia podrán reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, conforme a las disposiciones aplicables, pero la proporcionarán al sistema único de información criminal inmediatamente después que deje de existir tal condición.

**Artículo 120.-** El Sistema Nacional de Información Penitenciaria es la base de datos que, dentro del sistema único de información criminal, contiene, administra y controla los registros de la población penitenciaria de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 121.-** La base de datos deberá contar, al menos, con el reporte de la ficha de identificación personal de cada interno con fotografía, debiendo agregarse los estudios técnicos interdisciplinarios, datos de los procesos penales y demás información necesaria para la integración de dicho sistema.

### **SECCIÓN TERCERA**

#### **Del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública**

**Artículo 122.-** El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos:

- I.** Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública;
- II.** Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público, y
- III.** Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron.

4



Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al Registro.

**Artículo 123.-** Las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios inscribirán y mantendrán actualizados permanentemente en el Registro los datos relativos a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de esta Ley.

Para efectos de esta Ley, se consideran miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente.


La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la presente Ley.



#### **SECCIÓN CUARTA**

##### **Del Registro Nacional de Armamento y Equipo.**

**Artículo 124.-** Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios manifestarán y mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el cual incluirá:

- 
- I.** Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo, y
  - II.** Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.



**Artículo 125.-** Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las instituciones de Seguridad Pública mantendrán un registro de los elementos de identificación de huella balística de las armas asignadas a los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública. Dicha huella deberá registrarse en una base de datos del Sistema.

**Artículo 126.-** En el caso de que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Nacional de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las normas aplicables.

**Artículo 127.-** El incumplimiento de las disposiciones de esta sección, dará lugar a que la portación o posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.



## **TÍTULO OCTAVO**

### **DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD**

#### **CAPÍTULO ÚNICO**

#### **De los Servicios de Atención a la Población**

**Artículo 128.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables. Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de:



- I.** La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y
- II.** La sociedad civil organizada.

**Artículo 129.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes.

**Artículo 130.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.



**Artículo 131.-** Para mejorar el servicio de Seguridad Pública, las instancias de coordinación que prevé esta Ley promoverán la participación de la comunidad a través de las siguientes acciones:

- I.** Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.
- II.** Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;
- III.** Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;
- IV.** Realizar labores de seguimiento;
- V.** Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;
- VI.** Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y
- VII.** Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.

4



**Artículo 132.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que las Instituciones de Seguridad Pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad, para alcanzar los propósitos del artículo anterior.

La participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y de instituciones, se sujetará a los indicadores previamente establecidos con la autoridad sobre los siguientes temas:

- I. El desempeño de sus integrantes;
- II. El servicio prestado, y
- III. El impacto de las políticas públicas en prevención del delito.

Los resultados de los estudios deberán ser entregados a las Instituciones de Seguridad Pública, así como a los Consejos del Sistema, según corresponda. Estos estudios servirán para la formulación de políticas públicas en la materia.



**Artículo 133.-** El Centro Nacional de Información deberá proporcionar la información necesaria y conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana. No se podrá proporcionar la información que ponga en riesgo la seguridad pública o personal.

**Artículo 134.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán políticas públicas de atención a la víctima, que deberán prever, al menos los siguientes rubros:

- I. Atención de la denuncia en forma pronta y expedita;
- II. Atención jurídica, médica y psicológica especializada;
- III. Medidas de protección a la víctima, y
- IV. Otras, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4



## **TÍTULO NOVENO**

### **DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

#### **CAPÍTULO PRIMERO**

##### **Disposiciones Generales**



**Artículo 135.-** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, locales y municipales por el manejo o aplicación ilícita de los recursos previstos en los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.

Serán consideradas violaciones graves a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, las acciones u omisiones previstas en el artículo 139, que se realicen en forma reiterada o sistemática.

**Artículo 136.-** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, estatales y municipales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.

4

**Artículo 137.-** La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales que ejerzan la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en materia de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones aplicables.



## CAPÍTULO SEGUNDO

### De los Delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública

**Artículo 138.-** Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa, a quien dolosa, ilícita y reiteradamente se abstenga de proporcionar al Secretariado Ejecutivo la información que esté obligado en términos de esta Ley, a pesar de ser requerido por el Secretario Ejecutivo, dentro del plazo previsto en el artículo 37 de esta Ley.

Se impondrá además, la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión en cualquier orden de gobierno.

**Artículo 139.** Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien:

- I. Ingrese dolosamente a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública previstos en esta Ley, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información, las bases de datos o los equipos o sistemas que las contengan;
- II. Divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases de datos o sistemas informáticos a que se refiere esta Ley.
- III. Inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, prevista en esta Ley, como miembro o integrante de una institución de Seguridad Pública de cualquier orden de gobierno, a persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la Ley, o a sabiendas de que la certificación es ilícita, y
- IV. Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley.





Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además, la inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público en cualquier orden de gobierno, y en su caso, la destitución.

**Artículo 140.** Se sancionará con cinco a doce años de prisión y de doscientos a ochocientos días multa, a quien falsifique el certificado a que se refiere la presente Ley, lo altere, comercialice o use a sabiendas de su ilicitud.

**Artículo 141.-** Las sanciones previstas en este capítulo se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos previstos en los ordenamientos penales federal o de las entidades federativas, según corresponda.

Las autoridades del fuero federal serán las competentes para conocer y sancionar los delitos previstos en este capítulo, conforme las disposiciones generales del Código Penal Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones legales, en atención a que la Federación es el sujeto pasivo, de conformidad con el artículo 50, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

## **TÍTULO DÉCIMO DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL**

### **CAPÍTULO I Disposiciones Preliminares**

4 **Artículo 142.-** Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto. Los



recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente Ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal.

Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel nacional sean determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, serán distribuidos con base en los criterios que apruebe el Consejo Nacional, a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Las autoridades correspondientes de las entidades federativas y de los municipios deberán concentrar los recursos en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública.

Asimismo, dichas autoridades deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema sobre los movimientos que presenten las cuentas específicas, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino así como los recursos comprometidos, devengados y pagados.

Sin perjuicio de lo que establece el artículo 143 los convenios generales o específicos establecerán obligaciones para las entidades federativas y los municipios, a efecto de fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se aporten, así como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

**Artículo 143.** Para efectos de control, vigilancia, transparencia y supervisión del manejo de los recursos previstos en el artículo que antecede, así como para determinar si se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 139, compete al Secretario Ejecutivo:

4



- I. Requerir, indistintamente, a las autoridades hacendarias y de seguridad pública, entre otras, de las entidades federativas y de los municipios, informes relativos a:
  - a) El ejercicio de los recursos de los fondos y el avance en el cumplimiento de los programas o proyectos financiados con los mismos;
  - b) La ejecución de los programas de seguridad pública de las entidades federativas derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública;
- II. Efectuar, en cualquier momento, visitas de verificación y revisiones de gabinete de los documentos, instrumentos y mecanismos inherentes o relativos al ejercicio de los recursos en las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios, a fin de comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las obligaciones a su cargo; de igual forma, podrá requerir la información que considere necesaria indistintamente a las autoridades hacendarias o de seguridad pública locales correspondientes, y
- III. Las demás acciones que resulten necesarias para la consecución de lo dispuesto en este artículo.



De manera supletoria a lo previsto en este artículo se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal.

## **CAPÍTULO II**

### **De la Cancelación y Suspensión de Ministración de los Recursos**

**Artículo 144.-** El Pleno del Consejo Nacional resolverá la cancelación o suspensión de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, a las entidades federativas o, en su caso, municipios, que incurran en lo siguiente:

4



- I.** Incumplir las obligaciones relativas al suministro, intercambio y sistematización de la información de Seguridad Pública, o violar las reglas de acceso y aprovechamiento de la información de las bases de datos previstas en esta Ley;
- II.** Incumplir los procedimientos y mecanismos para la certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;
- III.** Abstenerse de implementar el servicio telefónico nacional de emergencia;
- IV.** Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que disponen las disposiciones jurídicas aplicables;
- V.** Aplicar criterios, normas y procedimientos distintos a los establecidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- VI.** Establecer y ejecutar un Modelo Policial básico distinto al determinado por el Consejo Nacional;
- VII.** Establecer servicios de carrera ministerial y policial sin sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones que de ella emanan;
- VIII.** Abstenerse de constituir y mantener en operación las instancias, centros de control de confianza y academias a que se refiere esta Ley, y
- IX.** Cualquier incumplimiento a las obligaciones de la presente Ley, que afecte a los mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Pública.

La cancelación de la ministración de los recursos federales a las entidades federativas y municipios, supone la pérdida de los mismos, por lo que no tendrán el carácter de recuperables o acumulables y deberán, en consecuencia, permanecer en la Tesorería de la Federación para los efectos legales correspondientes al finalizar el ejercicio fiscal, salvo que en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal se destinen a otras entidades federativas o municipios para llevar a cabo la función de seguridad pública, sin que se genere, para éstas, el derecho a recibir los recursos con posterioridad.

4



**Artículo 145.-** El procedimiento al que se sujetarán las visitas y revisiones a que se refiere el artículo 143, fracción II, y sobre las causas de cancelación de los recursos a que se refiere el artículo 144, se sujetará a las reglas siguientes:

- I. En la orden de visita o revisión correspondiente se señalará el servidor público que la practicará, la institución, así como el periodo u objeto que haya de verificarse o revisarse;
- II. La visita se practicará preferentemente en las oficinas principales de la institución o dependencia visitada; en caso de no ser posible por cualquier causa, se realizará en cualquier domicilio de la propia institución o dependencia o, en caso necesario, en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo; estando obligados los servidores públicos de las instituciones o dependencias visitadas a proporcionar todas las facilidades necesarias y atender los requerimientos que se les formulen;

- III. En caso de advertirse incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, los acuerdos generales o los convenios, el Secretariado podrá decretar la suspensión provisional de las aportaciones subsecuentes. La suspensión de ministración de fondos subsistirá hasta que se aclare o subsane la acción u omisión que dio origen al incumplimiento.

La suspensión en el otorgamiento de los recursos no implica la pérdida de los mismos por parte de las entidades federativas o municipios, por lo que podrán aclarar o subsanar la acción u omisión que dio origen al incumplimiento, mientras no se emita la resolución que declare la cancelación;

- IV. En un plazo no mayor a quince días hábiles, posteriores a la terminación de la visita, el Secretariado Ejecutivo presentará al Consejo el informe correspondiente al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones sujetas a verificación, así como toda la información que resulte necesaria para el efecto;
- V. El Secretariado dará vista a la institución o dependencia visitada o revisada, para que en un plazo de veinte días hábiles, aporte la



1



información pertinente para desvirtuar las imputaciones que, en su caso, se formulen en su contra;

- VI.** Transcurrido el plazo antes mencionado, en caso de incumplimiento, el Secretariado presentará al Consejo Nacional un proyecto de resolución, en que se contengan las conclusiones de la visita o revisión practicadas, y
- VII.** En el proyecto de resolución señalará si la institución o dependencia revisada o visitada se hace acreedora a la cancelación de los fondos o, en su caso, que procede requerir la restitución de los mismos.

El Consejo Nacional resolverá en forma definitiva e inatacable sobre la existencia del incumplimiento y determinará, en su caso, la cancelación y, cuando proceda, la restitución de los recursos, con independencia de las responsabilidades que otras leyes establezcan.



De la suspensión o cancelación se dará cuenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes.

Cuando el Consejo Nacional resuelva que procede requerir la restitución de los recursos utilizados en forma indebida o ilícita, las entidades federativas o, en su caso, municipios contarán con un plazo de 30 días naturales para efectuar el reintegro; en caso contrario, los recursos podrán descontarse de las participaciones o aportaciones que le correspondan para el siguiente ejercicio fiscal.

Las entidades federativas estarán representadas por los titulares de los poderes ejecutivos a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 12 de esta Ley, o por quien ellos designen, sin que pueda recaer dicha representación en un servidor público de menor jerarquía a la de titular de una de las secretarías competentes en la entidad respectiva para la aplicación de esta Ley.

4



## **TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS**

**Artículo 146.-** Para efectos de esta Ley, se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.

**Artículo 147.-** El Distrito Federal, los Estados y los Municipios coadyuvarán en la protección y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de las instalaciones estratégicas y para garantizar su integridad y operación.

**Artículo 148.-** El resguardo de las instalaciones estratégicas queda a cargo de la Federación, que se coordinará con las Instituciones locales y municipales correspondientes por razón del territorio en el ejercicio de esta función, las cuales garantizarán la seguridad perimetral y el apoyo operativo en caso necesario.

El Ejecutivo Federal constituirá un Grupo de Coordinación Interinstitucional para las Instalaciones Estratégicas, que expedirá, mediante acuerdos generales de observancia obligatoria, la normatividad aplicable en la materia.

**Artículo 149.-** El Consejo Nacional establecerá los casos, condiciones y requisitos necesarios para el bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico para los fines de seguridad pública.

Las decisiones que en ese sentido emita el Consejo Nacional, deberán ser ejecutadas por las distintas Instituciones de Seguridad Pública que lo integran.



## **TITULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA**

**Artículo 150.** - Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local.

Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.

**Artículo 151.-** Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.

**Artículo 152.-** Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se registrarán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables que se establecen para las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Centro Nacional de Información.

Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán conforme a la normatividad aplicable, la obligación de las empresas





privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza.

## TRANSITORIOS

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes.

**SEGUNDO.-** El Ejecutivo Federal contará con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto para crear e instalar el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cual deberá acreditar a los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública y sus respectivos procesos de evaluación en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en operación del citado Centro Nacional.



**TERCERO.** De manera progresiva y en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el Consejo Nacional.

**CUARTO.-** Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4



**QUINTO.** Los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes estatales, en la rama correspondiente, en un plazo no mayor a un año.

**SEXTO.** Los servidores públicos que obtengan el certificado y que satisfagan los requisitos de ingreso y permanencia que se establecen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los ordenamientos legales federales y estatales aplicables, ingresarán o serán homologados al servicio de carrera, en las ramas ministerial, policial y pericial, según corresponda, en la jerarquía y grado, así como antigüedad y derechos que resulten aplicables, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.



**SÉPTIMO.-** Las referencias realizadas en la presente Ley a la reinserción social, quedarán entendidas al término vigente readaptación social, toda vez que con este Decreto no entra en vigor el párrafo tercero del artículo 21 constitucional sujeto a la vacancia prevista en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

**OCTAVO.-** El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

**NOVENO.-** El Consejo Nacional y las Conferencias que prevé la presente Ley, deberán expedir las disposiciones a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo no mayor a nueve meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

4

**DÉCIMO.-** Por única ocasión, el Secretario Ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



**DÉCIMO PRIMERO.-** Los recursos humanos, materiales y financieros con que cuente el Secretario Ejecutivo de conformidad con la abrogada Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables, se transferirán al Secretariado Ejecutivo previsto en esta Ley, a la brevedad posible.

Lo mismo sucederá con los asuntos en trámite del Secretario Ejecutivo, salvo que pudiera causarse algún daño o menoscabo al servicio o a los intereses del Sistema.

Los derechos del personal del Secretario Ejecutivo que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, sea transferido, se respetarán conforme a la ley aplicable.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Se abroga la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

**SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.-**  
México, D.F., a 9 de diciembre de 2008.

SEN. JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN  
Vicepresidente

SEN. ADRIÁN RIVERA PÉREZ  
Secretario

Se devuelve a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 constitucional.- México, D. F., a 9 de diciembre de 2008.

DR. ARTURO GARITA  
Secretario General de Servicios Parlamentarios

4



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Honorable Asamblea,

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la **Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública**.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y fracción XXII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen.

### Antecedentes

1. En sesión celebrada en fecha 18 de septiembre de de 2008 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Diputado Andrés Lozano Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por diversos Diputados del mismo parlamentario, misma que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
2. En sesión celebrada en fecha 2 de octubre de 2008 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el titular del Ejecutivo presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
3. Que el Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió a la Comisión de Seguridad Pública propuesta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



**PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS**

4. Con fecha 23 de octubre de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó una modificación para turnar a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Cuenta Pública la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el titular del Ejecutivo Federal, y en lo que respecta a la adición de diversos artículos al Código Penal Federal, a la Comisión de Justicia.
5. Con fecha 4 de diciembre de 2008, fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados por 318 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones el Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, remitiéndose en esa misma fecha al Senado de la República, para efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta correspondiente.
6. Con fecha 9 de diciembre de 2008, fue aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores, el Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, remitiéndose en esa misma fecha a la Cámara de Diputados, para efectos del artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
7. Con fecha 11 de diciembre de 2008, los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura, se reunieron para analizar y discutir el presente dictamen, siendo aprobado por 18 votos a favor.

**Consideraciones de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República**

Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera coinciden en señalar que la Minuta estudiada incorpora las propuestas formuladas por las distintas fracciones que conforman el Congreso de la Unión y la contenida en la Iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Federal, las cuales fueron ampliamente debatidas por las comisiones dictaminadoras de nuestra Colegisladora. Reconocen que la Minuta estructura los contenidos indispensables para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

En el Título Primero, *Disposiciones Preliminares*, la Ley establece las disposiciones que orientan el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios a efecto de hacerlo efectivo, de igual forma define las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.

No pasa desapercibido para estas comisiones dictaminadoras que la Minuta supera a la ley en vigor ya que se ocupa de la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no sólo de su integración y funcionamiento. Establece que la seguridad pública comprende la prevención especial y general de los delitos así como la investigación para hacerla efectiva. Clarifica la atención a las causas del delito al prescribir el deber del Estado de desarrollar políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral. Introduce un catálogo de definiciones legales que permite mayor claridad al ordenamiento y, finalmente, consagra la rendición de cuentas como uno de los pilares de la participación ciudadana.

En relación a la coordinación, estas Comisiones Unidas estiman conveniente que se desarrolle, como se hace en la Minuta a estudio, los nuevos compromisos que integran la coordinación de los participantes en el sistema, entre los que destaca precisar que las políticas de seguridad pública serán integrales, sistemáticas, continuas y evaluables. Se precisa entre los instrumentos programáticos el Nacional de Procuración de Justicia. Se distribuyen actividades específicas entre los integrantes del Sistema. Se establecen, controlan y, muy importante, se resguardan las bases de datos criminalísticos y del personal que labora en el sistema. Se establece la participación en la vigilancia de las instalaciones estratégicas. Se evalúa la aplicación de los fondos y se busca fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos y sus familias.

El Título Segundo *De las Instancias de Coordinación y la Distribución de Competencias del Sistema Nacional de Seguridad Pública*; prevé la creación del Consejo Nacional como máxima instancia de deliberación del Sistema; los Órganos e Instancias Auxiliares para el impulso y desarrollo de las distintas materias de coordinación a que se refiere la Ley, dentro de las cuales se plantean las conferencias de Secretarios de Seguridad Pública, la de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario, la de Seguridad Pública Municipal y el establecimiento de los Consejos Locales e Instancias Regionales, encargados de la coordinación, planeación y supervisión del sistema en sus respectivos ámbitos de competencia.

Ante la importancia de la seguridad como uno de los principales retos del país, las Comisiones Dictaminadoras comparten la disposición de la Minuta de que el titular del Ejecutivo presida el Consejo, del cual forme parte también el Secretario de Gobernación quien suplirá al Presidente en sus ausencias.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Positiva se considera la presencia permanente del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Consejo, ya que el combate a la delincuencia debe darse con estricto apego la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respeto absoluto a las garantías que ésta consagra.

En cuanto a la ampliación de atribuciones del Consejo Nacional, estas Comisiones coinciden con lo plasmado en la Minuta en el sentido de que se promuevan políticas de atención a las víctimas de los delitos por razón de elemental justicia; que se homologuen y desarrollen los modelos policial, ministerial y parcial para lograr calidad en los servicios que prestan las instituciones.

Convencidos los integrantes de estas Comisiones Unidas de que la solvencia presupuestal constituye la base realista y objetiva de la función de la seguridad pública, comparten que el Consejo tenga la atribución de vigilar que en los criterios de distribución de los recursos se observe la Ley de Coordinación Fiscal, así como resolver la cancelación de las aportaciones a entidades federativas y municipios que no cumplan lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los Acuerdos Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia.

Favorable para el cumplimiento de los acuerdos resulta para estas Dictaminadoras el contemplar en este Título al Secretariado Ejecutivo como un órgano operativo con autonomía técnica, de gestión y presupuestal y crear las Comisiones Permanentes de Información, de Certificación y Acreditación y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Por otra parte, es acertado ampliar las funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Para abatir la impunidad se pondera necesaria la adopción de tecnologías de la información que permitan agilizar los procedimientos penales, juicios de amparo y otros procesos para abatir la impunidad y, con ello, recobrar la confianza ciudadana en la presentación de denuncias.

Estas Comisiones desean poner énfasis en el compromiso de los tres poderes con los derechos humanos, al reiterar en este dictamen el fomento de una cultura de respeto, como función de las Procuradurías de Justicia del país.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Por lo que hace a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública valoramos entre otros la nueva función de desarrollar las especialidades policiales de alto desempeño contra los delitos de impacto y el servicio para la localización de personas y bienes, seguros de que coadyuvarán a devolver la tranquilidad a las familias mexicanas.

El establecimiento claro en la ley de promover el trabajo comunitario y de convenios para que los sentenciados extingan su pena en establecimientos de jurisdicción diversa es bien vista por estas Comisiones ya que desde luego favorece la reinserción social.

De importancia estratégica consideran estas Comisiones Unidas a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, ya que la primera línea para hacer frente a la delincuencia es precisamente la autoridad municipal, que es la que cuenta también con el estado de fuerza mayor, pero con un bajo perfil. De ahí que se estima favorable para los fines de la seguridad pública todas las funciones de dicha Conferencia y en particular el intercambio de experiencias que habrá de permitir la difusión de casos de éxito entre los Municipios, así como la homologación del Desarrollo Policial.

Para combatir a la delincuencia se requiere que las autoridades estén alineadas de acuerdo a su esfera de competencia y con una organización que les de cohesión para ejercer sus funciones de manera ágil, oportuna y efectiva. Por ello, consideramos que el esquema de distribución de competencias planteado en la Minuta presenta dichas características ya que confiere a la Federación el aseguramiento de la coordinación mediante propuestas al Consejo Nacional en materia de desarrollo policial, profesionalización, vigilancia y protección de instalaciones estratégicas principalmente, reservando a las entidades el contribuir a la coordinación y aplicar los modelos, lineamientos y datos acordados por la Federación, los propios Estados, el Distrito Federal y los Municipios al seno del Consejo Nacional.

El Título Tercero, *Disposiciones Comunes a los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública*, con el propósito de que los mexicanos tengan la seguridad de que antes, durante y después de algún evento delictivo las autoridades competentes ejercerán sus atribuciones cabalmente, estas Comisiones Unidas ratifican las 38 obligaciones fijadas en la Minuta a cargo de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a efecto de garantizar los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Especial aprobación de los miembros de estas Comisiones merece el haber incluido en la Minuta reglas para el uso de la fuerza, que será legítimo sólo ante el riesgo de los derechos de personas y únicamente de manera racional, proporcional, congruente, oportuna y con respeto estricto a los derechos humanos. Para lograr detenciones más rápido es esencial que los integrantes del Sistema compartan información sobre los movimientos de la delincuencia en línea y en tiempo real, para lo cual resulta favorable el Informe Policial Homologado contemplado en el Minuta que se analiza por estas Comisiones.

A fin de que los servidores públicos estén en aptitud de desarrollar sus funciones, estas Comisiones consideran imprescindible para que encuentren satisfacción y motivación en su trabajo, tanto los sistemas complementarios de seguridad social y reconocimientos como el que las Academias e Institutos presten su actividad en torno a Programas Rectores de Profesionalización.

El Título Cuarto, *Del Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia*, el cual comprende los requisitos de ingreso al servicio de carrera de las Instituciones de procuración de justicia, así como el desarrollo y terminación del servicio de carrera, la profesionalización y certificación del personal en dichas instituciones. Se trata de que en el servicio estén no sólo lo más aptos con verdadera vocación hacia la ciudadanía, sino gente honesta que anteponga la tranquilidad de la población a desvíos corruptores provenientes de la delincuencia.

El Título Quinto, *Del Desarrollo Policial*, define un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las Instituciones y tiene por objeto, garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio, y garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales.

Se precisa en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública contenida en la Minuta a estudio, que dicho ordenamiento es aplicable a los elementos de los tres órdenes de gobierno que desarrollen funciones de seguridad pública, incluidas las de investigación para la prevención y combate de los delitos; y establece las materias que son objeto de coordinación intergubernamental en materia del desarrollo de las policías, su servicio de carrera, así como las atribuciones que tienen la Federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios para llevar a cabo dicha coordinación.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Estas Comisiones comparten la convicción de que la Carrera Policial tenga carácter obligatorio y permanente en las Instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lo cual se define un marco normativo general para asegurar que sólo ingresen a las instituciones policiales las personas con el perfil adecuado. El mismo Título define los requisitos de la carrera policial: el ingreso y permanencia, la selección y sus criterios generales, la definición del personal que se considera activo en el servicio, la certificación de los elementos de las corporaciones de seguridad pública y sus mandos, los estímulos asignables a los elementos con trayectorias distinguidas, las reglas generales para las promociones y ascensos, las normas de conclusión del servicio de los elementos y las previsiones y normas que determinan cuándo podrá darse de baja a un elemento del servicio.

Lo anterior, bajo la perspectiva de que la carrera policial es el elemento básico para la formación de los integrantes de las instituciones policiales, a fin de cumplir con los principios de actuación y desempeño.

No obstante y a efecto de que en las Instituciones estén los Integrantes con el más alto grado de compromiso y desempeño en el servicio público, se prevé un régimen disciplinario enfocado a asegurar que la actuación de los integrantes de las instituciones policiales esté regida por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, para lo cual establece los deberes mínimos que los elementos de las corporaciones de seguridad pública deberán cumplir, así como los procedimientos genéricos para calificar y aplicar las sanciones que correspondan a la inobservancia de las normas establecidas en la Ley y por las infracciones en que se incurra durante el desempeño dentro del servicio.

El Título Sexto, *Del Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza*, que comprende las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios, tendentes a cumplir con los objetivos de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

En la Ley objeto de la Minuta que se analiza, se establece que corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, proponer los criterios mínimos para la evaluación de los servidores públicos; se promueve a través de esta instancia la homologación, validación y actualización en todo el país, de los procedimientos y criterios de evaluación de los servidores públicos. Estas Comisiones Unidas desean destacar que en los procesos de acreditación y control de confianza intervendrán instituciones privadas que cuenten con la acreditación vigente, lo que permite que dicha evaluación se practique por un ente ajeno a la institución cuyos integrantes se verifican en cuanto a la confianza.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

El Título Séptimo, *De la Información sobre Seguridad Pública*, para ir un paso adelante de los movimientos de la delincuencia se requiere información y que dichos datos sean dinámicos, es decir, que se capturen oportunamente y se actualicen. Es así que estas Comisiones celebran que la Minuta que se analiza contenga una perspectiva mucho más extensa relativa a la información que la ley en vigor y coinciden en que los tres órdenes de gobierno tendrán el deber de suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la información sobre la seguridad pública, conformando con esta captura diaria de datos el Sistema Único de Información Criminal, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y el Registro Nacional de Armamento y Equipo.

Estas bases de datos permitirán cruzar información en línea y en tiempo real que ahorre tiempo valioso a los investigadores, que tendrán a la mano modos de operar, vínculos, media filiación en unos cuantos segundos que son cruciales para el éxito de una indagatoria.

Los legisladores de estas Comisiones apoyamos que el servicio de llamadas de emergencia y de denuncia anónima opere con un número único de atención a la ciudadanía.

Por otra parte, estas Comisiones estiman que en razón de la movilidad y amplios recursos de que dispone la delincuencia planeando, preparando y concretando delitos en diversas entidades federativas se hace necesario que se tenga información al día, especialmente cuando alguna institución policial integrante hace una detención ingresándola de inmediato al Sistema.

Coincidimos con el Registro Administrativo de Detenciones en vista que está orientado a que los familiares tengan conocimiento del paradero y condición jurídica del detenido y toda vez que la Minuta expresamente señala que la información será confidencial y reservada y que no será utilizada como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

El Título Octavo, *De la Participación de la Comunidad*, prevé el establecimiento de mecanismos eficaces para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la seguridad pública, privilegiando con ello la participación ciudadana, en la inteligencia de que sociedad y derecho constituyen un binomio indisoluble cuya dinámica debe estar encaminada a un mismo fin.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

El servicio orientado a las necesidades del usuario permite la mejora continua. De ahí que estas Comisiones coinciden con la Minuta en que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana reciba reportes sobre emergencias, faltas y delitos y tenga comunicación con las instituciones de seguridad pública, de salud, de protección civil, públicas y privadas, para brindar una atención integral a la comunidad.

Estas Comisiones desean resaltar el precepto de la Minuta que contempla el establecimiento de políticas públicas de atención a las víctimas en las legislaciones locales, coincidiendo con la atención pronta y expedita de las denuncias, pues éstas son la base para acabar con la impunidad. Hay que facilitar la denuncia para acabar con la elevada cifra negra.

El Título Noveno, *De las Responsabilidades de los Servidores Públicos*, tiene como finalidad asegurar el debido manejo o aplicación de los recursos de los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública; así como preservar la información del Sistema como bien jurídico tutelado; para ello tipifica los delitos en materia de seguridad pública, como delitos especiales.

El Título Décimo, *De los Fondos de Ayuda Federal*, estas Comisiones Unidas estiman que sin solvencia presupuestal la lucha contra el crimen queda en buenas intenciones. Por ello, coinciden con la Minuta en que los fondos para la seguridad pública, cuya composición se clarifica en la misma, queden sujetos a la Ley de Coordinación Fiscal y al presente ordenamiento.

La preceptiva se completa fijando facultades al Secretario Ejecutivo del Sistema para solicitar informes o practicar revisiones tendentes a verificar el destino legal y oportuno de los recursos. Para garantizar que las autoridades se conduzcan con responsabilidad, coincidimos estas Comisiones Unidas en la posibilidad de cancelar o suspender las ministraciones de los recursos con carácter de no recuperables o acumulables, pues el subejercicio no es aceptable mucho menos tratándose de los fondos para una función primaria del Estado como la seguridad pública.

El Título Décimo Primero, *De las Instalaciones Estratégicas*, relativo a la protección, supervisión y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquéllas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano en términos de la Ley de Seguridad Nacional.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

El Título Décimo Segundo, denominado "*De los Servicios Privados de Seguridad*" establece la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas con relación a los servicios proporcionados por particulares en materia de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; así como la participación de los servicios de seguridad, en su calidad de auxiliares de la función de seguridad pública.

En este Título se regulan los servicios de seguridad privada, entendidos como la prestación que proporcionan las empresas privadas en materia de seguridad, a éstas se refiere el artículo 152 del proyecto de Decreto.

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora estamos conscientes de la preocupación que la sociedad ha externado respecto del personal que presta servicios de seguridad, por lo tanto, el proyecto de Decreto respeta la soberanía de las entidades federativas para que establezcan la obligación para que el personal de las empresas que presten los servicios de seguridad regulados en este Título Duodécimo sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza.

En suma, este Dictamen es tendente a satisfacer la demanda de seguridad de la ciudadanía a partir de una nueva preceptiva con las disposiciones siguientes:

Que garantice la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, a partir de un esquema equilibrado y razonable de corresponsabilidad.

Que permita la depuración y profesionalización, a través de una Carrera Policial consolidada, para que las instituciones de seguridad y procuración de justicia recuperen su funcionalidad lo más pronto posible.

Que dote a los integrantes de las instituciones de seguridad de un catálogo claro de sus obligaciones, de un régimen disciplinario ágil y congruente con la naturaleza del servicio encomendado y un sistema complementario de seguridad social y reconocimientos que les brinde satisfacción y motivación en el trabajo.

Que con el uso de tecnologías de la información, las instituciones integrantes del Sistema dispongan de información relevante para el combate a la delincuencia en línea y tiempo real, traduciendo las cuantiosas inversiones en este renglón en beneficios concretos y tangibles para la ciudadanía.

Que permita a la ciudadanía, organizada o no, que las autoridades encargadas de la seguridad pública le rindan cuentas.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Que la solvencia presupuestal sea la base realista y objetiva del combate a la delincuencia, con fondos para la seguridad destinados a sus fines y la posible cancelación de ministraciones de recursos a las autoridades incumplidas.

Las Comisiones Unidas hemos realizado diversas adecuaciones a la Minuta analizada, acordes con la redacción de la misma para precisar el sentido y alcance de sus preceptos, principalmente en una materia como es la seguridad pública que incide en las garantías individuales de los gobernados.

De igual modo, en diversos preceptos se ha clarificado la correlación de diversas facultades de los integrantes del sistema con otros ordenamientos, y finalmente, se armoniza esta Ley con los preceptos contenidos en la denominada Miscelánea Penal recientemente aprobada en esta Cámara, en particular con las obligaciones de las policías cuando actúen bajo el mando del Ministerio Público.

#### **Fundamento:**

1. Que la fracción XXIII, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la facultad del H. Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la coordinación de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de seguridad pública.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad.

I. a XXII. . .

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución

2. Que los párrafos sexto y séptimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, y disponen la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los siguientes términos:

Artículo 21 . . .

...

...

...



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

- a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones
- b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.
- c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
- d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública
- e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

3. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal y los Municipios, para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. Que el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20 21, y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Congreso de la Unión, a más tardar dentro de los seis meses a partir de la publicación de este Decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

#### **Consideraciones de la Comisión Dictaminadora:**

1. Esta Comisión Dictaminadora, se identifica con los razonamientos expresados por la Colegisladora para precisar diversos conceptos contenidos en la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, remitida a la Cámara de Senadores en fecha 4 de diciembre de 2008.
2. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con las modificaciones propuestas por el Senado de la República en el Dictamen correspondiente, que tienen por objeto respetar las atribuciones de las instituciones de seguridad pública y las de procuración de justicia, principalmente las relativas a las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública, y las de la policía ministerial.

Asimismo, a partir de las modificaciones realizadas se logran armonizar las disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las reformas contenidas en los ordenamientos de la denominada miscelánea penal.

3. Los cambios realizados a la Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, remitida en fecha 4 de diciembre del 2008, a la Cámara de Senadores, para efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ubican en los siguientes artículos y fracciones:





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 7.-** Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

I. a III. ...

IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación,

V. a IX. ...

X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;

XI. a XV.

En este artículo, la Colegisladora precisa en la parte final de la fracción IV, la denominación de la Ley de Planeación, retirando el concepto de *democrática*, que no corresponde al nombre actual de dicho ordenamiento. Asimismo, sustituye en la fracción X, el concepto de coordinar por el de realizar, lográndose mayor claridad en la redacción pues las acciones que se contemplan en las fracciones del mismo tienen como objetivo la coordinación de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios.

**Artículo 8.-** La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con respeto a las atribuciones que la Constitución establece para las instituciones y autoridades que integran el Sistema.

Respecto a este artículo, la Colegisladora, sustituye la palabra *de*, por el disyuntivo *a*, con lo cual se da mayor claridad al texto.

**Artículo 10.-** El Sistema se integrará por:

I. a VII. ...

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

En el caso de este artículo, la Colegisladora sustituye el concepto contribuyan por permitan, con el objeto de cuidar la división de poderes y perfilar una relación de respeto y colaboración.

**Artículo 12.-** El Consejo Nacional estará integrado por:

I. a IX. ...

...

El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico. Así mismo el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de este Consejo.

En el caso del párrafo final del artículo 12, las Comisiones Dictaminadoras en el Senado de la República retiran las palabras "... *que a su juicio*...", a efecto de limitar el margen de discrecionalidad del Consejo Nacional para invitar a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública.

El retiro del concepto *juicio*, es acorde con el objeto del Constituyente, plasmado en la reforma al artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 18 de junio del presente, encaminado a determinar la participación de la sociedad civil.

**Artículo 14.-** El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. ...

II. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema;

III. a V. ...

VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;

VII. a VIII. ...



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;

X. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;

XI. a XIX. ...

En el caso del presente artículo, en el Dictamen aprobado por la Colegisladora, se retiran de la fracción II el carácter de **necesarios**, cuando se hace referencia a la atribución del Consejo Nacional, para emitir los acuerdos y resoluciones generales, en el entendido que dichos instrumentos se estructuran y, en su caso, se emiten, atendiendo precisamente a las necesidades y requerimientos para el funcionamiento del Sistema.

Tratándose de la fracción VI, se establece en la parte final de la misma, que en el caso de la atribución relativa a promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial, ésta acción deberá ser acorde con las leyes respectivas.

A partir de lo anterior se precisa la vinculación de las disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a diversos ordenamientos que norman el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y las correlativas en los Estados y el Distrito Federal.

Con esta modificación, además, se fortalece el principio de seguridad jurídica

En el caso de la fracción IX, se incorpora el carácter de *nacionales* de los programas de seguridad pública, de procuración de justicia y de prevención del delito.

Respecto a la fracción X, se modifica la atribución del Consejo Nacional relativa a formular propuestas para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de seguridad pública y otros relacionados. En esta fracción, se incorpora de manera directa la atribución de evaluar.

A partir de dicha modificación se fortalece uno de los aspectos esenciales en los procesos de planeación estratégica, como lo es la evaluación.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 19.-** El Centro Nacional de Información será el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

I. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema en términos que señale el reglamento;

II. a VI. ...

En el caso de la fracción I del artículo 19, se sustituye la palabra regular por **resguardar** que es el concepto correcto, cuya incorporación fue propuesta por el Dip. Juan Francisco Rivera Bedoya, durante la sesión de la Cámara de Diputados de fecha 4 de diciembre de 2008, cuando se aprobó en lo general y en los particular por el pleno de la Cámara de Diputados, el Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La atribución relativa a resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue objeto de una amplia discusión durante la reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública de fecha miércoles 3 de diciembre del presente. Durante ésta reunión los Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática afirmaron que la acción de resguardo, era esencial para dar confianza a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, respecto a la información que será integrada a las bases de datos antes señaladas.

Lo anterior motivo la reserva a la fracción I del artículo 19, por parte del Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, a partir de la cual propuso la incorporación del concepto de resguardo, sin embargo, en el proceso de captura de la reserva citada y la integración de la Minuta correspondiente se sustituyó por error el concepto de resguardo por regular, aspecto identificado y corregido por la colegisladora.

**Artículo 32.-** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, estará integrada por los Presidentes Municipales y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal que participarán de conformidad con las siguientes reglas:

I. Dos Presidentes municipales, de cada Estado, designados por el Consejo Local de Seguridad Pública correspondiente, y

II. Dos titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal serán nombrados por el Consejo Local de Seguridad Pública.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

...

...

Respecto a la fracción II del artículo 32, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos del Senado de la República, se precisa que los Dos titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal que formarán parte de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, serán nombrados por el Consejo Local de Seguridad Pública, a partir de lo cual se mantiene la lógica en la redacción de las dos fracciones del citado artículo 32.

**Artículo 39.-** La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

**A. ...**

**I. a II. ...**

**a)** En materia de Carrera Policial, proponer al Consejo Nacional:

1. Las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los Integrantes de las Instituciones Policiales, de acuerdo al Modelo Policial, conforme a la normatividad aplicable;

**2. ...**

**b) ...**

**1. a 4. ...**

**III. a IV.**

**B. ...**

En el caso del numeral 1, del inciso a) fracción II del apartado A, del artículo 39, se establece en la parte final del mismo, que en el caso de la atribución en materia de carrera policial, ésta deberá ser conforme a la normatividad aplicable.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Como se señaló anteriormente, a partir de la modificación se precisa la vinculación de las disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a diversos ordenamientos que norman el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y las correlativas en los Estados y el Distrito Federal.

En el contexto actual de reorganización y fortalecimiento de las instituciones policiales resulta viable la adecuación realizada por la Colegisladora, pues resulta importante dar el lugar que corresponde a las disposiciones reglamentarias.

**Artículo 40.-** Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

I. ...

II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones legales aplicables;

III. a IV. ...

V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;

VI. a XII. ...

XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;

XIV. a XX. ...

XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## XXII. a XXVIII. ...

En el caso de la fracción II del artículo 40, en el Dictamen aprobado por la Colegisladora se precisa que la atribución relativa a la secrecía de los asuntos que conozcan los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberá apegarse a los términos de las disposiciones aplicables. Como ya quedo señalado anteriormente, con esta modificación se fortalece el principio de seguridad jurídica.

En el caso de la fracción V, del mismo artículo, en la Minuta remitida por el Senado se modifica la redacción para dar mayor claridad y precisión. En este sentido, se retira el concepto de **permitir**, por estar implícito en el de **tolerar**. Asimismo, se retira la referencia a los tratos o sanciones crueles, inhumanas o degradantes, por considerar que todo acto de tortura las comprende.

En el caso de la misma fracción V, los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública consideran que para efectos de la presente ley se considerarán como actos de tortura los tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes, en los términos del Dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, en fecha 4 de diciembre del presente, toda vez que se considera esencial precisar de manera clara las disposiciones encaminadas a garantizar el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos.

Manteniendo la lógica de modificaciones anteriores, en la fracción XIII se señala que la atribución relativa a preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos se hará conforme a las disposiciones aplicables.

Como ya se señaló anteriormente, a partir de la modificación se precisa la vinculación de las disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a diversos ordenamientos que norman el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, como las normas del Código Federal de Procedimientos Penales o los correlativos de los Estados y el Distrito Federal, entre otros, que regulan la actuación de los miembros de las instituciones policiales en su función de investigación y persecución del delito.

En el caso de la fracción XXI, nuevamente se hace referencia a la observancia de las disposiciones aplicables, en la obligación relativa a la abstención de dar a conocer documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier información reservada o confidencial de la que tengan conocimiento los miembros de las instituciones de seguridad pública.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 41.-** Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

I. a III. ...

IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;

V. ...

VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;

VII. a XI. ...

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con pleno respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.

En el caso de la fracción IV del artículo 41, se modifica para mantener sólo la parte inicial de ésta, para señalar como una atribución de los integrantes de las instituciones policiales el ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales, retirando la parte relativa a que dichos mandamientos sean asignados o de aquéllos de los que tenga conocimiento. Por estricto derecho, en el caso de los mandamientos judiciales y ministeriales son dictados por autoridad competente a través de procedimientos legalmente establecidos.

En el caso de la fracción VI, se modifica la parte final para realizar la redacción en positivo. En esta se señala como una obligación de los miembros de las instituciones policiales, el obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando, modificándose la parte final de dicha fracción para precisar que dicha obligación se realizará conforme a derecho.

Asimismo, se precisa el último párrafo del artículo para determinar que siempre que se haga uso de la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con pleno respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

En el caso del último párrafo, del artículo 41, los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública consideran que para efectos de la presente ley debe entenderse que sólo en los casos en que estén en riesgo los derechos y garantías de personas e instituciones y el orden público, se podrá hacer uso legítimo de la fuerza por los integrantes de las instituciones policiales.

**Artículo 59.-** La terminación del Servicio de Carrera será:

I. Ordinaria, que comprende:

- a) Renuncia;
- b) Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones, y
- c) Jubilación.

II. Extraordinaria, que comprende:

- a) Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, o
- b) Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo.

En el caso del artículo 59, a partir de la Minuta aprobada por la Colegisladora, se retira el inciso d) de la fracción I, que contempla las causas ordinarias de terminación del servicio de carrera. El inciso citado contemplaba la muerte como causa ordinaria lo cual, de acuerdo con las Comisiones Dictaminadoras del Senado, resulta innecesario.

**Artículo 114.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán actualizar la información relativa al registro, tan pronto reciba a su disposición al detenido, recabando lo siguiente:

I. Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión;

II. a VII. ...

...

...



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Respecto a la fracción I del artículo 114, la Colegisladora retira la referencia a la edad, como un elemento de actualización de la información relativa al registro de personal, toda vez que se contempla lo relativo a la fecha de nacimiento, a partir de la cual se obtiene aquélla.

**Artículo 136.-** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, estatales y municipales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.

En el caso de este artículo en la parte final del mismo se retira la referencia a las autoridades federales, para referirse sólo a las autoridades competentes, pues las responsabilidades pueden aplicarse, en su caso, a las autoridades federales, estatales y municipales.

**Artículo 137.-** La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales que ejerzan la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en materia de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones aplicables.

En el caso de este artículo, se precisa en la Minuta aprobada por la Colegisladora la denominación de la Auditoría Superior de la Federación.

**Artículo 138.-** Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa, a quien dolosa, ilícita y reiteradamente se abstenga de proporcionar al Secretariado Ejecutivo la información que esté obligado en términos de esta Ley, a pesar de ser requerido por el Secretario Ejecutivo, dentro del plazo previsto en el artículo 37 de esta Ley.

Se impondrá además, la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión en cualquier orden de gobierno.

En el caso del primer párrafo del artículo 138, se corrige la remisión que se hace al artículo 36 de la Ley, toda vez que la remisión correcta es al artículo 37.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 152.-** Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se registrarán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables que se establecen para las Instituciones de Seguridad Pública, incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Centro Nacional de Información.

Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán conforme a la normatividad aplicable, la obligación de las empresas privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza.

Finalmente, el Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores precisa, en el segundo párrafo del artículo 152, que los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán, conforme a la normatividad aplicable, la obligación de las empresas privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza. En éste caso, se toma en cuenta que las empresas que prestan servicios de seguridad privada en una sola entidad federativa se rigen por la normatividad vigente en el Estado de que se trate, en tanto que cuando prestan sus servicios en más de una entidad federativa, se rigen por la Ley Federal de Seguridad Privada.

Por lo anteriormente expuesto y, después de estudiar detenidamente el contenido de la Minuta Proyecto de Decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

**Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.**



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo Único.-** Se EXPIDE la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

## LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

### TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES

**Artículo 1.-** La presente ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

**Artículo 2.-** La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

**Artículo 3.-** La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 4.-** El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública.

La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 5.-** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

- I. Academias: a las Instituciones de Formación, de Capacitación y de Profesionalización Policial;
- II. Bases de Datos Criminalísticas y de Personal: Las bases de datos nacionales y la información contenida en ellas, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema.
- III. Carrera Ministerial: al Servicio Profesional de Carrera Ministerial;
- IV. Carrera Pericial: al Servicio Profesional de Carrera Pericial;
- V. Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial;
- VI. Conferencias Nacionales: a las Conferencias a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley;
- VII. Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Seguridad Pública;
- VIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal;
- IX. Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél;
- X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;
- XI. Institutos: a los órganos de las instituciones de seguridad pública de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, encargados de la formación y actualización especializada de aspirantes y servidores públicos de las funciones ministerial, pericial y de policía ministerial;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- XII. Programa Rector: al conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia, respectivamente;
- XIII. Registro Nacional: el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XIV. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal;
- XV. Secretario Ejecutivo: el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema;
- XVI. Sistema: al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 6.-** Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.

**Artículo 7.-** Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

- I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines;
- II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;
- III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;
- IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación;
- V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;
- VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;
- VII. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;
- VIII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- IX. Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;
- X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XI. Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;
- XII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;
- XIII. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;
- XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y
- XV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.

**Artículo 8.-** La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con respeto a las atribuciones que la Constitución establece para las instituciones y autoridades que integran el Sistema.

**Artículo 9.-** Las Conferencias Nacionales, los consejos locales y demás instancias del Sistema, observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional.

En caso de contradicción entre las resoluciones y acuerdos generales adoptados por las conferencias, el Consejo Nacional determinará la que deba prevalecer.

## TÍTULO SEGUNDO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

### CAPÍTULO I De la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 10.-** El Sistema se integrará por:

- I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;
- II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
- III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;
- IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;
- V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;
- VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y
- VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

**Artículo 11.-** Las Conferencias Nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Nacional.

El Secretariado Ejecutivo se coordinará con los Presidentes de las Conferencias Nacionales para dar seguimiento a las resoluciones que se adopten por el Consejo Nacional, en los términos de esta Ley.

## **CAPÍTULO II**

### **Del Consejo Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 12.-** El Consejo Nacional estará integrado por:

- I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;
- II. El Secretario de Gobernación;
- III. El Secretario de la Defensa Nacional;
- IV. El Secretario de Marina;
- V. El Secretario de Seguridad Pública;
- VI. El Procurador General de la República;
- VII. Los Gobernadores de los Estados;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y

IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema.

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente.

El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico. Así mismo el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de este Consejo.

**Artículo 13.-** El personal de confianza de las unidades administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los Centros Nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el Acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.

**Artículo 14.-** El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública;
- II. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema;
- III. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad Pública;
- IV. Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito;
- V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;
- VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;
- VII. Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;

- VIII. Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los Acuerdos Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia;
- IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;
- X. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XI. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de gobierno;
- XIII. Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;
- XIV. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública;
- XV. Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de Seguridad Pública, previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley;
- XVI. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública;
- XVII. Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;
- XVIII. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y
- XIX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

**Artículo 15.-** El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en las comisiones previstas por esta ley. El Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes del Consejo.

Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema.

Los miembros del Consejo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.

**Artículo 16.-** Son comisiones permanentes del Consejo Nacional, las siguientes:

- I. De Información;
- II. De Certificación y Acreditación,
- III. De Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Estas comisiones se coordinarán con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de los Centros Nacionales que integran el Secretariado Ejecutivo. El Consejo Nacional determinará el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las mismas.

En las comisiones podrán participar expertos de instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionados con su objeto.

Los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán designar por oficio a sus representantes permanentes ante el Secretario Ejecutivo del Sistema, los cuales deberán ser servidores públicos con un nivel jerárquico igual o superior a Director General en las Secretarías competentes en la entidad federativa respectiva, para la aplicación de esta Ley.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 17.-** El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos Centros.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no tengan otra nacionalidad y estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
- II. Tener más de treinta años de edad;
- III. Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado;
- IV. Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y
- V. No haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitados como servidores públicos.

**Artículo 18.-** Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema.

- I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente;
- II. Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema;
- III. Formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización;
- IV. Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento;
- V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;
- VI. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;
- VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema;
- VIII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional;
- IX. Proponer al Consejo Nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- X. Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo;
- XI. Proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública en los términos de la ley;
- XII. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema en los términos de ley;
- XIII. Presentar al Consejo Nacional los informes de las Conferencias Nacionales, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;
- XIV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional;
- XV. Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema, para fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial;
- XVI. Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del Consejo, en términos de las disposiciones legales aplicables;
- XVII. Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo y las demás disposiciones aplicables;
- XVIII. Someter a consideración del Consejo Nacional el proyecto de resolución fundado y motivado de cancelación y, cuando proceda, la restitución de la ministración de aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso, municipios;
- XIX. Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta Ley;
- XX. Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;
- XXI. Elaborar y someter a consideración del Consejo Nacional, opinión fundada y razonada por la que se recomiende la remoción de los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XXII. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como por el uso ilícito o indebido de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, e informar al respecto al Consejo Nacional;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- XXIII. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema;
- XXIV. Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública, y
- XXV. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Nacional o su Presidente.

**Artículo 19.-** El Centro Nacional de Información será el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

- I. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema en términos que señale el reglamento;
- II. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del Sistema;
- III. Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos;
- IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada;
- V. Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad con la Ley de la materia, y
- VI. Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos.

**Artículo 20.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:

- I. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;
- II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;
- III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;
  - b) Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
  - c) Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y
  - d) Garantizar la atención integral a las víctimas
- IV. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;
- V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;
- VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;
- VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;
- VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;
- IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley, y
- X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.

**Artículo 21.-** El Centro Nacional de Certificación y Acreditación será el responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Este Centro contará con un órgano consultivo integrado por las instituciones públicas y privadas que se determinen en el Reglamento de este ordenamiento.

**Artículo 22.-** Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal, realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para tal efecto, tendrá las facultades siguientes:



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- I. Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las conferencias.
- II. Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos;
- III. Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- IV. Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- V. Evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza que en el ámbito de Seguridad Pública operen instituciones privadas que así lo soliciten y cumplan con la normatividad correspondiente;
- VI. Verificar periódicamente que los Centros de referencia apliquen los procesos certificados, conforme a los lineamientos y estándares que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación establezca;
- VII. Apoyar a los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- VIII. Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de Evaluación y Control de Confianza;
- IX. Establecer los requisitos que deben contener los certificados Ministerial, Policial y Pericial y aprobar sus características, y
- X. Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.

#### **CAPÍTULO IV**

##### **De la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia**

**Artículo 23.-** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estará integrada por los titulares de las Instituciones de Procuración de Justicia de la Federación, el Distrito Federal y los Estados, y será presidida por el Procurador General de la República.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 24.-** El Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia podrá invitar a personas e instituciones por razón de los asuntos a tratar.

El Procurador General de Justicia Militar será invitado permanente de esta Conferencia.

**Artículo 25.-** Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

- I. Formular políticas generales de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia;
- II. Promover la coordinación y colaboración entre las Instituciones de Procuración de Justicia y las Instituciones Policiales;
- III. Formular propuestas para la integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia y demás instrumentos programáticos relacionados con el ámbito de su competencia, así como darles seguimiento;
- IV. Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- V. Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de Procuración de Justicia;
- VI. Integrar los Comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;
- VII. Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación conjuntos;
- VIII. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IX. Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
- X. Promover la homologación de los procedimientos de control de confianza de los Integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia, de conformidad con las disposiciones aplicables;
- XI. Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de procuración de justicia, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- XII. Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;
- XIII. Impulsar las acciones necesarias para promover la denuncia de los delitos y la participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia;
- XIV. Determinar las políticas y lineamientos sobre datos de procedimientos penales, juicios de amparo y otros procesos judiciales en los que intervenga el Ministerio Público, que se integren a las bases de datos que establece el presente ordenamiento;
- XV. Fijar criterios de cooperación y coordinación para la entrega de indiciados, procesados y sentenciados; el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales; el aseguramiento de bienes instrumento, objeto o producto de delitos y el desahogo de diligencias judiciales, ministeriales y periciales;
- XVI. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y garantías reconocidas en la legislación vigente;
- XVII. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas, atención a víctimas y ofendidos de delitos;
- XVIII. Proponer programas de cooperación internacional en materia de procuración de justicia;
- XIX. Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de extradición y asistencia jurídica;
- XX. Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito;
- XXI. Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- XXII. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;
- XXIII. Promover la uniformidad de criterios jurídicos, y
- XXIV. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 26.-** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se reunirá cada seis meses de manera ordinaria. El Presidente de dicha Conferencia podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo estime necesario.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## CAPÍTULO V

### De la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública

**Artículo 27.-** La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública estará integrada por los titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la Federación, los Estados y el Distrito Federal y será presidida por el Secretario de Seguridad Pública Federal.

La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

Los titulares de las dependencias u órganos en que se integren los cuerpos de policía de los municipios, podrán participar en la Conferencia, de conformidad con las reglas que la misma establezca.

**Artículo 28.-** El Presidente de la Conferencia podrá invitar a personas e Instituciones por razón de los asuntos a tratar.

**Artículo 29.-** Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

- I. Impulsar la coordinación de las actuaciones de las dependencias encargadas de la seguridad pública;
- II. Promover la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las Instituciones Policiales, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
- III. Elaborar propuestas de reformas a leyes en materia de Seguridad Pública;
- IV. Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales, cualquiera que sea su adscripción;
- V. Proponer medidas para vincular el Sistema con otros nacionales, regionales o locales;
- VI. Proponer la adopción y aplicación de políticas y programas de cooperación internacional sobre Seguridad Pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;
- VII. Promover criterios uniformes para el desarrollo policial en términos de la presente Ley;
- VIII. Integrar los Comités que sean necesarios en la materia,
- IX. Desarrollar las especialidades policiales de alto desempeño para hacer frente a los delitos de impacto nacional e internacional;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- X. Emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública federales, locales y municipales;
- XI. Impulsar las acciones necesarias para que los integrantes del Sistema establezcan un servicio para la localización de personas y bienes;
- XII. Promover el establecimiento de un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre emergencias, faltas y delitos;
- XIII. Procurar que en las Instituciones Policiales se aplique homogénea y permanentemente, el protocolo de certificación correspondiente, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- XIV. Proponer los requisitos que debe contener el Certificado Único Policial;
- XV. Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las Instituciones Policiales y promover su aplicación;
- XVI. Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones Policiales y para el manejo de información;
- XVII. Proponer mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos, a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
- XVIII. Proponer reglas para coadyuvar en la vigilancia y realización de acciones conjuntas para proteger las instalaciones estratégicas del país, en los términos de la legislación aplicable, y
- XIX. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

## **CAPÍTULO VI**

### **De la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario**

**Artículo 30.-** La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el titular de la Secretaría.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 31.-** Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

- I. Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional;
- II. Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social;
- III. Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de reinserción social;
- IV. Proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de reinserción social;
- V. Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción social en las legislaciones aplicables;
- VI. Plantear criterios para efficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;
- VII. Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticos y de personal, y
- VIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.

## CAPÍTULO VII

### De la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal

**Artículo 32.-** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, estará integrada por los Presidentes Municipales y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal que participarán de conformidad con las siguientes reglas:

- I. Dos Presidentes municipales, de cada Estado, designados por el Consejo Local de Seguridad Pública correspondiente, y
- II. Dos titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal serán nombrados por el Consejo Local de Seguridad Pública.

Dicha Conferencia Nacional contará con un Presidente, que será designado de entre sus miembros por el pleno de misma.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

**Artículo 33.-** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, tendrá las siguientes funciones mínimas:

- I. Emitir sus reglas de organización y funcionamiento;
- II. Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en materia de Seguridad Pública;
- III. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal;
- IV. Elaborar propuestas de reformas a las normas de aplicación municipal en materia de Seguridad Pública;
- V. Intercambiar experiencias y apoyo técnico entre los Municipios;
- VI. Proponer políticas públicas en materia de Seguridad Pública;
- VII. Colaborar con las instituciones públicas y privadas, en la ejecución de programas tendientes a prevenir el delito;
- VIII. Promover en el ámbito Municipal, la homologación del Desarrollo Policial;
- IX. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre la materia de Seguridad Pública Municipal, y
- X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o el consejo nacional.

## CAPÍTULO VIII

### De los Consejos Locales e Instancias Regionales de Coordinación

**Artículo 34.-** En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno. Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

En los consejos locales de cada Estado participarán los municipios en los términos de la legislación de cada entidad federativa. En el caso del Distrito Federal, participarán los titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales, de conformidad con la legislación aplicable. Estos Consejos invitarán a cada sesión al menos a dos representantes de la sociedad civil o de la comunidad, de conformidad con los temas a tratar. Su participación será de carácter honorífico.

Los Consejos Locales y las Instancias Regionales de Coordinación se organizarán, de modo que permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura del Sistema e integración del Consejo Nacional.

Los Consejos Locales determinarán su organización y la de las Instancias Regionales de Coordinación correspondientes en términos de esta Ley.

**Artículo 35.-** Los Consejos Locales se integrarán por las Instituciones de Seguridad Pública de la entidad de que se trate y de la Federación.

Además, podrán invitar a personas e instituciones, de acuerdo con los temas a tratar.

**Artículo 36.-** Cuando para el cumplimiento de la función de Seguridad Pública sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente, en las que participarán las Instituciones de Seguridad Pública correspondientes.

Del mismo modo, podrán establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos estatales correspondientes. En el caso de las zonas conurbadas entre dos o más entidades federativas, se podrán suscribir convenios e instalar instancias regionales con la participación de los municipios respectivos y de los órganos político administrativos, tratándose del Distrito Federal.

**Artículo 37.-** Los Consejos Locales y las instancias regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines de la Seguridad Pública, en sus ámbitos de competencia.

Los miembros del Consejo designarán a uno de sus servidores públicos como enlace responsable de atender y dar seguimiento a la operación del Sistema en su respectiva entidad federativa.

Dichos enlaces están obligados a proporcionar la información requerida por el Secretariado Ejecutivo, en un plazo razonable, que no excederá de treinta días naturales, salvo justificación fundada.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 38.-** Los Consejos Locales y las instancias regionales podrán proponer al Consejo Nacional y a las Conferencias Nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.

## **CAPÍTULO IX**

### **De la Distribución de Competencias**

**Artículo 39.-** La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

**A.** Corresponde a la Federación, por conducto de las autoridades competentes:

**I.** Proponer las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios;

**II.** Respecto del Desarrollo Policial:

**a)** En materia de Carrera Policial, proponer al Consejo Nacional:

**1.-** Las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los Integrantes de las Instituciones Policiales, de acuerdo al Modelo Policial, conforme a la normatividad aplicable;

**2.-** Los lineamientos para los procedimientos de Carrera Policial que aplicarán las autoridades competentes;

**b)** En materia de Profesionalización, proponer al Consejo Nacional:

**1.-** El Programa Rector que contendrá los aspectos de formación, capacitación, adiestramiento, actualización e investigación académica, así como integrar las que formulen las instancias del Sistema;

**2.-** Los procedimientos aplicables a la Profesionalización;

**3.-** Los criterios para el establecimiento de las Academias e Institutos, y

**4.-** El desarrollo de programas de investigación y formación académica.

**c)** En materia de Régimen Disciplinario, proponer al Consejo Nacional los lineamientos para la aplicación de los procedimientos respectivos.

**III.** Coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, y

**IV.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

B. Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

- I. Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que deriven de ésta;
- II. Contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación del Sistema;
- III. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario;
- IV. Constituir y operar las Comisiones y las Académias a que se refiere esta Ley;
- V. Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de personal;
- VI. Designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la información a que se refiere esta Ley;
- VII. Integrar y consultar en las bases de datos de personal de Seguridad Pública, los expedientes de los aspirantes a ingresar en las Instituciones Policiales;
- VIII. Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo;
- IX. Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo Policial, Ministerial y Pericial;
- X. Establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable;
- XI. Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo Policial para el registro y seguimiento, en las bases de datos criminalísticos y de personal de Seguridad Pública;
- XII. Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y administración;
- XIII. Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las Instalaciones Estratégicas del país, y
- XIV. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Los Estados y los Municipios podrán coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Leyes Estatales de Seguridad Pública podrán establecer la posibilidad de coordinación, y en su caso, los medios para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre un Estado y sus Municipios.

### **TÍTULO TERCERO DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

#### **CAPÍTULO I De las Obligaciones y Sanciones de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública**

**Artículo 40.-** Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

- I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;
- II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;
- III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
- IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
- V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
- VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;
- VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
- IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
- X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias;
- XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;
- XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
- XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
- XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
- XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;
- XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;
- XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;
- XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables;
- XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las Instituciones;
- XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;
- XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda;
- XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;
- XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones;
- XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes;
- XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio;
- XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y
- XXVIII. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 41.-** Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

- I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes;
- III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;
- IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales,
- V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
- VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;
- VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;
- VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
- IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;
- X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y
- XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con pleno respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.

**Artículo 42.-** El documento de identificación de los integrantes de las instituciones Seguridad Pública deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como, las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.

Todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 43.-** La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:

- I. El área que lo emite;
- II. El usuario capturista;
- III. Los Datos Generales de registro;
- IV. Motivo, que se clasifica en;
  - a) Tipo de evento, y
  - b) Subtipo de evento.
- V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
- VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos.
- VII. Entrevistas realizadas, y
- VIII. En caso de detenciones:
  - a) Señalar los motivos de la detención;
  - b) Descripción de la persona;
  - c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
  - d) Descripción de estado físico aparente;
  - e) Objetos que le fueron encontrados;
  - f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
  - g) Lugar en el que fue puesto a disposición.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

**Artículo 44.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán las sanciones aplicables al incumplimiento de los deberes previstos en esta ley, los procedimientos y los órganos competentes que conocerán de éstos. Las sanciones serán al menos, las siguientes:

- a) Amonestación;
- b) Suspensión, y
- c) Remoción.

## CAPÍTULO II

### De los Sistemas Complementarios de Seguridad Social y Reconocimientos

**Artículo 45.-** Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 46.-** Las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en esta Ley, realizarán y someterán a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión, actualización y fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.

## CAPÍTULO III

### De las Academias e Institutos

**Artículo 47.-** La Federación y las entidades federativas establecerán y operarán Academias e Institutos que serán responsables de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización que tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

- I. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- II. Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos;
- III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial, pericial y policial, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Profesionalización;
- V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;
- VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;
- VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores públicos a que se refiere el Programa Rector;
- VIII. Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de Profesionalización;
- IX. Revalidar equivalencias de estudios de la Profesionalización;
- X. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación;
- XI. Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de los Servidores Públicos y proponer los cursos correspondientes;
- XII. Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso a las Academias e Institutos;
- XIII. Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio ante las autoridades competentes;
- XIV. Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que impartan;
- XV. Proponer la celebración de convenios con Instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores públicos;
- XVI. Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los manuales de las Academias e Institutos, y
- XVII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 48.-** En materia de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales, la Secretaría tendrá la facultad de proponer a las Instancias de Coordinación de esta ley lo siguiente:





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- I. Los contenidos básicos de los programas para la formación, capacitación y profesionalización de los mandos de las Instituciones policiales;
- II. Los aspectos que contendrá el Programa Rector;
- III. Que los integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los programas correspondientes a las Academias y de estudios superiores policiales;
- IV. El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales y vigilar su aplicación;
- V. Estrategias y políticas de desarrollo de formación de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- VI. Los programas de investigación académica en materia policial;
- VII. El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales;
- VIII. La revalidación de equivalencias de estudios de la Profesionalización en el ámbito de su competencia, y
- IX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

## TÍTULO CUARTO DEL SERVICIO DE CARRERA EN LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

### Capítulo I Disposiciones Generales

**Artículo 49.-** El Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia, comprenderá lo relativo al Ministerio Público y a los peritos.

Las Instituciones de Procuración de Justicia que cuenten en su estructura orgánica con policía ministerial para la investigación de los delitos, se sujetarán a lo dispuesto en esta ley para las Instituciones Policiales en materia de carrera policial.

Las reglas y procesos en materia de carrera policial y régimen disciplinario de la policía ministerial, serán aplicados, operados y supervisados por las Instituciones de Procuración de Justicia.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Los servidores públicos que tengan bajo su mando a agentes del Ministerio Público o peritos no formarán parte del Servicio de Carrera por ese hecho; serán nombrados y removidos conforme a los ordenamientos legales aplicables; se considerarán trabajadores de confianza, y los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento.

**Artículo 50.-** El Servicio de Carrera Ministerial y Pericial comprenderá las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, conforme a lo siguiente:

- I. El ingreso comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación y certificación inicial, así como registro;
- II. El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada, de actualización, de evaluación para la permanencia, de evaluación del desempeño, de desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y reconocimientos, de reingreso y de certificación. De igual forma, deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los miembros del Servicio de Carrera, y
- III. La terminación comprenderá las causas ordinarias y extraordinarias de separación del Servicio, así como los procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar, ajustándose a lo establecido por las leyes y disposiciones aplicables.

**Artículo 51.-** El Servicio de Carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes:

- I. Tendrá carácter obligatorio y permanente; abarcará los planes, programas, cursos, evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas que comprende;
- II. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en tareas de Procuración de Justicia;
- III. El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación fomentará que los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos referidos y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades destrezas y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público;
- IV. Contará con un sistema de rotación del personal;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- V. Determinará los perfiles, niveles jerárquicos en la estructura y de rangos;
- VI. Contará con procedimientos disciplinarios, sustentados en principios de justicia y con pleno respeto a los derechos humanos;
- VII. Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño de sus funciones;
- VIII. Buscará generar el sentido de pertenencia institucional;
- IX. Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento de los certificados del personal, y
- X. Contendrá las normas para el registro de las incidencias del personal.

## CAPÍTULO II

### Del Ingreso al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia

**Artículo 52.-** El ingreso al Servicio de Carrera se hará por convocatoria pública.

Los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán cumplir, cuando menos, con los requisitos siguientes.

#### A. Ministerio Público.

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
- II. Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional;
- III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- IV. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
- V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
- VI. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- VII. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan, y
- VIII. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables.

**B. Peritos.**

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos;
- II. Acreditar que ha concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente;
- III. Tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;
- IV. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- V. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan;
- VI. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
- VII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
- VIII. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y
- IX. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezca la legislación federal y la de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 53.-** Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos de formación inicial, deberán consultarse sus antecedentes en el Registro Nacional y, en su caso, en los registros de las Instituciones de Procuración de Justicia.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Asimismo, deberá verificarse la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes.

**Artículo 54.-** Los aspirantes a ingresar al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán cumplir con los estudios de formación inicial.

Corresponderá a las autoridades competentes regular en sus legislaciones los términos en que la formación inicial se llevará a cabo. La duración de los programas de formación inicial no podrá ser inferior a quinientas horas clase. En todo caso atendiendo a los lineamientos aplicables.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Desarrollo del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 55.-** Son requisitos de permanencia del Ministerio Público y de los peritos, los siguientes:

- I. Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio;
- II. Cumplir con los programas de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables;
- III. Aprobar las evaluaciones que establezcan las disposiciones aplicables;
- IV. Contar con la certificación y registro actualizados a que se refiere esta Ley;
- V. Cumplir las órdenes de rotación;
- VI. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas, y
- VII. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezcan las leyes respectivas.

**Artículo 56.-** Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente ley.

**Artículo 57.-** Las solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su caso, concederán con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento a los requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o penal, local o federal.

#### CAPÍTULO IV

#### De la Terminación del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia

**Artículo 58.-** La Federación y las entidades federativas establecerán en sus respectivas leyes los procedimientos de separación y remoción aplicables a los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia, que cuando menos, comprenderán los aspectos previstos en el artículo siguiente.

**Artículo 59.-** La terminación del Servicio de Carrera será:

I. Ordinaria, que comprende:

- a) Renuncia;
- b) Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones, y
- c) Jubilación.

II. Extraordinaria, que comprende:

- a) Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia,  
o
- b) Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 60.-** En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación o remoción es injustificada, la institución respectiva sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

## **CAPÍTULO V**

### **De la Profesionalización**

**Artículo 61.-** El Programa Rector de Profesionalización es el instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal de las Instituciones de Procuración de Justicia.

**Artículo 62.-** Los planes de estudios se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolución de casos.

**Artículo 63.-** En materia de programas de Profesionalización y planes de estudio, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Promover estrategias y políticas de profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia,
- II. Diseñar los modelos de profesionalización que correspondan para su concertación y en su caso, aplicación en las Instituciones de Procuración de Justicia;
- III. Acordar los contenidos del Programa Rector de Profesionalización de los servidores públicos de las instituciones de Procuración de Justicia, a propuesta de su Presidente;
- IV. Establecer criterios para supervisar que los servidores públicos se sujeten a los programas correspondientes en los Institutos de Capacitación;
- V. Promover el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes a las Instituciones de Procuración de Justicia y vigilar su aplicación;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- VI. Establecer programas de investigación académica en las materias ministerial y pericial;
- VII. Consensuar los criterios por los que se revalidarán equivalencias de estudios en el ámbito de su competencia para su incorporación al programa rector de profesionalización, y
- VIII. Las demás que le establezcan otras disposiciones legales.

**Artículo 64.-** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia están obligados a participar en las actividades de profesionalización que determine la institución respectiva, los cuales deberán cubrir un mínimo de 60 horas clase anuales.

## **CAPÍTULO VI** **De la Certificación**

**Artículo 65.-** Los aspirantes que ingresen a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán contar con el Certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por esta Ley.

Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia sin contar con el Certificado y registro vigentes.

**Artículo 66.-** Los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia emitirán los certificados correspondientes a quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece esta Ley y el ordenamiento legal aplicable a la institución de que se trate.

El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.

**Artículo 67.-** El Certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional que para tal efecto se establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 68.-** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.

La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 69.-** La certificación que otorguen los centros de evaluación y control de confianza deberá contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia que deseen prestar sus servicios en otra institución, ya sea en la Federación o en las Entidades Federativas, deberán presentar el Certificado que les haya sido expedido previamente.

Las Instituciones de Procuración de Justicia reconocerán la vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados, conforme a las disposiciones de esta Ley y demás aplicables. En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los procesos de evaluación.

En todos los casos, se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el Registro Nacional.

**Artículo 70.-** La cancelación del certificado de los Servidores Públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia procederá:

- I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- II. Al ser removidos de su encargo,
- III. Por no obtener la revalidación de su Certificado, y
- IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.

**Artículo 71.-** La Institución de Procuración de Justicia que cancele algún certificado deberá hacer la anotación respectiva en el Registro Nacional correspondiente.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## TÍTULO QUINTO DEL DESARROLLO POLICIAL

### CAPÍTULO I Disposiciones Generales

**Artículo 72.-** El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos en el artículo 6 de la Ley.

**Artículo 73.-** Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.

**Artículo 74.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente.

**Artículo 75.-** Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:

- I. Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y
- III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.

**Artículo 76.-** Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, o bien, en las Instituciones Policiales, o en ambas, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones.

Las policías ministeriales ubicadas dentro de la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Título, quedando a cargo de dichas instituciones, la aplicación de las normas, supervisión y operación de los procedimientos relativos al desarrollo policial.

**Artículo 77.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación que podrán ser, entre otras, las siguientes:

- I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine;
- II. Deberán verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informará al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;
- III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;
- IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;
- VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;
- VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;
- VIII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables.
- IX. Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;
- X. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;
- XI. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;
- XII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá.
  - a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
  - b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;
  - c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y
  - e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.
- XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, y
- XIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

## **CAPÍTULO II**

### **De la Carrera Policial y de la Profesionalización**

**Artículo 78.-** La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales.

**Artículo 79.-** Los fines de la Carrera Policial son:

- I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales;
- II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones;
- III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y
- V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 80.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán la organización jerárquica de las Instituciones Policiales, considerando al menos las categorías siguientes:

- I. Comisarios;
- II. Inspectores;
- III. Oficiales, y
- IV. Escala Básica.

En las policías ministeriales se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al modelo policial previsto en esta Ley.

**Artículo 81.-** Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las siguientes jerarquías:

- I. Comisarios:
  - a) Comisario General;
  - b) Comisario Jefe, y
  - c) Comisario.
- II. Inspectores:
  - a) Inspector General;
  - b) Inspector Jefe, y
  - c) Inspector.
- III. Oficiales:
  - a) Subinspector;
  - b) Oficial, y
  - c) Suboficial.
- IV. Escala Básica:
  - a) Policía Primero;
  - b) Policía Segundo;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- c) Policía Tercero, y
- d) Policía.

**Artículo 82.-** Las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.

Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los titulares de las instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerarquía.

Las instituciones estatales y del Distrito Federal, deberán satisfacer, como mínimo, el mando correspondiente al octavo grado de organización jerárquica.

Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones.

**Artículo 83.-** El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de la Instituciones con relación a las áreas operativas y de servicios será.

- I. Para las áreas operativas, de policía a Comisario General, y
- II. Para los servicios, de policía a Comisario Jefe.

**Artículo 84.-** La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.

De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

Para tales efectos, la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán promover en el ámbito de sus competencias respectivas, las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas, en los diferentes ámbitos de competencia.

**Artículo 85.-** La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se registrará por las normas mínimas siguientes.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- I. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas;
- II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo;
- III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema;
- IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;
- V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;
- VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las leyes respectivas;
- VII. Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;
- VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;
- X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por la instancia que señale la ley de la materia, y
- XI. Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial.

La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección.

En términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las Instituciones Policiales podrán designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando su grado policial y derechos inherentes a la Carrera Policial.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 86.-** La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales.

Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en la ley sobre los aspirantes aceptados.

**Artículo 87.-** El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en las Academias o Institutos de Capacitación Policial, el periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley.

**Artículo 88.-** La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales. Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:

**A. De Ingreso:**

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;
- II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
- III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
  - a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
  - b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
  - c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
- V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
- VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;



**PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS**

- VII.** Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
- VIII.** Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- IX.** No padecer alcoholismo;
- X.** Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- XI.** No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
- XII.** Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que deriven de la misma;
- XIII.** Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

**B. De Permanencia:**

- I.** Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;
- II.** Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
- III.** No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
- IV.** Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
  - a)** En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;
  - b)** Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
  - c)** En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
- V.** Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
- VI.** Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
- VII.** Aprobar las evaluaciones del desempeño;
- VIII.** Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- X. No padecer alcoholismo;
- XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;
- XII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
- XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días, y
- XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 89.-** Las instancias responsables del Servicio de Carrera Policial fomentarán la vocación de servicio mediante la promoción y permanencia en las Instituciones Policiales para satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de sus integrantes.

**Artículo 90.-** El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual las Instituciones Policiales otorgan el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.

Todo estímulo otorgado por las instituciones será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.

**Artículo 91.-** La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.

Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.

Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.

**Artículo 92.-** Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los integrantes de las Instituciones Policiales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.

**Artículo 93.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán que la antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones Policiales, de la siguiente forma.

- I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Policiales, y
- II. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente.

La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera Policial.

**Artículo 94.-** La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

- I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurren las siguientes circunstancias:
  - a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;
  - b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y
  - c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones para conservar su permanencia.
- II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

### III. Baja, por:

- a) Renuncia;
- b) Muerte o incapacidad permanente, o
- c) Jubilación o Retiro.

Al concluir el servicio el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.

**Artículo 95.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.

**Artículo 96.-** La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

Las Instituciones Policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.

La presente disposición será aplicable también al personal de los servicios de migración.

**Artículo 97.-** La certificación tiene por objeto:

**A.-** Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional;

**B.-** Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las Instituciones Policiales:

- I. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- II. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;
- III. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;
- V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y
- VI. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley.

**Artículo 98.-** La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.

Los planes de estudio para la Profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje que estarán comprendidos en el programa rector que apruebe la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, a propuesta de su Presidente.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Régimen Disciplinario**

**Artículo 99.-** La actuación de los Integrantes de las Instituciones Policiales se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de esta Ley.

Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán sus regímenes disciplinarios, sobre las bases mínimas previstas en el presente capítulo.

La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.

La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados.

**Artículo 100.-** Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

**Artículo 101.-** El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.

**Artículo 102.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales, observarán las obligaciones previstas en los artículos 40 y 41 de esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.

**Artículo 103.-** La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor.

La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación aplicable.

**Artículo 104.-** El procedimiento ante las autoridades previstas en las leyes de la materia, iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o presidente de la instancia correspondiente, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor.

Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento.

**Artículo 105.-** La Federación, las entidades federativas y los municipios establecerán instancias colegiadas en las que participen, en su caso, cuando menos, representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las Instituciones Policiales, para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Para tal fin, las Instituciones Policiales podrán constituir sus respectivas Comisiones del servicio profesional de carrera policial y de honor y justicia, las que llevarán un registro de datos de los integrantes de sus instituciones. Dichos datos se incorporarán las bases de datos de personal de Seguridad Pública.

En las Instituciones de Procuración de Justicia se integrarán instancias equivalentes, en las que intervengan representantes de los policías ministeriales.

## TÍTULO SEXTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

**Artículo 106.-** El sistema nacional de acreditación y control de confianza se conforma con las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

Integran este sistema: El Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales de la Federación y de las entidades federativas.

**Artículo 107.-** Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que establezca el Reglamento que emita el Ejecutivo Federal.

Cuando en los procesos de certificación a cargo de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En caso contrario, el proceso carecerá de validez.

**Artículo 108.-** Los Centros Nacional de Acreditación y Control de Confianza aplicarán las evaluaciones a que se refiere esta Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; para tal efecto, tendrán las siguientes facultades:

- I. Aplicar los procedimientos de Evaluación y de Control de Confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;





**PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS**

- II. Proponer lineamientos para la verificación y control de Certificación de los Servidores Públicos;
- III. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable;
- IV. Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la confidencialidad y resguardo de expedientes;
- V. Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad;
- VI. Comprobar los niveles de escolaridad de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;
- VII. Aplicar el procedimiento de certificación de los Servidores Públicos, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- VIII. Expedir y actualizar los Certificados conforme a los formatos autorizados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- IX. Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados de las evaluaciones que practiquen;
- X. Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus funciones;
- XI. Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención que permitan solucionar la problemática identificada;
- XII. Proporcionar a las Instituciones, la asesoría y apoyo técnico que requieran sobre información de su competencia;
- XIII. Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y que se requieran en procesos administrativos o judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables;
- XIV. Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública, y
- XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios implementarán medidas de registro y seguimiento para quienes sean separados del servicio por no obtener el certificado referido en esta Ley.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

## TITULO SÉPTIMO DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA

### CAPÍTULO ÚNICO

**Artículo 109.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.

El Presidente del Consejo Nacional dictará las medidas necesarias, además de las ya previstas en la Ley, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada mediante los instrumentos de información sobre Seguridad Pública.

Las Instituciones de Procuración de Justicia tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos criminalísticos y de personal, en el ámbito de su función de investigación y persecución de los delitos.

La información sobre administración de justicia, podrá ser integrada las bases de datos criminalísticas y de personal, a través de convenios con el Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia y con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

El acceso a las bases de datos del sistema estará condicionado al cumplimiento de esta Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia Ley emanen.

**Artículo 110.-** Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables

La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

**Artículo 111.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su Red Local correspondiente, con las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema, previstas en la presente Ley.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Secretario Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios.

## SECCIÓN PRIMERA Del Registro Administrativo de Detenciones

**Artículo 112.-** Los agentes policiales que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información, de la detención, a través del Informe Policial Homologado.

**Artículo 113.-** El registro administrativo de la detención deberá contener, al menos, los datos siguientes:

- I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
- II. Descripción física del detenido;
- III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención,
- IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción, y
- V. Lugar a donde será trasladado el detenido.

**Artículo 114.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán actualizar la información relativa al registro, tan pronto reciba a su disposición al detenido, recabando lo siguiente.

- I. Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión;
- II. Clave Única de Registro de Población;
- III. Grupo étnico al que pertenezca;
- IV. Descripción del estado físico del detenido;
- V. Huellas dactilares;
- VI. Identificación antropométrica, y
- VII. Otros medios que permitan la identificación del individuo;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

El Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite de la detención de una persona y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emitirá las disposiciones necesarias para regular los dispositivos tecnológicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información a que se refiere este artículo, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología.

**Artículo 115.-** La información capturada en el Registro Administrativo de Detenciones será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:

- I. Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y
- II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el Registro a terceros. El Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

**Artículo 116.-** Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal aplicable.

## **SECCIÓN SEGUNDA**

### **Del Sistema Único de Información Criminal**

**Artículo 117.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios serán responsables de integrar y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del adolescente.

**Artículo 118.-** Dentro del sistema único de información criminal se integrará una base nacional de datos de consulta obligatoria en las actividades de Seguridad Pública, sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de identificación, recursos y modos de operación.

Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que aporten las Instituciones de Seguridad Pública, relativa a las investigaciones, procedimientos penales, órdenes de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de penas.

**Artículo 119.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia podrán reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, conforme a las disposiciones aplicables, pero la proporcionarán al sistema único de información criminal inmediatamente después que deje de existir tal condición.

**Artículo 120.-** El Sistema Nacional de Información Penitenciaria es la base de datos que, dentro del sistema único de información criminal, contiene, administra y controla los registros de la población penitenciaria de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 121.-** La base de datos deberá contar, al menos, con el reporte de la ficha de identificación personal de cada interno con fotografía, debiendo agregarse los estudios técnicos interdisciplinarios, datos de los procesos penales y demás información necesaria para la integración de dicho sistema.

### SECCIÓN TERCERA

#### Del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

**Artículo 122.-** El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos:



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública;
- II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público, y
- III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron.

Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al Registro.

**Artículo 123.-** Las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios inscribirán y mantendrán actualizados permanentemente en el Registro los datos relativos a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de esta Ley.

Para efectos de esta Ley, se consideran miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente.

La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la presente Ley.

#### **SECCIÓN CUARTA** **Del Registro Nacional de Armamento y Equipo.**

**Artículo 124.-** Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios manifestarán y mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el cual incluirá:

- I. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo, y
- II. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 125.-** Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las instituciones de Seguridad Pública mantendrán un registro de los elementos de identificación de huella balística de las armas asignadas a los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública. Dicha huella deberá registrarse en una base de datos del Sistema.

**Artículo 126.-** En el caso de que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Nacional de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las normas aplicables.

**Artículo 127.-** El incumplimiento de las disposiciones de esta sección, dará lugar a que la portación o posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.

## TÍTULO OCTAVO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

### CAPÍTULO ÚNICO De los Servicios de Atención a la Población

**Artículo 128.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.

Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de:

- I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y
- II. La sociedad civil organizada.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 129.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes.

**Artículo 130.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.

**Artículo 131.-** Para mejorar el servicio de Seguridad Pública, las instancias de coordinación que prevé esta Ley promoverán la participación de la comunidad a través de las siguientes acciones:

- I. Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.
- II. Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;
- III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;
- IV. Realizar labores de seguimiento;
- V. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;
- VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y
- VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.

**Artículo 132.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que las Instituciones de Seguridad Pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad, para alcanzar los propósitos del artículo anterior.

La participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y de instituciones, se sujetará a los indicadores previamente establecidos con la autoridad sobre los siguientes temas:

- I. El desempeño de sus integrantes;





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- II. El servicio prestado, y
- III. El impacto de las políticas públicas en prevención del delito.

Los resultados de los estudios deberán ser entregados a las Instituciones de Seguridad Pública, así como a los Consejos del Sistema, según corresponda. Estos estudios servirán para la formulación de políticas públicas en la materia.

**Artículo 133.-** El Centro Nacional de Información deberá proporcionar la información necesaria y conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana. No se podrá proporcionar la información que ponga en riesgo la seguridad pública o personal.

**Artículo 134.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán políticas públicas de atención a la víctima, que deberán prever, al menos los siguientes rubros:

- I. Atención de la denuncia en forma pronta y expedita;
- II. Atención jurídica, médica y psicológica especializada;
- III. Medidas de protección a la víctima, y
- IV. Otras, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

## TÍTULO NOVENO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

### CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales

**Artículo 135.-** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, locales y municipales por el manejo o aplicación ilícita de los recursos previstos en los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.

Serán consideradas violaciones graves a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, las acciones u omisiones previstas en el artículo 139, que se realicen en forma reiterada o sistemática.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 136.-** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, estatales y municipales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.

**Artículo 137.-** La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales que ejerzan la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en materia de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones aplicables.

## CAPÍTULO SEGUNDO

### De los Delitos contra el Funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública

**Artículo 138.-** Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa, a quien dolosa, ilícita y reiteradamente se abstenga de proporcionar al Secretariado Ejecutivo la información que esté obligado en términos de esta Ley, a pesar de ser requerido por el Secretario Ejecutivo, dentro del plazo previsto en el artículo 37 de esta Ley.

Se impondrá además, la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión en cualquier orden de gobierno.

**Artículo 139.-** Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien:

- I. Ingrese dolosamente a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública previstos en esta Ley, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información, las bases de datos o los equipos o sistemas que las contengan;
- II. Divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases de datos o sistemas informáticos a que se refiere esta Ley.
- III. Inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, prevista en esta Ley, como miembro o integrante de una institución de Seguridad Pública de cualquier orden de gobierno, a persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la Ley, o a sabiendas de que la certificación es ilícita, y



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- IV. Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además, la inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público en cualquier orden de gobierno, y en su caso, la destitución.

**Artículo 140.-** Se sancionará con cinco a doce años de prisión y de doscientos a ochocientos días multa, a quien falsifique el certificado a que se refiere la presente Ley, lo altere, comercialice o use a sabiendas de su ilicitud.

**Artículo 141.-** Las sanciones previstas en este capítulo se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos previstos en los ordenamientos penales federal o de las entidades federativas, según corresponda.

Las autoridades del fuero federal serán las competentes para conocer y sancionar los delitos previstos en este capítulo, conforme las disposiciones generales del Código Penal Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones legales, en atención a que la Federación es el sujeto pasivo, de conformidad con el artículo 50, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

## TÍTULO DÉCIMO DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL

### CAPÍTULO I Disposiciones Preliminares

**Artículo 142.-** Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto. Los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente Ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel nacional sean determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, serán distribuidos con base en los criterios que apruebe el Consejo Nacional, a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Las autoridades correspondientes de las entidades federativas y de los municipios deberán concentrar los recursos en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública.

Asimismo, dichas autoridades deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema sobre los movimientos que presenten las cuentas específicas, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino así como los recursos comprometidos, devengados y pagados.

Sin perjuicio de lo que establece el artículo 143 los convenios generales o específicos establecerán obligaciones para las entidades federativas y los municipios, a efecto de fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se aporten, así como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

**Artículo 143.-** Para efectos de control, vigilancia, transparencia y supervisión del manejo de los recursos previstos en el artículo que antecede, así como para determinar si se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 139, compete al Secretario Ejecutivo:

- I. Requerir, indistintamente, a las autoridades hacendarias y de seguridad pública, entre otras, de las entidades federativas y de los municipios, informes relativos a:
  - a) El ejercicio de los recursos de los fondos y el avance en el cumplimiento de los programas o proyectos financiados con los mismos;
  - b) La ejecución de los programas de seguridad pública de las entidades federativas derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública,
- II. Efectuar, en cualquier momento, visitas de verificación y revisiones de gabinete de los documentos, instrumentos y mecanismos inherentes o relativos al ejercicio de los recursos en las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios, a fin de comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las obligaciones a su cargo; de igual forma, podrá requerir la información que considere necesaria indistintamente a las autoridades hacendarias o de seguridad pública locales correspondientes, y



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- III. Las demás acciones que resulten necesarias para la consecución de lo dispuesto en este artículo.

De manera supletoria a lo previsto en este artículo se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal.

## **CAPÍTULO II**

### **De la Cancelación y Suspensión de Ministración de los Recursos**

**Artículo 144.-** El Pleno del Consejo Nacional resolverá la cancelación o suspensión de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, a las entidades federativas o, en su caso, municipios, que incurran en lo siguiente:

- I. Incumplir las obligaciones relativas al suministro, intercambio y sistematización de la información de Seguridad Pública, o violar las reglas de acceso y aprovechamiento de la información de las bases de datos previstas en esta Ley;
- II. Incumplir los procedimientos y mecanismos para la certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;
- III. Abstenerse de implementar el servicio telefónico nacional de emergencia;
- IV. Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que disponen las disposiciones jurídicas aplicables;
- V. Aplicar criterios, normas y procedimientos distintos a los establecidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- VI. Establecer y ejecutar un Modelo Policial básico distinto al determinado por el Consejo Nacional;
- VII. Establecer servicios de carrera ministerial y policial sin sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones que de ella emanan;
- VIII. Abstenerse de constituir y mantener en operación las instancias, centros de control de confianza y academias a que se refiere esta Ley, y
- IX. Cualquier incumplimiento a las obligaciones de la presente Ley, que afecte a los mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Pública.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

La cancelación de la ministración de los recursos federales a las entidades federativas y municipios, supone la pérdida de los mismos, por lo que no tendrán el carácter de recuperables o acumulables y deberán, en consecuencia, permanecer en la Tesorería de la Federación para los efectos legales correspondientes al finalizar el ejercicio fiscal, salvo que en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal se destinen a otras entidades federativas o municipios para llevar a cabo la función de seguridad pública, sin que se genere, para éstas, el derecho a recibir los recursos con posterioridad.

**Artículo 145.-** El procedimiento al que se sujetarán las visitas y revisiones a que se refiere el artículo 143, fracción II, y sobre las causas de cancelación de los recursos a que se refiere el artículo 144, se sujetará a las reglas siguientes:

- I. En la orden de visita o revisión correspondiente se señalará el servidor público que la practicará, la institución, así como el periodo u objeto que haya de verificarse o revisarse;
- II. La visita se practicará preferentemente en las oficinas principales de la institución o dependencia visitada; en caso de no ser posible por cualquier causa, se realizará en cualquier domicilio de la propia institución o dependencia o, en caso necesario, en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo; estando obligados los servidores públicos de las instituciones o dependencias visitadas a proporcionar todas las facilidades necesarias y atender los requerimientos que se les formulen;
- III. En caso de advertirse incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, los acuerdos generales o los convenios, el Secretariado podrá decretar la suspensión provisional de las aportaciones subsecuentes. La suspensión de ministración de fondos subsistirá hasta que se aclare o subsane la acción u omisión que dio origen al incumplimiento.

La suspensión en el otorgamiento de los recursos no implica la pérdida de los mismos por parte de las entidades federativas o municipios, por lo que podrán aclarar o subsanar la acción u omisión que dio origen al incumplimiento, mientras no se emita la resolución que declare la cancelación;

- IV. En un plazo no mayor a quince días hábiles, posteriores a la terminación de la visita, el Secretariado Ejecutivo presentará al Consejo el informe correspondiente al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones sujetas a verificación, así como toda la información que resulte necesaria para el efecto;
- V. El Secretariado dará vista a la institución o dependencia visitada o revisada, para que en un plazo de veinte días hábiles, aporte la información pertinente para desvirtuar las imputaciones que, en su caso, se formulen en su contra;



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

- VI. Transcurrido el plazo antes mencionado, en caso de incumplimiento, el Secretariado presentará al Consejo Nacional un proyecto de resolución, en que se contengan las conclusiones de la visita o revisión practicadas, y
- VII. En el proyecto de resolución señalará si la institución o dependencia revisada o visitada se hace acreedora a la cancelación de los fondos o, en su caso, que procede requerir la restitución de los mismos.

El Consejo Nacional resolverá en forma definitiva e inatacable sobre la existencia del incumplimiento y determinará, en su caso, la cancelación y, cuando proceda, la restitución de los recursos, con independencia de las responsabilidades que otras leyes establezcan.

De la suspensión o cancelación se dará cuenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes

Cuando el Consejo Nacional resuelva que procede requerir la restitución de los recursos utilizados en forma indebida o ilícita, las entidades federativas o, en su caso, municipios contarán con un plazo de 30 días naturales para efectuar el reintegro; en caso contrario, los recursos podrán descontarse de las participaciones o aportaciones que le correspondan para el siguiente ejercicio fiscal.

Las entidades federativas estarán representadas por los titulares de los poderes ejecutivos a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 12 de esta Ley, o por quien ellos designen, sin que pueda recaer dicha representación en un servidor público de menor jerarquía a la de titular de una de las secretarías competentes en la entidad respectiva para la aplicación de esta Ley.

## TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS

**Artículo 146.-** Para efectos de esta Ley, se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.

**Artículo 147.-** El Distrito Federal, los Estados y los Municipios coadyuvarán en la protección y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de las instalaciones estratégicas y para garantizar su integridad y operación.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 148.-** El resguardo de las instalaciones estratégicas queda a cargo de la Federación, que se coordinará con las Instituciones locales y municipales correspondientes por razón del territorio en el ejercicio de esta función, las cuales garantizarán la seguridad perimetral y el apoyo operativo en caso necesario.

El Ejecutivo Federal constituirá un Grupo de Coordinación Interinstitucional para las Instalaciones Estratégicas, que expedirá, mediante acuerdos generales de observancia obligatoria, la normatividad aplicable en la materia.

**Artículo 149.-** El Consejo Nacional establecerá los casos, condiciones y requisitos necesarios para el bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico para los fines de seguridad pública.

Las decisiones que en ese sentido emita el Consejo Nacional, deberán ser ejecutadas por las distintas Instituciones de Seguridad Pública que lo integran.

## TITULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

**Artículo 150.-** Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado, deberán obtener autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local.

Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.

**Artículo 151.-** Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**Artículo 152.-** Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se registrarán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables que se establecen para las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Centro Nacional de Información.

Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán conforme a la normatividad aplicable, la obligación de las empresas privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza.

### TRANSITORIOS

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes.

**SEGUNDO.-** El Ejecutivo Federal contará con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto para crear e instalar el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cual deberá acreditar a los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública y sus respectivos procesos de evaluación en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en operación del citado Centro Nacional.

**TERCERO.-** De manera progresiva y en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el Consejo Nacional.

**CUARTO.-** Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

**QUINTO.-** Los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes estatales, en la rama correspondiente, en un plazo no mayor a un año.

**SEXTO.-** Los servidores públicos que obtengan el certificado y que satisfagan los requisitos de ingreso y permanencia que se establecen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los ordenamientos legales federales y estatales aplicables, ingresarán o serán homologados al servicio de carrera, en las ramas ministerial, policial y pericial, según corresponda, en la jerarquía y grado, así como antigüedad y derechos que resulten aplicables, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

**SÉPTIMO.-** Las referencias realizadas en la presente Ley a la reinserción social, quedarán entendidas al término vigente readaptación social, toda vez que con este Decreto no entra en vigor el párrafo tercero del artículo 21 constitucional sujeto a la vacancia prevista en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

**OCTAVO.-** El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

**NOVENO.-** El Consejo Nacional y las Conferencias que prevé la presente Ley, deberán expedir las disposiciones a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo no mayor a nueve meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

**DÉCIMO.-** Por única ocasión, el Secretario Ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**DÉCIMO PRIMERO.-** Los recursos humanos, materiales y financieros con que cuente el Secretario Ejecutivo de conformidad con la abrogada Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables, se transferirán al Secretariado Ejecutivo previsto en esta Ley, a la brevedad posible.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL  
CÁMARA DE DIPUTADOS

Lo mismo sucederá con los asuntos en trámite del Secretario Ejecutivo, salvo que pudiera causarse algún daño o menoscabo al servicio o a los intereses del Sistema.

Los derechos del personal del Secretario Ejecutivo que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, sea transferido, se respetarán conforme a la ley aplicable.

**DÉCIMO SEGUNDO.-** Se abroga la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Palacio Legislativo en San Lázaro a 11 de diciembre de 2008.



Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

## POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIP. JUAN FRANCISCO RIVERA BEDOYA  
PRESIDENTE

DIP. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA  
SECRETARIO

DIP. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS  
SECRETARIO

DIP. MA. DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ DEL CASTILLO  
SECRETARIA

DIP. PATRICIA VILLANUEVA ABRAJÁN  
SECRETARIA

DIP. ARMANDO BARREIRO PÉREZ  
SECRETARIO

DIP. LUIS GERARDO SERRATO CASTELL  
SECRETARIO

DIP. DAVID MENDOZA ARELLANO  
SECRETARIO



Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ  
INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL ARELLANO PULIDO  
INTEGRANTE

DIP. ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ  
INTEGRANTE

DIP. GREGORIO BARRADAS MIRAVETE  
INTEGRANTE

DIP. MANUEL CÁRDENAS FONSECA  
INTEGRANTE

DIP. RAÚL CERVANTES ANDRADE  
INTEGRANTE

DIP. ÁNGEL RAFAEL DESCHAMPS FALCÓN  
INTEGRANTE

DIP. YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA  
INTEGRANTE

DIP. JORGE JUSTINIANO GONZÁLEZ BETANCOURT  
INTEGRANTE

DIP. AGUSTÍN LEURA GONZÁLEZ  
INTEGRANTE



Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

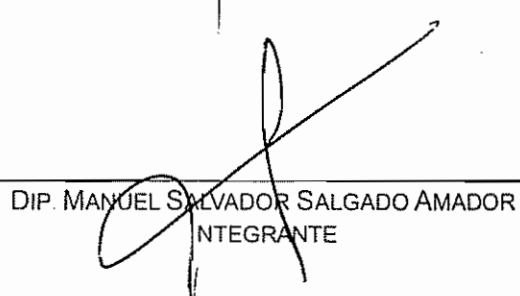
DIP. ANDRÉS LOZANO LOZANO  
INTEGRANTE

  
DIP. CARLOS MADRAZO LIMÓN  
INTEGRANTE

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ  
INTEGRANTE

  
DIP. JOSÉ LUIS MURILLO TORRES  
INTEGRANTE


DIP. SILVIA OLIVA FRAGOSO  
INTEGRANTE

  
DIP. MANUEL SALVADOR SALGADO AMADOR  
INTEGRANTE

DIP. JOSEFINA SALINAS PÉREZ  
INTEGRANTE

DIP. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN  
INTEGRANTE

DIP. FRANCISCO JAVIER SANTOS ARREOLA  
INTEGRANTE

  
DIP. JOSÉ DE JESÚS SOLANO MUÑOZ  
INTEGRANTE



Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



---

DIP. MARTÍN STEFANONNI MAZZOCCO  
INTEGRANTE



---

DIP. CARLOS ALBERTO TORRES TORRES  
INTEGRANTE

11-12-2008

Cámara de Diputados.

**DICTAMEN** de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Aprobado** con 221 votos en pro, 104 en contra y 1 abstención.

Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Gaceta Parlamentaria, 11 de diciembre de 2008.

Discusión y votación, 11 de diciembre de 2008.

La Comisión de Seguridad Pública entregó a esta Presidencia el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. En virtud de que se está distribuyendo entre diputadas y diputados el dictamen, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Son de primera lectura. En virtud de que se ha distribuido entre las diputadas y diputados el dictamen del proyecto de decreto consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación en esta misma sesión.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen y se pone a discusión y votación en esta misma sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Se le dispensa la segunda lectura. En consecuencia están a discusión en lo general las modificaciones hechas por la colegisladora.

En virtud de que no hay solicitud de uso de la palabra de ningún legislador, consulte la Secretaría a la asamblea...

**El diputado Andrés Lozano Lozano** (desde la curul): Presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** A ver permítame. ¿Con qué objeto, diputado? Diputado Lozano Lozano.

**El diputado Andrés Lozano Lozano** (desde la curul): Con la finalidad de pronunciarnos respecto de las modificaciones a que se refiere el presente dictamen.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Desde su curul, tiene el uso de la palabra, diputado.

**El diputado Andrés Lozano Lozano** (desde la curul): No, pediría que fuera desde la tribuna, diputado presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Se le concede el uso de la palabra, desde la tribuna.

**El diputado Andrés Lozano Lozano** (desde la curul): Gracias, diputado.

**El diputado Andrés Lozano Lozano:** Gracias, con su venia, diputado presidente. Hace algunos días aquí en esta asamblea aprobamos esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública haciendo mención a la importancia que se refería a este tema, haciendo mención a lo importante que era contar con una nueva estructura de un Sistema Nacional de Seguridad Pública y también, comentando que para que este sistema



tuviera éxito era importante que se pudieran generar los equilibrios necesarios, respecto de esta ley y respecto de la seguridad pública en su conjunto.

Decíamos que sí, a mayor atribuciones para las policías. Decíamos que sí, al actuar con toda contundencia frente al crimen organizado, narcotráfico, secuestro y todas las expresiones de este flagelo que lastima a la sociedad.

Pero también mencionábamos que era muy importante que en estos equilibrios se respetaran los derechos humanos, y que en estos equilibrios nosotros pudiéramos determinar también, a través de esta ley, que no era una carta en blanco, sino que debíamos de cuidar también la actuación de las policías.

La minuta que envía el Senado tiene modificaciones, la mayor parte de ellas se refieren prácticamente a cuestiones de forma que no tienen mayor trascendencia. Sin embargo, hay dos propuestas de reforma que hacen, que refieren, al artículo 40 y 41 de esta ley.

El artículo 40 establece las obligaciones bajo las que se deben de regir las instituciones de seguridad pública. Y entonces en el Senado, eliminan la parte que refiere a que deberán de abstenerse de permitir actos tales como sanciones crueles, inhumanos o degradantes.

¿Qué motiva al Senado a eliminar que las policías se abstengan de actuar con sanciones crueles, inhumanas o degradantes? Eso es lo que llama la atención, de esta decisión que ha tomado el Senado. Y máxime, cuando ellos son parte fundamental en los tratados internacionales de los que forma parte nuestro país.

En 1983 se ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En su artículo 5, de dicha convención, se señalaba que esa prohibición respecto de estas conductas deberán incluirse, en todo momento, en las normas o instrucciones generales que se publiquen en relación con los deberes y funciones de cualquier encargado de la custodia. Es decir, de cualquier persona que tenga funciones de orden policial o relacionado con la custodia de personas.

¿Por qué eliminar esta parte? No lo podemos entender.

De igual manera, en el último párrafo del artículo 41 se cambia un contexto que es relacionado con el uso legítimo de la fuerza, y lo que señalaba que solamente en los casos en que estén en riesgo los derechos y garantías de personas e instituciones podrá usarse la fuerza pública, se cambia ahora el contexto abriendo una posibilidad a una interpretación distinta.

Por eso, nosotros, en el Grupo Parlamentario del PRD, en la mayoría votamos a favor de esa Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero, en este momento, y respecto de la minuta enviada por el Senado, no podemos estar a favor de ello; no podemos estar a favor, simple y sencillamente porque es totalmente incongruente que tratemos de eliminar esta abstención respecto de tratos o sanciones crueles, inhumanas o degradantes.

¿En qué perjudicaba que estuviera en el texto constitucional? Sólo los senadores lo saben. Es cuanto, diputado presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Diputada Jiménez, ¿con qué objeto?

**La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo** (desde la curul): Para fijar la postura del grupo de trabajo de la comisión, señor presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Compañera diputada, no habíamos planteado ese esquema, porque todos los grupos me han notificado que no habría ninguna participación; incluso el presidente de la Comisión de Seguridad Pública había declinado a esa participación; entonces, ésa es la posición que han guardado los grupos parlamentarios. Claro, tiene derecho, solamente le planteo el por qué razón no se había abierto en ese sentido. Tiene el uso de la palabra.

**La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo** (desde la curul): Aquí desde mi curul, señor presidente.

Nada más quisiera aclarar que el artículo 40 que se está modificando no cambia la esencia de la ley, toda vez que obliga a los integrantes de las instituciones de seguridad pública a actuar de acuerdo a los ordenamientos legales vigentes, como es el caso del artículo 20, en su apartado B, fracción II, de la Constitución; la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que se publicó en 1991, y aparte existe la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, que también suscribió México. Por esto, no se cambia la esencia de la ley. Por eso creo que debemos de votarla a favor. Gracias, señor presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Muchas gracias, compañera diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Suficientemente discutido en lo general. Han declinado, porque habían solicitado por escrito reservas al artículo 40, fracción V, el diputado Miguel Ángel Arellano Pulido; y, al mismo artículo, Alliet Mariana Bautista Bravo y también el diputado David Mendoza Arellano.

Y al artículo 41, último párrafo, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera ha declinado a su reserva.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, de las modificaciones hechas por la colegisladora.

No habiendo quien haya solicitado el uso de la palabra, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** ¿Faltó alguna diputada o diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema. Sigue abierto el sistema de votación. De viva voz la diputada Mercedes Morales Utrera.

**La diputada Mercedes Morales Utrera** (desde la curul): Mercedes Morales Utrera, a favor.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Gracias, diputada. A favor. Sigue abierto el sistema. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Está aún abierto el sistema.

**El diputado Benjamín Ernesto González Roaro** (desde la curul): Secretario diputado.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Diputado Gonzáles Roaro, el sentido de su voto de viva voz. Sonido a la curul del diputado González Roaro, por favor.

**El diputado Benjamín Ernesto González Roaro** (desde la curul): González Roaro, a favor.

**El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas:** Gracias, diputado. A favor. Ciérrase el sistema de votación electrónico. Se emitieron **221 votos en pro, 104 en contra y 1 abstención**, diputado presidente.

**El Presidente diputado César Duarte Jáquez:** Gracias, diputado secretario. Aprobado el artículo por 221 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.**

## SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

### DECRETO por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

**FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA**, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

#### DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

**Artículo Único.-** Se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

#### LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

#### TÍTULO PRIMERO

#### DISPOSICIONES PRELIMINARES

**Artículo 1.-** La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

**Artículo 2.-** La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

**Artículo 3.-** La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

**Artículo 4.-** El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública.

La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 5.-** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

- I. Academias: a las Instituciones de Formación, de Capacitación y de Profesionalización Policial;
- II. Bases de Datos Criminalísticas y de Personal: Las bases de datos nacionales y la información contenida en ellas, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema.
- III. Carrera Ministerial: al Servicio Profesional de Carrera Ministerial;

- IV. Carrera Pericial: al Servicio Profesional de Carrera Pericial;
- V. Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial;
- VI. Conferencias Nacionales: a las Conferencias a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley;
- VII. Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Seguridad Pública;
- VIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal;
- IX. Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél;
- X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;
- XI. Institutos: a los órganos de las instituciones de seguridad pública de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, encargados de la formación y actualización especializada de aspirantes y servidores públicos de las funciones ministerial, pericial y de policía ministerial;
- XII. Programa Rector: al conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia, respectivamente;
- XIII. Registro Nacional: el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XIV. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal;
- XV. Secretario Ejecutivo: el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema;
- XVI. Sistema: al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 6.-** Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.

**Artículo 7.-** Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

- I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines;
- II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;
- III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;
- IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación;
- V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;
- VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;
- VII. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;
- VIII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública;
- IX. Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;

- X.** Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XI.** Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;
- XII.** Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;
- XIII.** Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;
- XIV.** Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y
- XV.** Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.

**Artículo 8.-** La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con respeto a las atribuciones que la Constitución establece para las instituciones y autoridades que integran el Sistema.

**Artículo 9.-** Las Conferencias Nacionales, los consejos locales y demás instancias del Sistema, observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional.

En caso de contradicción entre las resoluciones y acuerdos generales adoptados por las conferencias, el Consejo Nacional determinará la que deba prevalecer.

## **TÍTULO SEGUNDO**

### **DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

#### **CAPÍTULO I**

##### **De la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 10.-** El Sistema se integrará por:

- I.** El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;
- II.** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
- III.** La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;
- IV.** La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;
- V.** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;
- VI.** Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y
- VII.** El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

**Artículo 11.-** Las Conferencias Nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Nacional.

El Secretariado Ejecutivo se coordinará con los Presidentes de las Conferencias Nacionales para dar seguimiento a las resoluciones que se adopten por el Consejo Nacional, en los términos de esta Ley.

**CAPÍTULO II****Del Consejo Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 12.-** El Consejo Nacional estará integrado por:

- I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;
- II. El Secretario de Gobernación;
- III. El Secretario de la Defensa Nacional;
- IV. El Secretario de Marina;
- V. El Secretario de Seguridad Pública;
- VI. El Procurador General de la República;
- VII. Los Gobernadores de los Estados;
- VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y
- IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema.

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente.

El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico. Así mismo el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de este Consejo.

**Artículo 13.-** El personal de confianza de las unidades administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los Centros Nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el Acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.

**Artículo 14.-** El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública;
- II. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema;
- III. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad Pública;
- IV. Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito;
- V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;
- VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;
- VII. Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;
- VIII. Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los Acuerdos Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia;
- IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;

- X.** Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XI.** Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
- XII.** Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de gobierno;
- XIII.** Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;
- XIV.** Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública;
- XV.** Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de Seguridad Pública, previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley;
- XVI.** Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública;
- XVII.** Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;
- XVIII.** Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y
- XIX.** Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

**Artículo 15.-** El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en las comisiones previstas por esta ley. El Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.

El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes del Consejo.

Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema.

Los miembros del Consejo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.

**Artículo 16.-** Son comisiones permanentes del Consejo Nacional, las siguientes:

- I.** De Información;
- II.** De Certificación y Acreditación,
- III.** De Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Estas comisiones se coordinarán con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de los Centros Nacionales que integran el Secretariado Ejecutivo. El Consejo Nacional determinará el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las mismas.

En las Comisiones podrán participar expertos de instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionados con su objeto.

Los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán designar por oficio a sus representantes permanentes ante el Secretario Ejecutivo del Sistema, los cuales deberán ser servidores públicos con un nivel jerárquico igual o superior a Director General en las Secretarías competentes en la entidad federativa respectiva, para la aplicación de esta Ley.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 17.-** El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos Centros.



El Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no tengan otra nacionalidad y estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
- II. Tener más de treinta años de edad;
- III. Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado;
- IV. Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y
- V. No haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitados como servidores públicos.

**Artículo 18.-** Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:

- I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente;
- II. Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema;
- III. Formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización;
- IV. Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento;
- V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;
- VI. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;
- VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema;
- VIII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional;
- IX. Proponer al Consejo Nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública;
- X. Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo;
- XI. Proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública en los términos de la ley;
- XII. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema en los términos de ley;
- XIII. Presentar al Consejo Nacional los informes de las Conferencias Nacionales, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;
- XIV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional;
- XV. Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema, para fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial;
- XVI. Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del Consejo, en términos de las disposiciones legales aplicables;
- XVII. Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo y las demás disposiciones aplicables;
- XVIII. Someter a consideración del Consejo Nacional el proyecto de resolución fundado y motivado de cancelación y, cuando proceda, la restitución de la ministración de aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso, municipios;

- XIX.** Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta Ley;
- XX.** Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;
- XXI.** Elaborar y someter a consideración del Consejo Nacional, opinión fundada y razonada por la que se recomiende la remoción de los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública;
- XXII.** Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como por el uso ilícito o indebido de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, e informar al respecto al Consejo Nacional;
- XXIII.** Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema;
- XXIV.** Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública, y
- XXV.** Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Nacional o su Presidente.

**Artículo 19.-** El Centro Nacional de Información será el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

- I.** Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema en términos que señale el reglamento;
- II.** Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del Sistema;
- III.** Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos;
- IV.** Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada;
- V.** Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad con la Ley de la materia, y
- VI.** Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos.

**Artículo 20.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:

- I.** Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;
- II.** Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;
- III.** Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:
  - a)** Prevenir la violencia infantil y juvenil;
  - b)** Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
  - c)** Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y
  - d)** Garantizar la atención integral a las víctimas.
- IV.** Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;

- V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;
- VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;
- VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;
- VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;
- IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley, y
- X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.

**Artículo 21.-** El Centro Nacional de Certificación y Acreditación será el responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Este Centro contará con un órgano consultivo integrado por las instituciones públicas y privadas que se determinen en el Reglamento de este ordenamiento.

**Artículo 22.-** Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal, realizan sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para tal efecto, tendrá las facultades siguientes:

- I. Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las conferencias.
- II. Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos;
- III. Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- IV. Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- V. Evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza que en el ámbito de Seguridad Pública operen instituciones privadas que así lo soliciten y cumplan con la normatividad correspondiente;
- VI. Verificar periódicamente que los Centros de referencia apliquen los procesos certificados, conforme a los lineamientos y estándares que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación establezca;
- VII. Apoyar a los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
- VIII. Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de Evaluación y Control de Confianza;
- IX. Establecer los requisitos que deben contener los certificados Ministerial, Policial y Pericial y aprobar sus características, y
- X. Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.

#### **CAPÍTULO IV**

##### **De la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.**

**Artículo 23.-** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estará integrada por los titulares de las Instituciones de Procuración de Justicia de la Federación, el Distrito Federal y los Estados, y será presidida por el Procurador General de la República.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

**Artículo 24.-** El Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia podrá invitar a personas e instituciones por razón de los asuntos a tratar.

El Procurador General de Justicia Militar será invitado permanente de esta Conferencia.

**Artículo 25.-** Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

- I. Formular políticas generales de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia;
- II. Promover la coordinación y colaboración entre las Instituciones de Procuración de Justicia y las Instituciones Policiales;
- III. Formular propuestas para la integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia y demás instrumentos programáticos relacionados con el ámbito de su competencia, así como darles seguimiento;
- IV. Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- V. Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de Procuración de Justicia;
- VI. Integrar los Comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;
- VII. Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación conjuntos;
- VIII. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IX. Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
- X. Promover la homologación de los procedimientos de control de confianza de los Integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia, de conformidad con las disposiciones aplicables;
- XI. Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de procuración de justicia, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;
- XII. Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;
- XIII. Impulsar las acciones necesarias para promover la denuncia de los delitos y la participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia;
- XIV. Determinar las políticas y lineamientos sobre datos de procedimientos penales, juicios de amparo y otros procesos judiciales en los que intervenga el Ministerio Público, que se integren a las bases de datos que establece el presente ordenamiento;
- XV. Fijar criterios de cooperación y coordinación para la entrega de indiciados, procesados y sentenciados; el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales; el aseguramiento de bienes instrumento, objeto o producto de delitos y el desahogo de diligencias judiciales, ministeriales y periciales;
- XVI. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y garantías reconocidas en la legislación vigente;
- XVII. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas, atención a víctimas y ofendidos de delitos;
- XVIII. Proponer programas de cooperación internacional en materia de procuración de justicia;

- XIX.** Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de extradición y asistencia jurídica;
- XX.** Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito;
- XXI.** Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- XXII.** Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;
- XXIII.** Promover la uniformidad de criterios jurídicos, y
- XXIV.** Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 26.-** La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se reunirá cada seis meses de manera ordinaria. El Presidente de dicha Conferencia podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo estime necesario.

## **CAPÍTULO V**

### **De la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública**

**Artículo 27.-** La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública estará integrada por los titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la Federación, los Estados y el Distrito Federal y será presidida por el Secretario de Seguridad Pública Federal.

La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

Los titulares de las dependencias u órganos en que se integren los cuerpos de policía de los municipios, podrán participar en la Conferencia, de conformidad con las reglas que la misma establezca.

**Artículo 28.-** El Presidente de la Conferencia podrá invitar a personas e Instituciones por razón de los asuntos a tratar.

**Artículo 29.-** Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

- I.** Impulsar la coordinación de las actuaciones de las dependencias encargadas de la seguridad pública;
- II.** Promover la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las Instituciones Policiales, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
- III.** Elaborar propuestas de reformas a leyes en materia de Seguridad Pública;
- IV.** Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales, cualquiera que sea su adscripción;
- V.** Proponer medidas para vincular el Sistema con otros nacionales, regionales o locales;
- VI.** Proponer la adopción y aplicación de políticas y programas de cooperación internacional sobre Seguridad Pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;
- VII.** Promover criterios uniformes para el desarrollo policial en términos de la presente Ley;
- VIII.** Integrar los Comités que sean necesarios en la materia;
- IX.** Desarrollar las especialidades policiales de alto desempeño para hacer frente a los delitos de impacto nacional e internacional;
- X.** Emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública federales, locales y municipales;
- XI.** Impulsar las acciones necesarias para que los integrantes del Sistema establezcan un servicio para la localización de personas y bienes;
- XII.** Promover el establecimiento de un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre emergencias, faltas y delitos;

- XIII.** Procurar que en las Instituciones Policiales se aplique homogénea y permanentemente, el protocolo de certificación correspondiente, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- XIV.** Proponer los requisitos que debe contener el Certificado Único Policial;
- XV.** Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las Instituciones Policiales y promover su aplicación;
- XVI.** Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones Policiales y para el manejo de información;
- XVII.** Proponer mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos, a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
- XVIII.** Proponer reglas para coadyuvar en la vigilancia y realización de acciones conjuntas para proteger las instalaciones estratégicas del país, en los términos de la legislación aplicable, y
- XIX.** Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

## **CAPÍTULO VI**

### **De la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario**

**Artículo 30.-** La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el titular de la Secretaría.

**Artículo 31.-** Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

- I.** Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional;
- II.** Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social;
- III.** Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de reinserción social;
- IV.** Proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de reinserción social;
- V.** Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción social en las legislaciones aplicables;
- VI.** Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;
- VII.** Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticos y de personal, y
- VIII.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.

## **CAPÍTULO VII**

### **De la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal**

**Artículo 32.-** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, estará integrada por los Presidentes Municipales y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal que participarán de conformidad con las siguientes reglas:

- I.** Dos Presidentes municipales, de cada Estado, designados por el Consejo Local de Seguridad Pública correspondiente, y
- II.** Dos titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal serán nombrados por el Consejo Local de Seguridad Pública.

Dicha Conferencia Nacional contará con un Presidente, que será designado de entre sus miembros por el pleno de misma.

La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.

**Artículo 33.-** La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, tendrá las siguientes funciones mínimas:

- I. Emitir sus reglas de organización y funcionamiento;
- II. Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en materia de Seguridad Pública;
- III. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal;
- IV. Elaborar propuestas de reformas a las normas de aplicación municipal en materia de Seguridad Pública;
- V. Intercambiar experiencias y apoyo técnico entre los Municipios;
- VI. Proponer políticas públicas en materia de Seguridad Pública;
- VII. Colaborar con las instituciones públicas y privadas, en la ejecución de programas tendientes a prevenir el delito;
- VIII. Promover en el ámbito Municipal, la homologación del Desarrollo Policial;
- IX. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre la materia de Seguridad Pública Municipal, y
- X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o el consejo nacional.

## **CAPÍTULO VIII**

### **De los Consejos Locales e Instancias Regionales de Coordinación**

**Artículo 34.-** En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno. Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En los consejos locales de cada Estado participarán los municipios en los términos de la legislación de cada entidad federativa. En el caso del Distrito Federal, participarán los titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales, de conformidad con la legislación aplicable. Estos Consejos invitarán a cada sesión al menos a dos representantes de la sociedad civil o de la comunidad, de conformidad con los temas a tratar. Su participación será de carácter honorífico.

Los Consejos Locales y las Instancias Regionales de Coordinación se organizarán, de modo que permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura del Sistema e integración del Consejo Nacional.

Los Consejos Locales determinarán su organización y la de las Instancias Regionales de Coordinación correspondientes en términos de esta Ley.

**Artículo 35.-** Los Consejos Locales se integrarán por las Instituciones de Seguridad Pública de la entidad de que se trate y de la Federación.

Además, podrán invitar a personas e instituciones, de acuerdo con los temas a tratar.

**Artículo 36.-** Cuando para el cumplimiento de la función de Seguridad Pública sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente, en las que participarán las Instituciones de Seguridad Pública correspondientes.

Del mismo modo, podrán establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos estatales correspondientes. En el caso de las zonas conurbadas entre dos o más entidades federativas, se podrán suscribir convenios e instalar instancias regionales con la participación de los municipios respectivos y de los órganos político administrativos, tratándose del Distrito Federal.

**Artículo 37.-** Los Consejos Locales y las instancias regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines de la Seguridad Pública, en sus ámbitos de competencia.

Los miembros del Consejo designarán a uno de sus servidores públicos como enlace responsable de atender y dar seguimiento a la operación del Sistema en su respectiva entidad federativa.

Dichos enlaces están obligados a proporcionar la información requerida por el Secretariado Ejecutivo, en un plazo razonable, que no excederá de treinta días naturales, salvo justificación fundada.

**Artículo 38.-** Los Consejos Locales y las instancias regionales podrán proponer al Consejo Nacional y a las Conferencias Nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.

## **CAPÍTULO IX**

### **De la distribución de competencias**

**Artículo 39.-** La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

- A.** Corresponde a la Federación, por conducto de las autoridades competentes:
  - I.** Proponer las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios;
  - II.** Respecto del Desarrollo Policial:
    - a)** En materia de Carrera Policial, proponer al Consejo Nacional:
      - 1.-** Las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los Integrantes de las Instituciones Policiales, de acuerdo al Modelo Policial, conforme a la normatividad aplicable;
      - 2.-** Los lineamientos para los procedimientos de Carrera Policial que aplicarán las autoridades competentes;
    - b)** En materia de Profesionalización, proponer al Consejo Nacional:
      - 1.-** El Programa Rector que contendrá los aspectos de formación, capacitación, adiestramiento, actualización e investigación académica, así como integrar las que formulen las instancias del Sistema;
      - 2.-** Los procedimientos aplicables a la Profesionalización;
      - 3.-** Los criterios para el establecimiento de las Academias e Institutos, y
      - 4.-** El desarrollo de programas de investigación y formación académica.
    - c)** En materia de Régimen Disciplinario, proponer al Consejo Nacional los lineamientos para la aplicación de los procedimientos respectivos.
  - III.** Coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, y
  - IV.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales.
- B.** Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:
  - I.** Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que deriven de ésta;
  - II.** Contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación del Sistema;
  - III.** Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario;
  - IV.** Constituir y operar las Comisiones y las Academias a que se refiere esta Ley;
  - V.** Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de personal;
  - VI.** Designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la información a que se refiere esta Ley;



- VII. Integrar y consultar en las bases de datos de personal de Seguridad Pública, los expedientes de los aspirantes a ingresar en las Instituciones Policiales;
- VIII. Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo;
- IX. Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo Policial, Ministerial y Pericial;
- X. Establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable;
- XI. Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo Policial para el registro y seguimiento, en las bases de datos criminalísticos y de personal de Seguridad Pública;
- XII. Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y administración;
- XIII. Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las Instalaciones Estratégicas del país, y
- XIV. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.

Los Estados y los Municipios podrán coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Leyes Estatales de Seguridad Pública podrán establecer la posibilidad de coordinación, y en su caso, los medios para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre un Estado y sus Municipios.

### **TÍTULO TERCERO**

## **DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

### **CAPÍTULO I**

#### **De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública**

**Artículo 40.-** Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

- I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;
- II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;
- III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
- IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
- V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;
- VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
- VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;

- VIII.** Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
- IX.** Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
- X.** Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias;
- XI.** Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;
- XII.** Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
- XIII.** Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
- XIV.** Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
- XV.** Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;
- XVI.** Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;
- XVII.** Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;
- XVIII.** Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;
- XIX.** Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables;
- XX.** Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las Instituciones;
- XXI.** Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;
- XXII.** Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda;
- XXIII.** Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;
- XXIV.** Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones;
- XXV.** Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes;
- XXVI.** Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio;
- XXVII.** No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y
- XXVIII.** Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 41.-** Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

- I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice;
- II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes;
- III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;
- IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;
- V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
- VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;
- VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;
- VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
- IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;
- X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y
- XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.

**Artículo 42.-** El documento de identificación de los integrantes de las instituciones Seguridad Pública deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como, las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.

Todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente.

**Artículo 43.-** La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:

- I. El área que lo emite;
- II. El usuario capturista;
- III. Los Datos Generales de registro;
- IV. Motivo, que se clasifica en:
  - a) Tipo de evento, y
  - b) Subtipo de evento.
- V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
- VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos.
- VII. Entrevistas realizadas, y

**VIII. En caso de detenciones:**

- a) Señalar los motivos de la detención;
- b) Descripción de la persona;
- c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
- d) Descripción de estado físico aparente;
- e) Objetos que le fueron encontrados;
- f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
- g) Lugar en el que fue puesto a disposición.

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

**Artículo 44.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán las sanciones aplicables al incumplimiento de los deberes previstos en esta ley, los procedimientos y los órganos competentes que conocerán de éstos. Las sanciones serán al menos, las siguientes:

- a) Amonestación;
- b) Suspensión, y
- c) Remoción.

**CAPÍTULO II****De los Sistemas Complementarios de Seguridad Social y Reconocimientos**

**Artículo 45.-** Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 46.-** Las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en esta Ley, realizarán y someterán a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión, actualización y fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.

**CAPÍTULO III****De las Academias e Institutos**

**Artículo 47.-** La Federación y las entidades federativas establecerán y operarán Academias e Institutos que serán responsables de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización que tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

- I. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema;
- II. Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos;
- III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial, pericial y policial, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Profesionalización;
- V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;
- VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;
- VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores públicos a que se refiere el Programa Rector;
- VIII. Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de Profesionalización;
- IX. Revalidar equivalencias de estudios de la Profesionalización;

- X.** Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación;
- XI.** Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de los Servidores Públicos y proponer los cursos correspondientes;
- XII.** Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso a las Academias e Institutos;
- XIII.** Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio ante las autoridades competentes;
- XIV.** Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que impartan;
- XV.** Proponer la celebración de convenios con Instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores públicos;
- XVI.** Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los manuales de las Academias e Institutos, y
- XVII.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 48.-** En materia de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales, la Secretaría tendrá la facultad de proponer a las Instancias de Coordinación de esta ley lo siguiente:

- I.** Los contenidos básicos de los programas para la formación, capacitación y profesionalización de los mandos de las Instituciones policiales;
- II.** Los aspectos que contendrá el Programa Rector;
- III.** Que los integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los programas correspondientes a las Academias y de estudios superiores policiales;
- IV.** El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales y vigilar su aplicación;
- V.** Estrategias y políticas de desarrollo de formación de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- VI.** Los programas de investigación académica en materia policial;
- VII.** El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales;
- VIII.** La revalidación de equivalencias de estudios de la Profesionalización en el ámbito de su competencia, y
- IX.** Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

#### **TÍTULO CUARTO**

#### **DEL SERVICIO DE CARRERA EN LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA**

#### **CAPÍTULO I**

#### **Disposiciones Generales**

**Artículo 49.-** El Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia, comprenderá lo relativo al Ministerio Público y a los peritos.

Las Instituciones de Procuración de Justicia que cuenten en su estructura orgánica con policía ministerial para la investigación de los delitos, se sujetarán a lo dispuesto en esta ley para las Instituciones Policiales en materia de carrera policial.

Las reglas y procesos en materia de carrera policial y régimen disciplinario de la policía ministerial, serán aplicados, operados y supervisados por las Instituciones de Procuración de Justicia.

Los servidores públicos que tengan bajo su mando a agentes del Ministerio Público o peritos no formarán parte del Servicio de Carrera por ese hecho; serán nombrados y removidos conforme a los ordenamientos legales aplicables; se considerarán trabajadores de confianza, y los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento.

**Artículo 50.-** El Servicio de Carrera Ministerial y Pericial comprenderá las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, conforme a lo siguiente:

- I. El ingreso comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación y certificación inicial, así como registro;
- II. El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada, de actualización, de evaluación para la permanencia, de evaluación del desempeño, de desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y reconocimientos, de reingreso y de certificación. De igual forma, deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los miembros del Servicio de Carrera, y
- III. La terminación comprenderá las causas ordinarias y extraordinarias de separación del Servicio, así como los procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar, ajustándose a lo establecido por las leyes y disposiciones aplicables.

**Artículo 51.-** El Servicio de Carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes:

- I. Tendrá carácter obligatorio y permanente; abarcará los planes, programas, cursos, evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas que comprende;
- II. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en tareas de Procuración de Justicia;
- III. El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación fomentará que los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos referidos y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades destrezas y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público;
- IV. Contará con un sistema de rotación del personal;
- V. Determinará los perfiles, niveles jerárquicos en la estructura y de rangos;
- VI. Contará con procedimientos disciplinarios, sustentados en principios de justicia y con pleno respeto a los derechos humanos;
- VII. Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño de sus funciones;
- VIII. Buscará generar el sentido de pertenencia institucional;
- IX. Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento de los certificados del personal, y
- X. Contendrá las normas para el registro de las incidencias del personal.

## **CAPÍTULO II**

### **Del Ingreso al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 52.-** El ingreso al Servicio de Carrera se hará por convocatoria pública.

Los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán cumplir, cuando menos, con los requisitos siguientes:

- A. Ministerio Público.
  - I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
  - II. Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional;
  - III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
  - IV. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
  - V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

- VI. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;
- VII. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan, y
- VIII. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables.

**B. Peritos.**

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos;
- II. Acreditar que ha concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente;
- III. Tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;
- IV. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- V. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan;
- VI. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
- VII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
- VIII. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y
- IX. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezca la legislación federal y la de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 53.-** Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos de formación inicial, deberán consultarse sus antecedentes en el Registro Nacional y, en su caso, en los registros de las Instituciones de Procuración de Justicia.

Asimismo, deberá verificarse la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes.

**Artículo 54.-** Los aspirantes a ingresar al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán cumplir con los estudios de formación inicial.

Corresponderá a las autoridades competentes regular en sus legislaciones los términos en que la formación inicial se llevará a cabo. La duración de los programas de formación inicial no podrá ser inferior a quinientas horas clase. En todo caso atendiendo a los lineamientos aplicables.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Desarrollo del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 55.-** Son requisitos de permanencia del Ministerio Público y de los peritos, los siguientes:

- I. Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio;
- II. Cumplir con los programas de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables;
- III. Aprobar las evaluaciones que establezcan las disposiciones aplicables;
- IV. Contar con la certificación y registro actualizados a que se refiere esta Ley;
- V. Cumplir las órdenes de rotación;
- VI. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas, y
- VII. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezcan las leyes respectivas.

**Artículo 56.-** Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable.

Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente ley.

**Artículo 57.-** Las solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su caso, concederán con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento a los requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o penal, local o federal.

## **CAPÍTULO IV**

### **De la Terminación del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia**

**Artículo 58.-** La Federación y las entidades federativas establecerán en sus respectivas leyes los procedimientos de separación y remoción aplicables a los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia, que cuando menos, comprenderán los aspectos previstos en el artículo siguiente.

**Artículo 59.-** La terminación del Servicio de Carrera será:

- I. Ordinaria, que comprende:
  - a) Renuncia;
  - b) Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones, y
  - c) Jubilación.
- II. Extraordinaria, que comprende:
  - a) Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, o
  - b) Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo.

**Artículo 60.-** En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación o remoción es injustificada, la institución respectiva sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

## **CAPÍTULO V**

### **De la Profesionalización**

**Artículo 61.-** El Programa Rector de Profesionalización es el instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal de las Instituciones de Procuración de Justicia.

**Artículo 62.-** Los planes de estudios se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolución de casos.

**Artículo 63.-** En materia de programas de Profesionalización y planes de estudio, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Promover estrategias y políticas de profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia;
- II. Diseñar los modelos de profesionalización que correspondan para su concertación y en su caso, aplicación en las Instituciones de Procuración de Justicia;



- III. Acordar los contenidos del Programa Rector de Profesionalización de los servidores públicos de las instituciones de Procuración de Justicia, a propuesta de su Presidente;
- IV. Establecer criterios para supervisar que los servidores públicos se sujeten a los programas correspondientes en los Institutos de Capacitación;
- V. Promover el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes a las Instituciones de Procuración de Justicia y vigilar su aplicación;
- VI. Establecer programas de investigación académica en las materias ministerial y pericial;
- VII. Consensuar los criterios por los que se revalidarán equivalencias de estudios en el ámbito de su competencia para su incorporación al programa rector de profesionalización, y
- VIII. Las demás que le establezcan otras disposiciones legales.

**Artículo 64.-** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia están obligados a participar en las actividades de profesionalización que determine la institución respectiva, los cuales deberán cubrir un mínimo de 60 horas clase anuales.

## CAPÍTULO VI

### De la Certificación

**Artículo 65.-** Los aspirantes que ingresen a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán contar con el Certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por esta Ley.

Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia sin contar con el Certificado y registro vigentes.

**Artículo 66.-** Los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia emitirán los certificados correspondientes a quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece esta Ley y el ordenamiento legal aplicable a la institución de que se trate.

El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.

**Artículo 67.-** El Certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional que para tal efecto se establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.

**Artículo 68.-** Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.

La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 69.-** La certificación que otorguen los centros de evaluación y control de confianza deberá contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia que deseen prestar sus servicios en otra institución, ya sea en la Federación o en las Entidades Federativas, deberán presentar el Certificado que les haya sido expedido previamente.

Las Instituciones de Procuración de Justicia reconocerán la vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados, conforme a las disposiciones de esta Ley y demás aplicables. En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los procesos de evaluación.

En todos los casos, se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el Registro Nacional.

**Artículo 70.-** La cancelación del certificado de los Servidores Públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia procederá:

- I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- II. Al ser removidos de su encargo;
- III. Por no obtener la revalidación de su Certificado, y
- IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.

**Artículo 71.-** La Institución de Procuración de Justicia que cancele algún certificado deberá hacer la anotación respectiva en el Registro Nacional correspondiente.

## **TÍTULO QUINTO**

### **DEL DESARROLLO POLICIAL**

#### **CAPÍTULO I**

##### **Disposiciones Generales**

**Artículo 72.-** El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos en el artículo 6 de la Ley.

**Artículo 73.-** Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.

**Artículo 74.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.

Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente.

**Artículo 75.-** Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:

- I. Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información;
- II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y
- III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.

**Artículo 76.-** Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, o bien, en las Instituciones Policiales, o en ambas, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones.

Las policías ministeriales ubicadas dentro de la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Título, quedando a cargo de dichas instituciones, la aplicación de las normas, supervisión y operación de los procedimientos relativos al desarrollo policial.

**Artículo 77.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación que podrán ser, entre otras, las siguientes:

- I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine;
- II. Deberán verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informará al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;
- III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;
- IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;
- VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;
- VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;
- VIII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables.
- IX. Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;
- X. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;
- XI. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;
- XII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:
  - a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
  - b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;
  - c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;
  - d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y
  - e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.
- XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, y
- XIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

**CAPÍTULO II****De la Carrera Policial y de la Profesionalización**

**Artículo 78.-** La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales.

**Artículo 79.-** Los fines de la Carrera Policial son:

- I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales;
- II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones;
- III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y
- V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley.

**Artículo 80.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán la organización jerárquica de las Instituciones Policiales, considerando al menos las categorías siguientes:

- I. Comisarios;
- II. Inspectores;
- III. Oficiales, y
- IV. Escala Básica.

En las policías ministeriales se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al modelo policial previsto en esta Ley.

**Artículo 81.-** Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las siguientes jerarquías:

- I. Comisarios:
  - a) Comisario General;
  - b) Comisario Jefe, y
  - c) Comisario.
- II. Inspectores:
  - a) Inspector General;
  - b) Inspector Jefe, y
  - c) Inspector.
- III. Oficiales:
  - a) Subinspector;
  - b) Oficial, y
  - c) Suboficial.
- IV. Escala Básica:
  - a) Policía Primero;
  - b) Policía Segundo;
  - c) Policía Tercero, y
  - d) Policía.

**Artículo 82.-** Las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.

Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los titulares de las instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerarquía.

Las instituciones estatales y del Distrito Federal, deberán satisfacer, como mínimo, el mando correspondiente al octavo grado de organización jerárquica.

Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones.

**Artículo 83.-** El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de la Instituciones con relación a las áreas operativas y de servicios será:

- I. Para las áreas operativas, de policía a Comisario General, y
- II. Para los servicios, de policía a Comisario Jefe.

**Artículo 84.-** La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.

De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

Para tales efectos, la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán promover en el ámbito de sus competencias respectivas, las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas, en los diferentes ámbitos de competencia.

**Artículo 85.-** La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:

- I. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas;
- II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo;
- III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado en el Sistema;
- IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;
- V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;
- VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las leyes respectivas;
- VII. Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;
- VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales;
- IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;
- X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por la instancia que señale la ley de la materia, y
- XI. Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial.

La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección.

En términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las Instituciones Policiales podrán designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando su grado policial y derechos inherentes a la Carrera Policial.

**Artículo 86.-** La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales.

Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en la ley sobre los aspirantes aceptados.

**Artículo 87.-** El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en las Academias o Institutos de Capacitación Policial, el periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley.

**Artículo 88.-** La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales. Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:

**A.** De Ingreso:

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;
- II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
- III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
- IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
  - a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
  - b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
  - c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
- V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
- VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
- VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
- VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- IX. No padecer alcoholismo;
- X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
- XII. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que deriven de la misma;
- XIII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

**B. De Permanencia:**

- I. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;
- II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
- III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
- IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
  - a) En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;
  - b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
  - c) En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
- V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
- VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
- VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño;
- VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;
- IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- X. No padecer alcoholismo;
- XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;
- XII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
- XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
- XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días, y
- XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 89.-** Las instancias responsables del Servicio de Carrera Policial fomentarán la vocación de servicio mediante la promoción y permanencia en las Instituciones Policiales para satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de sus integrantes.

**Artículo 90.-** El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual las Instituciones Policiales otorgan el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.

Todo estímulo otorgado por las instituciones será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.

**Artículo 91.-** La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.

Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.

Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.

Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.

**Artículo 92.-** Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los integrantes de las Instituciones Policiales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.

**Artículo 93.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán que la antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones Policiales, de la siguiente forma:

- I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Policiales, y
- II. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente.

La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera Policial.

**Artículo 94.-** La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

- I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurren las siguientes circunstancias:
  - a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;
  - b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y
  - c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones para conservar su permanencia.
- II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o
- III. Baja, por:
  - a) Renuncia;
  - b) Muerte o incapacidad permanente, o
  - c) Jubilación o Retiro.

Al concluir el servicio el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.

**Artículo 95.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.

**Artículo 96.-** La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

Las Instituciones Policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.

La presente disposición será aplicable también al personal de los servicios de migración.

**Artículo 97.-** La certificación tiene por objeto:

- A.- Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional;



- B.-** Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las Instituciones Policiales:
- I.** Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
  - II.** Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;
  - III.** Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
  - IV.** Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;
  - V.** Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y
  - VI.** Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley.

**Artículo 98.-** La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.

Los planes de estudio para la Profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje que estarán comprendidos en el programa rector que apruebe la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, a propuesta de su Presidente.

### **CAPÍTULO III**

#### **Del Régimen Disciplinario**

**Artículo 99.-** La actuación de los Integrantes de las Instituciones Policiales se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de esta Ley.

Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán sus regímenes disciplinarios, sobre las bases mínimas previstas en el presente capítulo.

La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.

La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados.

**Artículo 100.-** Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

**Artículo 101.-** El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.

**Artículo 102.-** Los integrantes de las Instituciones Policiales, observarán las obligaciones previstas en los artículos 40 y 41 de esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.

**Artículo 103.-** La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor.

La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación aplicable.

**Artículo 104.-** El procedimiento ante las autoridades previstas en las leyes de la materia, iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o presidente de la instancia correspondiente, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor.

Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento.

**Artículo 105.-** La Federación, las entidades federativas y los municipios establecerán instancias colegiadas en las que participen, en su caso, cuando menos, representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las Instituciones Policiales, para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario.

Para tal fin, las Instituciones Policiales podrán constituir sus respectivas Comisiones del servicio profesional de carrera policial y de honor y justicia, las que llevarán un registro de datos de los integrantes de sus instituciones. Dichos datos se incorporarán las bases de datos de personal de Seguridad Pública.

En las Instituciones de Procuración de Justicia se integrarán instancias equivalentes, en las que intervengan representantes de los policías ministeriales.

## **TÍTULO SEXTO**

### **DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**

**Artículo 106.-** El sistema nacional de acreditación y control de confianza se conforma con las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

Integran este sistema: El Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales de la Federación y de las entidades federativas.

**Artículo 107.-** Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que establezca el Reglamento que emita el Ejecutivo Federal.

Cuando en los procesos de certificación a cargo de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública intervengan Instituciones privadas, éstas deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En caso contrario, el proceso carecerá de validez.

**Artículo 108.-** Los Centros Nacional de Acreditación y Control de Confianza aplicarán las evaluaciones a que se refiere esta Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; para tal efecto, tendrán las siguientes facultades:

- I. Aplicar los procedimientos de Evaluación y de Control de Confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- II. Proponer lineamientos para la verificación y control de Certificación de los Servidores Públicos;
- III. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable;
- IV. Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la confidencialidad y resguardo de expedientes;
- V. Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad;
- VI. Comprobar los niveles de escolaridad de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;
- VII. Aplicar el procedimiento de certificación de los Servidores Públicos, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;

- VIII.** Expedir y actualizar los Certificados conforme a los formatos autorizados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- IX.** Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados de las evaluaciones que practiquen;
- X.** Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus funciones;
- XI.** Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención que permitan solucionar la problemática identificada;
- XII.** Proporcionar a las Instituciones, la asesoría y apoyo técnico que requieran sobre información de su competencia;
- XIII.** Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y que se requieran en procesos administrativos o judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables;
- XIV.** Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública, y
- XV.** Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios implementarán medidas de registro y seguimiento para quienes sean separados del servicio por no obtener el certificado referido en esta Ley.

## **TÍTULO SÉPTIMO**

### **DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA**

#### **CAPÍTULO ÚNICO**

**Artículo 109.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.

El Presidente del Consejo Nacional dictará las medidas necesarias, además de las ya previstas en la Ley, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada mediante los instrumentos de información sobre Seguridad Pública.

Las Instituciones de Procuración de Justicia tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos criminalísticos y de personal, en el ámbito de su función de investigación y persecución de los delitos.

La información sobre administración de justicia, podrá ser integrada las bases de datos criminalísticas y de personal, a través de convenios con el Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia y con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

El acceso a las bases de datos del sistema estará condicionado al cumplimiento de esta Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia Ley emanen.

**Artículo 110.-** Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.

La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

**Artículo 111.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su Red Local correspondiente, con las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema, previstas en la presente Ley.

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Secretario Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios.

**SECCIÓN PRIMERA****Del Registro Administrativo de Detenciones**

**Artículo 112.-** Los agentes policiales que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información, de la detención, a través del Informe Policial Homologado.

**Artículo 113.-** El registro administrativo de la detención deberá contener, al menos, los datos siguientes:

- I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido;
- II. Descripción física del detenido;
- III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;
- IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción, y
- V. Lugar a donde será trasladado el detenido.

**Artículo 114.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán actualizar la información relativa al registro, tan pronto reciba a su disposición al detenido, recabando lo siguiente:

- I. Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión;
- II. Clave Única de Registro de Población;
- III. Grupo étnico al que pertenezca;
- IV. Descripción del estado físico del detenido;
- V. Huellas dactilares;
- VI. Identificación antropométrica, y
- VII. Otros medios que permitan la identificación del individuo;

El Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite de la detención de una persona y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emitirá las disposiciones necesarias para regular los dispositivos tecnológicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información a que se refiere este artículo, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología.

**Artículo 115.-** La información capturada en el Registro Administrativo de Detenciones será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:

- I. Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y
- II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el Registro a terceros. El Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

**Artículo 116.-** Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal aplicable.

## SECCIÓN SEGUNDA

### Del Sistema Único de Información Criminal

**Artículo 117.-** La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios serán responsables de integrar y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del adolescente.

**Artículo 118.-** Dentro del sistema único de información criminal se integrará una base nacional de datos de consulta obligatoria en las actividades de Seguridad Pública, sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de identificación, recursos y modos de operación.

Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que aporten las Instituciones de Seguridad Pública, relativa a las investigaciones, procedimientos penales, órdenes de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de penas.

**Artículo 119.-** Las Instituciones de Procuración de Justicia podrán reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, conforme a las disposiciones aplicables, pero la proporcionarán al sistema único de información criminal inmediatamente después que deje de existir tal condición.

**Artículo 120.-** El Sistema Nacional de Información Penitenciaria es la base de datos que, dentro del sistema único de información criminal, contiene, administra y controla los registros de la población penitenciaria de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 121.-** La base de datos deberá contar, al menos, con el reporte de la ficha de identificación personal de cada interno con fotografía, debiendo agregarse los estudios técnicos interdisciplinarios, datos de los procesos penales y demás información necesaria para la integración de dicho sistema.

## SECCIÓN TERCERA

### Del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

**Artículo 122.-** El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos:

- I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública;
- II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público, y
- III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron.

Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al Registro.

**Artículo 123.-** Las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios inscribirán y mantendrán actualizados permanentemente en el Registro los datos relativos a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de esta Ley.

Para efectos de esta Ley, se consideran miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente.

La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la presente Ley.

**SECCIÓN CUARTA****Del Registro Nacional de Armamento y Equipo.**

**Artículo 124.-** Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios manifestarán y mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el cual incluirá:

- I. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo, y
- II. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.

**Artículo 125.-** Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las instituciones de Seguridad Pública mantendrán un registro de los elementos de identificación de huella balística de las armas asignadas a los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública. Dicha huella deberá registrarse en una base de datos del Sistema.

**Artículo 126.-** En el caso de que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Nacional de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las normas aplicables.

**Artículo 127.-** El incumplimiento de las disposiciones de esta sección, dará lugar a que la portación o posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.

**TÍTULO OCTAVO****DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD****CAPÍTULO ÚNICO****De los Servicios de Atención a la Población**

**Artículo 128.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.

Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de:

- I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y
- II. La sociedad civil organizada.

**Artículo 129.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes.

**Artículo 130.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.

**Artículo 131.-** Para mejorar el servicio de Seguridad Pública, las instancias de coordinación que prevé esta Ley promoverán la participación de la comunidad a través de las siguientes acciones:

- I. Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.
- II. Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;
- III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;
- IV. Realizar labores de seguimiento;

- V. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;
- VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y
- VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.

**Artículo 132.-** El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que las Instituciones de Seguridad Pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad, para alcanzar los propósitos del artículo anterior.

La participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y de instituciones, se sujetará a los indicadores previamente establecidos con la autoridad sobre los siguientes temas:

- I. El desempeño de sus integrantes;
- II. El servicio prestado, y
- III. El impacto de las políticas públicas en prevención del delito.

Los resultados de los estudios deberán ser entregados a las Instituciones de Seguridad Pública, así como a los Consejos del Sistema, según corresponda. Estos estudios servirán para la formulación de políticas públicas en la materia.

**Artículo 133.-** El Centro Nacional de Información deberá proporcionar la información necesaria y conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana. No se podrá proporcionar la información que ponga en riesgo la seguridad pública o personal.

**Artículo 134.-** Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán políticas públicas de atención a la víctima, que deberán prever, al menos los siguientes rubros:

- I. Atención de la denuncia en forma pronta y expedita;
- II. Atención jurídica, médica y psicológica especializada;
- III. Medidas de protección a la víctima, y
- IV. Otras, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

## **TÍTULO NOVENO**

### **DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**

#### **CAPÍTULO I**

##### **Disposiciones Generales**

**Artículo 135.-** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, locales y municipales por el manejo o aplicación ilícita de los recursos previstos en los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.

Serán consideradas violaciones graves a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, las acciones u omisiones previstas en el artículo 139, que se realicen en forma reiterada o sistemática.

**Artículo 136.-** Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, estatales y municipales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.

**Artículo 137.-** La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales que ejerzan la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en materia de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones aplicables.

#### **CAPÍTULO II**

##### **De los Delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública**

**Artículo 138.-** Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa, a quien dolosa, ilícita y reiteradamente se abstenga de proporcionar al Secretariado Ejecutivo la información que esté obligado en términos de esta Ley, a pesar de ser requerido por el Secretario Ejecutivo, dentro del plazo previsto en el artículo 37 de esta Ley.

Se impondrá además, la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión en cualquier orden de gobierno.

**Artículo 139.-** Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien:

- I. Ingrese dolosamente a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública previstos en esta Ley, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información, las bases de datos o los equipos o sistemas que las contengan;
- II. Divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases de datos o sistemas informáticos a que se refiere esta Ley.
- III. Inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, prevista en esta Ley, como miembro o integrante de una institución de Seguridad Pública de cualquier orden de gobierno, a persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la Ley, o a sabiendas de que la certificación es ilícita, y
- IV. Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además, la inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público en cualquier orden de gobierno, y en su caso, la destitución.

**Artículo 140.-** Se sancionará con cinco a doce años de prisión y de doscientos a ochocientos días multa, a quien falsifique el certificado a que se refiere la presente Ley, lo altere, comercialice o use a sabiendas de su ilicitud.

**Artículo 141.-** Las sanciones previstas en este capítulo se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos previstos en los ordenamientos penales federal o de las entidades federativas, según corresponda.

Las autoridades del fuero federal serán las competentes para conocer y sancionar los delitos previstos en este capítulo, conforme las disposiciones generales del Código Penal Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones legales, en atención a que la Federación es el sujeto pasivo, de conformidad con el artículo 50, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

## **TÍTULO DÉCIMO**

### **DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL**

#### **CAPÍTULO I**

##### **Disposiciones Preliminares**

**Artículo 142.-** Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto. Los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente Ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal.

Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel nacional sean determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, serán distribuidos con base en los criterios que apruebe el Consejo Nacional, a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Las autoridades correspondientes de las entidades federativas y de los municipios deberán concentrar los recursos en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública.

Asimismo, dichas autoridades deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema sobre los movimientos que presenten las cuentas específicas, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino así como los recursos comprometidos, devengados y pagados.

Sin perjuicio de lo que establece el artículo 143 los convenios generales o específicos establecerán obligaciones para las entidades federativas y los municipios, a efecto de fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se aporten, así como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.



**Artículo 143.-** Para efectos de control, vigilancia, transparencia y supervisión del manejo de los recursos previstos en el artículo que antecede, así como para determinar si se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 139, compete al Secretario Ejecutivo:

- I. Requerir, indistintamente, a las autoridades hacendarias y de seguridad pública, entre otras, de las entidades federativas y de los municipios, informes relativos a:
  - a) El ejercicio de los recursos de los fondos y el avance en el cumplimiento de los programas o proyectos financiados con los mismos;
  - b) La ejecución de los programas de seguridad pública de las entidades federativas derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública;
- II. Efectuar, en cualquier momento, visitas de verificación y revisiones de gabinete de los documentos, instrumentos y mecanismos inherentes o relativos al ejercicio de los recursos en las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios, a fin de comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las obligaciones a su cargo; de igual forma, podrá requerir la información que considere necesaria indistintamente a las autoridades hacendarias o de seguridad pública locales correspondientes, y
- III. Las demás acciones que resulten necesarias para la consecución de lo dispuesto en este artículo.

De manera supletoria a lo previsto en este artículo se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal.

## **CAPÍTULO II**

### **De la Cancelación y Suspensión de Ministración de los Recursos**

**Artículo 144.-** El Pleno del Consejo Nacional resolverá la cancelación o suspensión de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, a las entidades federativas o, en su caso, municipios, que incurran en lo siguiente:

- I. Incumplir las obligaciones relativas al suministro, intercambio y sistematización de la información de Seguridad Pública, o violar las reglas de acceso y aprovechamiento de la información de las bases de datos previstas en esta Ley;
- II. Incumplir los procedimientos y mecanismos para la certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;
- III. Abstenerse de implementar el servicio telefónico nacional de emergencia;
- IV. Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que disponen las disposiciones jurídicas aplicables;
- V. Aplicar criterios, normas y procedimientos distintos a los establecidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- VI. Establecer y ejecutar un Modelo Policial básico distinto al determinado por el Consejo Nacional;
- VII. Establecer servicios de carrera ministerial y policial sin sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones que de ella emanan;
- VIII. Abstenerse de constituir y mantener en operación las instancias, centros de control de confianza y academias a que se refiere esta Ley, y
- IX. Cualquier incumplimiento a las obligaciones de la presente Ley, que afecte a los mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Pública.

La cancelación de la ministración de los recursos federales a las entidades federativas y municipios, supone la pérdida de los mismos, por lo que no tendrán el carácter de recuperables o acumulables y deberán, en consecuencia, permanecer en la Tesorería de la Federación para los efectos legales correspondientes al finalizar el ejercicio fiscal, salvo que en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal se destinen a otras entidades federativas o municipios para llevar a cabo la función de seguridad pública, sin que se genere, para éstas, el derecho a recibir los recursos con posterioridad.

**Artículo 145.-** El procedimiento al que se sujetarán las visitas y revisiones a que se refiere el artículo 143, fracción II, y sobre las causas de cancelación de los recursos a que se refiere el artículo 144, se sujetará a las reglas siguientes:

- I. En la orden de visita o revisión correspondiente se señalará el servidor público que la practicará, la institución, así como el periodo u objeto que haya de verificarse o revisarse;
- II. La visita se practicará preferentemente en las oficinas principales de la institución o dependencia visitada; en caso de no ser posible por cualquier causa, se realizará en cualquier domicilio de la propia institución o dependencia o, en caso necesario, en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo; estando obligados los servidores públicos de las instituciones o dependencias visitadas a proporcionar todas las facilidades necesarias y atender los requerimientos que se les formulen;
- III. En caso de advertirse incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, los acuerdos generales o los convenios, el Secretariado podrá decretar la suspensión provisional de las aportaciones subsecuentes. La suspensión de ministración de fondos subsistirá hasta que se aclare o subsane la acción u omisión que dio origen al incumplimiento.  
  
La suspensión en el otorgamiento de los recursos no implica la pérdida de los mismos por parte de las entidades federativas o municipios, por lo que podrán aclarar o subsanar la acción u omisión que dio origen al incumplimiento, mientras no se emita la resolución que declare la cancelación;
- IV. En un plazo no mayor a quince días hábiles, posteriores a la terminación de la visita, el Secretariado Ejecutivo presentará al Consejo el informe correspondiente al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones sujetas a verificación, así como toda la información que resulte necesaria para el efecto;
- V. El Secretariado dará vista a la institución o dependencia visitada o revisada, para que en un plazo de veinte días hábiles, aporte la información pertinente para desvirtuar las imputaciones que, en su caso, se formulen en su contra;
- VI. Transcurrido el plazo antes mencionado, en caso de incumplimiento, el Secretariado presentará al Consejo Nacional un proyecto de resolución, en que se contengan las conclusiones de la visita o revisión practicadas, y
- VII. En el proyecto de resolución señalará si la institución o dependencia revisada o visitada se hace acreedora a la cancelación de los fondos o, en su caso, que procede requerir la restitución de los mismos;

El Consejo Nacional resolverá en forma definitiva e inatacable sobre la existencia del incumplimiento y determinará, en su caso, la cancelación y, cuando proceda, la restitución de los recursos, con independencia de las responsabilidades que otras leyes establezcan.

De la suspensión o cancelación se dará cuenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes.

Cuando el Consejo Nacional resuelva que procede requerir la restitución de los recursos utilizados en forma indebida o ilícita, las entidades federativas o, en su caso, municipios contarán con un plazo de 30 días naturales para efectuar el reintegro; en caso contrario, los recursos podrán descontarse de las participaciones o aportaciones que le correspondan para el siguiente ejercicio fiscal.

Las entidades federativas estarán representadas por los titulares de los poderes ejecutivos a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 12 de esta Ley, o por quien ellos designen, sin que pueda recaer dicha representación en un servidor público de menor jerarquía a la de titular de una de las secretarías competentes en la entidad respectiva para la aplicación de esta Ley.

## **TÍTULO DÉCIMO PRIMERO**

### **DE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS**

**Artículo 146.-** Para efectos de esta Ley, se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.

**Artículo 147.-** El Distrito Federal, los Estados y los Municipios coadyuvarán en la protección y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de las instalaciones estratégicas y para garantizar su integridad y operación.

**Artículo 148.-** El resguardo de las instalaciones estratégicas queda a cargo de la Federación, que se coordinará con las Instituciones locales y municipales correspondientes por razón del territorio en el ejercicio de esta función, las cuales garantizarán la seguridad perimetral y el apoyo operativo en caso necesario.

El Ejecutivo Federal constituirá un Grupo de Coordinación Interinstitucional para las Instalaciones Estratégicas, que expedirá, mediante acuerdos generales de observancia obligatoria, la normatividad aplicable en la materia.

**Artículo 149.-** El Consejo Nacional establecerá los casos, condiciones y requisitos necesarios para el bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico para los fines de seguridad pública.

Las decisiones que en ese sentido emita el Consejo Nacional, deberán ser ejecutadas por las distintas Instituciones de Seguridad Pública que lo integran.

## **TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO**

### **DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA**

**Artículo 150.-** Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local.

Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.

**Artículo 151.-** Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.

**Artículo 152.-** Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se registrarán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables que se establecen para las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Centro Nacional de Información.

Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán conforme a la normatividad aplicable, la obligación de las empresas privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza.

## **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes.

**SEGUNDO.-** El Ejecutivo Federal contará con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto para crear e instalar el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cual deberá acreditar a los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública y sus respectivos procesos de evaluación en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en operación del citado Centro Nacional.

**TERCERO.-** De manera progresiva y en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el Consejo Nacional.

**CUARTO.-** Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**QUINTO.-** Los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes estatales, en la rama correspondiente, en un plazo no mayor a un año.

**SEXTO.-** Los servidores públicos que obtengan el certificado y que satisfagan los requisitos de ingreso y permanencia que se establecen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los ordenamientos legales federales y estatales aplicables, ingresarán o serán homologados al servicio de carrera, en las ramas ministerial, policial y pericial, según corresponda, en la jerarquía y grado, así como antigüedad y derechos que resulten aplicables, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

**SÉPTIMO.-** Las referencias realizadas en la presente Ley a la reinserción social, quedarán entendidas al término vigente readaptación social, toda vez que con este Decreto no entra en vigor el párrafo tercero del artículo 21 constitucional sujeto a la vacancia prevista en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

**OCTAVO.-** El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

**NOVENO.-** El Consejo Nacional y las Conferencias que prevé la presente Ley, deberán expedir las disposiciones a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo no mayor a nueve meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

**DÉCIMO.-** Por única ocasión, el Secretario Ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**DÉCIMO PRIMERO.-** Los recursos humanos, materiales y financieros con que cuente el Secretario Ejecutivo de conformidad con la abrogada Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables, se transferirán al Secretariado Ejecutivo previsto en esta Ley, a la brevedad posible.

Lo mismo sucederá con los asuntos en trámite del Secretario Ejecutivo, salvo que pudiera causarse algún daño o menoscabo al servicio o a los intereses del Sistema.

Los derechos del personal del Secretario Ejecutivo que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, sea transferido, se respetarán conforme a la ley aplicable.

**DÉCIMO SEGUNDO.-** Se aboga la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

México, D.F., a 11 de diciembre de 2008.- Sen. **Gustavo Enrique Madero Muñoz**, Presidente.- Dip. **Cesar Horacio Duarte Jaquez**, Presidente.- Sen. **Renan C. Zoreda Novelo**, Secretario.- Dip. **Jose Manuel del Rio Virgen**, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de diciembre de dos mil ocho.- **Felipe de Jesús Calderón Hinojosa**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. **Fernando Francisco Gómez Mont Urueta**.- Rúbrica.